

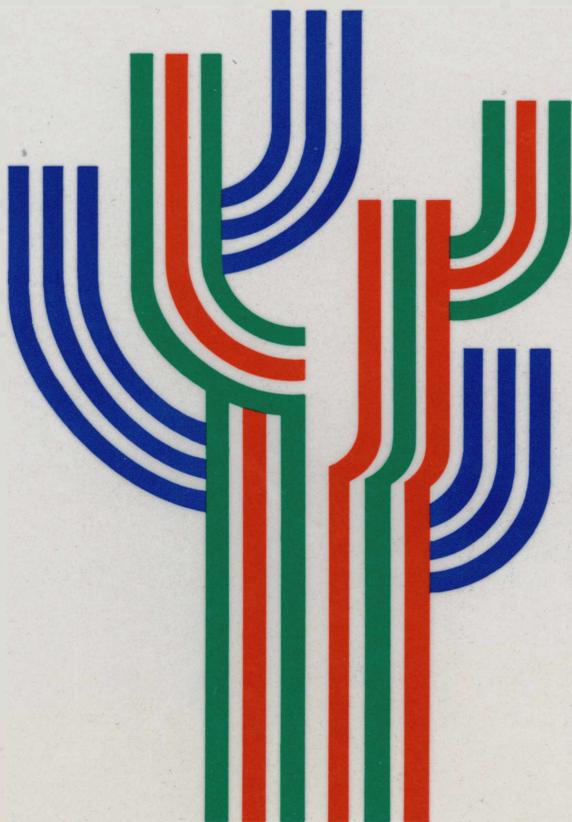
Tonatiuh Guillén López

coordinador

FRONTERA

NORTE

**una década de
política electoral**



**El Colegio de México
El Colegio de la Frontera Norte**

**FRONTERA NORTE:
UNA DÉCADA DE POLÍTICA ELECTORAL**

FRONTERA NORTE: UNA DÉCADA DE POLÍTICA ELECTORAL

Tonatiuh Guillén López
coordinador



EL COLEGIO DE MÉXICO
EL COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE

Portada de Mónica Diez Martínez

Primera edición, 1992

**D.R. © El Colegio de México
Camino al Ajusco 20
Pedregal de Santa Teresa
10740 México, D.F.**

**D.R. © El Colegio de la Frontera Norte
Boulevard Abelardo L. Rodríguez 21
Zona del Río
Tijuana, B.C.**

ISBN 968-12-0507-3

Impreso en México/Printed in Mexico

PRESENTACIÓN

El presente libro está integrado por seis ensayos que analizan las principales tendencias y coyunturas político-electorales ocurridas durante la década de los ochenta en cada uno de los estados fronterizos de México con Estados Unidos. En esos años, la frontera norte fue la región del país en donde mejor quedó representado el perfil de una sociedad estructuralmente incompatible con las formas corporativas del sistema político.

Durante la década pasada y a través de extensas movilizaciones sociales, los estados fronterizos del norte mostraron claramente la fuerza de su demanda democrática, anticipándose a lo que en 1988 se convertiría en un movimiento de alcance nacional.

A lo largo de los seis ensayos aquí compilados pueden apreciarse las características principales de los procesos electorales de la década en la frontera norte, a sus actores y, también, los límites que enfrentaron las demandas de apertura democrática. Todos los trabajos fueron resultado del seminario “La política electoral en la frontera norte: balance de una década”, realizado en las instalaciones de El Colegio de la Frontera Norte en la ciudad de Tijuana, el 4 de mayo de 1990. Participaron entonces como comentaristas de los análisis de las entidades fronterizas, Lorenzo Meyer, Carlos Martínez Assad y Juan Molinar Horcasitas, quienes aportaron importantes ideas a las discusiones sostenidas durante el seminario y que después fueron retomadas en las versiones finales de los ensayos.

La realización del seminario contó con el financiamiento y apoyo organizativo de la Fundación Friedrich Ebert, particularmente a través de Gunter Maihöld. De la misma forma, ha sido decisiva la participación institucional de El Colegio de la Frontera Norte y, especialmente, de Jorge A. Bustamante, tanto para la realización del seminario como para la publicación del libro. Al mismo tiempo, de fundamental importancia ha sido la

contribución de El Colegio de México para la consumación de este proyecto académico, no sólo por medio de la participación de sus investigadores en esta reunión, sino también por el esfuerzo realizado en la publicación de los resultados obtenidos.

INTRODUCCIÓN

La década de los ochenta en México posiblemente pudiera caracterizarse a partir de dos eventos centrales: por una severa crisis económica y, paralelamente, por el inicio de una tensa, regulada y lenta apertura democrática del sistema político. En la perspectiva del horizonte que se abre al país con el fin de siglo, con un rostro que en lo económico se encamina hacia la abierta internacionalización y en lo político aún aspira a la democracia, los años ochenta han sido un periodo de cambios sustanciales en prácticamente todas las esferas de la vida social. Por una parte, en el terreno de la economía, los primeros años de los ochenta coincidieron con el momento de mayor auge del modelo de desarrollo que hizo de las finanzas públicas y de la intervención económica del Estado sus ejes determinantes. Al mismo tiempo, el inicio de la década coincidió con la más drástica de las crisis económicas que haya tenido el país en su historia contemporánea y que, nueve años después, comienza a remontarse con la sustitución de las finanzas públicas del papel decisivo que tenían, y que ahora pretende ser cubierto mediante la inversión extranjera directa y con la integración (subordinada) de la economía nacional a la norteamericana. Por otro lado, en el terreno de la política —y contrariando las añejas tradiciones—, los primeros años de la década también sobresalieron por el comienzo de una intensa reactivación de los procesos político-electorales, especialmente en los estados del norte de México, que posteriormente adquiriría una extensión nacional como quedó manifiesto durante la elección presidencial de 1988.

Considerando la presencia simultánea de ambos eventos, la crisis económica y la reactivación de la competencia electoral, sin duda existe entre ellos una fuerte conexión que, sin embargo, muestra una enorme complejidad que elude cualquier interpretación mecánica de su relación. Para comenzar, en aquellos lugares en donde la lucha electoral adquirió perfiles más radica-

les,¹ particularmente en Chihuahua y Baja California, fueron a la vez las entidades en donde la economía regional mostró altas tasas de crecimiento a lo largo de la década. Debido en gran medida a su conexión más estrecha con el mercado norteamericano, en los estados fronterizos —especialmente en sus mayores ciudades—, la crisis económica de los ochenta no tuvo los efectos recesivos comparables a otras regiones del país. Más aún, la crisis funcionó de estímulo para la inversión de capitales nacionales y extranjeros que se beneficiaron de las condiciones impuestas a los salarios por la crisis nacional. Desde la anterior perspectiva, y como queda claro en los análisis de cada estado fronterizo que integran el libro, no existe una explicación de los acontecimientos político-electorales estrechamente vinculada al ritmo económico. De hecho, asignar a la crisis económica un papel *determinante* en la explicación de la política electoral, además de derivar en una inconsistencia conceptual es una hipótesis que deja al margen las fuertes contradicciones internas de la estructura del sistema político, capaces por sí mismas de generar su propio cuestionamiento. Por supuesto, no se trata de excluir a la crisis de toda incidencia en el momento y forma de los procesos político-electorales de la década, sino de precisar su peso específico que en ocasiones tiende a sobrevalorarse.

Los ochenta redefinieron el perfil de la estructura económica de los estados fronterizos, particularmente en la región comprendida por los regímenes fiscales de franjas fronterizas y zonas libres. A pesar de que generalmente se piensa de manera conjunta a los estados de la frontera norte con la zona que abarcan estos regímenes fiscales especiales, su generalización es válida sólo para Baja California (y para Baja California Sur). El resto de los estados fronterizos, sujetos así a condicionantes duales de política económica, han mostrado un paulatino proceso de polarización interna en la misma medida del éxito económico obtenido por sus franjas fronterizas y zonas libres. Lo an-

¹ En la perspectiva de la década, la radicalidad de los movimientos aquí indicada se refiere principalmente a su extensión social y a la forma política como fueron expresados: de corte ciudadano, circunscrita alrededor de las normas legales del proceso electoral. En el sentido de abierta violencia, las formas políticas radicales fueron las que giraron particularmente en contra —y en ocasiones desde las bases de apoyo— del Partido de la Revolución Democrática, especialmente en los estados de Michoacán y Guerrero durante las elecciones posteriores a 1988.

terior es particularmente notable en los casos de Chihuahua, Tamaulipas y, en menor medida, en Sonora, mientras que los casos de Nuevo León y Coahuila pueden ser mejor explicados relacionando su economía con el resto de la economía nacional.

De esta manera, lo que pudiera denominarse el *modelo de desarrollo fronterizo*,² que adquirió consistencia precisamente durante la década de los ochenta, de hecho se restringe al área comprendida por los regímenes fiscales especiales, desde donde ejerce una poderosa influencia sobre el resto de la economía regional (y nacional). Sin pretender establecer una clasificación elaborada,³ de lo anterior se derivan por lo menos tres tipos de regiones en los estados fronterizos indicativas de su estructura social heterogénea: las derivadas del modelo de desarrollo fronterizo, articuladas fuertemente a la economía norteamericana y que progresivamente marcan el horizonte del desarrollo regional y nacional; las derivadas de las tendencias generales del desarrollo nacional, herederas del desarrollo estabilizador, y finalmente, la región de economía tradicional, de características rurales con atraso tecnológico y en prácticamente todos los indicadores de bienestar. En cada caso, su composición social tiene repercusiones en las formas y tendencias globales del comportamiento político electoral, que explican el grado de diferenciación inter-

² Siempre y cuando aceptemos este término para resumir las tendencias particulares de crecimiento económico de la región fronteriza, en analogía con lo que fue entre las décadas de los cincuenta y los setenta el modelo de desarrollo estabilizador para el resto del país. En ambos casos, la posibilidad de definirlos como “modelo” descansa en la persistencia de líneas generales de política económica que inducen una específica forma de crecimiento y, paralelamente, de desarrollo social en todos los sentidos. Al igual que el modelo de desarrollo estabilizador, el modelo fronterizo es susceptible de serios cuestionamientos sobre su viabilidad en el largo plazo y sobre sus efectos en las condiciones de bienestar de la población, a pesar del panorama exitoso que reflejen en lo inmediato los indicadores globales de crecimiento económico. En su rasgo más general, la diferencia principal entre ambos radica en su grado de apertura al mercado internacional, distinción que progresivamente comienza a diluirse con las medidas implementadas a partir del sexenio de Miguel de la Madrid y, sobre todo, en la actual administración federal.

³ Por sí misma es en extremo compleja la discusión sobre la definición y regionalización de la frontera norte, así que la perspectiva aquí apuntada no discute por el momento su conexión y diferencias con otras alternativas analíticas. Sobre el tema puede consultarse a Jorge A. Bustamante, “Frontera México-Estados Unidos; reflexiones para un marco teórico”, en *Frontera Norte*, vol. 1, núm. 1, pp. 7-24.

na que muestra cada estado, como podrá apreciarse en los análisis correspondientes. Justamente, los estados que mejor representaron en los ochenta al modelo de desarrollo fronterizo y sus efectos de modernización económica, Baja California y Chihuahua, fueron también los que representaron mejor a los movimientos sociales por la democracia, por la modernización de la política. Los que menos, Nuevo León y Coahuila, que así pudieran considerarse —desde la perspectiva proporcionada por el modelo de desarrollo fronterizo— los estados “menos fronterizos” entre los colindantes con Estados Unidos.

Si consideramos a las variables demográficas como indicadores sobre la magnitud de los anteriores tipos de regiones en la frontera norte, en 1990 la correspondiente al modelo de desarrollo fronterizo abarcaba el 31.2% de la población total residente en las entidades fronterizas, mientras que en 1980 equivalía al 29.3%. Aunque vale la pena aclarar que en los diez mayores municipios —de 38— se concentra actualmente el 85.4% de ese total de población vinculada al modelo de desarrollo fronterizo, mientras que en 1980 esa cifra era de 83.3%.⁴ De hecho, a esos municipios se reducen espacialmente los límites de este modelo de desarrollo: se trata de los municipios de Ensenada, Tijuana, Mexicali, San Luis Río Colorado, Nogales, Ciudad Juárez, Piedras Negras, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros.⁵ Desde este horizonte, el caso de Baja California sobresale por ser el único estado en donde prácticamente el total de su población

⁴ Rodolfo Corona Vázquez, “Características demográficas de la zona fronteriza del norte de México”, Colef, manuscrito, 1991. Después de una revisión crítica de la información censal, el análisis de Corona considera un ajuste de población entre los censos de 1990, 1980 y 1970, por lo que sus datos poblacionales no son coincidentes con el primero de éstos. La información demográfica aquí utilizada procede de este documento, por lo que agradezco al autor su autorización para reproducirla.

⁵ En su conjunto, la región está integrada por los cuatro municipios de Baja California (Ensenada, Tijuana, Tecate y Mexicali); por diez de Sonora (San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, Caborca, Altar, Saric, Nogales, Santa Cruz, Cananea, Naco y Agua Prieta); por siete municipios de Chihuahua (Ciudad Juárez, Janos, Ascensión, Manuel Benavides, Práxedes G. Guerrero, Guadalupe y Ojinaga); por seis de Coahuila (Piedras Negras, Ocampo, Ciudad Acuña, Jiménez, Guerrero e Hidalgo); por el municipio de Anáhuac en Nuevo León y por diez municipios de Tamaulipas (Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Río Bravo y Valle Hermoso).

puede considerarse involucrada directamente en la estructura económica y social de este tipo de región.

Por su crecimiento extraordinario, sobre todo comparado con la situación de crisis de la economía nacional durante los pasados años, el modelo de desarrollo fronterizo se ha convertido —en distintas medidas— en un eje decisivo de la economía de sus respectivos estados. El ritmo de crecimiento de la industria maquiladora, prototipo de este modelo de desarrollo promovido por la política económica federal con especial ímpetu a partir de 1983, es un indicador ilustrativo sobre el dinamismo de la economía fronteriza. En 1980, por ejemplo, había 620 establecimientos maquiladores, empleando a 120 mil trabajadores. A principios de 1990, las estimaciones del INEGI se refieren a 1 920 establecimientos, empleándose en ellos a 461 mil trabajadores. Si se evalúa en términos de su impacto sobre el empleo local, la importancia de la industria maquiladora adquiere dimensiones aún mayores. Según cálculos realizados por Tito Alegría, con datos de 1987 a 1989 para seis importantes ciudades fronterizas, cada empleo maquilador tiene un efecto multiplicador en la creación de 0.91 empleos no maquiladores en promedio. Con este panorama, no es difícil imaginar la importancia de esa industria en ciudades como Nogales, en donde el 37% de la población económicamente activa labora en ella, o en Ciudad Acuña, en donde emplea al 44%. Considerando su efecto multiplicador, la industria maquiladora puede explicar el 60% del empleo en Ciudad Juárez, el 67 en Nogales, el 77 en Ciudad Acuña, el 34 en Piedras Negras, el 18 en Nuevo Laredo, el 20 en Tijuana y el 27% en Reynosa.⁶

El efecto más evidente del modelo de desarrollo fronterizo es su progresiva concentración urbana, que adicionalmente se traduce en serios rezagos sociales particularmente en materia de servicios públicos. A pesar del empleo y del relativo mejor ingreso, la población fronteriza no tiene condiciones habitacionales ni disponibilidad de servicios públicos coherentes con su nivel de ingreso y con el acceso a otros bienes y servicios facilitados por su relación con el mercado norteamericano. Existe así una creciente distancia entre las expectativas propiciadas por el ingreso y el empleo, frente a la incumplida promesa urbana del desarro-

⁶ Tito Alegría, "El empleo indirecto de la industria maquiladora en México", Colef, manuscrito, 1991.

llo fronterizo, lo que se convierte en una importante fuente de tensiones sociales. Con información estadística generada entre 1987 y 1988, en un análisis comparativo entre cinco ciudades fronterizas y tres del interior del país se llegó a la paradójica conclusión de que un mismo estrato socioeconómico —tanto en el caso del estrato de ingresos bajos como en el de ingresos intermedios—, tiene mayor disponibilidad de servicios públicos en una ciudad no fronteriza que en una que sí lo es.⁷

Considerando su elevado índice de concentración urbana, puede explicarse que los cambios ocurridos en la estructura de la sociedad fronteriza durante la década de los ochenta no se limitaran a su perfil económico, sino que paralelamente modificaran —en varios casos dramáticamente— la magnitud y distribución espacial de su perfil demográfico. Los estados fronterizos no solamente crecieron con un promedio superior al nacional, sino que además concentraron ese crecimiento en las ciudades con mayor dinamismo económico.

El panorama demográfico de la frontera norte muestra el ritmo extraordinario como se ha construido socialmente a la región. “Considerados en conjunto los seis estados fronterizos con Estados Unidos (Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas), aumentaron continuamente el número de sus habitantes, de 2.2 y 4.0 millones en 1930 y 1950, a 8.4 y 13.9 millones de personas en 1970 y 1990.”⁸ Desde la perspectiva de los municipios fronterizos de estos estados, el ritmo de crecimiento es todavía más espectacular: “estos municipios tenían 306 mil y 934 mil habitantes en 1930 y en 1950, 2.54 y 3.25 millones en 1970 y 1980, llegando a 4.35 millones de residentes en 1990”⁹

A principios de la década de los ochenta, los 38 municipios fronterizos representaban el 29.3% de la población de los estados fronterizos; en 1990 esa proporción ascendió a 31.2%. Si esta misma relación la establecemos para los diez municipios fron-

⁷ Tonatiuh Guillén López, “Servicios públicos y marginalidad social en la frontera norte”, en *Frontera Norte*, vol. 2, núm. 4, jul.-dic., 1990. De la misma manera, un estudio sobre el efecto de la carencia de servicios públicos en las tensiones políticas locales puede encontrarse en José Negrete Mata, “Agua y conflicto político en Tijuana”, Colef, manuscrito, 1990.

⁸ Rodolfo Corona Vázquez, *op. cit.*

⁹ *Ibid.*

terizos que en 1990 tuvieron más de 100 mil habitantes,¹⁰ en 1980 representaron el 24.4% de los residentes de estas entidades, pasando a constituir el 26.7 en 1990. A lo largo de la década, mientras el conjunto de los estados no fronterizos con Estados Unidos incrementaron su población en 22.7%, algunos de los municipios fronterizos lo hicieron hasta en 64.2, como ocurrió en Tijuana; en 59.6%, en el caso de Nogales; 42.7 en Ciudad Juárez; 35 en Reynosa y 28.7% en Matamoros. Las cifras anteriores muestran la progresiva importancia demográfica de los municipios fronterizos y del modelo de desarrollo establecido para la región, espacialmente muy concentrado.

Por otra parte, en el terreno de lo cultural, estamos ante una sociedad que en este aspecto pareciera conservar intactas añejas tradiciones que le dan una imagen de persistencia, de la no transición, reflejadas en un permanente “espíritu norteño”, de un “espíritu fronterizo” y, en ocasiones, dentro de éste —especialmente en su origen, supuesto determinante de su forma actual— se busca la explicación de los acontecimientos políticos de la década.¹¹ En la cultura política, el contenido ideológico que posiblemente represente mejor a ese espíritu es la fuerte actitud anticentralista, que se refleja como contraparte en un regionalismo que en ocasiones se lleva al exceso, como ocurre en Sonora y la cultura del “guacho”. Aunque es conveniente aclarar que el anticentralismo no necesariamente deriva en una demanda política democrática; la relación entre ambos elementos es un producto relativamente nuevo, acentuado en la última década. En su versión contemporánea, el tradicional anticentralismo cumple el papel de fortalecer y dirigir —definiendo un foco opositor— al movimiento democrático de los nuevos actores de la estructura social, particularmente de las clases medias. La actitud anticentralista, en su forma más general, puede así considerarse un elemento tradicional y preminente de la cultura política regional que cumple actualmente con efectos políticos decisivos al articularse con la demanda democrática, pero que no necesariamente se trata del mismo anticentralismo a lo largo del tiem-

¹⁰ Se trata de los municipios de Tijuana, Mexicali, Ensenada, Nogales, San Luis Río Colorado, Ciudad Juárez, Piedras Negras, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros.

¹¹ Un ejemplo de lo anterior se encuentra en Enrique Krauze, “Chihuahua, ida y vuelta”, en *Por una democracia sin adjetivos*, México, Joaquín Mortiz-Planeta, 1986.

po; por lo mismo, la explicación de su forma actual no equivale a la explicación de sus formas previas. La constancia del “espíritu norteño” presenta, desde esta perspectiva, la posibilidad de un panorama de cambios bajo una misma forma ideológica.

Si bien es cierto que está presente esa actitud regionalista-anticentralista en la cultura política de los estados norteños, y que se ha reproducido por generaciones, no se trata de una herencia cuya base y explicación se pierdan en el origen de los tiempos, sino que encuentra elementos contemporáneos que reiteran su vigencia. Sin ser el único, el más fuerte de ellos seguramente radica en la articulación cotidiana —o su posibilidad— con las ventajas de la interacción económica con Estados Unidos, y la persistente tendencia del gobierno federal a limitar esa relación, alterando fuertemente (o pretendiendo alterar) formas de vida y de reproducción social de la población de los estados fronterizos. Aquí se encuentra una de las fuentes principales del conflicto de la economía regional y de sus poseedores en contra de las medidas de procedencia centralista que pretendan limitar sus ventajas o que simplemente ignoren las particularidades de la región. Por parte de la federación, por décadas ha sido permanente su interés por “integrar” al mercado fronterizo, estimulando un conflicto que tiene origen a partir de la definición misma de los límites internacionales en el siglo pasado. Ya Porfirio Díaz, por ejemplo, se preocupaba por eliminar el trato fiscal especial que tenía la frontera norte “en obsequio de los legítimos intereses del comercio y del fisco”.¹² Desde entonces han cambiado del anticentralismo regional sus actores sociales e incluso las formas de su expresión política, pero se trata de una actitud persistente. Entre la región fronteriza y el gobierno federal ha existido así un conflicto que históricamente no se ha limitado a los intereses de los sectores regionales económicamente poderosos, puesto que también el resto de la población encuentra ventajas comparativas en la relación internacional. De aquí la posibilidad de generalización social del anticentralismo, convirtiéndolo en uno de los contenidos característicos de la cultura política regional. Por tratarse de una tensión vigente, a pesar de los recientes cambios en la política económica del gobierno federal, esta importante fuente del anticentralismo tiene las condi-

¹² Citado en José Negrete Mata, “La frontera norte de México en los informes presidenciales”, en *Frontera Norte*, vol. 2, núm. 3, p. 174.

ciones para persistir y reproducirse con base en las inevitables diferencias que existan entre centro y región.¹³ Además de la anterior, el anticentralismo tiene otras fuentes que lo complementan y que en ocasiones han sido coyunturalmente decisivas: el centralismo político ha sido de particular importancia, dentro de un ejercicio que por décadas ha reproducido al sistema de dominación, pero que al mismo tiempo ha estimulado la persistencia de actitudes que lo cuestionan.

Desde una perspectiva global, la repercusión más importante de los cambios económicos, demográficos, urbanos y culturales reseñados antes es que durante el periodo se ha generado una estructura social dinámica en todos sus aspectos, incluyendo el político, que desde esta óptica es parte y a la vez expresión del conjunto de los cambios sociales experimentados. En sentido estricto, *se ha creado* en los últimos 20 años a la sociedad del modelo de desarrollo fronterizo.¹⁴ La sociedad fronteriza puede entonces ser considerada un producto reciente e hija directa de la modernización del país. Como uno de sus rasgos distintivos, no es una sociedad que haya dejado en el pasado una estructura social tradicional, sufriendo ahora el peso de ese lastre en su economía y estructura de poder local, sino que se le ha construido casi por completo. En este sentido, desde la perspectiva regional aquí no ha ocurrido una “transición” en los términos de Aguilar Camín,¹⁵ por lo menos en la proporción y forma como pudieran pensarse para otras regiones del país. Si bien es cierto que el país en las últimas dos décadas ha acelerado lo que este autor denomina la “transición mexicana”, en la región del mo-

¹³ Por ejemplo —y como ha ocurrido por décadas, en algunas ocasiones en medio de verdaderos conflictos, como en 1982— durante los primeros meses de 1991, cuando debió prorrogarse o cancelarse el régimen especial de zonas libres y franjas fronterizas, en la región se presentaron diversas manifestaciones de inquietud entre los sectores industriales y comerciales, a pesar de la orientación de la política económica del gobierno de Carlos Salinas que no contradice el esquema regional. Como era de esperarse, finalmente fue autorizado, una vez más, un nuevo periodo para régimen fiscal especial.

¹⁴ Volviendo a los indicadores de carácter demográfico, en el caso de Tijuana, por ejemplo, entre 1970 y 1990 sus residentes han crecido en 113%; mientras que el resto de las ciudades fronterizas muestran también índices elevados durante el mismo periodo: Nogales, 96; Ciudad Juárez, 85, Piedras Negras, 107; Reynosa, 83 por ciento.

¹⁵ Héctor Aguilar Camín, “El canto del futuro”, en *Nexos*, núm. 100, pp. 15-29.

delo de desarrollo fronterizo —desde la perspectiva nacional— aparece este proceso con mayor intensidad y recorriendo un camino menos conflictivo que el que supone, por citar un caso extremo, la modernización de la zona rural del estado de Oaxaca o de Chiapas.

La sociedad del modelo de desarrollo fronterizo ha tenido así las condiciones estructurales para asumir vanguardias no solamente económicas, sino también políticas: al parecer, cuanto más profundas como moderno pudiera ser reclamado su perfil. Lo anterior no significa que esta sociedad ha construido ya una estructura política democrática paralela a su modernización económica, puesto que salvo en el caso de Baja California —en donde con limitaciones se están produciendo algunos avances regionales en este sentido, como resultado de las elecciones estatales de 1989—, en todo el país sigue siendo dominante el perfil tradicional del sistema político.¹⁶ Quiere decir que el modelo de desarrollo fronterizo ha construido condiciones y actores sociales más pertinentes (y demandantes) para ese tránsito: particularmente a un fuerte sector de clase media. Por otro lado, no está de más señalarlo, el perfil de la sociedad fronteriza no la convierte en el único espacio de oposición al sistema político, pero sí le asigna una constante intensidad y forma predominantemente ciudadana, de corte liberal, a las expresiones de esa oposición.

El panorama expuesto nos presenta así el perfil de una sociedad novedosa en relación con la estructura social del país, que se articula mediante distintas formas e intensidades con los elementos más generales de la sociedad nacional, los que encuentra incluso en el propio espacio de los estados fronterizos. De esta forma tenemos para estas entidades un mapa compuesto, además, por las regiones modernas derivadas del modelo de desarrollo estabilizador, como son las ciudades de Monterrey, Saltillo o Torreón, y las regiones con atraso económico y formas políticas más tradicionales, como las comarcas rurales y sus cacicazgos de los estados de Chihuahua, Sonora o Tamaulipas.

¹⁶ Será hasta las elecciones de agosto de 1991 cuando se defina si efectivamente constituye un avance democrático la reforma electoral que dio origen al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y a sus nuevas instituciones. Por lo pronto, en el funcionamiento cotidiano del sistema político persisten las líneas dominantes de su tradición autoritaria.

Precisamente, las diferencias de estructura social son fundamentales en la determinación de los procesos político-electorales, en la misma medida que distingue a actores sociales y sus formas de expresión política.

Considerando su regionalización interna, los estados fronterizos presentan la total complejidad de las estructuras sociales del escenario nacional, que oscilan entre la prácticamente total modernidad de Baja California, hasta los estados con fuerte perfil rural de corte tradicional, como ocurre en Tamaulipas o en Coahuila, así como en importantes regiones de Sonora y Chihuahua. Con distinto peso para cada entidad, se encuentran aquí representadas desde las formas liberales de la política hasta las formas tradicionales de liderazgo del cacique. En su conjunto, el panorama de las entidades fronterizas del norte de México no es entonces el de una modernidad generalizada, ni en la esfera política, ni en la estructura social. Es el escenario de una articulación variable entre formas modernas y tradicionales, en el que aparece como un eje dominante la región correspondiente al modelo de desarrollo fronterizo. Lejos están entonces de completar la ruta de la modernidad, más unas que otras, a pesar de sus ventajas notables en relación con el promedio nacional en prácticamente todos los indicadores de desarrollo.

Los capítulos del libro muestran a cada uno de los estados fronterizos con esta mezcla de regiones, de estructuras y de actores sociales, en un recuento de su movimiento político durante la década de los ochenta. En sus principales casos, fueron movimientos que cimbraron un estilo virtualmente estático de reproducción del sistema político. Manteniéndose dentro de las reglas del juego democrático —las que podían utilizarse entonces— por vez primera un extenso movimiento social de contenido liberal ciudadano y de fundamento estructural desafiaba las inquestionables bases de reproducción del sistema político. Refiriéndonos exclusivamente a los movimientos de origen regional, primero Chihuahua entre 1983 y 1986, después Baja California en 1989, sin duda han sido decisivos en la orientación hacia la relativa apertura actual del sistema político, marcando (proponiendo) incluso su forma, que evita ante todo transiciones rudas, al grado que todavía se discute si efectivamente se trata de una *transición*. La tolerancia al panismo y, por contraste, la actitud dura en contra del neocardenismo, son indicativas de que el poder central ha escogido la forma de su apertura, a sus prin-

cipales interlocutores y, además, los tiempos y lugares en donde ésta es realizable. Como podrá apreciarse en los análisis respectivos, a pesar de la importante presencia de los movimientos regionales de oposición, el poder nacional del sistema político y, concretamente, el poder presidencial, sigue siendo una fuerza no solamente no disminuida, sino con gran capacidad de adaptación. En este sentido, la experiencia de los estados fronterizos durante la década de los ochenta muestra también las formas alternativas de reproducción del sistema político en condiciones de fuerte oposición —inclusive aprovechando sus derrotas, que pueden tener efectos legitimadores— y, según parece, sobre todo de aquí ha aprendido algunas reglas básicas de convivencia con oposiciones regionales sólidas, sin haberse transformado en lo esencial.

El panorama resultante del análisis de los estados fronterizos no es el de una estructura social homogénea y, por lo mismo, tampoco el de un mapa político sin desniveles ni fisuras. Si bien en términos globales puede hablarse de una política fronteriza, en su forma concreta ésta se desagrega por estructuras políticas regionales, siguiendo primero un mapa estatal que posteriormente se descompone en su interior por regiones particulares. En este sentido, lo moderno y lo tradicional, ocurre como tendencia en el resto del país, en las entidades fronterizas también sigue el rumbo de las concentraciones urbanas. Desde una perspectiva de la estructura social, la diferencia radica en el peso proporcional de estas últimas en donde domina, crecientemente, lo que aquí se ha llamado la sociedad del modelo de desarrollo fronterizo, que de hecho constituye el parámetro aglutinador que ahora nos permite hacer un balance político de los ochenta en los estados de la frontera norte de México.

TONATIUH GUILLÉN LÓPEZ

UNA DÉCADA DE POLÍTICA Y ELECCIONES EN TAMAULIPAS

ARTURO ALVARADO MENDOZA
El Colegio de México

I. CONFIGURACIÓN DE LA ENTIDAD

El estado de Tamaulipas está configurado actualmente por un conjunto de conglomerados urbanos y rurales influidos tanto por el desarrollo histórico de unidades productivas nucleares como por su posición fronteriza, que manifiesta la influencia comercial y agrícola del estado norteamericano de Texas, por su calidad de puerto para el centro y noreste del país y por su localización dentro del golfo de México. Su desenvolvimiento político se ha realizado en un trasfondo donde, en la actualidad, se señala con frecuencia que Tamaulipas es en realidad “tres estados en uno”, para destacar su perfil socioeconómico. Una caracterización del estado según niveles de desarrollo, estructura productiva, problemática social, cultura política, tradiciones y estilos de vida de la población, evidencia tres zonas fundamentales: la fronteriza norte, la agropecuaria centro y la industrial sur.

La organización territorial y la estructura social del estado son profundamente heterogéneas, por lo que sólo el régimen político le ha proporcionado, en ciertos periodos, unidad. La geografía da la pauta para explicar la situación de los grupos y la dinámica del poder en Tamaulipas.

Contraparte de esta pulverización es el desarrollo paulatino de poderes localizados y desarticulados del gobierno estatal, que configuran el espectro contemporáneo de la política y el orden político estatales. La estructura del corporativismo que se consolidó en los años setenta en el estado ha permitido que esta comunicación, si bien deficiente, no lo desintegre. Otro mecanis-

mo ha sido la penetración de las instancias administrativas federales en la entidad, mayor que la convocatoria de los partidos políticos y otras asociaciones de agregación y articulación. Los funcionarios de los bancos agrícolas, de las aseguradoras, al igual que de las empresas agropecuarias del estado, constituyen una fuente de poder económico y político. Excepción hecha de las centrales obreras que ya existían, igual que las poderosas asociaciones de agricultores, no se ha permitido el surgimiento de nuevas centrales de trabajadores ni de la ciudad y menos aún del campo.

Estas instancias no pasan por el circuito de los poderes electivos, donde se han instrumentado reformas para tratar de ampliar la participación y opciones políticas; son, en cambio, parte del botín y de los espacios en disputa de la élite local que los cambios actuales no logran dismantelar. Sobre esos conjuntos regionales autónomos se ha desarrollado en Tamaulipas un proceso político que en la actualidad refleja una pulverización regional, una capacidad de sus autoridades estatales para controlar los recursos y la movilización locales acotada espacialmente, y una desarticulación de las formas de mediación y de inserción en la estructura de dominio nacional.

Zona fronteriza norte

Es la zona más dinámica de la entidad. Se integra con 10 municipios colindantes o próximos a la línea fronteriza. En 1980, concentraba 44.2% de los habitantes del estado cuya población total ascendía, en ese año, a 1 924 484 personas. Tres ciudades fronterizas, Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo son, en la actualidad, polos de atracción demográfica y han visto duplicar su población en el último decenio.¹

Un índice compuesto del nivel de vida de la población que engloba diversos elementos de bienestar social (educación, vivienda, salud e ingresos) coloca a los 10 municipios de la franja fronteriza entre los 14 de nivel alto en la entidad.² Por su ubicación

¹ Aun cuando la tendencia sedimentaria combina también categorías migratorias que asignan a Tamaulipas un carácter de "débil expulsión".

² Mientras el índice nacional es de 20 641 y el estatal de 22 291, los municipios fronterizos presentan el siguiente resultado: Nuevo Laredo (26 618);

fronteriza desarrollan actividades de carácter comercial, industrial y turístico, ubicándose entre los municipios de mayor importancia en la economía del estado. En conjunto absorben alrededor de 45% de la Población Económicamente Activa (PEA), concentrándose en la industria manufacturera, en el sector comercio, restaurantes, hoteles y administración gubernamental.

El impacto de la crisis económica en esta zona ha sido relativamente menor. Si bien existía una tasa de desocupación significativa, del 3.7% en 1985, se circunscribe a los sectores tradicionales de la economía, mientras que la maquila continúa la expansión.

Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo concentran la mayoría de las maquiladoras que eran, en 1986, aproximadamente 80 establecimientos (10% de la planta nacional). Solamente en Matamoros se encuentra 45% de los establecimientos y 56 del personal ocupado. Esto genera 65% del valor agregado de esta industria en la entidad. Reynosa y Río Bravo le siguen en importancia con 35% de los establecimientos y del personal ocupado, con una producción de 36% del valor agregado.³ En este sentido, un crecimiento moderado y una integración económica internacional, son los rasgos dominantes de esta zona tamaulipeca durante la década reciente.

El crecimiento no ha estado exento de problemas sociales. Destaca, ante todo, el agotamiento de la infraestructura urbana de las tres principales ciudades fronterizas. Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros presentan grandes déficits en materia de agua potable, alcantarillado, drenaje, pavimentación, servicios asistenciales y vivienda. A los que se ha sumado en los años recientes una inseguridad pública, ligada al tráfico de drogas y a las políticas adoptadas

Guerrero (19 808); Mier (22 551); Miguel Alemán (22 634); Camargo (17 735); Gustavo Díaz Ordaz (19 602); Reynosa (29 997); Río Bravo (19 896); Valle Hermoso (19 372), y Matamoros (24 994), véase *Tamaulipas, Cuaderno de Información para la Planeación*, México, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 1987, p. 85.

³ En 1986 la industria maquiladora ocupaba a 33 600 trabajadores en la entidad, en su gran mayoría mujeres, y la tendencia es al incremento. Sin embargo, la proporción que representan los sueldos, salarios y prestaciones en relación con el valor agregado generado por la industria maquiladora ha caído sustancialmente en el periodo 1980-1986, pasando de 69 al 46%. Ello se explica en gran medida porque parte sustancial de la derrama salarial regresa a Estados Unidos en forma de transacciones comerciales fronterizas, *ibidem*, p. 114.

por el país colindante. En la zona circulan la tercera parte de los periódicos de la entidad (8 de 25); concentra más de la mitad de las estaciones de radio (28 de 53) y transmiten 5 de las 10 estaciones de televisión.

La franja fronteriza norte de México consolidó en la década pasada las tendencias demográficas, económicas, sociales y políticas que impulsan a su diferenciación regional respecto al conjunto del país. Esta consolidación como región de la frontera norte se observa en dos niveles: *a*) la creciente integración horizontal de las actividades económicas y procesos sociales que tienen lugar en la zona, y *b*) la interacción espacial que se ha generado entre esta región y el resto del país, caracterizada por su mayor dinamismo relativo, su capacidad de absorción demográfica y expectativas superiores de desarrollo económico.

Se afirma que la década de los ochenta representa para el norte de México la consolidación de su perfil como región típica del país y su sedimentación como área poblacional, económica y social. En términos demográficos, ha pasado del crecimiento explosivo registrado en el periodo 1940-1960, en las ciudades de Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, al crecimiento regulado de los años 1960-1980; observándose una tendencia al equilibrio y sedimentación poblacional.

Diversos indicadores revelan, desde 1980, el desarrollo socioeconómico relativamente superior de la zona fronteriza norte respecto a otras áreas del país. Por ejemplo, con relación al producto interno bruto de 1980, las seis entidades federativas aportaron 19%, lo cual se reflejó en un PIB per cápita por encima del promedio nacional para el conjunto de los demás estados.⁴

Otros indicadores sociales señalan un mayor desarrollo relativo de la región fronteriza norte respecto al promedio nacional. Los censos económicos de 1986 confirmaron el dinamismo de la región. Aquí se concentró 16.2% de las unidades productivas observadas, mismas que registraron 1 314 500 personas ocupadas. Además, la tasa de desempleo abierto en las principales ciudades del norte del país ha sido inferior al promedio nacional en

⁴ Los estados fronterizos también se comparan favorablemente en otros indicadores: tasa de analfabetismo y escolaridad, 91.9 (83.0% nacional); vivienda con agua entubada, 80.5 (70.7% nacional); vivienda con energía eléctrica, 82.4 (74.8% nacional); vivienda con drenaje, 56.2 (51.0% nacional), CONAPO, *op. cit.*

los últimos cuatro años. Así, mientras que la tasa de desempleo abierto en Matamoros en 1986 era del 3.8, para 1989 había bajado a 2.5%. En Nuevo Laredo había disminuido de 1.0 a 0.9 por ciento.⁵

La base de la sedimentación socioeconómica experimentada por la frontera norte durante la pasada década señala la integración de una plataforma manufacturera concentrada en plantas maquiladoras de exportación, que ha consolidado y diferenciado su área urbana respecto al desarrollo conjunto del país.

Ante el esquema económico de atonía nacional iniciada en 1982, el norte fronterizo fue el que resultó momentáneamente más afectado (fuga de divisas, devaluación, mayores índices de inflación); sin embargo, ha sido también el pivote de recuperación económica, por lo que es de esperarse que la estructura de empleo mejore las condiciones regionales. Quedan entonces por discutir los posibles efectos sociales y políticos que tendrán las acciones gubernamentales en el futuro próximo.

Los partidos políticos nacionales tienen representación en las tres principales ciudades tamaulipecas fronterizas. Existe un movimiento de oposición arraigado que se conduce a través del PARM y que ha logrado alternar en algunos municipios; también ha conquistado diputaciones locales y federales.

En la dinámica política de esta zona coexisten pautas “modernas” de participación ciudadana con estructuras “tradicionales” de control político. Esta cultura emergente de participación moderna interactúa con prácticas “tradicionales”, corporativas, como la asignación de cargos de representación popular y de proyección política mediante el sistema de “cuotas sectoriales” y el “clientelismo sindical”, que ha permitido a las agrupaciones locales de la CTM mantener el dominio municipal. La sobreposición de estructuras políticas no siempre es armónica y estable; en diversas ocasiones, la coexistencia deviene en situaciones conflictivas. Esto deriva también en una peculiar estructura de la representación política, que combina una estructura supuestamente moderna con una de asociación y movilización políticas tradicionales.

⁵ INEGI, “Resultados oportunos nacionales. Censos económicos 1986”, México, 1987; INEGI, *Boletín trimestral de información económica*, núm. 3, enero-marzo de 1989.

Zona agropecuaria centro

Esta zona posee aún el perfil económico dominante de Tamaulipas: estado agrícola y ganadero con el asentamiento urbano que le proporciona servicios a dicho sector y a la burocracia de la entidad. En los 27 municipios agrupados en esta zona destaca la producción agropecuaria por su participación en el PIB, y su PEA se dedica a las actividades del sector primario en una proporción de 50 por ciento.⁶

Tamaulipas ha intensificado su vinculación con la política de fomento agropecuario nacional. En este sector se ubica la administración de Américo Villarreal, actual gobernador, formado política y técnicamente en la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos.

La evolución de esta zona agropecuaria no ha sido uniforme. Hay una marcada diferenciación y desigualdad en el desarrollo económico del área. Por un lado, existe la agricultura moderna con tecnología avanzada, sistemas de riego y altos rendimientos de producción. Tal es el caso de Abasolo, Hidalgo, Jiménez y San Fernando. Por otra parte, existe el sector que utiliza métodos y tecnología tradicionales, carece de riego suficiente o es por completo región de temporal y obtiene menores rendimientos promedio en sus cosechas.⁷ La parte más atrasada y pobre de esta zona y del estado se encuentra al suroeste, en el cuarto distrito. Por último, Soto la Marina y Aldama son los municipios ganaderos por excelencia de Tamaulipas.⁸

⁶ Abasolo (52.40%); Aldama (50.20%); Antiguo Morelos (49.83%); Burgos (67.48%); Bustamante (59.01%); Casas (63.11%); Cruillas (57.48%); Gómez Farías (62.79%); Güémez (53.69%); Hidalgo (60.99%); Jaumave (57.11%); Jiménez (35.90%); Llera (51.85%); Mainero (59.27%); Méndez (58.71%); Miquihuana (58.42%); Nuevo Morelos (57.27%); Icanoi (59.19%); Padilla (49.23%); Palmillas (55.92%); San Carlos (63.26%); San Fernando (52.53%); San Nicolás (29.29%); Soto la Marina (53.31%); Tula (57.98%); Ciudad Victoria (7.57%), y Villagrán (62.91%). En Jiménez predominan comercio y servicios; en San Nicolás la actividad minera y Ciudad Victoria es la capital del estado. *Ibid.*, pp. 220 y 221. La ganadería ocupa el 18% del PIB del sector primario.

⁷ En esa situación se encuentra la mayor parte de los municipios de la zona: Antiguo Morelos, Casas, Cruillas, Gómez Farías, Güémez, Llera, Mainero, Nuevo Morelos, Ocampo, Padilla, San Carlos y Villagrán.

⁸ Ubicados en la costa, concentran ganado bovino de alto registro y su producción anual de carne de la región es similar a la del estado de Nuevo

Cabe observar que, no obstante el perfil agropecuario de la zona central, prácticamente no existen conflictos agrarios. La representación oficial de los intereses campesinos, en particular la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos, priista, detenta un continuo control aun cuando mantiene márgenes de gestión social.

El sector agropecuario merece una consideración particular debido al interés de la actual administración ejecutiva del estado, estrechamente ligada al mismo. Respecto a su evolución económica, ha retomado un camino relativamente favorable, con excepción de 1989, cuando al parecer los precios de garantía tenderán en el corto plazo a desestimular la siembra de ciertos productos, después de las heladas de 1986 y del invierno de 1988, que afectaron las cosechas y parte del capital en fruticultura. Pero el gobernador en turno ha actuado para tratar de solucionar estos conflictos con créditos de emergencia, refaccionarios y otro tipo de apoyos financieros y administrativos para la recuperación del sector, lo que a su vez no se ha desconectado del poderío estatal que tienen las asociaciones de productores en el estado, cuyo principal interlocutor es el ejecutivo estatal respecto al control del crédito.⁹

En contraste, el sector campesino organizado en una corporación, desde su constitución como sujeto social y político en Tamaulipas dependió de la burocracia agraria, de sus líderes y sus organizaciones. En este escenario, el ejidatario es un sujeto no marginal pero sí de menor importancia política estatal. Los sectores dominantes en el agro tienen en cambio una mayor capacidad de presionar al gobernador y a la burocracia agraria, a través de sus asociaciones de productores.

Por lo que respecta a la participación de los sectores público y privado en la economía, debido a la particular estructura industrial y agrícola estatales, con Pemex como su principal industria, propiedad del estado, la privatización no ha tenido mayor significado en Tamaulipas. Además, la participación del capital privado local no se ha visto afectado, porque su orienta-

León. Méndez y Burgos, municipios productores de ganado porcino, se vinculan al mercado de Nuevo León y al del norte del estado; sin embargo, observan un nivel bajo de bienestar social y son expulsores de mano de obra hacia Estados Unidos.

⁹ Aun cuando también cuenta con importantes ligas en el sector agropecuario federal, así como en el comercial, oficial y privado.

ción en el norte así como en el resto del estado es fundamentalmente comercial y es el sector más favorecido por la situación actual. El capital extranjero ha encontrado condiciones propicias para el desarrollo, ya no sólo en la frontera, pues actualmente se buscan mecanismos para estimular la inversión en el centro del estado bajo la misma modalidad de las maquiladoras.¹⁰ Eso sí, la reestructuración ha obligado a un reordenamiento del empleo y a una cierta y limitada racionalización de los recursos del gobierno.

Zona industrial sur

Por razones de índole histórica, económica y política se han configurado en el sur de Tamaulipas dos sólidos complejos industriales que convierten a la zona en polo de desarrollo de importancia nacional. La región industrial-agrícola comprende los municipios de González, Mante, Xicoténcatl y Altamira. La industrial-manufacturera, el área conurbada de Altamira, Ciudad Madero y Tampico.

La primera gira en torno a la caña de azúcar, al sorgo y a las semillas y, en otras épocas, al algodón y a la ganadería. Su evolución ha seguido los trazos del desenvolvimiento del azúcar. Estos municipios crecieron demográfica y económicamente en la década de los sesenta (Mante lo hizo a un ritmo anual de 5.33%). El ingenio El Mante da vida económica, social y hasta política a la región y ha sido centro de movimientos sindicales y cívicos, tanto de Mante como de Xicoténcatl.

El complejo industrial-manufacturero Altamira-Madero-Tampico delinea también el perfil económico del llamado sólido sur de Tamaulipas. Petróleo, petroquímica, comercio exterior, electricidad, pesca y puerto industrial, son la base de su dinamismo económico. En 1980 residía allí 22.7% de la población total del estado, que hoy se calcula en 900 mil habitantes. Ésta es un polo de atracción demográfica.

¹⁰ El actual programa de privatización del gobierno no ha tenido efectos, ni ofertas ni demandas, excepción hecha de las ofertas rechazadas o congeladas lanzadas por el grupo industrial de Ciudad Madero para adquirir empresas paraestatales e invertir en infraestructura.

La construcción de una planta hidroeléctrica que contribuye con 7.6% del total nacional y un puerto industrial desde el sexenio de López Portillo hicieron crecer cualitativamente al municipio de Altamira. En seis años pasó de municipio rural a urbano.

Ciudad Madero es un importante centro petrolero nacional. Ahí se concentra 10% de los 130 mil trabajadores petroleros de todo el país; se refina 15% del crudo de la industria petrolera; se producen 10% de los petroquímicos básicos; se encuentra la sección de trabajadores más importante del sindicato petrolero (Sección Uno) y ahí vivía Joaquín Hernández Galicia, "La Quina".

El puerto de Tampico compite con el de Veracruz en cuanto al movimiento de carga/descarga por vía marítima. Da vida a otra agrupación básica del estado, el Gremio Unido de Alijadores (GUA), que controla actualmente la zona franca del puerto y ha ocupado la presidencia municipal de Tampico en varias ocasiones, con candidatos del PRI local. Es también importante centro de captación bancaria de la Huasteca.

En los 10 años recientes la región ha experimentado dos ciclos económicos: la etapa del *boom* petrolero nacional, en 1978-1982, que llegó a atraer a 90 mil personas en sólo un año; y la etapa de estancamiento y cancelación de grandes obras públicas, de 1983 a la fecha. Esta situación recesiva es uno de los factores de la pugna por el poder entre la federación y los grupos locales, que ocupó parte de la contienda política en la década de los ochenta. La diversificación de actividades económicas alcanzada durante la etapa del auge absorbió el golpe que significó la caída de los precios internacionales del petróleo en los últimos seis años. Actualmente, comercio, pesca, turismo y exportación han permitido a la región mantener su dinamismo y presencia económica en la entidad. Todo esto se ha combinado con una peculiar orientación sociopolítica de los grupos de poder local, quienes han respondido a la crisis generando empleos y construyendo obras sociales que han tenido un impacto político y urbano importante.¹¹ Adicionalmente, la reordenación del sector paraestatal no ha tenido implicaciones que profundicen la crisis en el estado, como ha sucedido en otros enclaves de propiedad

¹¹ En particular, en la periferia de Tampico el sindicato promovió la reubicación de pobladores, entre los cuales se encuentra buena parte de su mano de obra temporal, los transitorios, a quienes trasladó a las secciones del sur, en donde su potencial conflictivo pudiera disminuir, solucionarse o controlarse.

estatal, a no ser por la amenaza de privatizar las industrias paraestatales más importantes del país.

Con base en este panorama, podemos iniciar el análisis del desenvolvimiento político del estado durante los años recientes. Interpretación que no puede realizarse sin considerar los estudios elaborados en la década sobre el proceso político en los estados fronterizos.

II. LA HISTORIA Y LA POLÍTICA EN LA FRONTERA

Al revisar la situación política de Tamaulipas resulta ineludible considerar los argumentos más conocidos acerca de las “peculiaridades” del norte mexicano.¹² Es común plantear que el territorio del norte no ha tenido la misma integración política que otras regiones del país. Ciertamente es que su articulación con el resto del territorio ha sido históricamente más débil que la lograda con otras regiones de México, pero habría que discutir cuáles de estos argumentos permiten explicar su actual situación política.

Tal vez la causa fundamental de esa distinta articulación entre el centro de México y las regiones del norte, que tendría consecuencias para su vinculación actual, reside en que sus agrupamientos se encuentran bien cohesionados entre sí, pero son débiles en su articulación exterior, entre otras razones porque prácticamente su único nexo ha sido el poder central. Los esfuerzos por ocupar e integrar la frontera a los dominios nacionales se desarrollaron siempre a partir de enlaces verticales, entre el centro político nacional y cada uno de los núcleos de expansión, pero nunca se encadenaron entre sí.

Históricamente, la condicionante fundamental en la integración político-social de México se ha determinado por la capacidad de los grupos locales de formar esas coaliciones verticales, al margen de su articulación territorial, lo cual no concuerda totalmente con la integración política de Tamaulipas. Ahora bien, para el análisis político resulta lógico plantearse algunas

¹² Su formación histórica tardía, su mayor autonomía, surgida del aislamiento y la distancia con los centros de “civilización”; el carácter peculiar de los norteros, su distinto sentimiento de pertenencia a una comunidad y asociado con esto la distinta relación entre los colonos, donde destaca un sentimiento de solidaridad contra los antiguos pobladores.

cuestiones contemporáneas que se derivan de estas propuestas de la historia. ¿Cuáles han sido las consecuencias de este enlazamiento para los sistemas políticos locales y para el sistema nacional? ¿Cuáles son y dónde se encuentran hoy las instituciones y las fuerzas políticas en el espacio del norte? ¿Podríamos considerar al norte como una región política unitaria?

III. EL NORTE CONTEMPORÁNEO DE MÉXICO: MODELOS QUE LO EXPLICAN

En la actualidad, en el lado mexicano se han expuesto diversos enfoques sobre la configuración de la frontera norte como región. Desde un punto de vista comprensivo, dos interpretaciones destacan de manera especial. Por un lado, la de “región binacional”. En segundo lugar, la de “desarrollo desigual”. Ambas hacen referencia a las contradicciones y contrastes entre países con diferencias históricas, económicas, culturales, geográficas y de recursos naturales, que se tornan evidentes en la zona de colindancia.¹³ En lo que se refiere a los múltiples estudios políticos en la frontera, han prevalecido dos formas de análisis: la institucional y la de las prácticas políticas observables, ya sean elecciones o movimientos sociales. Con esto se entiende que ambos aspectos modelan su dinámica política. Aquí surge un primer problema, el de estudiar las entidades del norte sin contextualizarlas en un sistema regional, en sus articulaciones interna —entre unidades político-administrativas— y externa —en su vínculo con otros agrupamientos y con el gobierno federal.

Asimismo, se afirma la existencia de una aparente tendencia al incremento en la participación, que ha sido valorada como un reclamo por la democracia, tanto por algunos investigadores como por algunos partidos políticos; en contraste, otros estudios han interpretado que esas luchas y acontecimientos obedecen mejor a reclamos en favor de la integración de nuevos grupos

¹³ Jorge A. Bustamante, “La interacción social en la frontera México-Estados Unidos: un marco conceptual para la investigación”, en Roque González Salazar, *La frontera norte: integración y desarrollo*, México, El Colegio de México, 1981, p. 28; Mario Margulis y Rodolfo Tuirán, *op. cit.*, pp. 25-29.

al sistema de representación o a otros problemas localizados en los estados.

El problema de la frontera y del norte de México consiste en que su determinación es internacional con relación al espacio, y binacional con relación en la línea fronteriza. Más que otras regiones de integración nacional, el norte ha dependido de la integración de ambos sistemas. Lo paradójico del análisis político de la frontera consiste en que ninguna interpretación ha intentado considerar ambas dimensiones. De allí la propuesta de que el desarrollo desigual de ambas naciones crea también formas asimétricas de aprovechamiento e integración de dicho espacio. Las regionalizaciones y periodizaciones del norte deberían explicar más claramente dicho proceso.¹⁴

El espacio fronterizo puede entenderse mejor como un arreglo espacial, un encuentro e integración de ambos sistemas socioeconómicos y políticos, sólo así entenderemos que el norte no sólo es un espacio en sí o una región particular, sino que su significado lo adquiere por su largo proceso.

Cabe ahora destacar que tanto en el norte como en algunos estados del país se han dado convergencias conflictivas locales y electorales, así como la formación de identidades colectivas en torno a valores o demandas comunes de la población. También se manifiestan tensiones entre el proceso político local y en las relaciones de los actores locales con el gobierno central.¹⁵

En otras interpretaciones, encontramos hipótesis en el sentido de que la peculiaridad política del norte consiste en ser la región de la "modernidad" política; misma que algunas veces se identifica con el proceso de urbanización y aduce que el comportamiento electoral está fuera del dominio monopólico del PRI y dentro de una posible alternancia política;¹⁶ derivada de esta cuestión, se encuentra la formación de un bipartidismo re-

¹⁴ Desde este punto de vista se destaca que las relaciones espaciales y la estructura geopolítica no pueden reducirse a una teoría del Estado-Nación, sino a otro entendimiento del origen de los Estados nacionales.

¹⁵ Los estudios de Guadarrama en Sonora (1985), de Márquez sobre San Luis Potosí (1985) y el de Rubin sobre Juchitán (1985), muestran la presencia del mismo conflicto de articulación política entre estructuras de poder local y la nación. Arturo Alvarado, *Electoral Patterns and Perspectives in Mexico*, La Jolla, Center for U.S.-Mexican Studies, 1985.

¹⁶ Alberto Aziz, *op. cit.*

gional.¹⁷ El conjunto destaca la inexistencia de una maquinaria y estructuras de poder corporativas, lo que contrasta con Tamaulipas.

Por ejemplo, Aziz propone que la presencia de una estructura sindical y agraria corporativa insuficiente se asocia con su poca convocatoria electoral; extrapola la importancia de los procesos electorales como estructuras de agregación y representación en el norte, así como el funcionamiento de los partidos más allá de coyunturas electorales, sin ubicarlos dentro de un sistema de representación local.

Otros aspectos que dentro del análisis de las prácticas electorales en el norte han resultado centrales, son las actitudes o la cultura política de los fronterizos. Junto con esta temática, la cuestión del corporativismo produce aún más dificultades, pues Guillén considera que es la base articuladora e integradora del sistema nacional, y tiene consecuencias también corporativas en la frontera. Incluso, afirma que ha creado una cultura política corporativa que, combinada con liderazgos apegados al sistema tradicional de ejercicio del poder, generan corrientes de simpatía en favor de caudillos electorales, como Francisco Barrio en Chihuahua, o como Cuauhtémoc Cárdenas.¹⁸

Si bien esto explica parcialmente la movilización política en algunas zonas de Chihuahua, no es posible extrapolar tal hipótesis para la frontera. Precisamente en Tamaulipas la fragmentación política resultante de la urbanización y de la pulverización del poder estatal ha permitido la emergencia de un poderío alternativo y competitivo de partidos basados en la convocatoria a una población encapsulada en organizaciones corporativas tanto del campo como de la ciudad.

En cierta forma, estos modelos suponen que la mayor urbanización y desarrollo en el norte han producido una pluralización y fragmentación de opciones políticas, y ha reducido la eficacia de los controles de poder tradicionales del PRI, lo cual es cierto para todos los escenarios urbanos del país y de los parti-

¹⁷ Carlos Martínez Assad, 1985. También Martínez Assad y Álvaro Arreola, "El poder de los gobernadores", en Rafael Segovia y Soledad Loaeza, *La vida política mexicana en la crisis*, México, El Colegio de México. Allí los autores hablan del pluripartidismo y del bipartidismo "existentes en la práctica".

¹⁸ Tonatiuh Guillén López, "La cultura política y la elección presidencial de 1988: hacia un análisis del *neocardenismo*", en *Frontera norte*, vol. 1, núm. 1, enero-junio, 1989.

dos, y no sólo para el norte; pero no demuestran ni la desintegración del sistema, ni un aumento de competitividad.

Unidad y diversidad en la frontera norte

Los argumentos de estudios regionales en boga atribuyen al norte una tendencia “lógica” de ser la punta de lanza del país, por su particular posición de “vanguardia” nacional y regional y por su significado para el futuro de México. Se afirma que la frontera norte sintetiza el conjunto de evoluciones sociodemográfica, cultural, educativa, industrial, agrícola y ahora política del país.

Cierto es que el norte muestra una mayor acumulación de signos de “modernidad”; su rostro más urbano que rural, cuyo crecimiento durante las últimas cuatro décadas ha sido mayor que otras regiones del país. Este rápido proceso se suma con la presencia de nuevas organizaciones, actitudes y demandas de la población en los estados y los municipios fronterizos.

Frente al complejo esquema interpretativo que se nos ofrece, consideramos que la situación contemporánea de la frontera, comprende al menos cuatro dimensiones:

Primero, su heterogeneidad regional, su fragmentación urbana y regional, de su economía, su sociedad y poder. La formación y estructura contemporánea de los estados fronterizos marcan diferencias intraestatales importantes, entre ciudades, municipios y otras zonas, con el resto del espacio que integra a los estados fronterizos. Igual sucede con sus estructuras de poder regional, que obligan a considerar el siguiente aspecto.

Segundo, la discontinuidad de su formación e integración políticas. Las características de los movimientos políticos y electorales en Sonora difieren radicalmente de las de Nuevo León, Tamaulipas, e incluso de distintas regiones en una entidad.

Tercero, el carácter de los movimientos, obreros, campesinos, etcétera; sus bases políticas.

Finalmente, sus formas de autoridad y de articulación con el estado que, en Tamaulipas, producen una carencia de representación de las fuerzas políticas de la entidad.

A cada estado corresponde una particular forma y dimen-

siones de los partidos y agrupaciones políticas nacionales, una asociación entre estructura del poder y estructura de agregación, donde la representación formal se sujeta a la relación entre estructura corporativa y elementos de la representación electoral —partidaria. Aquí debe destacarse tanto la presencia de organizaciones como la CTM, en constante pugna con grupos autónomos del esquema priista; así como la antigua existencia de organizaciones de los ejidatarios, los rancheros y las cámaras agrícolas regionales. A estas formas típicas de agregación política debe incluirse una nueva constelación de actores colectivos: cámaras empresariales locales, asociaciones regionales agropecuarias (Sonora), agrupaciones de profesionistas y técnicos, arquitectos, abogados, maestros y estudiantes universitarios (Baja California, Sonora, Tamaulipas y Nuevo León), movimientos de colonos urbanos populares (comités de Defensa Popular “Francisco Villa” en Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas), clubes de servicio comunitario y asociaciones civiles para el mejoramiento de servicios públicos específicos (luz, agua, etcétera). En este panorama, el funcionamiento y posición espacial de los estados son impensables sin conocer la articulación de las corporaciones que en él actúan.

El caso de las ciudades del noreste plantean otra cuestión. ¿Podría considerarse, contra la crítica al corporativismo, que los ejes articuladores en el norte son las estructuras de agregación social, de empresarios o de líderes obreros, los sindicatos nacionales? ¿Lo que explica la conflictiva actual consiste precisamente en tensiones en los lazos de articulación en el interior de las comunidades?

En ciertos casos, son las organizaciones sindicales las que establecen las reglas del juego, como solía ocurrir en Matamoros, Nuevo Laredo o Tampico; allí, la organización del poder local se constituye, concentra y legitima a partir de los intereses de los gremios sociales y sus estructuras de representación. Esta situación se ha acompañado de elecciones conflictivas pero de menor impacto para los enlaces con el centro. Tampoco se cuestionan las formas típicas de ejercicio del poder, ni la hegemonía de esos cuerpos políticos. La representación directa de estos organismos y liderazgos dentro de la coalición nacional hace que las instancias mediadoras formales, como los partidos, los gobernadores o los diputados, merezcan menor peso articulador del que formalmente sustentan. Esas cuatro características des-

critas se conjugan en el norte con tres dimensiones de su estructura de participación y de poder.

IV. FRONTERA NORTE: CULTURA POLÍTICA, REGIONALISMO, CAUDILLISMO

La modernización de la estructura social y económica que se observa en las zonas fronterizas del norte del país no corresponde a plenitud con los comportamientos, conductas y actitudes políticas dominantes en el área. En el plano de las manifestaciones políticas coexisten expresiones de carácter “moderno”, como la alta competitividad electoral del sistema regional de partidos, la estructuración de organizaciones de la sociedad civil de carácter permanente, autónomo y crítico; se combina así con el corporativismo y elementos activos de carácter tradicional, como el caudillismo y el regionalismo político. La articulación de esas dimensiones en un esquema de observancia general es un rasgo de la cultura política de la frontera, al igual que de otras regiones del país.

Esa suerte de protagonismo electoral de la región ha sido una constante en la década pasada. Coincide con la redefinición de la participación política de las élites regionales en la coalición gubernamental nacional, a partir de la expropiación de predios agrícolas en el estado de Sonora, en 1976, y la expropiación de la banca en 1982. Ésta fue el detonador para que grupos de empresarios y otros actores regionales participaran activamente en política partidista. Empero, frente a la competitividad observada, que ha sido interpretada como la configuración de un sistema bipartidista regional, la contraparte de este rasgo modernizador es el alto abstencionismo y el control político de los procesos por diversas autoridades. En esta fuerte competencia acompañada de una baja participación ciudadana, quienes compiten en los procesos electorales por el control regional son, ante todo, las élites dominantes.

Debe también considerarse como otro rasgo sobresaliente en la frontera la presencia de un creciente número de nuevas organizaciones civiles que se originan en diversas categorías profesionales y sociales. Son organizaciones que en las coyunturas electorales del sexenio pasado participaron activamente en política partidista. Sin embargo no se originan ni se encuadran de

manera permanente en los partidos políticos. Pertenecen más a movimientos y actores sociales regionales que a la estructura nacional de partidos políticos. Su participación no se constriñe a la etapa electoral, sino que tienen presencia continua en la “vida cívica” de las poblaciones fronterizas. Reflejan los intereses sociales de la diversa gama de actores políticos de la región.

Este fenómeno puede interpretarse como la estructuración creciente de organizaciones civiles, aun cuando no constituya un “corporativismo societal”, propio de movimientos urbanos; pero no se lo ha incluido en el análisis de su impacto en los procesos electorales. En Baja California, tal estructura organizativa de la sociedad local, adecuadamente coordinada por el PAN, fue determinante en el triunfo de Ernesto Ruffo Appel.

Con las características “modernizantes” anteriores coexisten elementos tradicionales en la cultura política fronteriza, como el corporativismo, el caudillismo y el regionalismo. El corporativismo se ha concebido como una cultura política tradicional, un conjunto de creencias y comportamientos políticos que convierten los procesos electorales en parte de la negociación con el poder, y menos en un instrumento para la configuración o adquisición del mismo.¹⁹ Esta actitud ha sido considerada como un rasgo de atraso político. Ahora bien, desde una perspectiva general, este comportamiento es la forma en que esos sectores sociales vinculan estructuras políticas y desarrollo económico; es una forma doble de integración y representación en el sistema. En esta lógica es donde valdría explicar el voto.

En las ciudades fronterizas de Tamaulipas (Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros) se puede observar ese patrón de comportamiento político donde, aún con índices de mayor desarrollo económico y con la presencia de agrupaciones con alternativas, persiste la menor competitividad electoral y la reducción de las opciones. Allí también encontramos las consecuencias de la concentración de poder en burocracias sindicales, como a Pérez Ibarra, en Nuevo Laredo, Reynaldo Garza Cantú, en Reynosa, Agapito González Cavazos, en Matamoros o “La Quina” en Tampico.

Otro elemento determinante en la cultura política fronteriza es la tendencia a la determinación de los liderazgos públicos por

¹⁹ Tonatiuh Guillén López, *op. cit.*, p. 135.

el “caudillismo”, práctica tipificable en candidatos electorales y autoridades políticas de la zona. Los liderazgos se han definido en función de cualidades como la audacia (Adalberto Rosas), el mesianismo religioso mezclado con rasgos empresariales (Francisco Barrio Terrazas), la ascendencia moral del “maestro” Carlos Enrique Cantú Rosas, de Nuevo Laredo (líder nacional del PARM), o de pretenderse benefactores de la comunidad, como Manuel J. Clouthier (Culiacán), Eugenio Elorduy (Mexicali) y Fernando Canales Clariond (Monterrey). Personalidades que dan brillo y relevancia a los partidos y sus campañas.

Un común denominador de estos liderazgos ha sido no proponer más banderas que críticas al sistema de poder local y, en cierta proporción, al centralismo y a la imposición; capitalizan un sentimiento de arraigo a su alrededor, incluso de agravio, cuando defienden esa identidad local contra el sistema central o los cacicazgos locales. Las insurgencias electorales se asocian a candidaturas caudillistas locales, de líderes y grupos que han permanecido fuera de la estructura del reclutamiento político típico del PRI y del sistema.²⁰

Estos movimientos han permanecido aislados en sus localidades debido a que no existen enlaces orgánicos entre ellos ni con los partidos, por lo que tampoco existen alianzas sólidas hacia el exterior. La insurgencia permanece encapsulada localmente, o disminuida por la acción nacional de los partidos que, a la larga, no enlazan esos conflictos localizados. Al respecto, se señala el fracaso de los partidos opositores en integrar estructuras regionales de coalición entre esas élites contra el corporativismo persistente. El resultado del rasgo cultural caudillista podría pensarse como una tendencia a la inestabilidad del electorado fronterizo. Lo común y determinante en ambos casos sería el carisma personal, pero no hay que olvidar otro conjunto de factores que articulan la votación.

Por último, el *regionalismo* se ha presentado como otro rasgo sobresaliente en la cultura política de la frontera norte, otra manifestación de la territorialidad de las relaciones de poder, se

²⁰ El gobierno ha buscado en la designación de candidatos tanto criterios *ad hoc* a esas situaciones como en especial regenerar esos rasgos de la política tradicional, más que avanzar hacia nuevas relaciones con las élites locales.

define tanto por la valoración política extraordinaria que se da a la “oriundeza” y a la residencia en la localidad, como por la yuxtaposición y rechazo al centralismo político y administrativo.²¹

Una derivación del regionalismo político es el “tradicional” conflicto que se observa en la región norte, entre las élites económicas locales y la federación, por la distribución de los excedentes y recursos financieros de la zona. En contraste con la creencia de que la federación extrae más recursos de los estados fronterizos que aquellos que ingresan, en 1980 la recaudación bruta de la federación en dichos estados, como porcentaje del PIB estatal, fue del orden de 16%. Con excepción de Tamaulipas (27.1%) los demás estados fronterizos estuvieron por debajo de la cifra.²² Por otra parte, en ese año, las participaciones federales como porcentaje de los ingresos brutos estatales, fueron del orden de 39.4%. Nuevamente, separando Baja California (23.8) y Nuevo León (27.7), los demás estados norteros estuvieron notablemente por encima del promedio de participaciones.²³ De esta forma, ante ese reproche anticentralista es mejor una bandera de negociación de dichas élites para incrementar su participación en los recursos federales. Esto refleja tanto la participación federal en los presupuestos de los estados como la autonomía política que las élites locales tienen en las negociaciones presupuestales y en las sucesiones locales.

Lo que se ha afectado profundamente en los años recientes son las relaciones entre los grupos en el interior de los gobiernos estatales, ya en el sentido de un reparto del poder y una política que tienda a la pluralización y democratización, ya en el sentido de la pulverización del poder, ya en un reforzamiento de una desigual relación con el centro.

²¹ Con excepción de Baja California, la mayoría de las constituciones políticas de los estados del norte son rígidas y exigentes respecto a los requisitos de origen y residencia de las autoridades municipales y estatales. Por ello, parecería impensable que el PAN llegara a proponer un candidato similar al que provocó revuelo en Puebla recientemente, o al actual caso del PRD en Guanajuato, donde se reivindica la estirpe.

²² Baja California (9.2), Coahuila (11.3), Chihuahua (7.5), Nuevo León (14.7) y Sonora (6.8).

²³ Coahuila (73.5), Chihuahua (72.7), Sonora (71.4) y Tamaulipas (70.5).

El corporativismo en Tamaulipas

La compleja regionalización que constituye Tamaulipas tiene como base una estructura política corporativa estrechamente determinada por la economía y las clases; a partir de ella surgen los mecanismos de patronazgo y clientelismo entre el proletariado rural y urbano y se reclutan los miembros de la élite local y sus burocracias, con excepción de algunas candidaturas federales.

El movimiento obrero en el estado se caracteriza por una autonomía que lo convierte en sujeto protagónico extrarregional. Respecto a dicho movimiento se ha discutido ampliamente la problemática electoral del corporativismo y se ha intentado explicar su presencia ya como una simbiosis, ya como un traslape entre estructuras de participación modernas y tradicionales, lo cual resulta irónico, pues es precisamente el producto de esa modernidad industrial. En cierta medida los intereses del proletariado se extienden en su presencia espacial. Uno de los centros del poder regional es el enclave obrero de Tampico; otros, los de Matamoros y Nuevo Laredo. Parcialmente, la FTSET en Ciudad Victoria, e incluso el sindicato cañero en Ciudad Mante, son expresiones del corporativismo en esas zonas. La estructura sindical de Tampico muestra una compleja interacción entre la localidad y la comunidad externa, que se explica parcialmente por la función de enlace que constituía Joaquín Hernández Galicia, “La Quina”.

El conjunto de estos factores han formado peculiares órdenes político-locales, así como han obstaculizado el desarrollo de un sector del empresariado con liderazgo político. Pero la estructura de clases, la emergencia de un poder caudillista y la cristalización del poder obrero por sí solos no frenan la formación de una burguesía industrial urbana. Hay otros factores que han imposibilitado el desarrollo de un empresariado en el estado. Entre ellos hay que destacar la estructura monopólica del comercio y las finanzas.

También la cercanía con el núcleo industrial de Monterrey así como la ventaja competitiva del comercio fronterizo han inhibido la consolidación de un núcleo empresarial en el estado. No ha ocurrido en la misma proporción en el sur, donde el ritmo comercial, financiero e industrial lo marcan las actividades petrolero-portuarias, su mercado laboral y su liderazgo político,

quien ha puesto en marcha una red comercial y de servicios, que si bien inhibió la formación de capital privado ha dejado margen sustancial para el desarrollo de cadenas comerciales. Las cooperativas del sindicato petrolero representaban un fuerte competidor para los comerciantes, haciendo sólo posible a las grandes cadenas comerciales penetrar en ese poderoso mercado.

Parte de los negocios y los consorcios de capital del sur han surgido o han florecido cobijados bajo la poderosa capacidad económica del sindicato petrolero, a la vez nutrido por las concesiones estatales o con proyectos de inversión federal, lo que ha permitido formar grupos y fortunas inigualables. Los intereses económicos surgen o se desarrollan alrededor del vértice del estado, de sus acciones y sus actores. De allí que muchos sectores económicos empresariales no aparezcan como los principales factores de poder en la toma de decisiones locales. En cambio, aparecen detentadores de poder en la burocracia sindical, entre los líderes del campo y las asociaciones de pequeños propietarios. Esta situación de encapsulamiento vale también para caracterizar otras regiones del estado.

El norte

Con el vertiginoso desarrollo de los núcleos urbanos de Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, se ha visto crecer, en los 20 años recientes, un conjunto de burocracias obreras locales alrededor de los sindicatos de las aduanas y las administraciones locales, así como de la creciente industria maquiladora que, en particular en Nuevo Laredo, tuvo enorme importancia en el surgimiento del cacicazgo de Pérez Ibarra, líder de la Federación de Trabajadores de Nuevo Laredo (FTNL), afiliada a la CTM.²⁴

Situación similar sucede en los municipios de Reynosa y Matamoros, donde el surgimiento de burocracias sindicales está también ligada al desarrollo urbano y al servicio de transporte público. Estos dirigentes sindicales se han agrupado tradicionalmente en Nuevo Laredo como el pilar obrero del PRI estatal, formando el núcleo decisivo en los procesos de formación de

²⁴ Roland Travis, "La organización del poder político a escala local: el caso de Nuevo Laredo, Tamaulipas", en *Poder local, poder regional*, México, El Colegio de México, 1986.

cuadros políticos, electorales, integración de planillas municipales, de diputados locales y federales. Asimismo, en virtud del control de las instancias administrativas regionales (ayuntamiento, hacienda, aduana) y de la representación de secciones estatales de corporaciones federales, constituye el principal enlace institucional con otras autoridades de orden estatal o nacional, en donde el gobernador no es la pieza central del sistema.

Ahora bien, particularmente en estos municipios se ha visto surgir, desde principios de los años setenta, una oposición política que no sólo manifiesta el descontento de la población, sino las pugnas intersindicales entre gremios y líderes de esa burocracia sindical.

En Nuevo Laredo grupos opositores han logrado ocupar la presidencia municipal en dos ocasiones, así como el distrito electoral local y, en el proceso electoral de 1988, a pesar de que triunfó el candidato del PRI, el Colegio Electoral otorgó constancia de mayoría al candidato parmista. Este partido se ha visto particularmente favorecido por las pugnas intergremiales y, anteriormente, se han desarrollado coaliciones con el PAN para mantener el control de las administraciones locales, alianza desarrollada alrededor de candidaturas "carismáticas". Sin embargo, a pesar de las manifestaciones de descontento entre distintos sectores de la población local, de los comerciantes, del mismo sector sindicalizado o del estudiantado, éstos no han logrado integrar una alternativa política que vaya más allá de votar por cierto tipo de liderazgos locales, sin más plataforma que oponerse a la conducta del gremio en competencia. Así, por ejemplo en Matamoros, Jorge Cárdenas González, hermano del ex gobernador y dueño de una importante cadena de radiodifusoras en el estado, ha llegado al ayuntamiento en dos ocasiones bajo la bandera parmista.

El "sólido sur"

Original de Tampico, pero en una dimensión de orden suprarregional, encontramos la Sección Uno del STPRM. Llegó a ser tal el poderío de ésta que no sólo decidía sobre la administración en Ciudad Madero, sino también de Tampico, Altamira, y tenía preminencia en las decisiones sobre Pueblo Viejo. Este control

político ha obstaculizado el desarrollo de una oposición local autónoma, pues a su control político-electoral se sumaba el de la prensa local así como de los sectores del partido oficial, situación similar a la del noreste del estado. En este esquema, la administración municipal jugaba un papel subsidiario en el desarrollo de sus actividades principales, como dotar de servicios a los pobladores. El principal constructor y servidor público ha sido el área de obras sociales de la Sección Uno. A través de las llamadas obras sociales, el sindicato se creó una clientela urbana, tanto proletaria como de los estratos medios, proporcionándoles apoyo en los desarrollos urbanos, en la construcción de infraestructura y en el comercio.

El surgimiento del liderazgo quinista y su papel en el sistema político contemporáneo, a partir de la captura de la dirigencia petrolera, merecería un estudio aparte. Cabe sólo destacar que su ascenso trajo una ola renovadora del sindicato y, particularmente durante el *boom* petrolero, logró una de las conquistas más redituables para el mismo: un porcentaje en los contratos-concesión de Pemex. Este aspecto fue el verdadero eje de la disputa entre el gobierno nacional y el gremio, al margen de los enfrentamientos que se han suscitado por causa de su peculiar conducta política nacional; disputa que terminó dirimiéndose, por ahora, en favor del gobierno central.

Adicionalmente, el gremio puso particular interés en el desarrollo del controvertido puerto industrial de Altamira, cuya construcción fue cuestionada dadas las características de la costa del golfo. El inicio de la crisis detuvo su desarrollo, pero aún así ha avanzado parcialmente y se han logrado abrir a la producción algunas industrias petroquímicas, tanto de participación estatal como de inversiones conjuntas con empresas de los grupos industriales de Monterrey (Vitro) y otras de capital extranjero. Se espera que el puerto industrial reordene la totalidad de la actividad manufacturera, industrial y química de la región, cambiando la estructura del mercado laboral y de la zona en su conjunto. De allí el interés del gremio por participar en su desarrollo.

Esa estructura de liderazgo personalista y de relaciones de clientela prácticamente se desmembró con el encarcelamiento de Hernández Galicia y surgió entonces una posibilidad de generar una nueva forma de representación local distinta al liderazgo quinista, ya sea como forma subordinada al centro nacio-

nal, ya como un nuevo esquema de control político de la movilización local.

Otro núcleo urbano que ha adquirido importancia en el sur es la localidad de Ciudad Mante, de formación reciente como región y a su vez como núcleo urbano. Sus actividades están determinadas por la agricultura y tienen una fuerte tendencia a la asociación corporativa. En primer lugar, debido a las organizaciones campesinas aglutinadas tanto en la CNC como en otras centrales que tienen fuertes bastiones de influencia local. En segundo lugar, por la presencia fundamental de una cooperativa y un sindicato de trabajadores azucareros y, finalmente, por un conjunto de asociaciones de ejidatarios, de empresarios agrícolas y comerciantes, quienes se han disputado las posiciones políticas locales, el control de los recursos económicos, financieros y administrativos dispuestos en la región por autoridades estatales o nacionales. Esta disputa resultó, en 1989, en una división de facciones en el interior del PRI que permitió al PAN ganar el ayuntamiento (véase gráfica 7).

El centro burocrático y agrario

Del conjunto de las estructuras regionales, el centro y el oriente del estado conservan aún su estructura de poder tradicional, si no más plural, sí sectorial. La capital del estado, como centro burocrático administrativo es el eje de las actividades sociopolíticas regionales y constituye un nodo comercial para el conjunto de las actividades agropecuarias. En la actualidad, el proceso de urbanización está creando nuevos actores locales que demandan servicios y participación y que, sin embargo, no han llegado a alterar el ordenamiento político local, donde el PRI constituye el núcleo partidario central con la liga campesina, de mayor presencia regional y brazo estatal de la CNC. En esta región, los trabajadores al servicio del estado constituyen el pilar obrero de la CTM y de la CNOP, del partido oficial local, participando en una típica división tripartita de poderes de representación en el Congreso del estado y en los municipios aledaños (véase gráfica 4).

Por lo que se refiere al Congreso local, a partir de la consulta para la renovación política de 1987 y de la adecuación hecha a la Constitución del estado a su espíritu, se ha integrado por 20 diputados estatales que provienen de 15 distritos electorales

de mayoría relativa. Los cinco restantes se distribuyen de acuerdo con el principio de representación proporcional. A raíz de esa reforma, el Congreso se integró por primera vez con dos diputados del PARM (del norte), uno del PAN, uno del PMS y uno del PST.

Ahora bien, el panorama electoral se modificó de acuerdo con la reciente convocatoria del gobernador para llevar a cabo otra reforma electoral, donde se contemplaban, entre otras medidas, la creación de tres nuevos distritos electorales estatales (en Reynosa, Matamoros y Ciudad Mante), el reconocimiento de partidos regionales, la integración paritaria de los diversos organismos electorales y el cambio en el calendario electoral en la entidad.

Asociado con estos cambios, ya se había producido la reforma al artículo 115 constitucional que buscó fortalecer los municipios, estimular su integración plural y protegerlos de destituciones arbitrarias. En el contexto de ambas reformas legislativas, los partidos de oposición consiguieron participar en varios gobiernos municipales, lo que significó un cambio importante para el gobierno del estado, para los municipios y para los grupos de poder locales. Mas, a pesar de la pompa con que fue emitida la reforma al 115 constitucional, en Tamaulipas hasta ahora sus efectos han sido menores. La emisión de la reforma surgió cuando estaba terminando su gestión el gobernador Martínez Manatou, quien entre otras cosas no se vio muy favorecido por el acceso del grupo de De la Madrid al poder federal. El gobierno y el Congreso locales se limitaron a emitir la adecuación constitucional en el estado y a dictar algunas medidas administrativas para su puesta en práctica. Importantes capítulos de la reforma constituyen tanto las recauderías de rentas como la designación de los jefes de seguridad y policía.

En la actual administración de Américo Villarreal, la recaudación monetaria del predial y del agua se ha transferido por completo a los municipios, no su recolección ni administración, que sigue estando a cargo del ejecutivo del estado. Queda pendiente la cuestión de la seguridad pública, que el gobernador actual ha preferido mantener en sus manos por razones de seguridad ciudadana en los municipios controlados por las burocracias obreras, así como por el notorio incremento de las actividades del narcotráfico en el estado, presuntamente ligadas a grupos de poder local.

Mas esta reforma que traería importantes consecuencias financieras y políticas ha sido poco impulsada por los grupos locales, entre otras razones porque esas élites pueden prescindir —de hecho, lo realizan—, de los escasos recursos municipales, por no ser de ninguna forma la fuente principal de ingresos y sí, en cambio, una más de las instancias de control administrativo y político de sus jurisdicciones. Dicho control ha permitido el funcionamiento de sus actividades y negocios y muestra que una de sus preocupaciones actuales en torno a la reforma municipal es precisamente aumentar su poderío político, controlando la seguridad pública local.

Más allá de estos aspectos, la reforma municipal no ha tenido consecuencias políticas o electorales, ya que las cuotas de poder no se han transformado y no es de esperarse una alteración sustantiva en el comportamiento de la ciudadanía. Aún así, la emergencia de nuevos actores urbanos en el estado, la presencia de opciones políticas locales y la desaparición de fuerzas antiguas desembocaron, ya, en la creación de ayuntamientos con concejales de nuevos grupos o partidos.

En este contexto de sutiles pero importantes cambios, resulta interesante que después de 40 años de atrofia del papel gestor del gobernador frente a la federación y otras instancias, la administración de Américo Villarreal tenga la oportunidad de recuperar no sólo la mística, sino algunos elementos sustanciales del intermediarismo típico de su investidura, al menos para el sector agropecuario y, ante la extirpación de los cacicazgos obreros, podría recuperar su soberanía plena en esos escenarios urbanos.

La designación del presente gobernador siguió los mismos lineamientos con que se designaron gobernantes en muchos estados durante el sexenio anterior; particularmente en Tamaulipas, la relación íntima de amistad con el presidente, su larga gestión burocrática en la federación, aparentemente alejado de su estado natal, y en alguna medida su lejanía de grupos de poder local, pudieron ser los méritos de la actual administración, desarrollando una tradicional campaña de acarreo y desmovilizaciones y llegando al ejecutivo estatal con el apoyo directo del presidente.

Villarreal ha jugado un papel activo en la promoción y apoyo al sector agropecuario frente a la crisis. Esto se ha patentizado desde sus inicios con el apoyo a los agricultores frente a las heladas; luego, con crédito oportuno, seguros, precios de garan-

tía, apoyo a proyectos “modernizadores”, mecanismos de distribución, etcétera. Para los agricultores, su administración ha resultado benéfica y una especie de vuelta a las funciones que hace años no se veían por el estado, aun cuando los ciclos de sequías, lluvias a destiempo y las heladas, no lo han favorecido. Y como para las élites urbanas no ha representado aún una oposición a sus intereses, no se han creado conflictos.

En las ciudades el gobernador ha intentado recuperar incieratamente sus facultades. Así aconteció, por ejemplo, durante la primera semana de marzo, cuando un grupo de 8 000 colonos ocuparon nueve predios de propiedad del sindicato petrolero. El gobernador ordenó el desalojo de los mismos hasta no definir la situación jurídica de tales propiedades. En otra época, este desalojo masivo en el sur del estado no hubiera procedido sin el consentimiento de Hernández Galicia.

Por otra parte, el gobernador intentó recuperar sus funciones de arbitraje laboral en el norte del estado al dictar, en agosto de 1989, un laudo con el que proponía una solución al conflicto huelguístico ocurrido en varias maquiladoras de Reynosa. El conflicto se originó por la titularidad de un contrato colectivo de 15 fábricas en Reynosa, afectando a 3 000 trabajadores tutelados por la CTM, quien denunció que la Junta de Conciliación y Arbitraje estaba apoyando ilícitamente actos del Centro Patronal de Reynosa —dirigido por Francisco Narro— y a un Sindicato Industrial de Trabajadores y Operarios de Empresas Exportadoras (cuya existencia fue declarada nula en dos instancias laborales y que la misma CTM denunció como “blanco”). Al inicio el conflicto se dirimió entre el gobernador y el líder nacional de la CTM, pero la patronal de Reynosa se empeñó en empanatar el proceso.²⁵ Finalmente, Villarreal dictó un laudo en el que, sin perjudicar al sindicato de la CTM, proponía arbitrar directamente el conflicto, levantar la huelga y volver a escuchar a las partes, a fin de restablecer la calma y la producción en Reynosa. Después, el fallo favoreció a los patrones sin perjudicar a la CTM, y se evitó la necesidad consultar a los trabajadores.

²⁵ La intervención de Fidel Velázquez produjo declaraciones de las cámaras locales de comercio y empresarios en ambos lados de la frontera, condenando el paro y amenazando con retirar sus inversiones, *La Jornada*, 5 y 7 de agosto de 1989.

Los actos recientes de formal renovación de las dirigencias sindicales en Matamoros y, eventualmente en Reynosa, Nuevo Laredo o Ciudad Victoria, terminarán por configurar un escenario de relaciones entre el ejecutivo estatal y los sindicatos ciertamente nuevo, donde el gobernador podrá, si no retomar la batuta, sí arbitrar conflictos regionales y eliminar retenciones laborales, tanto de los agremiados como de los afectados y las centrales nacionales. Los sucesos anteriores y los procesos electorales de 1988 y 1989 han impuesto su huella en el estado. A continuación, se ofrece una interpretación global del desarrollo político electoral del estado.

V. ELECCIONES EN TAMAULIPAS

Este apartado ofrece un panorama de la evolución electoral a partir de 1976. Dicha apreciación del proceso es aún transitoria y estará sujeta a la posibilidad de construir una serie completa de datos. La fuente de los datos es el Registro Nacional de Electores, mas el lector podrá apreciar que otros registros, como los informes municipales, los diarios de debates del Congreso local o los dictámenes públicos de la Comisión Estatal Electoral, difieren en las cifras y hasta en los candidatos triunfantes.²⁶ A esto se suman varios factores que dificultan un cálculo adecuado. Uno de ellos es la discontinuidad de las cifras, debido ya sea a que un partido no siempre presentó candidatos en un municipio o en un distrito; también a que entre una y otra elecciones algunos partidos cambiaron de nombre, se coaligaron o desaparecieron, y a que entre 1976 y 1990 han regido en el país y en el estado cuatro leyes electorales. Estos factores dificultan cualquier intento por ofrecer una apreciación global de la década, misma que ofrece alteraciones en casi cada uno de los eventos. En fin, consideramos fundamentalmente tres tipos de elecciones: para gobernador, para ayuntamientos y para Congreso local; y nos concentramos en un análisis de los procesos más recientes

²⁶ El caso más notorio es el del diputado parmista que obtuvo el distrito electoral federal de Nuevo Laredo en 1988. A pesar de que el triunfo correspondió al PRI, se le otorgó la credencial de mayoría al parmista sin descontar o anular los votos priistas en dicho distrito.

1988

Las elecciones de 1988 y, en general, las de toda la década preservaron el poder de los grupos corporativos que siguen sustentándose parcialmente en un cierto caudillismo electoral. En contraste con la debacle nacional y de varios estados del país, Tamaulipas reflejó un perfil electoral tradicional en las elecciones federales de 1988. La evasión superó el 56% del promedio nacional. Ahora que aun cuando el candidato priista ganó ampliamente con 59.33% (279 041 votos), el Frente Democrático Nacional logró una sorprendente votación de 30.15 % del electorado (141 793 votos), cuando ninguno de sus partidos coaligados la habían obtenido en el estado en ninguna elección. El PAN obtuvo 9.91% (46 589 votos); le siguió Gumersindo Magaña con 0.44% (2 050 votos) y Rosario Ibarra con 0.18% (836 votos), en una votación de 470 309 electores, de un padrón electoral de 1 120 265 personas.²⁷ En este contexto los resultados locales sí reflejaron la presencia de cambios ligados al FDN en 1988, y en conflicto con el PRI estatal.

Mientras que en Nuevo Laredo el PRI obtuvo 59.66% de los votos por Salinas, el PARM captó 20.85% en su favor, el PAN 13.8% y el resto de los partidos y los candidatos alcanzó 4% en conjunto. Reynosa y Matamoros tuvieron un comportamiento similar: otorgaron a los parmistas el segundo lugar en presencia regional. Respecto a Reynosa, oficialmente se reconoció el triunfo priista en una votación disputada por el candidato del FDN y fuertemente apoyada por el PARM.

Sobre la votación en las zonas petroleras, los candidatos priistas lograron mayoría relativa sin problemas —entre ellos se encuentran los actuales diputados desplazados del Comité Ejecutivo del sindicato. Salinas de Gortari ganó en la zona conurbada del sur así como en general en el estado, pero aun en este rincón de tradicional participación priista el voto oficial disminuyó a favor tanto de Cárdenas como de su coalición y, en menor medida, del PAN, que alcanzó un tímido asomo en algunas ciudades del estado.

Ciudad Madero dio la victoria a Salinas (45.65%) pero repartió entre la oposición buena cantidad de votos: PARM,

²⁷ Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública, *Elecciones de 1988 ¿qué pasó?*, México, Diana, 1988.

13.27%; PFCRN, 9.74% (prácticamente el único lugar donde tuvo presencia); PPS, 9.01%; PAN, 7.3; PMS, 1.75, y PRT, 0.37%. En este municipio el FDN alcanzó 33.97% de los votos.

Tampico y Ciudad Victoria siguieron el patrón de captación de mayorías priistas, seguidas por márgenes del PAN de 13 y 7%, respectivamente. En el resto de los municipios, los más rurales, ocurrió la tendencia cotidiana de votaciones mayoritariamente priistas. En San Fernando, el PRI captó 75.2% contra un 12.2 del PARM y 1.25% del PAN .

En referencia a las diputaciones federales de mayoría relativa, el PRI obtuvo 61.12% de los votos, con lo que triunfó en todos los distritos excepto en Nuevo Laredo. Aquí obtuvo el escaño Jesús González Bastián, parmista, quien logró llegar a la LIII Legislatura como resultado de un acuerdo de última hora en el Colegio Electoral, donde para que el PRI lograra la permanencia del PARM en la calificación de las elecciones presidenciales tuvo que ceder esta y otras posiciones en disputa.²⁸

El PARM logró captar todavía más electores en el norte: 19.29% en Reynosa; 24.85 en Matamoros; 26.13 en Río Bravo; 11.51 en San Fernando; en el sur obtuvo 18.33 en Mante, 8.8 en Madero, y 6.33% en la ciudad de Tampico. En el estado el PARM sumó cerca del 15%. Esto no es un fenómeno nuevo. Desde hace aproximadamente 15 años, durante la gubernatura de Cárdenas González, el PARM irrumpió en el escenario estatal por una histórica primera vez en el municipio de Matamoros, con un candidato de la misma familia, pero de distinta filiación partidaria: Jorge Cárdenas González. También se reforzaría la capacidad del PARM en Nuevo Laredo, en particular la de Cantú Rosas y sus seguidores para movilizar al electorado local a que votara en favor de su alternativa. Esto debe verse en un escenario donde el PARM utiliza los mismos recursos del PRI para manejar la votación, lo que ofrece a sus dirigentes posibilidades para que busquen su reacomodo y permanencia como partido estatal. Así, Matamoros de nueva cuenta ha dado en 1989 el triunfo a la candidatura parmista de Jorge Cárdenas González. Por su parte, el blanquiazul obtuvo el 8.87% del total de sufra-

²⁸ El pretexto utilizado para invalidar el triunfo del candidato priista consistió en demostrar que había nacido en Laredo, y éste más que defenderse fue obligado a ceder, aun cuando su corporación local impugnó el procedimiento.

gios, mientras que el PPS logró 4.4, el PFCRN 4.21 y el PMS 1.85%. El resto de los partidos no llegó ni a un dígito.

En fin, los candidatos priistas a diputados y senadores triunfaron con amplios márgenes frente a la oposición, a pesar de que previamente hubieran sido cuestionados en la preselección o, posteriormente, en el caso de los petroleros, se intentara su desafuero junto con el dirigente político que los apoyó.

Proceso electoral del 26 de noviembre de 1989

El proceso electoral del 26 de noviembre de 1989 cerró la década de elecciones municipales y del Congreso local. Es importante reseñar tal proceso para marcar el ritmo y probable camino del proceso político en el estado, para terminar luego con una apreciación global de las elecciones.

Ley Batres

Producto del interés por adecuar las leyes estatales a los cambios en las reformas municipales y en la legislación electoral, el gobierno del estado convocó, en noviembre de 1988, a un proceso de consultas para la renovación de la ley estatal electoral.

El proceso y la propuesta de ley serían cuestionados por la oposición a lo largo de las consultas, por lo que sería aprobada en un ambiente político en donde precisamente la oposición dentro del Congreso local la bautizaría como Ley Batres, en honor del entonces secretario general de gobierno del Estado, Heriberto Batres. No obstante sus cuestionamientos, la oposición sí intervino en la formulación de la ley, que vio la luz pública en marzo de 1989.

Esta ley se implantó en un nuevo contexto. Al terminar la disputa electoral y la crisis política de los partidos en 1988 y dar paso al nuevo gobierno de Salinas, sucedieron en el estado acontecimientos de orden nacional. Primero la conocida y espectacular aprehensión de Joaquín Hernández Galicia y varios de sus colaboradores, y luego, el rumor de desafuero de diputados y senadores de su grupo en la actual legislatura.

Por otra parte, se iniciaba para el estado y para el PRI un proceso electoral si no difícil, sí cuestionado tanto por organiza-

ciones partidarias como gremiales de orden local pero también federal. Las corporaciones obreras no se resignaban a la derrota electoral en Nuevo Laredo, por lo que particularmente Pérez Ibarra anunció que por ningún motivo permitiría el agravio contra sus protegidos políticos, exigiendo tanto el ayuntamiento como las diputaciones correspondientes a los distritos locales, y presionando a la CTM nacional para afianzar a sus candidatos. La CNOP se enfrentó a la campaña del dirigente sindical, quien abanderó la entonces popular crítica a los cacicazgos obreros. La CNOP hizo público que cerraría los espacios a Pérez Ibarra para evitar sus postulaciones al ayuntamiento. Pero la organización no fue capaz de controlar ni llevar adelante el proceso de selección interna dentro del PRI, dejando pendiente la pugna entre la CTM y la nueva dirigencia priista.²⁹

Ciudad Madero y Reynosa se encontrarían en peor situación a causa del encarcelamiento de dirigentes petroleros. En esos escenarios siguió un difícil e incierto proceso de renegociación y nombramiento de *quinistas* frente a una nueva oposición encauzada por el PRD en Ciudad Madero, surgida también del quinismo, en elecciones que serían autodenominadas por los candidatos como las del resentimiento.

El complicado proceso electoral en el sur se adornó con la forzada renovación del Comité Ejecutivo de la Sección Uno del SRTPRM, entre la planilla roja encabezada por Narciso Villaseñor, candidato quinista, y la Verde encabezada por Roberto Ávalos Juárez, apoyado por Guzmán Cabrera.³⁰ El proceso sería finalmente controlado por el nuevo grupo que hoy maneja el sindicato, pero retrasaría la selección del candidato priista al ayuntamiento.

Durante 1989 se perdieron en Tamaulipas cerca de 800 000 hectáreas de temporal por la sequía que siguió al huracán *Gilberto*, lo que la federación intentó mitigar anunciando apoyo amplio a los damnificados. Se organizaron giras, tanto de funcionarios federales como de Salinas de Gortari para inaugurar obras de gran magnitud en el sur (el muelle de doble estiba en Altamira) y en noviembre entregar titulaciones de tierras a colonos en Matamoros. Lo curioso es que las giras iban con dedicación tanto al campo como a la ciudad, pero en los itinerarios

²⁹ *El Diario*, 20 de julio de 1989.

³⁰ *La Jornada*, 10 de julio de 1989.

se apoyó fundamentalmente a las ciudades en donde se favorecía a la oposición.

Por otra parte, el proceso de reordenación priista provocado por las derrotas electorales y por el fantasma de la desintegración fue seguido de una propuesta de la nueva dirigencia del CEN para la designación de candidatos, desarrollo de campañas y seguimiento electoral, que intentó auscultar e involucrar a todas las instancias de ese partido bajo la consigna de “consulta a la base”. Complicaron este juego la intervención de distintas autoridades partidarias y de todos los niveles del gobierno, en medio de las cuales se ubican las diversas giras del presidente del CEN del PRI y de enviados especiales.

Desde principios de año y en virtud del inicio de la gestión salinista se habló en el estado de buscar nuevos mecanismos de selección de candidatos. Este proceso interno —juego entre el gobernador, la dirigencia del PRI estatal y las fuerzas políticas de diversas regiones— fue violentamente interrumpido por el *quinazo* así como por la intervención posterior de la federación en la selección de candidatos priistas.³¹ Siguió entonces un proceso selectivo mucho más complicado llevado a cabo por la dirigencia nacional del PRI, mediante la reordenación de los comités y la posterior realización de una especie de plebiscito que la administración anterior del partido había tratado de sacar adelante, a pesar de los esfuerzos de muchos grupos en el estado por desecharlo.

Inicialmente, se propuso que los priistas votaran en cada municipio para elegir un candidato entre varios prospectos. Este proceso pareció funcionar en la mayoría de los municipios en donde las corporaciones y otros grupos no estaban enfrentados, ni con la dirigencia nacional del partido ni con grupos locales importantes. Funcionó también entre los municipios tradicionalmente más priistas, tanto en el campo como en algunas ciudades tamaulipecas. Pero en localidades de mayor magnitud o con antecedentes conflictivos, como Nuevo Laredo, el proceso fue detenido durante el transcurso de la votación por los líderes sindicales, bajo el pretexto de que las autoridades del partido encargadas de realizar la consulta estaban haciendo fraude,

³¹ De hecho, se afirma entre los medios informativos en el estado que el gobernador y las fuerzas políticas locales se enteraron del *quinazo* hasta que ocurrió.

mientras otros precandidatos —de la CNOP— aseguraban ir a la delantera del mismo. El trasfondo de dicho proceso fue interpretado nacionalmente como la continuación de una pugna nacional por desplazar a los “cacicazgos” sindicales que en Nuevo Laredo, Ciudad Madero, Reynosa y hasta en Tampico, terminaron derrotando a los precandidatos “cenopistas” y, con ello, también a quienes los apoyaban.

Mientras se registraban las precandidaturas, se decidió sacar adelante una modalidad en la designación, consistente en combinar la selección interna de los sectores con la consulta directa, donde las fuerzas locales del partido decidirían cuál sería la combinación idónea. Para mayo, las listas de los distinguidos personajes locales fueron inicialmente negociadas entre el gobernador y el presidente del CEN del PRI.

El proceso de negociación resultaría tan inadecuado que al iniciar julio aún no se tenían integradas las planillas municipales ni muchas candidaturas para integrar la legislatura local. Aun cuando el PRI había prometido acelerar la selección, fue hasta agosto, en la fecha límite legal para registrar candidatos, que se integraron las listas definitivas, después de haber convocado a los priistas tamaulipecos al proceso de consulta.

Finalmente, se informó que en 37 municipios se realizaría la consulta con la base, y en seis más se harían convenciones: Ciudad Victoria, Ciudad Madero, Tampico, Matamoros, Reynosa y Ciudad Mante. Precisamente, se perdieron los tres últimos ayuntamientos. Durante el proceso de selección, abundaron las protestas de priistas por la imposición de candidatos en Xicoténcatl, Ciudad Victoria y Nuevo Laredo.³² Mientras, las autoridades depuraban el padrón electoral, que llegó a tener 1 315 981 electores en 19 distritos electorales y en 43 ayuntamientos.

Pero si el partido en el poder tuvo dificultades para sacar adelante su campaña, la oposición también se lució en problemas. Para empezar, fracasó el fantasma del 88 como posibilidad de formar coaliciones entre la oposición para derrotar al PRI. La que más se anunciaba, Reynosa, quedó finalmente en manos del PARM, sin necesidad de una alianza partidista.

El PAN celebró su convención estatal para elegir a su directiva en la entidad en mayo y se tardó en nombrar a sus candida-

³² *El Diario*, 15, 20 y 30 de agosto de 1989. Particularmente en Nuevo Laredo se intentó invalidar el autodestape de la CTM de principios de agosto.

tos para los municipios urbanos más importantes, así como para Jaumave y El Mante. Su candidato en Jaumave desertó y en Ciudad Victoria, Tampico y otros municipios sus candidatos obtuvieron poca aceptación, pero en Ciudad Mante saldría victorioso.

El PRD quedó también rezagado, producto de sus divisiones internas y de la separación del PARM. No pudo, entre otras cosas, capitalizar los conflictos de los petroleros, ni el descontento de la población en Matamoros y Nuevo Laredo, ni mucho menos captar una mejor aceptación en el campo.

Tanto el retraso priista en la selección de sus candidatos como los conflictos interpartidistas en el resto de las agrupaciones desembocaron y se expresaron, a partir de septiembre, en campañas tardías, cortas y reducidas a pocos ayuntamientos, excepto de los municipios urbanos importantes en el estado. Destacó en ese proceso la situación de deterioro del PRI frente a partidos políticos nacionales sin arraigo y a liderazgos y facciones políticas regionales desinteresadas por consolidar partidos.

La débil convocatoria de los partidos cerró con actos pseudo-espectaculares del PARM en Matamoros, pero sobre todo con una muy rápida gira del presidente nacional del PRI para cerrar las campañas de Matamoros, Ciudad Victoria y Ciudad Madero, que no pudo ocultar la inquietud de los candidatos priistas, ni en esos municipios ni mucho menos en el de Ciudad Mante, donde dos días antes de los comicios estalló una huelga en el ingenio.

No obstante que el PAN alegó en 1989 haber cubierto prácticamente 37 municipios en el estado, en algunos de ellos, como Jaumave, su candidato municipal desertó por supuestas amenazas priistas, dejando a sus seguidores y a su partido fuera de la jugada. El PRD, que se ufanaba de haber unificado al conjunto de las "auténticas" organizaciones de izquierda, precisamente las más abatidas en el estado, apenas pudo armar algunas candidaturas en los municipios urbanos más importantes del estado, después de superar problemas de organización, de administración y divisiones entre sus dirigentes.

El PARM, segunda fuerza electoral en el estado no obstante su menor presencia rural, dejó patente su deseo de no compartir ese bastión político que significan los municipios fronterizos, y se mostró también como una alternativa política al PRI estatal en varios de los municipios urbanos de Tamaulipas.

El electorado respondería con una participación cercana al 30% en Ciudad Victoria, a pesar del continuo alegato de los partidos en favor de sus planillas y en contra del abstencionismo. Para el 26 de noviembre, la oposición alegaba triunfos rotundos, mientras el PRI estatal ensayaba un discurso donde, si bien evitaba proclamarse total vencedor, anunciaba ventajas “claras” e “inobjetable” en todos los municipios y posiciones del Congreso. Más tarde, frente a las notorias ventajas públicas de la oposición en Ciudad Mante y Matamoros, el dirigente del PRI estatal afirmó que su partido mantendría sus reservas sobre esos municipios, mismas que la oposición terminó por desarmar.

El PAN conoció su victoria en Ciudad Mante al atardecer del domingo electoral, que fue anunciada a la prensa y a las instancias electorales del país por observadores de su partido e incluso por fuentes oficiales. No pudo, en cambio, ocultar su zozobra por la notable falta de convocatoria de su candidato en la capital. Con relación al resto del proceso, la dirigencia estatal se circunscribió, más que a explicar sus derrotas, a denunciar las diversas irregularidades cometidas a la nueva ley por diversos actores involucrados en el proceso. El PARM, sin titubeos, declaró desde el día 26, sus victorias en Matamoros y Reynosa, y esperó hasta el cómputo final para negociar sus escaños en el Congreso y su cuotas de regidurías.

El PRD, en cambio, sufrió las consecuencias de su división interna, donde dos facciones declararon, cada una con distinta información y enfoque, triunfos propios como tales y también victorias ajenas como propias. En Ciudad Madero amenazaron con la movilización y hasta con huelgas de hambre para preservar sus victorias, pero no pudieron sostener sus argumentos. Aún así, la votación expresó el rostro de una lucha casa por casa, entre petroleros priistas que pugnaban por un camino contestatario al quinazo, abanderados por el PRD, y otros, del mismo gremio, que se decidieron por una transición negociada con el centro nacional y supuestamente apoyada por la dirigencia nacional del PRI, en un contexto donde ni el gobernador ni el PRI estatal tuvieron oportunidad de participar.

Para el 11 de diciembre de 1989 se dieron a conocer los resultados de los comicios. El PRI se llevó 40 de los 43 municipios. Integrarían el Congreso del estado 20 diputados priistas, tres parmistas, un panista, un perredista y uno del PFCRN, partido que lograría la menor presencia electoral en el evento. Además,

se asignaron 36 regidurías de representación proporcional.³³ El PAN obtuvo una diputación proporcional y dos regidurías, una en Valle Hermoso y otra en Tampico. El PRI logró dos regidurías en Reynosa, dos en Matamoros y una en Ciudad Mante. El cómputo final fue de 367 800 votos, el 27.8% del electorado.

El PARM consiguió dos diputaciones de representación proporcional y 14 regidurías.³⁴ El PFCRN logró una diputación plurinominal y cinco regidurías; el PRD alcanzó 10 regidurías.³⁵ A raíz de los resultados publicados por la Comisión Estatal Electoral, ningún partido apeló, como en otros lugares y tiempos, al operativo poselectoral.

Revisión de la década

En la gráfica 1 se aprecia la evolución electoral municipal. Destaca, en general, la tendencia decreciente de la participación. Al margen de que el padrón electoral deberá corregirse de acuerdo con la tasa de crecimiento poblacional, la participación ha sido cada vez menor en un padrón creciente, lo que refleja, por encima de los demás partidos, la disminución del PRI en la captación de votos, empezando en 1980 con 77.25 % y logrando en 1989 58.96 % del electorado.

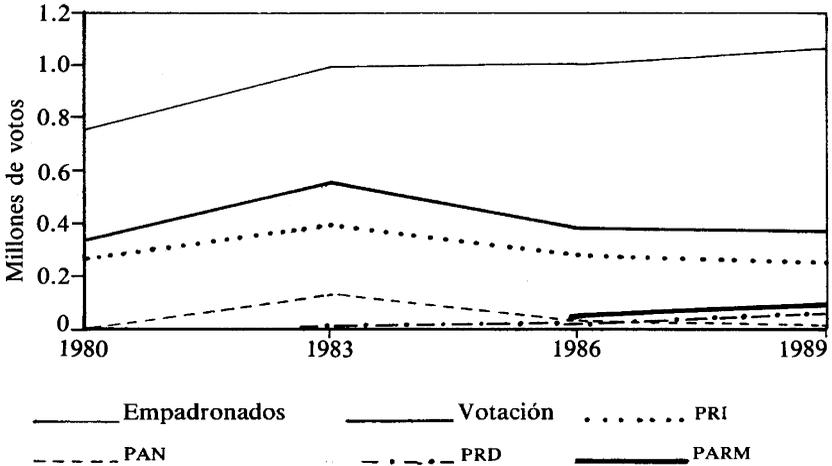
Por lo que se refiere al Congreso estatal, el único distrito en el decenio que el PRI ha perdido en dos ocasiones (1980 y 1989) es el de Matamoros. Primero se le numeró como el 7, luego como el 18, que comprende la mancha urbana del municipio; pero no ha perdido el que abarca la zona rural. Además, los resultados de ese mismo distrito fueron anulados en 1986. La competencia electoral ha sido constante en las ciudades de Reynosa, Nuevo Laredo y Matamoros, principalmente entre PRI y PARM, pero en algunas ocasiones PRI-PAN, particularmente en 1983. En aquellas ocasiones en que la oposición ha presentado candidatos en esos distritos, los resultados se han dividido entre 55-45%. Los otros partidos han tenido una presencia mucho

³³ *La Jornada*, 11 de diciembre de 1989.

³⁴ En Nuevo Laredo, San Carlos, Méndez, Mier, Miguel Alemán, Padilla, Tampico, Altamira, Casas, Guerrero, Díaz Ordaz, Jaumave y Jiménez.

³⁵ En los municipios de Villa González, Ciudad Madero, Reynosa, San Fernando, Tampico, Villagrán, Río Bravo, Nuevo Morelos, Ciudad Victoria, Abasolo, Aldama, Gómez Farías, Mainero y Ocampo.

GRÁFICA 1
Tamaulipas. Elecciones municipales, 1980-1989



Nota: en el caso del PRD se contabilizaron como antecedentes la votación del PMS, PSUM y PMT, en esta gráfica y en las siguientes.

Fuente: Comisión Federal Electoral.

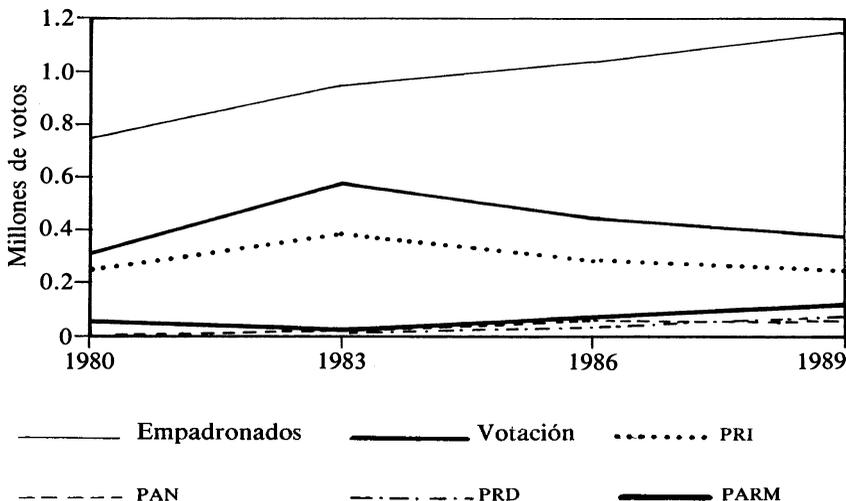
más limitada y discontinua. Por ejemplo, el PRD logró en Ciudad Madero 39.49% de la votación contra 44.06% del PRI. Asimismo, en Ciudad Bravo ganó el 29.6%, pero en Reynosa apenas logró el 10%, al igual que en Tampico.

Además de registrar una pérdida absoluta en votos, el PRI ha visto disminuir sus porcentajes de captación desde 1986. Lejos están los tiempos en que lograba que la unanimidad de los electores en algunos municipios votaran por sus candidatos. Mientras que en 1980 captó el 100% de los votos en 17 municipios, en 1983 sólo logró ocho en las mismas circunstancias, y ninguno en 1989. A esto se agrega que 1980 fue tal vez la última ocasión en que se registró una votación mayor o igual al padrón en 17 municipios rurales, donde destacaron Guerrero con 144% del padrón y Soto la Marina con 132 por ciento.

Aun así, en 1989 el PRI obtuvo más de 90% de los votos en 13 municipios y seis de ellos con más de 96%. En otros seis municipios captó entre 80 y 89% y en 11 más captó entre 69 y 79%.

GRÁFICA 2

Tamaulipas. Elecciones para el Congreso del estado, 1980-1989



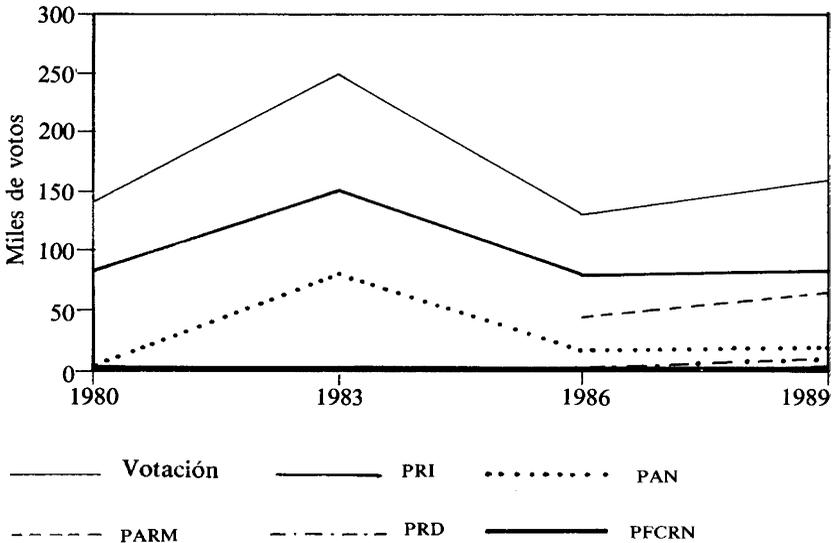
Fuente: Comisión Federal Electoral.

En los municipios restantes existió al menos un candidato de la oposición que obtuvo votos; allí se ubican a las principales ciudades del estado y es allí donde también se registran victorias de la oposición desde 1976.

El PARM abrió la década de ayuntamientos de oposición, ganándole al PRI con 53.96% de la votación en Matamoros. Ese año (1980) también estuvo cerca del PRI en Reynosa, al obtener 37.4% de los votos contra 58.6% del PRI; en Nuevo Laredo obtuvo 43.81% contra 52.8% del PRI; en G. Díaz Ordaz logró 46.43 contra 53.32% del PRI. Y en Valle Hermoso juntó también al 31% de los votantes contra 68% del PRI.

En 1983 las cosas fueron más sencillas debido a que el PARM no participó oficialmente en las elecciones y el PRI se volvió a llevar todo. Sin embargo, el PAN apareció con mayor fuerza frente al PRI. Particularmente en Matamoros logró 36.45% de los votos contra 60.1% del PRI; en Nuevo Laredo ganó 34.44 contra 42.15% del PRI, teniendo en cuenta que se anuló 21.9%

GRÁFICA3
Tamaulipas. Elecciones municipales, 1980-1989. Zona norte



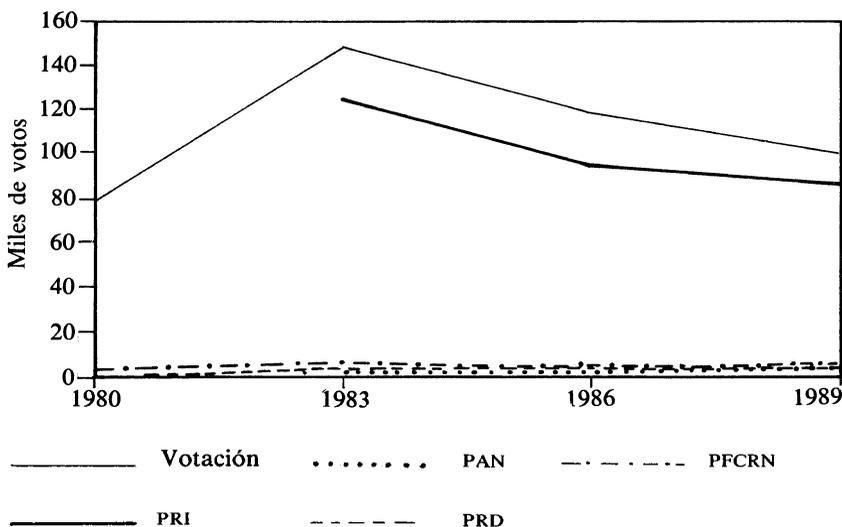
Fuente: Comisión Federal Electoral.

de la votación; en Reynosa logró 33.13 contra 62.37% del PRI; en Río Bravo ganó 31.65 contra 52.34% del PRI, anulándose 14.27% de la votación; y en Valle Hermoso captó 37 contra 45.1% del PRI, resultando anulado 17% de la votación.

En 1983, el PST en los municipios de Abasolo obtuvo 28.25 contra 71.75% del PRI, y en Soto la Marina, donde logró 33.48 contra 65.01% de los votos a favor del PRI. El PDM apareció ese año en San Fernando, obteniendo su candidato 33.48 contra 54.09% del PRI, donde se anuló 25% de la votación.

En 1986 el PARM volvió a la contienda y se llevó, primero, Reynosa. En Nuevo Laredo perdió con 45.7% de los votos, cuando el PRI se llevó el 48.7%. Sin embargo, en esa ocasión el PRI no tenía todas las de ganar, puesto que entre el PARM y el PAN se llevaron 49.92% de los votos y en Altamira el PARM obtuvo 24% de los votos, aun cuando el PRI ganó con 69.7 por ciento.

GRÁFICA 4
Tamaulipas. Elecciones municipales, 1980-1989. Zona centro

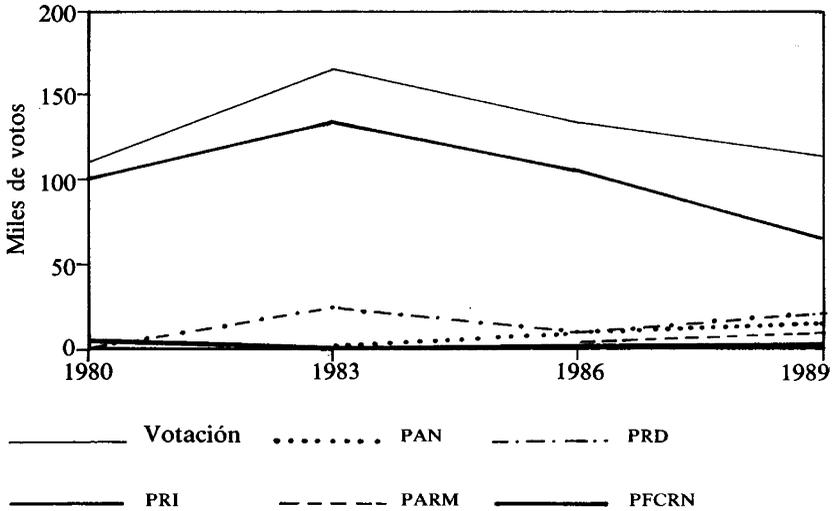


Fuente: Comisión Federal Electoral.

En 1986 el PAN obtuvo también una mejor presencia en Valle Hermoso, al obtener 30.4% contra 67.9% del PRI. Lo interesante del proceso electoral en ese año consistió también en que el descontento y ciertos conflictos políticos dentro del PRI en el campo se reflejaron en importantes proporciones de votos anulados. Así, en Burgos, candidatos no registrados obtuvieron 43.9% de los votos; en Casas se anuló 29.9% de la votación; en Llera 21.4; y en San Fernando 27.9. Tanto en González como en Ocampo, la suma de votos por candidatos no registrados, como los anulados, llegó a 49 y a 49.5%, respectivamente.

Vale ahora destacar las diferencias entre el campo y la ciudad (gráficas 6 y 7). Es aquí donde se muestra el enorme peso que el campo representa para integrar un estado priista; peso que, sin embargo, no está por completo decidido en su favor, ya que recientemente en El Mante se ha manifestado la posibilidad de que candidatos priistas repudiados sean derrotados bajo alguna bandera opositora. Esto hace necesario atender la forma

GRÁFICA 5
Tamaulipas. Elecciones municipales, 1980-1989. Zona sur



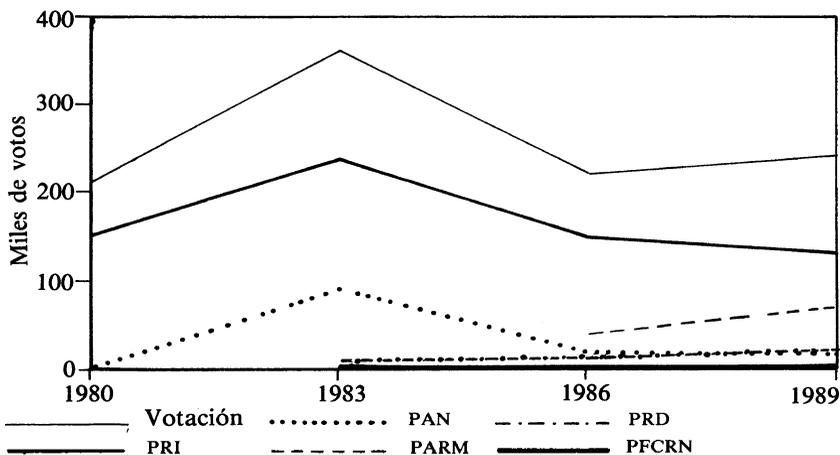
Fuente: Comisión Federal Electoral.

en que las transformaciones en el campo, las llamadas conurbaciones rurales y el cambio en las estrategias económicas están afectando las formas en que la población rural acostumbraba expresarse.

Las ciudades, en cambio, reflejan una tendencia discontinua pero más consistente en apoyar más opciones partidistas. En el norte del estado ha cristalizado una opción política dentro de las élites locales que les permite gobernar la región en favor, en contra o a pesar de las decisiones priistas nacionales. Cabe señalar también que es en esa zona donde el electorado ha llegado a expresarse con mayor fuerza en contra de las opciones del sistema priista local, pero mediante candidaturas fugaces, carismáticas y sin una mayor organización con relación a un programa o un aparato político. De aquí la debilidad de la estructura partidista.

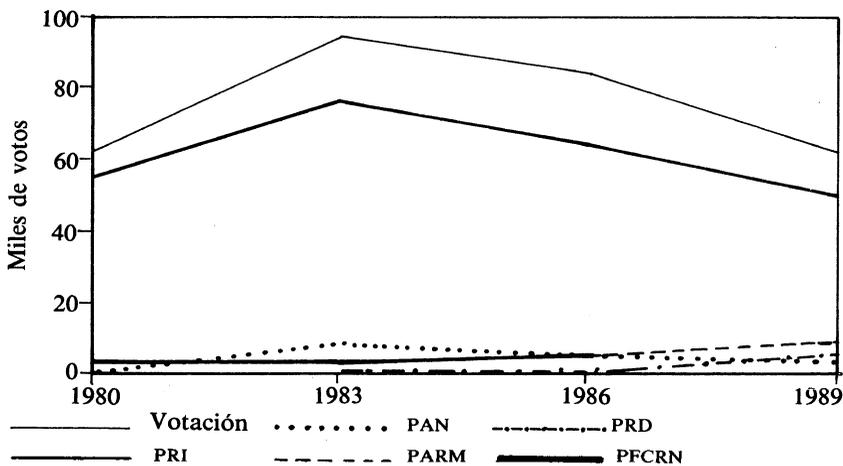
La votación para gobernador constata la presencia de organismos políticos partidarios en el estado sólo a partir de 1980.

GRÁFICA 6
Tamaulipas. Elecciones municipales, 1980-1989. Municipios urbanos



Fuente: Comisión Federal Electoral.

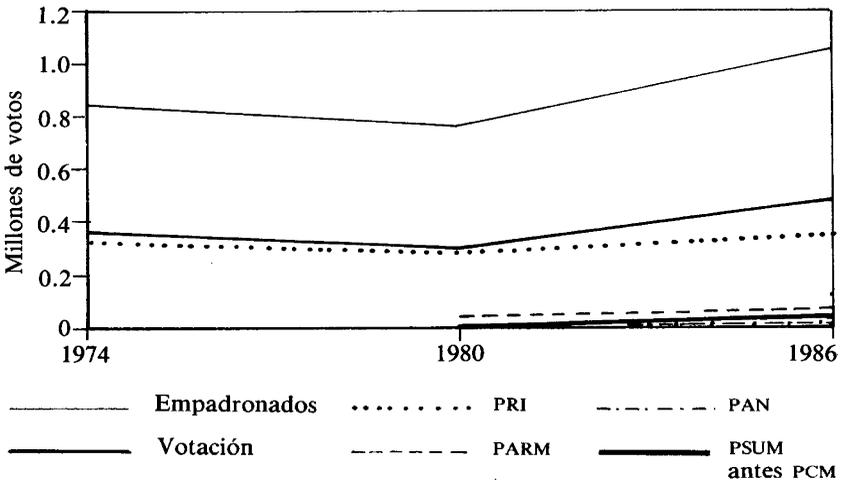
GRÁFICA 7
Tamaulipas. Elecciones municipales, 1980-1989. Municipios rurales



Fuente: Comisión Federal Electoral.

Lo que vale destacar es precisamente que la existencia de la oposición ha logrado abrir un espacio en la votación; mientras el PRI se llevó 93.86% en 1980, en 1986 sólo captó 72.75. Aun cuando la presencia de otras opciones políticas no ha logrado revertir el crecimiento del abstencionismo en todas las votaciones del estado, por lo que se refiere a las de gobernador sí se logró aumentar la participación entre 1980 y 1986, de 37.34 del padrón a 44.85% (gráfica 8). La corrección necesaria al padrón electoral, de acuerdo con los resultados del censo de 1990, podrían llegar a mostrar un panorama más optimista sobre la participación; no obstante, también invita a una corrección de lo que se ha estimado como la votación.

GRÁFICA 8
Tamaulipas. Elecciones para gobernador, 1974-1986



Fuente: Comisión Federal Electoral.

El partido que destacó con mayores logros durante el periodo fue sin duda el PARM. Comenzó encabezando un aislado asomo de rebelión electoral en Matamoros para convertirse en vehículo de expresión del descontento y de la indisciplina priistas en Nuevo Laredo y Reynosa. Sus logros permiten pensar en un doble proceso de consolidación; por un lado, el de la ma-

quinaria parmista en la entidad, donde tal vez tendrá la base electoral que le permita permanecer como partido nacional. En segundo lugar, el de una masa de electores que ha continuado expresando su apoyo al PARM por distintos motivos: simpatía por una personalidad local, protesta contra otros candidatos priistas o una preferencia regional con perfiles aún no definidos.

El PAN ha tenido una trayectoria más bien errática. Destaca frente a su electorado permanente una maquinaria de organización cambiante, al tiempo que sus candidatos han resultado ser más coyunturales, personas que se han insertado en su oportunidad para hacer uso de la maquinaria partidista, antes que sujetos de un órgano con tareas cotidianas en la entidad. Asimismo, su electorado ha seguido las modas, las corrientes electorales en forma más bien marginal.

Por lo que se refiere al PFCRN y al resto de los partidos, si bien han tenido una presencia constante, ésta se ha situado exclusivamente en algunos distritos y localidades en donde surgen conflictos entre priistas o existe un apoyo externo a la maquinaria del partido, como ha sido el caso de su presencia en el sur petrolero del estado. La desaparición de estos apoyos llama a pensar en un partido sumamente deflactado, al igual que ha sucedido con el PRT o el PDM. Son así tres las opciones políticas de continuidad.

EPÍLOGO

El efecto de más largo alcance en la estructura de poder de Tamaulipas será la permanencia de su perfil multipolar, pero en una situación que podría producir un mayor desequilibrio o una quiebra de la tradición priista. El petrolero era el único grupo regional con ramificaciones en el estado, lo mismo en la frontera que en el centro, en municipios urbanos y zonas rurales. Esa hegemonía se fracturó y será difícil su rehabilitación en las dimensiones que alcanzó antes de 1989. Acaso, los petroleros del sur lograrán restituirse como grupo local centrado exclusivamente en Tampico-Madero.

El desmantelamiento de la estructura regional de poder que giraba en torno a Joaquín Hernández Galicia ha tenido efectos en el estado. En el panorama electoral, sin embargo, lo que podría haberse convertido en un ascenso de los partidos de izquier-

da en las áreas petroleras no ha resultado tan firme y sólo se circunscribió al municipio de Madero, sin afectar al conjunto de los municipios conurbados. Es previsible que este ascenso no pondrá en riesgo la hegemonía priista, en virtud de que el control de las secciones está regresando a los petroleros que habían mantenido relaciones con "La Quina" e incluso con sus opositores dentro del mismo esquema priista. Por ejemplo, en Reynosa, Ernesto Cerda Ramírez tendrá nuevamente el control seccional y será una garantía de alianza para el PRI. En Ciudad Madero, Benito Santamaría se encargará del ayuntamiento bajo la bandera del PRI. De cualquier manera el conflicto es interno, entre las élites y las corporaciones priistas en el estado, que están sometidas a una tónica democratizante. Los dirigentes de la CTM regionales enfrentan una situación similar, aun cuando su poderío es más reducido y la oposición contra ellos es múltiple, sustancial y en algunos casos generalizada.

La formación política del estado se asocia a una cultura obrera imbricada con el corporativismo del Estado mexicano. Al caer las dirigencias "caciquiles" o "tradicionales" se provocó un vacío de poder en un escenario donde parte de los liderazgos, sindicales y políticos, poseen las mismas características culturales. Permanece así un conjunto de actitudes, no sólo de personas, que se crearon durante más de cincuenta años de lucha sindical y de prácticas políticas electorales, que consolidaron una cierta forma de articulación entre la comunidad local y el sistema de poder nacional. Ante las propuestas de cambio de diversos sectores oficiales, así como de la oposición, permanece el empuje de una cultura del poder cuyos enlaces fueron cerrados y que ahora se busca restablecer con la intervención anticaciquil del Estado nacional. Nuevamente, los gremios obreros, encabezados por las mismas secciones del sindicato petrolero, los alijadores, la CTM y hasta por la débil CNOP estatal, enfrentan la tarea de reencontrarse con la sociedad local, buscar nuevos enlaces, seleccionar nuevos líderes, convocar a elecciones y, en general, apoyar al sistema en un ambiente nacional que pugna por su disolución.

Cabe ahora preguntarse sobre la probabilidad de retorno a un sistema estatal sólido e integrado, ya sea centrado en un modelo de movilización corporativo y unipartidista, como el que surgió en los años veinte con el portesgilismo, o incluso en otro, de pluralismo, alternancia o desaparición del PRI. En este con-

texto, el gobernador ha intentado ejercer su autoridad en todo Tamaulipas con resultados que aún están por resolverse. En la medida en que se inmiscuyó con grupos de colonos, con ayuntamientos, partidos o con sindicatos ligados a los liderazgos en cuestión, su personalidad fue inmediatamente cuestionada por esos mismos dirigentes, incluso por confederaciones nacionales, por las distintas instancias del poder federal y por grupos empresariales, quienes presionaron contra la lentitud de su acción.

La oportunidad para que la tutela del poder retorne al ejecutivo estatal dependerá de la sobrevivencia de dos pautas políticas: la cultura de poder local y la transformación del sistema de partido dominante, donde hoy, especialmente la federación bajo la bandera de la Solidaridad y el CEN priista, han incrementado su intervencionismo en la entidad, atizando la rivalidad entre el gobierno y las fuerzas locales. Aún así, revitalizar al ejecutivo del estado podría realizarse mediante dos mecanismos: la reforma electoral y una reforma interna al PRI estatal. Ambas podrían hacer que recobrara cierta capacidad política, aun cuando desde la federación y del CEN del PRI se busque acotar su autonomía.

La revitalización de la CNOP se antoja inútil para mantener el dominio priista; quedaría entonces renovar los liderazgos obreros o reordenar el sector rural, alternativas más viables para el gobernador.

Respecto al panorama de los partidos en la entidad, los nacionales enfrentarán el reto de convertirse en una alternativa electoral y de gobierno; ofrecer una alternativa al clientelismo urbano, al del campo y al control corporativo que aún permanece en manos de líderes sindicales amenazados hoy con su desaparición. Enfrentarán un electorado encapsulado por la estructura regional, donde ni los sectores medios ni los empresariales han surgido como grupos de presión política alternativa.

La visión que presentamos del PAN durante la década permite dudar de la probabilidad de que el descontento urbano de los sectores medios y de algunas zonas rurales, al identificarse con los esfuerzos por fortalecer una asociación empresarial estilo regiomontano, puedan orientarse o canalizarse por esa vía como otra alternativa electoral, o de que, al desaparecer las estructuras de control personal del "caciquismo obrero", otras orientaciones políticas puedan consolidarse sin ese patrocinio financiero.

En el caso de la izquierda es también patente su circunscripción regional, tanto en el norte, donde tiene menor presencia política, como en el país, exceptuando aquellas organizaciones más cercanas al sistema del partido dominante, que se circunscriben a favorecer y transportar las manifestaciones de las oligarquías en disputa por el poder local; en ellos no se manifiesta con tal fuerza la tendencia centralizadora, salvo por la permanencia de ciertos liderazgos y actitudes políticas nacionales, que es la tendencia del PARM.

El PRD enfrentará el reto de reconciliar a sus escasos militantes y de consolidar sus localizados pero crecidos votos en el estado. Deberá superar la división que surgió durante la campaña electoral de 1989 entre su dirigencia estatal, al mando de Elpidio Tovar, y las candidaturas municipales que no consintieron las banderas y tácticas propuestas por el centro nacional del partido. Esa división se acompañó también de una desarticulación entre candidatos, por lo que los representantes del PRD no pudieron cumplir sus promesas de triunfo ni mucho menos su defensa.

Adicionalmente, las agrupaciones de oposición enfrentarán un problema interno y a la vez propio de la pirámide social, política y demográfica del estado, que se refleja en la dificultad para integrar sus cuadros políticos. Con excepción del PRI y de aquellas secciones del PARM controladas por dirigentes de centrales obreras, los partidos infructuosamente han intentado reclutar y mantener entre sus filas a un conglomerado mínimo de jóvenes (no como los añejos cacicazgos) que se interesen en abanderar sus ideas. Frente a la organización y al reclutamiento del PRI, no han podido lograr una sólida militancia, ni acceder al poder público. Los liderazgos caudillistas son el principal obstáculo, pues arrasan no sólo con los votos, sino con las maquinarias y burocracias partidarias locales. Así, los partidos de oposición encuentran una dificultad particular en establecer una estructura burocrática y territorial en el estado, que se refleja también en su incapacidad para cubrir todas las posiciones en competencia política. Todos comparten con el PRI un problema consistente en el reto para reclutar a nuevos y jóvenes sujetos políticos, y convocar a un electorado que se ha expresado por sí mismo y aun contra los partidos, rebasando sus alternativas.

Para fortalecer al PRI, la federación está promoviendo una reforma a su organismo, con la que intentará captar esos nuevos

liderazgos locales, lo que hace pensar en una suerte de confrontación entre la estructura de la representación gremial del partido en el estado y los comités de distrito y sección, que son el objetivo a reforzar por la reforma. Enfrentará una situación inédita en las elecciones congresionales de 1991 y en la próxima sucesión del gobernador. La lucha política dependerá, en gran parte, de la fuerza y posibilidades de transformar la tradición política local y de la efectividad del nuevo discurso para convocar a una población sumergida en esa cultura corporativa, pero expectante de una alternativa electoral.

La situación política reseñada refleja el desarrollo de una conflictiva que emerge tanto de la quiebra de una alianza histórica y de tensiones en el funcionamiento de las instancias mediadoras, como de los gobernadores, de los partidos y de otras agrupaciones no representativas o electivas.

Valdría preguntarse, finalmente, si en el futuro instituciones como los ejecutivos estatales y los partidos políticos en el norte podrán consolidar su autoridad y su electorado, para ejercer el poder y realizar demandas locales en un esquema de alternancia estable. Asociada con esta problemática, nos preguntamos sobre la posibilidad de encontrar una solución local a la tensión entre la forma de representación ciudadana y la corporativa.

La tendencia de conjunto de los eventos electorales mostraría un escenario fundamentalmente priista en Tamaulipas. Sin embargo, no implica que no sean posibles, ni de esperarse, cambios en las tendencias observadas. Para ilustrar sólo una, vale imaginarse un escenario que combine los elementos descritos, caudillismo, regionalismo y una cultura que combine elementos de tradicionalidad con modernidad, en un candidato opositor ya no a un ayuntamiento, sino para la gubernatura, y contendiente de un priista con rasgos más o menos similares, si en la próxima sucesión el PRI llegara a encontrar una persona con tal perfil. En tales circunstancias podría resultar decisiva la votación de las siete ciudades más importantes del estado, en donde existen experiencias políticas que permiten prever la permanencia de un electorado no priista. A esta situación podrían agregársele otros factores, como los recientes cambios en los liderazgos sindicales, donde los agremiados aún no han dicho la última palabra; la posibilidad de que surjan nuevas escisiones dentro del PRI estatal, a pesar de que la legislación y el actual gobierno estén en su contra, y la posibilidad de que el candidato opositor

genere una coalición entre el PARM, el PAN y hasta el PFCRN en el estado. La suma de esas fuerzas no será decisiva en el estado, pero sí lo será en las ciudades mencionadas, lo cual hablaría, en el caso de que ganara el PRI, de un gobernador priista que iniciará su periodo con ayuntamientos de oposición en esas ciudades y, por encima de esto, con un congreso estatal poco adicto a su partido. Éste es, claro, un ejercicio imaginario donde el PRI no estaría en las mejores condiciones de competir, lo cual nunca se ha dado en Tamaulipas.

En dicho escenario, el desarrollo político próximo, más que una integración, puede producir una mayor heteronomía regional. Las alternativas territoriales a la modificación del partido oficial llaman a una recomposición de los sectores, así como también a una suerte de “desconcentración política”. La cuestión aquí consiste en fortalecer a las agrupaciones estatales y reordenar las reglas del juego entre las élites del estado y la federación, donde los gobernadores, las centrales y también los partidos, adquirirían nueva capacidad intermediaria, lo que obligará a buscar nuevos controles entre los adictos al régimen y sus opositores.

En todo caso, el desenvolvimiento de la política regional potenciará el papel de los gobernadores y de otras élites que intenten cubrir esa función integradora y recobrar mayor autonomía, acompañadas de mecanismos de control que permitan —en casos de conflicto local o con el centro— disminuir las tensiones nacionales en el sistema, al tiempo que los grupos en competencia local adquieran mayor fuerza para dirimir sus asuntos.

CHIHUAHUA: DE LA EUFORIA A LA INDIFERENCIA

ALBERTO AZIZ NASSIF

*Centro de Investigaciones y Estudios Superiores
en Antropología Social
Instituto de Investigaciones Sociales
Universidad Nacional Autónoma de México*

Frente a la solidez acumulativa del pasado —soporte de memoria y de experiencia— y el poder esperanzador del futuro —de lo imposible, benéfico final de trayecto del desgarramiento colectivo— el presente no merece más honores que la indignidad y la inquietud. La indignidad de lo que es fundamentalmente incompleto, de lo que no tiene otra fuente de legitimidad que lo que fue —la tradición— o lo que no será nunca —la utopía.

JOSEPH RAMONEDA

I. EL ESCAPARATE SIMBÓLICO

La década de los ochenta ha sido considerada, por los economistas, como perdida. En el proyecto-invitación de este libro se afirma que los años ochenta en México se han caracterizado por una crisis económica y por una oposición al sistema político. En la frontera norte estas dos dimensiones tuvieron un comportamiento particular. En Chihuahua estos diez años no fueron perdidos del todo, pues trajeron la economía del ensamble maquilador como factor de equilibrio ante la crisis y a la democracia electoral como aspiración civil de una nueva forma de relación entre el gobierno y la sociedad.

Hacer un balance de la década permite tener una visión de conjunto de los ejes que estructuraron el caso Chihuahua desde el punto de vista político-electoral. Después de hacer un seguimiento de cada coyuntura electoral en particular (1983, 1985, 1986, 1988 y 1989), estamos ahora en posibilidad de hacer planteamientos de conjunto sobre lo que pasó en diez años en ese estado norteño. Con este acento se puede decir que este ensayo está más cerca de una historia del pasado inmediato que de un análisis de coyuntura.

Chihuahua fue en los años ochenta un paradigma en la lucha por la ampliación democrática en México. En este tiempo, se crearon diversas expresiones y formas de identidad que hablaban de una protesta civil en contra del gobierno local y central y del partido oficial. Las ecuaciones ideológicas que responsabilizaron al gobierno y al PRI de la crisis fueron un gran discurso social que amalgamó el fenómeno de una amplia convergencia social, y que tuvo su punto más álgido de protesta en el verano de 1986.

Esta coyuntura fue un escaparate simbólico que sintetizó el encono regional en contra de la crisis y dibujó un esbozo de lo que podía llegar a ser un espacio democrático. Incluso se puede afirmar que a partir de las experiencias electorales en el norte se creó una nueva identidad entre democracia y regionalismo.

Durante cinco procesos electorales (1982, 1983, 1985, 1986 y 1988) los chihuahuenses se toparon de frente con un sistema monolítico y premoderno. Las urnas estaban minadas por el partido oficial y el sistema de control dificultaba al extremo la competencia. Las elecciones en Chihuahua llegaron a formar un ciclo de alta participación; el proceso electoral de 1989 fue el final de ese ciclo, cuando los ciudadanos norteños decidieron no participar y las urnas se quedaron vacías.

Después de las elecciones chihuahuenses de 1986 el panorama político del país se ensombreció y llegamos a entender que la política tendría que pasar necesariamente por el pesimismo como punto de partida. En aquel momento llegamos a la siguiente conclusión: "El remolino de la crisis y la proximidad de la sucesión presidencial nos expresan una complicada perspectiva para el núcleo gobernante. Se cierran los espacios electorales hasta la intolerancia; se reafirman las políticas antipopulares hasta causar un alejamiento con las bases tradicionales del apoyo del Estado; y la ciudadanía aguanta, pues finalmente en este

país nunca pasa nada.”¹ Hoy, algunos años después, podemos reconocer que esta perspectiva no fue completamente cierta, porque en este país todavía pasan algunas cosas; además, porque la política está llena de formas sorprendidas, de múltiples tonalidades que difícilmente se pueden encerrar en los marcos de una foto fija en blanco y negro.

II. UNA HISTORIA CONFLICTIVA Y UNA DÉCADA DE CAMBIOS

El registro histórico de Chihuahua se encuentra plagado de episodios de confrontación. Al inicio del siglo el movimiento revolucionario tuvo un eslabón básico aquí. Ahora, próximo al fin del siglo, el protagonismo político de búsqueda democrática vuelve a tener un capítulo importante en el estado. Antes de la década de los ochenta, en los años del desarrollo estabilizador, Chihuahua fue escenario de diversos conflictos sociales y políticos, mismos que propiciaron un escenario de confrontación casi constante. En los años cincuenta se viven dos casos importantes: la salida forzada del gobernador Soto Maynes en 1955, y las elecciones del 1956, las cuales son las primeras batallas electorales entre el PRI y el PAN. Posteriormente, a mediados de los años sesenta, se da el conflicto de la guerrilla con el asalto al cuartel de Madera. En la década siguiente surge un importante movimiento social, en donde se logra la convergencia de sindicatos, colonos y estudiantes. En los años ochenta el conflicto se traslada a las urnas y al movimiento campesino del noroeste.

La dinámica política de Chihuahua se ha dado con relativa independencia del resto del país; vivió y procesó la crisis de una forma particular. Cuando el resto del país se hundía en el desastre económico de 1982, los chihuahuenses afirmaban no estar en crisis; en 1986 Chihuahua vivió una crisis política importante, aunque también es real que la experiencia quedó registrada en la conciencia nacional; el 6 de julio de 1988 la mayoría del país se encontró en el remolino de las elecciones y los chihuahuenses permanecieron al margen. En 1989, cuando Michoacán y Baja California protagonizaron la disputa electoral en contra del partido oficial, los chihuahuenses estuvieron ausentes del escenario.

¹ Alberto Aziz Nassif, *Prácticas electorales y democracia en Chihuahua*, México, Cuadernos de La Casa Chata, núm. 151, 1987.

La década de los ochenta significa un cambio económico y social importante. El impulso de la economía maquiladora y la llegada de otras grandes industrias (Ford, Bimbo, etc.), le cambian a Chihuahua el perfil de estado productor de bienes primarios. El *boom* maquilador impulsa la creación del empleo de forma significativa: entre 1984 y 1988 el empleo en general creció en 75%; en esos cuatro años el crecimiento del empleo industrial fue de 100%, del cual 75 corresponde a las maquiladoras. El 35% del empleo del estado, para finales de 1988, corresponde a esta nueva forma de inserción al mercado internacional.² Otros indicadores nos muestran cómo la maquiladora en Chihuahua representa 40% del ingreso anual por este ramo en el país. En 1987 la economía del ensamble maquilador generó 620 millones de pesos y se ubicó en 260 plantas ditribuidas en el estado.

Los principales grupos económicos del estado —los Vallina en la capital y el grupo Bermúdez en Ciudad Juárez— se volvieron los principales promotores de este tipo de economía. Desafortunadamente, el grado de integración de las maquiladoras con las industrias local y nacional ha sido mínimo. Los promotores se han dedicado a instalar parques industriales y a rentarlos a empresas extranjeras.

Aunque lo maquilador es uno de los rasgos más llamativos y curiosamente menos comprendidos, no es más que uno de los tantos cambios que se dan en ese estado. Simultáneamente se pueden registrar también:

una irrupción de la nueva mayoría de capas medias urbanas que reaccionan ante las amenazas a su consumismo y que ahora se logran constituir en uno de los sectores sociales más dinámicos, rebasando el típico caceroismo de estos grupos; nuevas formas de comunicación y de información que llegan no sólo con la televisión nacional, sino principalmente las nuevas tecnologías que significan las antenas parabólicas; sectores empresariales que piensan en aumentar la exportación de mercancías como una vía natural a su situación geográfica, que dependen más de los ciclos económicos norteamericanos que de la política económica que se determina en el centro del país; una iglesia católica que en su jerarquía no sólo enfrenta a la proliferación de sectas protestantes, sino que

² Datos de *Indicadores económicos del estado de Chihuahua*, Desarrollo Económico de Chihuahua, A.C., marzo de 1989.

pugna abiertamente por un modelo de democracia modernizante y liberal, que propone un nuevo discurso ideológico cercano a una teología electoral de derechos humanos; grupos campesinos que se enfrentan a las corporaciones oficiales y se aglutinan en torno a reivindicaciones económicas y morales; sectores obreros que ya no son convocados por el nacionalismo revolucionario, sino por una democracia sin compromisos corporativo-electorales.³

Los elementos anteriores forman un territorio que va a posibilitar que la crisis económica de 1981-1982 tenga un procesamiento particular en Chihuahua. La nacionalización bancaria de 1982 es el detonante más fuerte de un complicado reacomodo entre el gobierno y la sociedad civil. Los grupos económicos más poderosos del estado se ven afectados por la medida del 1 de septiembre de 1982. Vallina, cabeza del grupo Comermex, pierde el banco y las empresas dependientes de éste, y Bermúdez pierde la confianza en el gobierno. Ambos tenían una influencia importante en la burguesía chihuahuense, que poco a poco se va expresando en la socialización de un discurso común: la crisis y la corrupción son responsabilidad del gobierno y de su partido. Esta concepción se generaliza en todos los ámbitos sociales y se integra con el activismo político que renace en el panismo, con lo cual surge la concepción del “neopanismo”; en el caso de Ciudad Juárez se da la formación de un frente cívico que es apoyado por los empresarios fronterizos, los cuales van a embonar con el panismo para el proceso electoral, estableciendo los antecedentes de 1983.⁴

Lo electoral es una parte del proceso político; antes de 1983 los comicios formaban parte de sólo un ritual, no eran motivo de especial conflicto. A partir de 1983 las elecciones se convierten en parte central de la política chihuahuense. En 1980 hubo elecciones locales y las cifras expresaron la diferencia histórica entre el PRI (76%) y el PAN (15%). En 1982 las elecciones federales se llevaron a cabo sin ningún problema para el partido oficial. La sucesión de Miguel de la Madrid fue formalmente plural. En el escenario local se notó un repunte importante del voto

³ Alberto Aziz, “Chihuahua y los límites de la democracia electoral”, en *Revista Mexicana de Sociología*, 4/87, México, IIS/UNAM, 1987, pp. 174-175.

⁴ Sobre el comportamiento electoral escribimos un trabajo que titulamos “Neopanismo y neopriismo en Chihuahua, en *Prácticas electorales y...* op. cit., pp. 85-99.

panista, en la mayoría de los distritos la votación blanquiazul se dobló. Nadie imaginaba que un año más tarde vendría la catástrofe para los priistas, pues en 1983 tendrían una derrota amplia en la casi totalidad de la zona urbana del estado.⁵ El salto fue no sólo cuantitativo, sino cualitativo; los panistas se apoderaron del territorio en donde se ubica el 70% de la población norteña y además se les reconoció el triunfo.

El despegue chihuahuense horrorizó a la clase política; su razonamiento fue: con una crisis económica de esta magnitud y con un programa de reordenación económica tan pesado para las mayorías, el caso Chihuahua se puede generalizar. Las siguientes elecciones locales tuvieron así otra respuesta oficial, es decir, cerrando el espacio electoral para la oposición.⁶ En 1985 hubo otra vez elecciones federales y los panistas volvieron a repetir los resultados de 1983.⁷ A pesar de la contraofensiva priista, no se pudo impedir que cuatro de los diez distritos fueran blanquiazules. De cualquier forma unos diputados federales de oposición no significaban algo muy importante en términos de poder; lo grande vendría en 1986, las elecciones locales: la gubernatura, 67 alcaldías y 14 diputaciones.⁸

Las elecciones de 1986 en Chihuahua fueron probablemente el proceso local más complicado y conflictivo que tuvo el Estado mexicano hasta antes del 6 de julio de 1988. El caso se volvió un problema nacional para el régimen y logró mucha popularidad en el extranjero. En 1988 los chihuahuenses fueron a

⁵ El 3 de julio de 1983 el PAN ganó los municipios de Chihuahua, Ciudad Juárez, Delicias, Camargo, Parral, Casas Grandes, Meoqui, Nuevo Casas Grandes, Madera, Saucillo y General Triás; después, por impugnaciones el PRI recupera los últimos dos y en elecciones extraordinarias gana Madera y Nuevo Casas Grandes. El PSUM ganó el municipio de Zaragoza y el PST ganó Cuauhtémoc. En cuanto al Congreso local el PAN gana cinco distritos (I, II, IV, V y XIV) y el PRI se queda con los nueve restantes. En términos de población significa que el PAN gobernó sobre el 65% de la población, el PRI sobre el 30% y la izquierda sobre el 5 por ciento.

⁶ Los casos siguientes de elecciones locales en donde había competitividad electoral fueron conflictivos: Baja California en 1983, Sonora, San Luis Potosí y Nuevo León en 1985.

⁷ El 7 de julio de 1985 se llevó a cabo el proceso electoral de diputados federales, el PAN ganó cinco distritos, pero en el distrito I de la capital hubo fraude, por lo cual el PRI se quedó con seis distritos.

⁸ Sobre este proceso realizamos un trabajo en donde se analiza el caso de 1986, "Chihuahua y los límites de la democracia electoral", en *Revista Mexicana de Sociología* 4/87, México, IIS/UNAM, 1987.

las urnas por la dinámica federal, al tiempo que en la entidad se había empezado a fraguar una actitud de cansancio; además, el protagonismo político era entonces nacional. Los resultados de la elección de 1989 se sitúan a la mitad del ciclo, son exclusivamente locales, para renovar el Congreso y los ayuntamientos. De las cuatro elecciones locales de la década, las de 1989 son las que presentan el índice más alto de abstención: aproximadamente 70%. La falta de interés fue casi completa. Chihuahua pasó la década de los ochenta con un tránsito electoral que se puede definir con una metáfora: empezó con euforia y terminó con indiferencia.

III. LAS TENDENCIAS ELECTORALES

Los modelos electorales llegan a predecir las tendencias que conforman una parte estructural del sistema político, pero no se puede derivar cómo será cada elección, puesto que cada una tiene su propias particularidades. Hasta antes de 1989, el caso Chihuahua presentaba ciertas tendencias en su comportamiento político. De 1982 a 1988 se consolidaron los siguientes rasgos en el modelo electoral chihuahuense: un mapa bimodal de elecciones, un incremento de participación electoral en las zonas urbanas del estado con perfiles de alta competitividad y, por otra parte, una zona rural controlada por el partido oficial con un comportamiento de partido único y sin ninguna presencia de la oposición; en la zona urbana se da una presencia importante de la oposición, sobre todo panista, y se puede registrar como una franja de comportamiento bipartidista; el voto responde a un claro patrón de modernidad, en donde la división urbano-rural determina el tamaño de la oposición y sus zonas de influencia, por lo que a mayor urbanización menor voto priista y mayor voto opositor.⁹

Lo anterior queda claro cuando se analiza el comportamien-

⁹ La geografía electoral del estado de Chihuahua se divide en 67 municipios y hasta 1988 tuvo 14 distritos locales; a partir de 1989 se incrementó a 18 distritos uninominales y nueve plurinominales. En las elecciones de diputados federales el territorio se divide en diez distritos: cinco rurales, cuatro urbanos y uno mixto. Se consideran distritos urbanos los que tienen más de 75% de sus secciones urbanas; mixtos a los que tiene entre 50 y 74.99% de secciones urbanas, y rurales a los que tienen menos de 50% de secciones urbanas.

to del voto en los diez distritos federales que tiene Chihuahua. La competencia entre el PRI y el PAN se da principalmente en los cuatro distritos urbanos y el mixto de la capital (I y VII de Chihuahua y III, IV y VIII de Ciudad Juárez). En los otros cinco distritos rurales se da la mayor votación del PRI y la menor votación opositora. Mientras que los promedios de votación priista en la franja urbana, en 1985 y 1988, fueron entre 38 y 46%, en la franja rural entre 62 y 67%. Para la oposición panista los promedios son a la inversa, entre 49 y 47% (franja urbana) y de 25% (franja rural). El PRI sufre una pérdida de votos urbanos a partir de 1983. Los únicos bastiones que logra conservar, es decir, donde obtiene votaciones similares o mayores a sus promedios nacionales y estatales son los rurales. Por su parte, los panistas vuelven sus bastiones a las zonas urbanas del estado.

El distrito I es urbano con cabecera en la capital, y tiene el siguiente comportamiento electoral: en 1982 el PAN obtiene 30 y el PRI 60%; tres años después, el PAN lo gana con 51 y el PRI lo pierde con 48%; en 1988 el PRI lo recupera con el mismo porcentaje de 1985, y el PAN baja tres puntos porcentuales. En 1988 el PAN argumentó que se había *rasurado* el padrón. A partir de entonces se pudo comprobar que el manejo del padrón se hizo vital para los priistas. En 1989, en las elecciones locales pudimos encontrar una correlación del siguiente tipo: "rasurar" en las casillas que habían sido ganadas por el PAN y aumentar en las casillas ganadas por el PRI.

El distrito II es rural con cabecera en Parral y es el caso típico donde se agrupa un territorio mixto, en donde el PAN gana la zona urbana que corresponde a la cabecera y el PRI gana la zona rural. A pesar de que los panistas nunca pudieron ganar este distrito, fue un foco constante de agitación, sobre todo por la ciudad de Parral, municipio que ganó el PAN en 1983, y que en 1986 fue escenario de enfrentamientos violentos entre priistas y panistas por el supuesto fraude, porque en este aspecto Parral tiene el grupo del PAN más radicalizado del estado.

El distrito III es urbano con cabecera en Ciudad Juárez y hasta 1982 el PRI lo conservó, puesto que en 1985 fue ganado por el PAN y en 1988 siguió como blanquiazul. El distrito IV, urbano y con cabecera en Ciudad Juárez, tuvo un comportamiento igual al III. Lo mismo se puede señalar del distrito VIII, que también es urbano, con cabecera en Ciudad Juárez y que desde 1985 es conservado por el PAN.

El distrito V es rural con cabecera en Guerrero, agrupa una porción de la parte serrana del estado y se puede considerar el mejor distrito del PRI y el único en donde obtiene votaciones superiores a 80%. Este distrito se comporta como si fuera de Chiapas o de Campeche.

El distrito VI es rural con cabecera en Camargo y es similar al II por su composición mixta. Este distrito agrupa los municipios de Camargo y Delicias que en 1983 fueron ganados por el PAN, pero que en 1985 fue el único en donde el PRI subió su votación con la candidatura de Fernando Baeza, quien en 1986 fue el candidato oficial a la gubernatura.

El distrito VII es el único de tipo mixto, en donde se agrupa la parte norte de la capital y una amplia zona rural. Este distrito ha sido altamente conflictivo desde 1985. El PAN lo impugnó por fraude y en 1988 se repitió la misma situación.

Los distritos IX y X son rurales; el primero con cabecera en Nuevo Casas Grandes y el segundo en Cuauhtémoc; ambos forman la parte noroeste del estado y son bastiones del PRI, a pesar de que los municipios fueron ganados por el PAN en 1983.

La geografía electoral de los municipios del estado tiene sus particularidades. Aproximadamente 53 de los 67 municipios son de tipo rural; es decir, que tienen, según los datos censales de 1980, menos de 30 mil habitantes; nueve municipios tienen entre 30 y 60 mil; tres tienen entre 60 y 300 mil y sólo dos tienen más de 300 mil habitantes. La estructura urbano-rural del estado es similar a la de otros estados. Existen dos ciudades grandes (2.9%), Chihuahua y Ciudad Juárez, en donde vive más de la mitad de la población de todo el estado; luego vienen otras tres ciudades de importancia media (4.4%), Cuauhtémoc, Delicias y Parral; luego se encuentran los nueve municipios (13.4%) ubicados en tercer lugar de importancia: Camargo, Meoqui, Nuevo Casas Grandes, Guadalupe y Calvo, Guerrero, Saucillo, Namiquipa, Jiménez y Madera; y por último están los 53 municipios de corte rural, que representan el 79.1 por ciento.

En 1983 la oposición panista ganó la mayoría de los municipios importantes, con excepción de Cuauhtémoc que lo ganó el PST, y Zaragoza, que lo ganó el PSUM, con lo que puede decirse que la oposición gobernó a 75% de la población. Los porcentajes de votación indican la caída priista; de 1980 a 1983 pasó de tener 76.6 a sólo 47.7, y el PAN pasó de 15.3 a 44.9% en sólo tres años. En 1986 el PRI recupera un poco más de 12 puntos

porcentuales y el PAN pierde nueve puntos, aunque en este proceso las cifras oficiales son especialmente poco confiables por el fraude que se realizó.¹⁰ En 1989 el PRI mantiene el mismo porcentaje en términos absolutos de 60%, y el PAN pierde otros dos puntos más para quedar en 33 por ciento.

En 1983 el Congreso local también se vuelve bipartidista, el PAN gana cinco distritos, aunque sólo le reconocen cuatro: I Chihuahua, II Parral, IV Ciudad Juárez, V Camargo y XIV Ciudad Juárez. En 1986 el PRI hace *carro completo* también en el Congreso, y en 1989 gana todos los distritos.

El problema de la abstención modifica el cuadro de las cifras anteriores pues da otro panorama completamente diferente: el PRI inicia la década de los ochenta con sólo 27.7% y termina con 18% del voto sobre el padrón. Con este mismo parámetro, el PAN inicia su incidencia con 5.5% del padrón y termina con 10%. En su momento de mayor votación, que fue en 1983, el último partido llega a tener 44.9% del voto emitido, pero sólo cubre 20% del padrón. En este cálculo puede verse que el PRI perdió más de 33% de la votación si comparamos la elección de 1980 y la de 1989, y el PAN ganó 50%. El resto de los otros partidos tienen un comportamiento regular; en términos absolutos varían entre 24 mil y 28 mil votos, es decir, entre 6 y 8% de la votación emitida.

La cobertura electoral es similar a la que existe en otros estados del país. El PRI presentó 100% de candidatos en las elecciones locales y federales; en segundo lugar el PAN, que en 1983 presentó candidatos en 34 municipios; es decir, en 50% de los municipios, con lo cual logró una participación mayor a las precedentes. En 1986 aumentó su participación y logró presentar candidatos para 60 municipios, cubriendo aproximadamente 90% del territorio. Los demás partidos se encuentran en una situación de mucha distancia; logran cubrir los municipios más importantes, donde menos fuerza tienen, y descuidan el resto. Lo que sí logran cubrir casi en 100% todos los partidos son las elecciones para diputados federales y locales y las senadurías.

¹⁰ En la elección de 1986 se realizó un gran fraude que se estudió detalladamente en dos investigaciones: la de Juan Molinar, "Regreso a Chihuahua", en *Nexos* núm. 111, marzo de 1987, en donde se destaca principalmente el fraude que se hizo por el padrón electoral, y el otro fue el "Dictamen del jurado popular al pueblo de Chihuahua", en *Diario de Chihuahua*, 8 de agosto de 1986.

En 1986 se presentaron varios candidatos para la gubernatura, pero la competencia sólo fue entre el PRI y el PAN; el candidato de la izquierda tuvo una presencia más de tipo moral.

IV. ENTRE LA INSURGENCIA Y LA INTOLERANCIA

Un balance de la década permite observar que los diferentes eventos electorales forman un conjunto de procesos que puede ser analizado como un ciclo particular. En 1980 (elección del gobernador Óscar Ornelas) se da una situación política estable para el PRI, que expresó el *boom* económico que vivía la entidad con la inversión extranjera y las maquiladoras. En 1982 (elección federal de Miguel de la Madrid), la entidad estaba en relativa calma, aunque ya se sentían los estragos de la crisis económica. La nacionalización de la banca fue uno de los impulsores más importantes de la recomposición política chihuahuense, pues el principal grupo económico del estado se quedó sin el Banco Comermex. En 1983 se da una elección local bajo el signo de la sorpresa. La explicación oficial de la triple alianza (alto clero, empresarios y Estados Unidos) impide ver que el fenómeno obedecía a otro signo más complejo y que era una expresión de los múltiples cambios de modernidad que se habían dado en los años recientes.¹¹

Entre 1983 y 1985 se vive una guerra política y una fuerte recomposición entre las élites económicas y el gobierno. Los panistas desde los ayuntamientos demuestran que pueden gobernar a pesar del sabotaje permanente del priismo. El gobernador Ornelas permite cierta autonomía y genera relaciones de respeto con los alcaldes panistas. La dinámica de los conflictos cruza múltiples planos de enfrentamiento: los ayuntamientos al gobierno estatal, al Comité de Defensa Popular, a los trabajadores

¹¹ En "La coyuntura de las elecciones en Chihuahua", en *Municipios en conflicto*, México, IIS/UNAM y GV Editores, 1985, pp. 75-132, explicamos el impacto de la crisis económica en el estado con base en tres factores: la nacionalización del Banco Comermex; el incremento del desempleo en las zonas urbanas y la afectación fronteriza por la devaluación del peso y el control de cambios. Y por otra parte reconstruimos las percepciones ideológicas que las élites locales tenían respecto a la crisis; se interiorizó un discurso ideológico que se generalizó entre la población, que era como una ecuación: PRI + gobierno + corrupción = a causantes de la crisis.

municipales, al regateo priista en el Congreso por la reforma del 115. El ciclo sigue en su fase ascendente.¹²

El Congreso local se convierte en un dique para la democratización en Chihuahua; controlado por el gobernador, muestra que no tiene ninguna independencia del poder ejecutivo. El caso más famoso que ejemplifica lo anterior fue el del IV distrito local de Ciudad Juárez que ganó el PAN en 1983 y fue anulado; después, en 1985, lo volvió a ganar el PAN y el Congreso lo volvió a anular. La razón era clara: con este distrito en manos del PAN los priistas no hubieran tenido el número suficiente de diputados para cambiar al gobernador, como lo hicieron en septiembre de 1985.

Las elecciones de 1986 expresan la fase más alta del ciclo y del conflicto chihuahuense. La estrategia oficial prepara desde el centro del país el programa: contrarreforma electoral, cambio de gobernador, elección de candidatos, recursos económicos amplios, radicalización de una actitud de intolerancia política, junto con todos los instrumentos necesarios del gobierno estatal y federal. En 1986 anotamos la siguiente hipótesis que ahora podemos sostener:

Lo que está en juego en Chihuahua desde 1983 y que ahora en 1986 se agudizó al extremo, es una nueva situación política que surge a partir del relativo agotamiento de las formas tradicionales de gobernabilidad priista frente a un nuevo modelo de democracia que está más acorde con la integración a la economía norteamericana y a la modernización industrial del país en general, que se lleva a cabo en el norte de la República. En términos políticos, esta nueva situación, que surge en el contexto de la crisis, pero no como una consecuencia directa, se puede formular provisionalmente como la pugna existente entre la democracia corporativa de masa de maniobra y monopolio de representación de intereses, frente a una nueva forma de participación ciudadana e individual que busca el respeto al voto y la alternancia en el poder.¹³

Desde el punto de vista local, las elecciones de 1986 fueron las más importantes. Se podría decir que lo que el 6 de julio de

¹² Todos estos conflictos están reseñados en un artículo que hicimos en 1985, "Chihuahua: la democracia en tiempos de crisis", en *Prácticas electorales y...*, *op. cit.*

¹³ Alberto Aziz Nassif, *ibid.*, p. 165.

1988 fue para el país, lo fue el 6 de julio de 1986 para Chihuahua. Ese proceso electoral expresa un amplio panorama de los cambios en el norte mexicano. Aquí se puede dar un nuevo fenómeno social y político: una gran convergencia transclasista. La hipótesis con la que trabajamos ese proceso electoral fue la de una convergencia, antes y después de las elecciones, que dio base y sustento al movimiento social que se generó con respecto a las urnas. Esta convergencia fue una heterogénea amalgama de actores, grupos, partidos y masas que se formó en torno a la demanda de democracia electoral; similar a la que se formó en torno a la candidatura de Cárdenas en 1988. El polo de la contienda fue la insurgencia cívica que mantuvo un movimiento convergente de protesta.

En Chihuahua esta convergencia expresó el malestar de una sociedad civil que se sintió amenazada por los límites estrechos de participación que dejaba un estado "obeso" económicamente y autoritario políticamente. Con el disparador de las urnas se aglutinaron en el escenario político los obispos con su teología electoral en contra del fraude y del corporativismo; los gremios empresariales que se dividieron entre el PRI y el PAN; sectores importantes del movimiento campesino del noroeste del estado; los sectores de clase media, claves en términos electorales, irritados por la crisis y las imágenes de corrupción gubernamental; y diversos segmentos de opinión pública local y nacional.

Este movimiento de convergencia tuvo un lugar destacado en dos momentos: antes de las elecciones fue el acompañante de los partidos durante la campaña; y después de los comicios se vuelve la punta de un amplio movimiento social. La huelga de hambre del alcalde panista Luis H. Álvarez fue el centro de tensión del proceso poselectoral. La participación activa de la jerarquía católica fue otro de los factores centrales del movimiento en contra del fraude.¹⁴ Por otra parte, también hubo paros empresariales y el movimiento de *desobediencia civil* en

¹⁴ Los obispos de Chihuahua tuvieron una activa participación como animadores de los procesos electorales. Además de los documentos, "Votar con responsabilidad" de 1983, y "Coherencia cristiana en la política" de 1986, el arzobispo Adalberto Almeida intentó hacer una huelga de misas que no se llevó a cabo por los arreglos entre el delegado apostólico Prigione y el secretario de Gobernación, después de las elecciones de 1986.

donde los panistas bloquearon las carreteras y los puentes fronterizos en Ciudad Juárez.

En esta convergencia se pueden anotar los siguientes elementos de interpretación que intervinieron en todo el proceso: *a)* la racionalidad autoritaria del polo oficial-priista que llegó a realizar el fraude y a defenderlo hasta el final del proceso, con lo cual mostró que no permitiría la alternancia por ningún motivo; *b)* la amalgama de todo el movimiento de convergencia anti-fraude que produjo una crisis de la moral política del régimen; *c)* la convergencia fue factible porque enarboló una consigna defendible para todos: el respeto al voto, y *d)* la voluntad política oficial se estableció como una “obsesión por la unanimidad” que se tradujo en un “carro completo”, frente a un movimiento de oposición que llegó a la frontera de la violencia.¹⁵

V. CHIHUAHUA SIN CARDENISMO (1988)

Después del movimiento chihuahuense de 1986 se empezó a dar una intensa politización de la crisis económica. El momento se concentró en la sucesión presidencial. La ruptura de la Corriente Democrática, el accidentado destape del PRI, la convergencia del Frente Democrático Nacional con Cárdenas a la cabeza, el surgimiento de un amplio movimiento de masas, el deterioro de la economía nacional, el triunfo del radicalismo de Clouthier en el PAN y la transformación del PSUM en PMS, fueron los acontecimientos más importantes de la coyuntura preelectoral de 1988.

El 6 de julio de 1988 fue sin duda una de las elecciones más importantes del sistema político en las últimas décadas. Fue la expresión de un país que ya no se reconoció en los viejos modelos de representación, pero que todavía no tenía otros nuevos. Uno de los cambios centrales de la elección de 1988, y que ya se había empezado a prefigurar en los escenarios locales y regionales, fue el cambio de un paradigma que tuvo su centralidad y su legitimidad en una estructura corporativa a otro de centralidad ciudadana y electoral.

¹⁵ Los detalles de todo el proceso se relatan en el trabajo que apareció en la *Revista Mexicana de Sociología*, *op. cit.*, pp. 203 y ss.

El cardenismo o neocardenismo como lo llaman para diferenciarlo del original de los años treinta, fue sin duda el fenómeno más novedoso de la sucesión presidencial. La división dentro del aparato estatal tuvo efectos que se amplificaron con la crisis. El cardenismo logró formar otra gran convergencia de partidos, organizaciones y ciudadanos que lo vieron como una forma de protesta, una alternativa al neoliberalismo, o como una propuesta democratizadora.

Lo importante para este trabajo es explicar qué pasó en Chihuahua con la elección de 1988, y por qué el cardenismo está ausente del escenario político en ese estado. A partir de 1986 la dinámica política local giró en torno a la recomposición que hizo el gobierno de Fernando Baeza con los diferentes sectores que integraron la convergencia antifraude y por el respeto al voto. Durante la elección de 1988, Chihuahua tuvo un comportamiento interno y otro externo. El primero tuvo su eje entre la política de conciliación del gobernador que logró bajar la tensión y el malestar, y las inercias que dejó 1986. Esta baja en la irritación se hizo patente en las elecciones de 1989. El segundo fue la dinámica nacional, como el eje articulador del escenario local.

Las giras de los candidatos a la presidencia expresaron la dinámica interna de los partidos y la correlación de fuerzas existente en el estado. El salinismo hizo una campaña pública de fuertes gastos y escenografías vistosas, pero al mismo tiempo hizo una campaña privada con la élites empresariales y clericales. El panismo tuvo uno de sus territorios más importantes en Chihuahua; el candidato Clouthier tenía un perfil muy cercano al PAN de Chihuahua, por lo cual se pudo dar una identificación con la herencia del movimiento de 1986. El cardenismo en Chihuahua fue la expresión de un perfil bajo y de una izquierda débil.

Se pueden analizar varias razones que explican la ausencia del cardenismo: *a)* no existe una tradición histórica de corte agrario o sindical que pueda ser base de sustento como lo fue en otras regiones (La Laguna, el Valle de Mexicali o el estado de Michoacán); *b)* los partidos que integraron el FDN en Chihuahua son muy débiles electoralmente y sus votaciones han sido marginales, además de que no existe una base de movimientos sociales importantes afines o convergentes con el cardenismo, salvo el Movimiento Campesino del Noroeste, pero que no

obtiene 266 064 votos que representan 60.3 de la votación y 18.6% del padrón; el PAN saca 146 732 votos, que representan 33.2 y sólo 10.2% del padrón; el resto de los partidos saca un total de 28 214, que representan 6.3 de la votación total y 1.9% del padrón. Los priistas declararon el caso como un triunfo completo y una recuperación del estado, pero lo real es que la gente no fue a votar y que los priistas obtuvieron, en términos relativos, la menor votación de toda la década. De los distritos electorales, el PRI ganó los 18 uninominales.¹⁷

Estos datos nos pueden señalar que empieza una crisis de participación electoral en Chihuahua.¹⁸ Hipotéticamente puede decirse que ésta se gesta después de los resultados políticos de 1986, en donde el movimiento de convergencia democrática se ve incapacitado de impedir el fraude electoral. De acuerdo con una caracterización de Bobbio, se puede decir que los chihuahuenses pasan por tres formas de crisis de participación: apatía, distorsión e ineficacia. Además, las tendencias estabilizadoras de la economía contribuyen a desactivar la protesta social chihuahuense. En particular, se puede apreciar en la zona fronteriza de Ciudad Juárez, bastión panista, que la estabilidad cambiaria es un factor fundamental de la tranquilidad electoral, algunos dicen que el más importante.

Después del fraude de 1986, una parte importante del electorado entra en un proceso de frustración que se expresa en la psicología del “nada se puede hacer pues finalmente siempre gana el PRI”. Esta actitud se convierte en apatía y desinterés. En las elecciones federales de 1988, todavía una cantidad importante de electores asisten a votar y se encuentran con la novedad de que han sido borrados del padrón, con lo cual los chihuahuenses vuelven a comprobar que las distorsiones del sistema electoral impiden la participación. Finalmente, las denuncias de manipulación del padrón, que hace el PAN antes de la elección de 1989, resultan ineficaces e incluso contraproducentes para una parte

¹⁷ Las cifras de 1989 son parciales pues no incorporan los resultados de once pequeños municipios: Nonoava, Morelos, Urique, Balleza, El Tule, Uruachi, Chinipas, Guazapares, Maguarichi, Morris y Ocampo. De cualquier forma, por la votación mínima de estos municipios se puede decir que las tendencias no se alteran.

¹⁸ De acuerdo con Bobbio, la crisis de participación puede tener por lo menos tres significados: apatía y desinterés, distorsión y manipulación y por último ineficacia e inutilidad, en *Nexos*, núm. 137, mayo de 1989.

importante de la ciudadanía que ya se encontraba expulsada de los procesos electorales. En un primer acercamiento a las razones que generaron esta crisis de participación se pueden agrupar los siguientes seis factores explicativos:

a) Un exceso de procesos electorales, la mitad de ellos conflictivos, siete en una década, pudo ser un factor importante para que los chihuahuenses pensaran que el camino de las urnas estaba cerrado como espacio democrático.

b) Un desánimo por los anteriores fraudes (1985, 1986 y 1988), que pudieron generar una sensación de que “votar no sirve para nada, pues pase lo que pase siempre gana el PRI”. Esta percepción, aunada a la inconformidad de las decisiones políticas que tomó la oposición en los periodos de conflicto, como en 1986, cuando los panistas deciden contradictoriamente terminar con el movimiento de la noche a la mañana, probablemente afectaron la participación ciudadana.

c) Después de una periodicidad electoral tan profusa, con facilidad se puede dar una falta de interés, ya sea porque las campañas y los candidatos no motivaron al electorado o por las pugnas internas, principalmente en Ciudad Juárez, y el deficiente trabajo político de los partidos opositores, principalmente del PAN; lo anterior permitió un agotamiento de las estrategias políticas de los partidos de oposición y de las tácticas de campaña.

d) Después del movimiento de convergencia de 1986 se creó una resistencia a movilizarse sin tener un conflicto abierto; en este sentido la gestión del gobernador Baeza es considerada, incluso por líderes de la oposición local, como positiva y conciliadora, y por otra parte, también pudo influir la política del gobierno federal, como las acciones espectaculares del salinismo, además de los arreglos con las cúpulas empresariales locales y el acercamiento con la jerarquía católica.

e) Como una hipótesis de trabajo se puede plantear que la cultura política no pasa organizativamente por los partidos como estructuras de socialización y de representación, sino que todavía depende de las personas, líderes fuertes y carismáticos que estuvieron ausentes en esta ocasión.¹⁹

f) En 1989 se dio una ausencia de actores que en otros proce-

¹⁹ Rafael Segovia llamó a este fenómeno “La personalización de la política”, en *Cuadernos de Nexos*, núm. 14, agosto de 1989, pp. 1-3.

sos han sido animadores importantes, como los obispos católicos o los gremios empresariales, que en esta ocasión permanecieron al margen de las elecciones, por lo cual se puede decir que en este proceso los partidos de oposición se encontraron solos y midieron sus fuerzas reales en contra del partido oficial y del gobierno.

Estos factores se conjuntaron durante el proceso electoral de 1989 y dieron como resultado un alto nivel de abstención. Este proceso fue la expresión más inmediata de una situación política que ha empezado a transformarse en un país que ha tenido cambios importantes. Todavía es demasiado temprano para saber si las condiciones de esta elección volverán a repetirse, si la indiferencia electoral de 1989 es una actitud momentánea o se regresará a los anteriores niveles de euforia y participación.

EPÍLOGO

Finalmente, este trabajo nos permite tomar distancia de la década de los ochenta, que todavía forma parte de nuestro presente. El caso Chihuahua contribuyó de manera significativa a la batalla por una ampliación democrático-electoral que ahora es prácticamente un reclamo nacional. El movimiento de 1986 se quedó en la conciencia nacional como un episodio de intolerancia del gobierno mexicano.

Hay dos acontecimientos externos al estado que afectan políticamente el caso: uno es el 6 de julio de 1988, la ruptura cardenista y el surgimiento del PRD como una tercera fuerza, y el otro es el reconocimiento del triunfo de Ernesto Ruffo en Baja California. La situación interna y las elecciones de 1989 significan que la cultura política chihuahuense no está normada por la lógica de los partidos.

El futuro del caso Chihuahua dependerá en el corto plazo de la combinación de varios factores: 1) los reacomodos políticos que logre el proyecto salinista con las élites locales de empresarios, puesto que la actual política económica de apertura al exterior es altamente beneficiosa para comerciantes, maquiladores y en general para el conjunto de los grupos empresariales. Si el supuesto anterior es real, entonces es probable que estos grupos, animadores importantes durante los ochenta, no serán un factor

de confrontación para el gobierno o para el partido oficial; de hecho, se ha fortalecido la presencia empresarial en la estructura político-administrativa del gobierno local.²⁰ 2) La alta jerarquía eclesiástica chihuahuense, también está en un proceso de recomposición importante; en general, la línea de confrontación entre Iglesia católica y Estado se ha terminado y ahora se da un acercamiento con miras a lograr un nuevo pacto; además, ya se nombró a los obispos que van a sustituir al arzobispo de Chihuahua y al obispo de Ciudad Juárez; por último, la visita del papa Juan Pablo II fue como el broche de oro en la reconciliación entre la jerarquía y el gobierno local. 3) Los partidos de oposición, principalmente el PAN, tendrán que imaginar nuevas formas para volver a tener poder de convocatoria con los chihuahuenses, pues con el proceso de 1989 se vio un agotamiento importante. Para la izquierda, el PRD, la situación es aún más compleja, pues necesita crear públicos de votantes y de simpatizantes que no tiene. 4) El partido oficial ya comprobó que es un arreglo minoritario, tanto respecto al padrón como en relación con los ciudadanos que votan por él. Si comparamos los últimos dos comicios locales, para el PRI el balance no es muy optimista; en 1986 tuvo que recurrir a un fraude considerable para “ganar” y en 1989 tuvo que darse una abstención gigante para que pudiera “triunfar”. Mientras el PRI siga siendo de tipo corporativo y un partido de Estado, difícilmente tendrá el voto masivo de una población moderna, urbana y con niveles de educación altos.

El futuro político-electoral en Chihuahua probablemente seguirá con la confrontación PRI-PAN, lo cual dependerá, además de la dinámica interna y local, de la dinámica nacional; es decir, el rumbo que tome el enfrentamiento entre el salinismo y el cardenismo, y la posibilidad de alianza entre el PAN y el salinismo. Las elecciones federales de 1991 serán un termómetro para saber cómo se dará la correlación de fuerzas entre los partidos y cuál será el escenario electoral a corto plazo; aunque el caso chihuahuense se despejará hasta la próxima elección de gobernador, en 1992. La lucha por la democracia en Chihuahua es como dice Ramoneda: todavía no es tradición y no sabemos

²⁰ De acuerdo con el trabajo de Alejandra Salas-Porras, “Apertura económica y grupos empresariales en Chihuahua (1980-1990)”, mimeo.

si llegará a formar parte de lo que no será nunca, es decir, la utopía del futuro.

ANEXOS

Chihuahua. Elecciones locales de ayuntamiento, 1980-1989

<i>Año</i>	<i>1980</i>		<i>1983</i>	
Votación	315 778	(36.2)	426 330	(44.7)
Abstención	871 621	(63.7)	953 839	(55.3)
PRI	242 057	(76.6)	202 775	(47.5)
PAN	48 375	(15.3)	191 570	(44.9)
Otros	24 182	(8.1)	25 233	(5.9)
<i>Año</i>	<i>1986</i>		<i>1989</i>	
Votación	47 972	(50.5)	441 010	(30.9)
Abstención	1 291 924	(49.8)	1 425 478	(69.06)
PRI	395 221	(60.9)	266 064	(60.3)
PAN	227 858	(35.1)	146 732	(33.2)
Otros	24 893	(3.8)	28 214	(6.3)

El porcentaje de votos sobre el padrón es el siguiente; respectivamente para los años anteriores: PRI: 27.7%; 21.2%; 30.5%; 18.6%. PAN: 5.5%; 20.0%; 17.6%; 10.2%. Las cifras de 1989 son parciales y les falta incorporar 11 municipios.

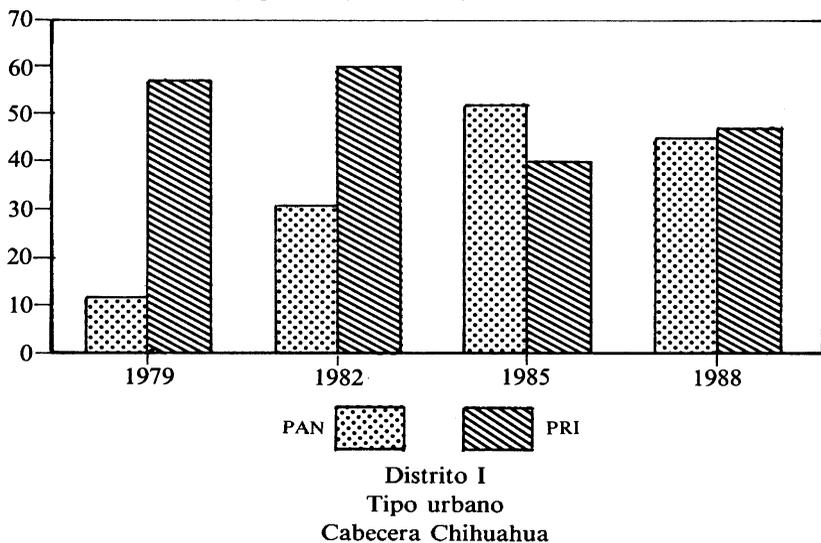
Fuente: Comisión Estatal Electoral.

Chihuahua. Elecciones para diputados federales, 1979-1988

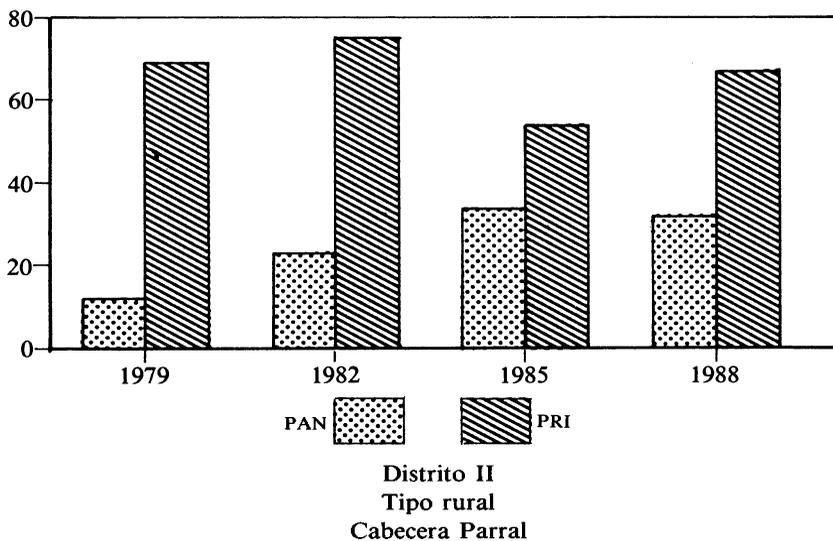
<i>Año</i>	<i>1979</i>		<i>1982</i>	
Votación	349 576	(40.2)	529 662	(54.9)
Abstención	868 391	(59.7)	963 883	(45.05)
PRI	229 917	(65.7)	338 870	(63.9)
PAN	47 357	(13.1)	156 603	(29.1)
<i>Año</i>	<i>1985</i>		<i>1988</i>	
Votación	460 632	(38.6)	510 159	(39.3)
Abstención	1 190 670	(61.3)	1 295 067	(60.6)
PRI	233 995	(50.8)	283 888	(55.6)
PAN	176 555	(38.3)	197 464	(38.7)

Fuente: Comisión Estatal Electoral.

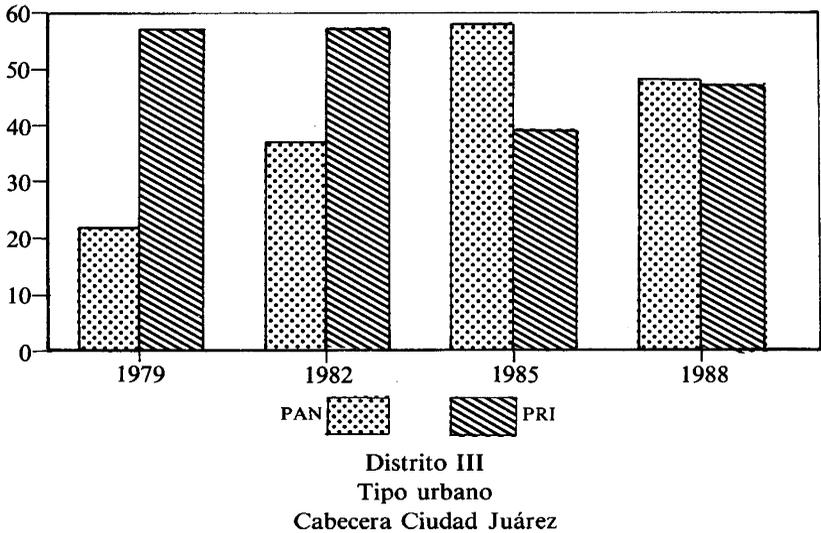
Elecciones Federales en Chihuahua, 1979-1988, comparación PRI-PAN (diputados) Porcentaje de votación



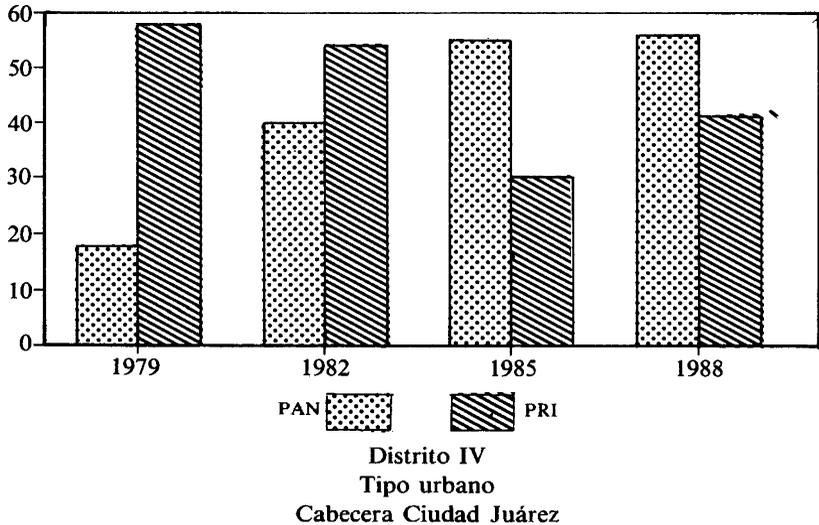
Elecciones Federales en Chihuahua, 1979-1988, comparación PRI-PAN (diputados) Porcentaje de votación



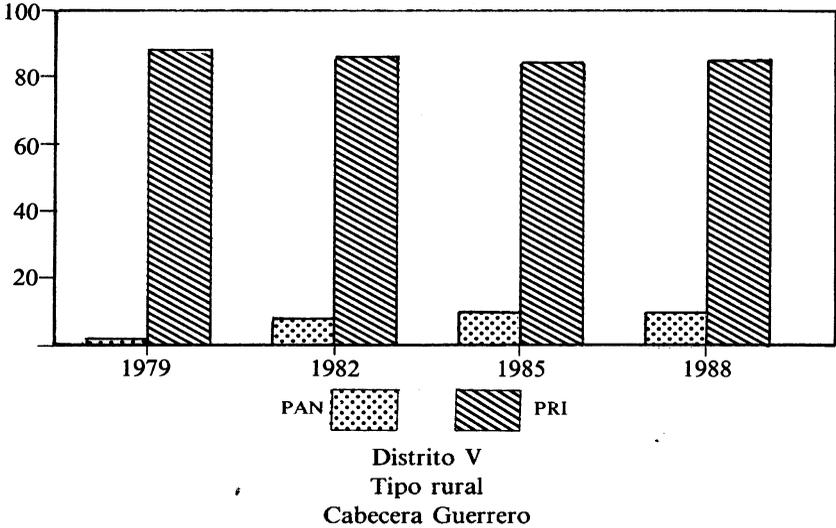
Elecciones Federales en Chihuahua, 1979-1988, comparación PRI-PAN
(diputados) Porcentaje de votación



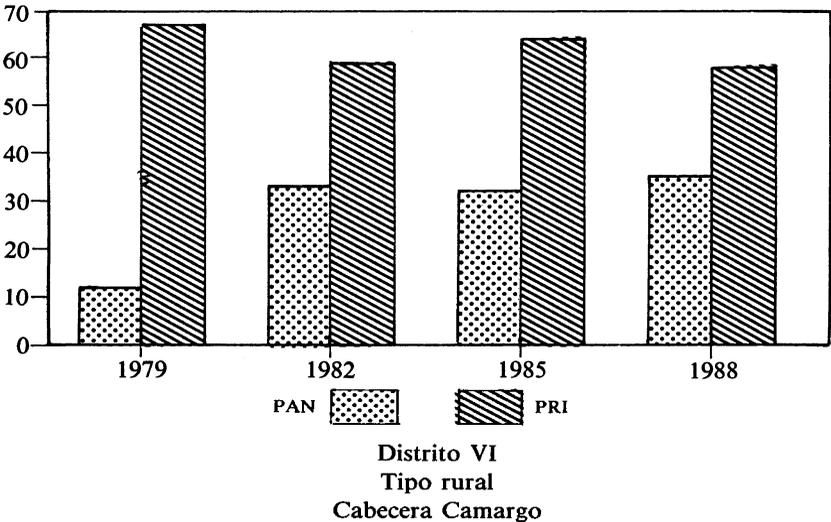
Elecciones Federales en Chihuahua, 1979-1988, comparación PRI-PAN
(diputados) Porcentaje de votación



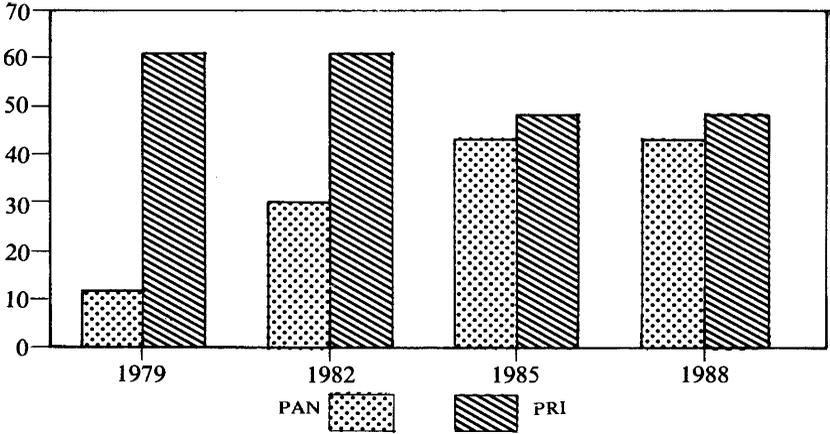
Elecciones Federales en Chihuahua, 1979-1988, comparación PRI-PAN (diputados) Porcentaje de votación



Elecciones Federales en Chihuahua, 1979-1988, comparación PRI-PAN (diputados) Porcentaje de votación

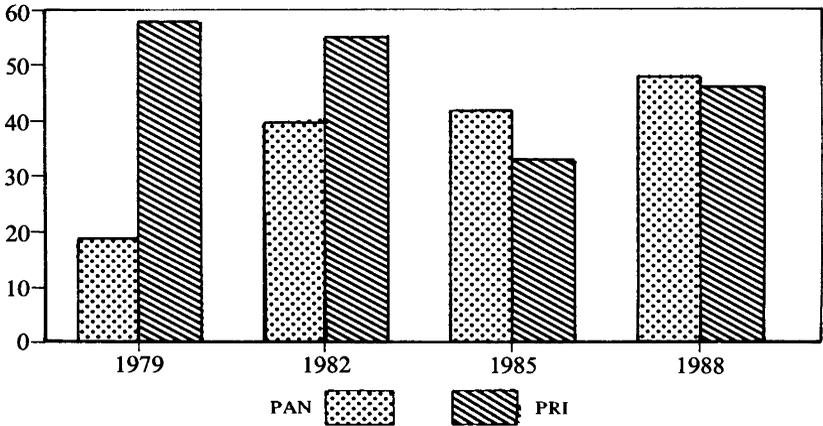


**Elecciones Federales en Chihuahua, 1979-1988, comparación PRI-PAN
(diputados) Porcentaje de votación**



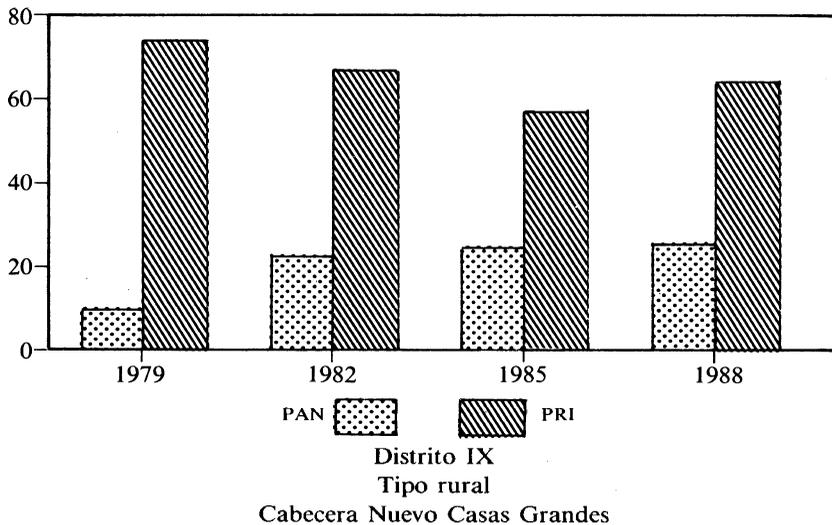
Distrito VII
Tipo mixto
Cabecera Chihuahua

**Elecciones Federales en Chihuahua, 1979-1988, comparación PRI-PAN
(diputados) Porcentaje de votación**

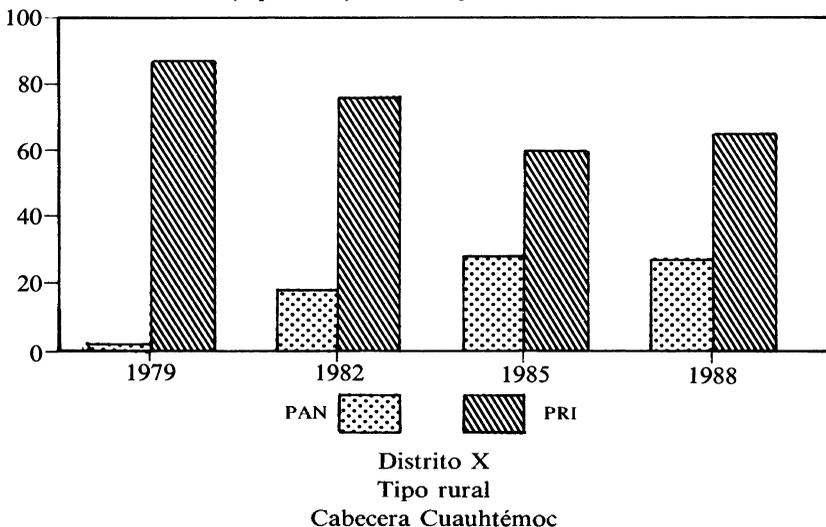


Distrito VIII
Tipo urbano
Cabecera Ciudad Juárez

Elecciones Federales en Chihuahua, 1979-1988, comparación PRI-PAN (diputados) Porcentaje de votación



Elecciones Federales en Chihuahua, 1979-1988, comparación PRI-PAN (diputados) Porcentaje de votación



LAS ELECCIONES EN COAHUILA EN LA DÉCADA DE LOS OCHENTA¹

ILÁN BIZBERG
El Colegio de México

En este trabajo analizamos las elecciones de la década de los ochenta en el estado de Coahuila desde dos perspectivas. En la primera, estudiamos los datos electorales intentando, por una parte, encontrar algunas de sus características generales relacionadas con dos tipos de municipios: rurales y urbanos y, por la otra, tratamos de hallar algunos indicadores que nos permitan conocer el tipo de votación que se da por cada partido, relacionando las tendencias electorales con las características del electorado y de los partidos políticos. En la segunda, llevamos a cabo dos estudios de caso: el de Monclova y el de la región lagunera: el primero corresponde a una situación en la cual un electorado mayoritariamente obrero vota por el Partido Acción Nacional; en el segundo, a un electorado ejidal en una situación de proletariado agrícola que se vuelca hacia el neocardenismo.

PRIMERA PARTE

Las elecciones en los municipios rurales y urbanos

Analicemos algunas características generales que es posible encontrar aproximándonos fenoménicamente a las elecciones:

¹ Agradezco a Arturo Alvarado y a Avelino Hernández Corichi la generosidad que tuvieron al otorgarme la información que fue esencial para este trabajo.

1) Existen municipios en los cuales en las elecciones prácticamente, o de facto, no hubo oposición al PRI a lo largo de las tres elecciones municipales de la década: o sea 1981, 1985 y 1987.² Se confirma lo que se ha dicho en la mayor parte de los estudios sobre el tema, en el sentido de que en las regiones rurales el PRI cuenta aún con una reserva electoral que no ha sido afectada por el auge de la oposición. Los municipios que se encuentran en este caso están ubicados en todas las regiones del estado, pero se caracterizan porque la PEA se dedica mayoritariamente a la agricultura y porque su población habita en su mayoría en el ámbito rural. Esto sucede en nueve de los 12 municipios indicados.

En términos generales, lo que sucede en las áreas rurales de Coahuila y del resto del país no es posible considerarlo como corporativismo agrario; el que sí existe en La Laguna. La situación de los municipios rurales está definida por el hecho de que el PRI es capaz de ejercer un control absoluto de las elecciones; en muchas ocasiones es el único partido en estas regiones, donde la población está muy dispersa y donde el voto es fácilmente manipulable. En estas áreas, a los partidos de oposición se les dificulta presentar candidatos o tener representantes; en ocasiones, cuando sí pueden hacerlo, el PRI logra expulsarlos de la casillas o instalar otras sin representantes de la oposición. Un indicador sobre la manera como se llevan a cabo las elecciones en las regiones rurales es el dato de que ahí (según la información oficial) las tasas de participación son más elevadas, a pesar de que probablemente se vota mucho menos que en los municipios que son urbanos.

Sabinas es la única excepción real³ a esta "regla"; se trata de un importante municipio carbonífero. En este caso, la explicación de la votación por el PRI tiene que buscarse en el corporativismo (aquí sin adjetivos) sindical. Los sindicatos de esta región, incorporados al Sindicato Nacional de Trabajadores Mi-

² Los municipios de este tipo son: Arteaga, Candela, General Cepeda, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Juárez, Morelos, Ocampo, Progreso, Sabinas y Viesca. El PRI obtuvo en todos ellos entre el 90 y el 100% de los votos.

³ Los municipios de Morelos y Progreso se encuentran en una situación intermedia. En Progreso, el 36% de la población se dedica a la industria minera, aunque a diferencia de Sabinas (que es urbano) este municipio es rural. Morelos es un pequeño municipio rural de 6 000 habitantes, donde una cuarta parte de la PEA se dedica a actividades industriales y mineras.

neros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) que dirige Napoleón Gómez Sada, han logrado controlar la votación de sus agremiados. Como ya lo hemos descrito en otros lugares, este corporativismo se basa en la existencia simultánea de la cláusula de exclusión y de la obligación estatutaria de que los trabajadores del SNTMMSRM participen como miembros del PRI. Las posibilidades del sindicato de dirigir el voto están, además, estrechamente vinculadas con el hecho de que las poblaciones mineras están aisladas geográficamente y a que la fuente de trabajo es única en la región. En síntesis, existe una virtual situación de enclave que no sólo dificulta la votación, sino aún más, inhibe la afiliación partidista en función de las preferencias individuales, lo que es crucial para ejercer la vigilancia del proceso electoral.

2) En el segundo grupo de municipios se dio una elección disputada en algún momento (en general, en 1984). No obstante, el PRI logró recuperar una votación del 100% o una cifra cercana.⁴ Estos municipios comparten las características del grupo anterior: seis de los nueve son rurales. Hay dos municipios que son industriales y urbanos, San Juan de Sabinas y Nava, que pueden ser explicados como en el caso de Sabinas, con base en el corporativismo minero. Con toda probabilidad, sucede lo mismo en el municipio de Sierra Mojada, donde se ubica la mina de Hércules.

De esta manera, la única diferencia entre el primero y el segundo grupos de municipios es que el PRI descuidó su control directo de las elecciones en el caso de los municipios rurales y el control corporativo en el caso de los urbanos. Este fenómeno no fue particular a Coahuila, sino que se presentó un año antes en Chihuahua y Durango, así como en algunos otros lugares del país. En 1984 aún existía la voluntad del gobierno de De la Madrid de llevar a cabo elecciones más transparentes, aunque estaba muy mermada por el éxito de la oposición panista en estos dos últimos estados.⁵ El PAN de Coahuila logró aprovechar esta voluntad de apertura para aglutinar el descontento que existía en contra del PRI. Existía, además, el antecedente de dos admi-

⁴ La lista de estos municipios es: Abasolo, Escobedo, Francisco I. Madero, Guerrero, Nava, Sacramento, San Juan de Sabinas, San Pedro de las Colonias y Sierra Mojada.

⁵ Este propósito se abandonó de manera radical después de las elecciones

nistraciones municipales panistas en Monclova (1978-1981 y 1981-1984) que le dieron al PAN la plataforma para extenderse hacia el resto del estado.

3) En el tercer grupo de municipios se dieron elecciones muy disputadas durante la década. En muchos de estos municipios, la población se dedica en menor porcentaje a las actividades agrícolas; en ellos, la población habita mayoritariamente en centros urbanos. En lo que a esto último se refiere, únicamente hay dos excepciones en 18 municipios: Matamoros y Ramos Arizpe.⁶

Ya que en este caso se trata de elecciones disputadas, podemos encontrar ciertas tendencias. De nuevo, acercándonos a los datos de manera descriptiva, existen municipios en los cuales las elecciones demuestran: 1) una tendencia a la baja de la votación por el PRI; 2) una tendencia de la votación por el PRI hacia la recuperación, y 3) una tendencia de la votación por la oposición a mantenerse constante.

La única característica general que encontramos es que en los municipios donde la votación por la oposición es constante, ésta fue práctica y exclusivamente por el PAN. Eso nos permite afirmar tentativamente que este partido ha logrado constituir una base permanente que ya no vota, como lo hacía en un primer momento, contra el PRI ni por un candidato carismático sin importar a cual partido de oposición pertenece. Después de varias décadas, pero en especial después de la actuación de Acción Nacional en la década de los ochenta, parece estarse conformando una clientela electoral panista en algunas localidades y regiones.

Entre los municipios en los cuales la oposición panista ha sido dominante —donde en ocasiones ha logrado que se le reconozca su triunfo electoral— están: Lamadrid, Monclova, Nadadores, Piedras Negras, San Buenaventura, Torreón, Villa Unión

federales de 1985, como pudo verse de manera descarnada en las elecciones de 1986, en Chihuahua, y en las elecciones de Coahuila en 1987.

⁶ La lista completa de los municipios en los que se dieron elecciones disputadas la integran; Acuña, Allende, Castaños, Cuatro Ciénegas, Frontera, Lamadrid, Matamoros, Monclova, Múzquiz, Nadadores, Parras de la Fuente, Piedras Negras, Ramos Arizpe, Saltillo, San Buenaventura, Torreón, Villa Unión y Zaragoza.

y Zaragoza. Cuatro de estos municipios se encuentran en la región centro, que es dominada por la ciudad de Monclova y por la producción siderúrgica y metalúrgica.⁷

En los municipios donde no hay una votación constante por uno de los partidos de oposición, el PRI ha demostrado una capacidad de recuperación real, si la contrastamos con la recuperación total que encontramos en el segundo tipo de elecciones.⁸ Hay otro grupo de municipios donde la tendencia de la votación del PRI es constante a la baja, pero que también es inestable en la medida que, como en el grupo inmediatamente anterior, el voto fluctúa mucho entre los distintos partidos de oposición. Por ello no está claro si se convertirán en casos en los que se afiance la oposición o si el PRI podrá recuperarse.⁹

Partidos y electores

Para intentar ofrecer una interpretación acerca del tipo de votación que se da en algunas de las regiones de Coahuila y descubrir ciertos indicadores sobre cómo votan los ciudadanos, consideramos también los datos de las elecciones estatales y federales. En primer lugar, vale la pena anotar que cuando revisamos el conjunto de las elecciones de la década de los ochenta percibimos lo que han mencionado la mayoría de los analistas de las elecciones en México, que el porcentaje de votos que obtiene el PRI baja constante e inexorablemente. Como vimos en la discusión anterior, es posible que este partido se recupere en algunos municipios, pero por lo menos en Coahuila y en la década pasa-

⁷ En la segunda parte de este trabajo nos abocaremos a discutir el caso específico de esta región, donde se ubica Altos Hornos de México y otras empresas metalúrgicas. Este caso es interesante porque se presenta una clara votación obrera por el PAN, por un partido que “teóricamente” no responde a los intereses obreros. Es más interesante aún porque la relación entre el PAN y los obreros de Monclova se dio en un momento en que el sindicato de AHMSA se encontraba en poder de una línea de izquierda maoísta y porque la votación por el PAN no sólo sobrevivió a la recuperación de la sección siderúrgica por parte del sindicalismo oficialista, sino todavía más sorprendentemente, al auge del neocardenismo.

⁸ Estos municipios son: Allende, Cuatro Ciénegas, Frontera, Matamoros y Múzquiz.

⁹ En Acuña, Castaños, Parras, Ramos Arizpe y Saltillo.

da, eso fue una excepción; en las elecciones federales de 1988, cae al nivel más bajo de votación de la década.¹⁰

Por su parte, la votación por el Partido Acción Nacional va ascendiendo hasta 1987 cuando, a raíz de la recuperación del PRI, desciende a los niveles de principios de la década. Lo interesante es que, abstrayendo la manera como se dio esa recuperación del PRI, el PAN no haya experimentado una merma todavía mayor ante el fenómeno del cardenismo en 1988.

Este breve y sencillo primer acercamiento a las elecciones nos plantea más preguntas que respuestas; intentemos interpretar los resultados. Contamos con tres distintas hipótesis: 1) la votación se da con base en el corporativismo o en subculturas partidarias; 2) la votación está determinada por una subcultura electoral de oposición anti PRI, que busca un partido o un personaje que la encarne, y 3) la votación se fundamenta en intereses o, por lo menos parcialmente, en proyectos, y no sólo en función de una reacción de oposición o de defensa.

De acuerdo con la primera hipótesis, la pérdida de porcentaje de votos del PRI en 1984 y 1985 se debió al relajamiento de su capacidad de control, y la recuperación de 1987 estuvo basada en la reactivación de esta capacidad. Lo que sucedió en la elección de 1988 es que el electorado de este partido se "vació" hacia el neocardenismo, siguiendo la misma lógica corporativa. Se complementaría la comprobación si el neocardenismo tuviera, además, fuerza electoral en aquellos lugares en los cuales existía anteriormente un voto, una subcultura electoral favorable al PST o al PARM, que se trasladaría al FDN cuando se estableció la alianza electoral. De acuerdo con esta hipótesis, el electorado del PAN tendría que haberse mantenido inalterado, aunque habría alcanzado el límite de sus posibilidades de votación, definido por los sectores de clase media y empresarial no integrados al sistema corporativo.

La segunda hipótesis está fundada, en gran medida, en el presupuesto de que continúa erosionándose la legitimidad del PRI, de que sigue creciendo la subcultura antipriista; la merma

¹⁰ Si analizamos los datos de las elecciones para diputados locales, notamos que el deterioro constante de la votación por el PRI se presenta en siete de los doce distritos electorales del estado. En los otros cinco existe una leve recuperación en 1985 y en 1988; sólo en uno de los dos distritos que tienen como cabecera a Saltillo encontramos una leve recuperación tanto en 1985 como en 1988.

constante de los votos del PRI es solamente frenada, entre 1985 y 1987, por medio del fraude. Esto significaría que el voto panista siguió siendo un voto de castigo, y el PAN una especie de “frente” en contra del PRI, un partido *catch-all*. El neocardenismo también forma parte de esta subcultura de oposición; atrae a los electores que se sienten amenazados por el proyecto de modernización económica, así como a los votantes que se sienten atraídos por la figura de Cárdenas para expresar su descontento.

La tercera hipótesis implica que el voto representa ciertos intereses o proyectos. La votación por el PRI es cada vez menos corporativa, logra convencer a sus electores escogiendo mejor a sus candidatos; es real la recuperación de la votación priista en 1987 en Monclova y en Piedras Negras (así como en otros lugares del país, como Chihuahua). Por su parte, el PAN estabiliza su votación en ciertas localidades, ya sea porque representa los intereses y el proyecto de las clases medias o empresariales, o porque, en el caso de los obreros, defiende la autonomía de su sindicato ante el aparato corporativo del SNTMMSRM o alguna otra central obrera. Por último, la votación por el cardenismo no estaría basada exclusivamente en una actitud defensiva o en la personalidad y carisma de su candidato, sino porque representa un canal más adecuado a los intereses y al proyecto de los electores que abandonan tanto al PRI como al PAN. Según esta hipótesis, se estaría inaugurando un sistema partidista y, en general, un sistema político radicalmente distinto al que ha existido en México —y en la mayoría de los países de América Latina— donde, como plantea Touraine, el sistema institucional no refleja a las fuerzas sociales o económicas, manteniendo ante ellas una gran autonomía.

Veamos si existen indicadores para otorgar un peso distinto a estas hipótesis en cada una de las regiones del estado.¹¹ Uno de los indicadores que va en contra de la primera hipótesis es que el neocardenismo no impacta de manera importante en los distritos en los que el PRI era más fuerte, sino que, por el con-

¹¹ Además de las votaciones municipales, analizaré las que se llevaron a cabo para elegir diputados locales, las cuales, con excepción de la elección de 1982, tuvieron lugar al mismo tiempo que las elecciones federales de 1985 y 1988. Estos datos tienen la gran ventaja de que se trata de elecciones locales que se llevan a cabo en 1988.

trario, se presenta con más fuerza ahí donde la tendencia de la votación por este último ha ido constantemente a la baja: por ejemplo, los dos distritos de Torreón, además de los de San Pedro y Matamoros, ubicados en la región de La Laguna. En estos distritos el neocardenismo logra aglutinar una oposición preexistente, inclinada hacia el PAN, que era el único espacio de oposición que existía en 1985; esto se ve con claridad en el caso de los distritos de San Pedro y de Matamoros; en 1985 el PAN tenía el 16 y el 19% de la votación, respectivamente, en 1988 prácticamente desaparece.¹²

La explicación de este fenómeno podría deberse tanto a la segunda como a la tercera de nuestras hipótesis. Seguramente ambas son parcialmente correctas: se presenta tanto un voto por una personalidad que encarna a la oposición, como el hecho de que los ejidatarios de La Laguna ven en el neocardenismo una oposición más congruente con sus principios que el PAN y una opción más clara frente a un PRI que está dejando atrás sus principios nacional-revolucionarios; lo que explica que se desgajen electores tanto del PRI como del PAN.

Otros dos distritos en los cuales el PRI registra una tendencia constante a la baja son los que tienen su cabecera en Saltillo y Parras. Hay dos diferencias entre estos distritos y los cuatro anteriores. En primer lugar, el nivel de votación por el PAN no sólo no baja, sino que se incrementa en 1988; la pérdida del PRI se explica tanto por una mayor votación por el PAN como por el FDN. En segundo lugar, mientras en la región lagunera la votación por el Frente es, sin duda, explicada por el fenómeno del neocardenismo, en los distritos de Saltillo y Parras debe ser asignada primordialmente a un electorado que antes había votado por el PST y por el PARM; estos votos se habían incrementado regularmente durante la década. En estos dos distritos, la votación por el FDN no puede ser explicada por el fenómeno del neocardenismo y por la figura de Cárdenas. Parece que nos en-

¹² El fenómeno es menos claro en los dos distritos de Torreón, donde existe un electorado compuesto por ejidatarios de La Laguna y población urbana; la merma del PAN, entre 1985 y 1988, es del 6 y del 10% de su votación. Esto puede interpretarse en el sentido de que mientras el voto de los ejidatarios se va en bloque al FDN —como fue el caso en los dos distritos anteriores—, entre la población urbana de Torreón las simpatías por el PAN se mantienen constantes.

contramos ante subculturas electorales del PST y del PARM.¹³ En efecto, la votación por el PAN no sólo no es mermada por la aparición del neocardenismo, sino que sigue su ascenso, probablemente entre la población de clase media (y en parte obrera) de Saltillo y Parras.

No obstante, la estabilidad del voto panista en algunas regiones, especialmente entre la población obrera (Monclova), sólo puede explicarse por los cambios del electorado de Acción Nacional que ha comenzado a rebasar su visión del partido como un frente antipriista y ve en éste el reflejo de sus intereses o se ha identificado con su proyecto. De hecho, la votación de los sectores de clase media por el PAN generalmente ha sido explicada con base en una combinación de antipriismo y afinidad con su proyecto. Más adelante intentaremos dar una explicación sobre por qué los obreros votan por el PAN; una votación que tampoco está exclusivamente basada en una subcultura de oposición, sino que está determinada por sus intereses.

En los distritos electorales de Sabinas, Cuatro Ciénegas y Múzquiz se encuentran los municipios industriales y urbanos que votan en gran proporción por el PAN en las elecciones por las alcaldías, los municipios carboníferos en donde funciona el corporativismo minero, así como algunos municipios rurales en los que el PRI no cuenta con ninguna oposición. A pesar de la heterogeneidad de los distritos, en Sabinas el PRI muestra una tendencia constante a la baja, en Múzquiz este partido logra recuperarse en 1985¹⁴ para caer en 1988, y en Cuatro Ciénegas logra mantener una votación cercana al 80% en las tres elecciones. Encontramos, por otro lado, una permanencia del voto por los partidos de oposición, aunque fluctúe entre diversas opciones

¹³ En 1982, en el distrito de Saltillo el PST tiene una votación considerable (tres veces mayor a la del PAN); en 1985, el PST y el PARM se reparten la votación de la oposición no panista y el PARM y el PPS se ubican en segundo lugar. La circunstancia del distrito de Parras es similar; en 1982, el PST era la principal oposición no panista, en 1985 el PARM obtiene más votos que el PST y en 1987 están en igualdad de circunstancias. Ramos Arizpe, un municipio que se encuentra parcialmente en estos dos distritos, tuvo una votación muy importante por el PARM durante toda la década; en 1984 incluso llega a la alcaldía y en 1987 aún conserva el 29.5% de los votos. En el municipio de Saltillo, el PARM obtiene el 32.5% de la votación en 1984, más del 2.8% del PAN.

¹⁴ De la misma manera en que lo hace en muchos municipios carboníferos y rurales en 1987.

partidistas. Por último, también es de notar que en los tres distritos la votación por el FDN es la más baja del estado.

En lo que se refiere al voto por la oposición, en Sabinas el PAN se mantiene constante, mientras que se incrementa ligeramente la votación no panista, que pasa de 3.2 a 7.7% del total.¹⁵ En Múzquiz, la votación por el PAN se incrementa en 1985, cuando el PRI se recupera, y baja en 1988 cuando el porcentaje del PRI retorna a los niveles de 1982; es decir, en este distrito, constituido por municipios carboníferos y rurales, el electorado de la oposición fluctúa entre el PAN y otros partidos, como el PARM; lo que permite que en ocasiones el PRI se recupere. En estos dos distritos no hay una votación constante por el PAN, ni un efecto importante del neocardenismo.¹⁶

En el tercero de los distritos de esta región central del estado, en Cuatro Ciénegas, el PRI mantiene su votación. La proporción del voto para los otros partidos, entre ellos el PAN, se mantiene alrededor de 20%. No obstante, la votación por éste va de 13 en 1982 a 15% en 1985, para bajar en 1988 a 9.5%. Indudablemente, en el último caso, la fluctuación se debe al efecto del neocardenismo; aunque podemos descontarlo como un fenómeno integrado a las tendencias que se presentan en el centro del estado, sino que se ubica en el contexto del impacto del movimiento cardenista en La Laguna.¹⁷

La forma como se han constituido los distritos electorales tiene por consecuencia que las tendencias electorales no sean claras; lo son mucho más en las elecciones municipales:¹⁸ los datos de las elecciones en Monclova, Frontera, San Buenaventura, Lamadrid y Nadadores demuestran que la votación por el PAN se mantiene constante. En esta zona industrial del centro del estado, el PAN se mantiene como el principal partido de

¹⁵ Si éste es un efecto del neocardenismo, es muy pequeño comparado con lo que sucedió en otras zonas del país y en la región lagunera de Coahuila.

¹⁶ De hecho, cuando se analiza la situación del municipio de Múzquiz se ve que el PAN pasa de tener casi el 49% en la votación para presidente municipal en 1981, a prácticamente desaparecer tres años después. Sólo el PARM se mantiene con fuerza en la cabecera distrital, en 1984 y 1987, con alrededor del 20% de los votos.

¹⁷ En efecto, este distrito se encuentra parcialmente en la región lagunera y en la región central.

¹⁸ Como en cualquier sistema electoral, la formación de los distritos corresponde al deseo de neutralizar regiones de oposición uniéndolas con regiones (minera y rurales) en las que el partido gobernante tiene el control.

oposición, a pesar de que en 1988 surgió una propuesta electoral que “teóricamente” podría haber atraído a los obreros industriales. Esta tendencia a la conservación del voto panista a pesar del gran desgaste que implicaron algunas de las coyunturas post-electorales, nos parece un indicador (en cierta medida, la prueba de fuego) de que este partido ha logrado superar el problema fundamental que mostró durante la década de los setenta y principios de los ochenta: su incapacidad de presentarse ante el electorado como algo más que antipriismo, de atraerlo afirmativamente.¹⁹

Si excluimos el segundo distrito de Saltillo (el XII), que no tiene mucho “misterio”,²⁰ nos encontramos con los distritos fronterizos de Acuña y Piedras Negras. En Acuña la votación por el PRI desciende en 1985, aunque logra recuperarse levemente en 1988; por su parte, la votación por el PAN, que iba en ascenso, desciende a la mitad en 1988. Esto no deja otra explicación que el fenómeno neocardenista, que en otros estados (Baja California) tiene impacto entre la población fronteriza. En el distrito de Piedras Negras sucede algo similar, aunque en este caso el PRI se recupera de manera importante; pasa de 56% en 1985 a 73% en 1988.²¹ En este mismo año, el PRI recu-

¹⁹ En los municipios en torno a Monclova, el PAN logró adoptar un discurso que apela a los intereses obreros, basado fundamentalmente en el derecho a la autonomía sindical y en el anticorporativismo. Pero lo que es aún más importante, según los datos electorales (aunque ello tendría que pasar la prueba de la duración y ser confirmado mediante una encuesta entre los trabajadores), es que la población de estos municipios se ha reconocido en este discurso y lo ha percibido no solamente como una táctica para la obtención de votos, sino como una de las características del partido a nivel local.

²⁰ Se trata probablemente de un distrito que concentra zonas rurales, lo que explica el hecho de que el PRI lo domine con tasas cercanas al 90% y que el PAN tenga poca fuerza; la oposición tiene alrededor del 10% y ha sido tradicionalmente del PST.

²¹ La oposición al PRI fue generada por diversas causas, entre otras por el cierre en 1983 de la planta siderúrgica en la localidad del mismo nombre; en 1984 el PAN incluso gana las elecciones municipales. La gran movilización que lleva, en varias ocasiones, al cierre del puente internacional y al incendio del palacio municipal en circunstancias poco claras (el PAN dice que fueron los mismos priistas que, desde dentro, quemaron el palacio municipal que habían ocupado días antes), no logró el reconocimiento del triunfo panista; sólo se llegó al acuerdo de instalar un cabildo con una representación paritaria de priistas y panistas. En 1987, según los datos oficiales, el voto panista a nivel municipal baja al 28, del 48% que obtuvo en 1984, en circunstancias donde ni la abstención, ni el padrón electoral incrementaron de manera considerable. Esto signi-

pera parte de la votación por el PAN, que baja de 32 a 17%; el fenómeno cardenista da cuenta de la otra mitad que pierde este partido.

De esta manera, lo que parece suceder en los dos distritos fronterizos es algo análogo a lo que propusimos en el caso de la comarca lagunera. Hay un traslado de votos del PRI y del PAN hacia el Frente. El fenómeno del neocardenismo es real, aunque no parece deberse a la tercera hipótesis, la de intereses y proyectos. No tenemos información que pueda confirmarlo, pero si extrapolamos de lo que sucedió en las elecciones de Baja California, donde la población que había votado por el neocardenismo en 1988 otorgó su voto al PAN un año después, podemos atribuir la votación de esta población fronteriza a una subcultura de oposición.

Para concluir, parece claro que la primera hipótesis que plantea la continuación del corporativismo es la que menos se sostiene; por lo menos se encuentra en franca decadencia, en crisis. Es cierto que todavía existe una reserva de control por parte del PRI en los municipios rurales y mineros, pero la tendencia de su participación en el voto es a la baja. Por otro lado, aunque en casos como el de Piedras Negras (y en otro contexto, el de Chihuahua en 1989) el PRI logra recuperarse ante la oposición, no contamos con los datos que permitan afirmar que exista una tendencia real a la recuperación del PRI; cuando ésta existe es parcial, solamente sucede en algunos municipios y, en general, las circunstancias en las que se presenta no son del todo claras: no es posible saber si se debe a un mejor manejo de sus candidatos, a un desgaste real del partido de oposición, o si el PRI utiliza una situación de desánimo para llevar a cabo un fraude. No obstante, parece poco probable que una recuperación real se deba a una refuncionalización del corporativismo; más bien tendría que basarse en la transformación del PRI en un partido que apele directamente a los ciudadanos, que logre desarmar a la oposición a través de nuevas formas de acción.²²

Por otra parte, es poco probable que el voto por el neocar-

ficó ya sea un desgaste real de la votación de la población o una manipulación de las elecciones que, por el mismo desgaste, no fue tan fuertemente impugnada en 1984.

²² Esto por razones discutidas ampliamente en otros trabajos y que no podemos repetir aquí, véase Ilán Bizberg, "La crisis del corporativismo mexicano", *Foro Internacional*, núm. 120, México, El Colegio de México, 1990.

denismo haya sido un voto corporativo. El Frente tuvo éxito en tres distintas circunstancias, sólo la primera de ellas podría asimilarse al corporativismo (aunque no lo sea), por estar basada en subculturas electorales. En estas circunstancias, el neocardenismo aprovechó una tendencia a la votación local por el PST o por el PARM. Es importante anotar que los votos que se obtienen de esta manera no sólo se atienen a la inestabilidad de este tipo de votación, que fluctúa fácilmente entre distintos partidos o es recuperada por el PRI, sino que ahí donde efectivamente existe una subcultura de oposición parmista o pesetista los votos por el PRD dependen de que estos últimos mantengan su alianza electoral.

La segunda circunstancia fue ahí donde existía un descontento que no encontraba sus canales "correctos", que se inclinó primero al PAN pero que se volcó al cardenismo cuando éste apareció; en Coahuila sucedió en La Laguna. Ni siquiera en el caso de las uniones de ejidos de esta región, pertenecientes al PRI y que se volcaron al Frente, se trató de un voto corporativo, más bien se debió a una combinación de la segunda y tercera hipótesis. Es necesario hacer notar que la votación en la comarca lagunera también es inestable, indicando que de la misma manera en que se convirtió en cardenista puede regresar al PRI si las fuentes de su descontento se resuelven; no obstante, tiene una mayor potencialidad de afianzamiento en la medida en que no está claro que el PRI pueda o quiera resolverlas.

La circunstancia del voto entre la población fronteriza se debe primordialmente a la segunda hipótesis. Está claro que es una población "sensible" a los partidos de oposición, donde existe una fuerte subcultura de voto antipriista, que parece difícilmente recuperable por el partido oficial. El voto es tan inestable como es la naturaleza misma de la población fronteriza; fue eso lo que demostró la elección de 1989 en Baja California. Por otro lado, la forma como votan depende mucho, por una parte, de la personalidad del candidato y, por la otra, de la consideración sobre la utilidad del voto. Es posible que entre esta población de la frontera exista un electorado que, a pesar de estar inmerso en una subcultura de oposición, responde a los candidatos con base en un cálculo racional de cuál de ellos tiene mayor posibilidad de triunfo.

Por último, el PAN parece capaz de conservar su fuerza electoral donde ya no es simplemente un espacio para que se ma-

nifieste cualquier oposición al PRI, sino donde ha demostrado que puede gobernar, como en los municipios industriales y urbanos del centro del estado. En esos casos, lo más perjudicial para el PAN no fue el neocardenismo, sino el desgaste de una lucha prolongada en la que no ha logrado un triunfo (o convencer a sus simpatizantes de que ha logrado algo), como en Piedras Negras (y Chihuahua). Creemos que este voto, no sólo por su estabilidad sino por su propio carácter, es una confirmación de nuestra tercera hipótesis. Lo anterior es válido si consideramos un concepto menos absoluto de proyecto, según el cual parecería claramente que el PAN estaría en contraposición con los intereses obreros, y pensamos entonces en una idea más restringida y modesta de proyecto: los intereses. En sus dos administraciones locales el PAN supo respetar, e incluso ensanchar, el espacio de autonomía que tenía el sindicato siderúrgico y recibir el apoyo de los obreros.

En síntesis, el análisis de las elecciones en el estado de Coahuila muestra que el control del Estado sobre el sistema político se está desgastando y que se está incrementando la autonomía de éste con respecto del Estado. El PRI no solamente está obteniendo cada vez menos proporción del voto, sino que, ante la creciente autonomía del sistema político, se debate entre seguir manteniéndose con base en el control de la reserva electoral que todavía responde al corporativismo, o convertirse en un verdadero partido político. El PRD, por su parte, está ante el reto de dejar de ser un amplio movimiento político y social, para convertirse en partido. Por último, el PAN es el único que, después de más de cincuenta años de historia, parece ser un partido que responde a un verdadero sistema partidista; parece estar transitando de ser un frente que aglutina el descontento en contra del gobierno, a convertirse en un partido que representa intereses e incluso proyectos; eso implica inevitablemente su tendencia a la burocratización y a la oligarquización, que ha sido mostrada en los recientes conflictos internos.

SEGUNDA PARTE

En la segunda parte de este trabajo profundizamos en algunas de las características que surgieron durante el análisis de los datos electorales. De éste se deducía que los puntos sobre los que

sería más interesante abocarse serían: 1) Puesto que la tendencia electoral del PRI va en descenso, sería importante estudiar la manera en la cual este partido recupera una localidad, analizar si se debe a su propia capacidad de recuperación, a los nuevos métodos de llevar a cabo la selección de sus candidatos, o si es porque la oposición se ha desgastado (esto excluye estudiar alguna votación en la que exista un fraude); uno de los lugares en los cuales sería más adecuado llevar a cabo este estudio sería Piedras Negras. 2) Ya que el PAN ha logrado instalarse duraderamente en una región del estado en la cual predominan las actividades industriales, sería interesante responder ¿cómo ha logrado hacerlo ante una población mayoritariamente obrera, a tal grado que ha resistido ser desplazado por el neocardenismo?; el caso más importante es el de Monclova. 3) Por último, está el fenómeno del neocardenismo, que en Coahuila ha destacado más claramente y con mayor posibilidad de estabilizarse en la región de La Laguna.

A pesar de que estos tres casos son los más adecuados para ser estudiados, no lo hemos podido hacer en su totalidad: no estudiamos ningún caso de recuperación priísta. La ausencia de este análisis no es tan grave en la medida en que todavía falta ver si la recuperación del PRI es un hecho real y duradero, una cuestión que será más importante estudiar en la década de los noventa; la pasada fue la década del auge de la oposición. Por otra parte, analizamos los casos de Monclova y de La Laguna con distintos grados de profundidad: el primero lo hemos estudiado de primera mano, el segundo sólo a distancia, a través de información hemerográfica y de estudios secundarios.

El Partido Acción Nacional en Monclova

Como una primera aproximación, podemos afirmar que la proyección del PAN hacia el poder local se dio como un intento por parte de la organización sindical local, las secciones 147 y 288 del SNTMMSRM, por llegar a una posición política desde la cual pudieran intervenir en la toma de decisiones que afectan a los obreros de Altos Hornos de México y a una comunidad que gira en torno a la producción metalúrgica. Pero también con el propósito de obtener un punto de apoyo para la pugna que existió entre 1976 y 1984, entre la sección local y el Comité Ejecutivo

General del sindicato minero. En este contexto, se concertó una alianza no explícita entre la Línea Proletaria y el Partido Acción Nacional, que se dio básicamente alrededor de una reivindicación autonomista.

En 1978, Acción Nacional obtuvo el triunfo al lanzar a Páez Falcón en contra de un candidato priista que era desconocido localmente y que incluso había sido impuesto a los propios priistas. En un segundo momento, en 1981, confluyeron los intereses de ambas organizaciones; la sección 147 reivindicaba la autonomía sindical frente a la dirección nacional del sindicato minero y tomó la decisión de no apoyar electoralmente al PRI; por su parte, el PAN postuló a un obrero siderúrgico a la alcaldía.

A pesar de que la sección 147 era la organización más importante en Monclova, ni aun en la época en la que estaba en poder de la corriente oficialista le correspondían los puestos políticos locales. En contraste con lo que sucede a nivel nacional en algunos de los municipios mineros donde los líderes del SNTMMSRM ocupan las posiciones políticas correspondientes a la fuerza local de su organización,²³ y a diferencia de las secciones del sindicato petrolero en las localidades en las que están ubicados, a la sección 147 no se le había otorgado la presidencia municipal de Monclova en más de 20 años.

El ayuntamiento de Monclova había estado en manos de la CNOP local, de un dirigente del SNTE, entre 1972 y 1975, y luego bajo un dirigente regional de la CTM entre 1975 y 1978. El PRI favorecía claramente a sus sectores a nivel local, mientras que a las organizaciones que no formaban parte estructural del PRI, como el sindicato minero, no les correspondían más que algunos puestos secundarios como las regidurías.

Durante el periodo en el que la sección siderúrgica estuvo en poder de la corriente oficialista, esta situación no fue cuestionada; es posible que fuera resuelta entre las direcciones nacionales del sindicato y del PRI. Algunos de los observadores locales más acuciosos proponían que éste había sido un grave error del partido oficial, que a fin de cuentas tuvo sus costos políticos. Pero todavía más onerosa fue la postura que adoptó ante las elecciones de 1978.

²³ Los puestos políticos de las regiones mineras y metalúrgicas del país están en manos de los dirigentes del SNTMMSRM y no de la CTM, que sólo agrupa a algunos de los sindicatos más pequeños de este sector.

En ese año, después del golpe que la Línea Proletaria sufrió al intentar impedir una nueva reelección de Napoleón Gómez Sada durante la XX Convención del SNTMMSRM, se propuso abandonar momentáneamente su postura apolítica y participar en las elecciones municipales. Esto lo explicaba desde dos puntos de vista: por un lado, tomar parte en los comicios era una forma de defender las pocas posiciones políticas que a nivel local tenía la sección, para que no cayeran en manos de los antiguos líderes oficialistas y evitar que desde ahí pudieran ejercer presión sobre el comité seccional. En un primer momento, se planteó participar en el partido oficial, no sólo porque era la única vía al poder político, sino porque así lo marcan los estatutos del sindicato minero. Además, según las tácticas de la Línea Proletaria, había que combatir al PRI desde dentro, como se estaba procediendo en el caso del sindicato nacional.

Por otro lado, se proponía que esta participación formara parte de una táctica para entablar una tregua con el Comité Ejecutivo General; se pensaba que el acercamiento con el PRI y el intento de la sección por lograr posiciones políticas, que por su fuerza local debían corresponderle “naturalmente”, serían bien vistos. Esto podría tener como consecuencia que el comité nacional dejara de atacar a la Línea Proletaria y que ésta lograra la suspensión de los castigos a sus dirigentes expulsados en la Convención de 1978 y pudiera eventualmente afianzarse a nivel local.

Al PRI se le proponía que la sección siderúrgica contaba con un alto grado de legitimidad por su apoyo a varias de las luchas de la comunidad. La Línea Proletaria tenía gran fuerza política local, no solamente porque contaba con el apoyo de los obreros y de sus familias, sino de los habitantes de algunas de las colonias en las que había hecho trabajo de base y desde las cuales había ascendido al poder seccional. Parecía que eso le aseguraba a la Línea Proletaria una buena carta de negociación con el PRI, especialmente cuando éste se encontraba desgastado a raíz del desempeño del presidente municipal saliente. Parecía estarse gestando una clásica acción de cooptación de un movimiento independiente; una muestra más de la capacidad de adaptación del sistema político. Sin embargo, “iniciadas las pláticas y planteadas nuestras pretensiones, siguieron las entrevistas en las cuales se nos advirtió del celo del gobierno en no soltar el control

político de los municipios, por lo que no aceptaron a ningún compañero de la sección como presidente".²⁴

El PRI parecía estar convencido de que podía ganar las elecciones sin la sección 147, especialmente en vista de que el partido Acción Nacional no tenía la capacidad de presentar candidatos en todos los municipios del estado y vigilar todas las casillas electorales.²⁵ La confianza del PRI estatal en sí mismo fue tal, que el gobernador Flores Tapia escogió a Monclova como el premio a uno de sus colaboradores; lo hizo incluso imponiéndose al PRI local.

En un primer momento, el descontento ante tal situación no fue tanto de la población como de los propios priistas. El PRI local se dividió y Acción Nacional vio en esta situación la oportunidad de arrebatárle la presidencia municipal.²⁶ Después de la anulación de las primeras elecciones en las cuales el PRI cometió irregularidades, se reconoció el triunfo del PAN. El PRI no sólo había perdido la alcaldía por haber intentado una imposición sobre sus propios cuadros locales,²⁷ sino que había desperdiciado la oportunidad de establecer una alianza con la sección 147 y renovar su control político sobre los obreros siderúrgicos en una situación políticamente ventajosa, cuando la Línea Proletaria se encontraba debilitada y buscaba el apoyo priista.

Tres años más tarde, Acción Nacional logró lo que el PRI no había sido capaz de hacer. Para 1980, ya no era el PRI el que garantizaba las posiciones políticas que los dirigentes de la sección siderúrgica habían buscado en 1978; se llegó entonces a un acuerdo para que el PAN postulara a un obrero que había militado en la Línea Proletaria, para la presidencia municipal. A pe-

²⁴ Volante de información, sección 147, 1978.

²⁵ Como lo plantea uno de los dirigentes del PAN, "Aquí en Coahuila éramos muy pocos panistas, no como en Nuevo León o en Chihuahua. Teníamos que concentrar nuestras energías en los municipios donde éramos más fuertes, en los que ya habíamos ganado alguna vez y donde no habían aceptado nuestro triunfo". Entrevista con Rosendo H. Burciaga, dirigente local del Partido Acción Nacional, 1984.

²⁶ "De improviso tuvimos mucha gente. El descontento era de los mismos priistas porque trajeron al candidato de Saltillo, era gente de Flores Tapia; en los periódicos habían salido desplegados para apoyar a algunos candidatos locales y luego mandan a uno de fuera." *Ibidem*.

²⁷ Como decían los panistas en Monclova, el que hizo más por su causa en Coahuila había sido Flores Tapia.

sar de que por los estatutos del sindicato minero la sección estaba obligada a apoyar al candidato oficial, se logró adoptar la resolución de no favorecer a ningún partido político.

El gran abstencionismo, característico de la política electoral mexicana, implica que un cambio, por mínimo que sea, tenga un efecto importante. El descontento de los priistas había sido crucial para decidir el curso de las elecciones de 1978. Cabe pensar que en 1981, con el PRI local en vía de reconstitución y con una personalidad local como candidato,²⁸ la decisión de la sección 147 de no apoyar a ningún partido había sido el elemento clave. En esas condiciones, el triunfo panista permitió que la sección 147 recuperara el poder local después de más de 20 años.

En 1978, el acceso del PAN al ayuntamiento monclovense no se diferencia de lo que ha sucedido en otros municipios del país. En sus inicios se debió básicamente a una respuesta en contra del partido oficial, más que de una votación en favor del partido de oposición. En este caso, el sufragio por el PAN era un voto a favor de un candidato que encarnaba la autonomía local frente a la imposición del aparato priista.

En los comicios siguientes, en 1981, tuvo una importancia especial el hecho de que Monclova esté en una situación de enclave industrial, lo que significa que a las imposiciones políticas y económicas del centro se añaden las de la dirección nacional del sindicato. Por una parte, mientras que —por lo menos hasta los proyectos de descentralización administrativa durante el sexenio de De la Madrid— AHMSA generaba elevados ingresos para la Federación, los recursos económicos que tenía la presidencia municipal no eran suficientes para impedir el rezago en la instalación de servicios públicos debido al acelerado crecimiento de la ciudad. Por otra parte, durante la década pasada en muchas organizaciones sindicales estallaron conflictos por reivindicar su autonomía; se luchaba porque la vida sindical interna y la negociación con la empresa no se subordinaran a los lineamientos de las direcciones nacionales de las grandes centrales y sindicatos nacionales de industria.

Por ello, el primer ayuntamiento panista fundamentó su legitimidad en obras de pavimentación, alumbrado público, construcción de pozos de agua potable y en una conducción honesta y eficiente de los recursos municipales, sin hacer énfasis en

²⁸ El dueño del periódico de mayor circulación en Monclova, *El Tiempo*.

la doctrina partidaria. Durante la segunda presidencia municipal, el PAN tuvo que tomar en cuenta el hecho de que Monclova era una ciudad netamente obrera y vincular la reivindicación de la autonomía local con la de la autonomía sindical.

Responder a estas circunstancias tuvo un alto costo para el PAN local y para la sección 147. En lo que a esta última se refiere, por vez primera en su historia, retando a los estatutos y a la dirección nacional del sindicato minero, se acordó no apoyar al PRI. Aunque esto facilitaba el voto obrero por el PAN, estaba claro que muchos de los obreros ya no votaban por el partido oficial aunque así se los dictara su asamblea. La consecuencia de esta decisión fue que un año después, en la convención del sindicato minero de 1982, se aplicara la cláusula de exclusión a los dirigentes de la Línea Proletaria que habían promovido tal medida.

Por su lado, aunque la nueva actitud del panismo local le permitió ganar las elecciones, tuvo como consecuencia un conflicto con el panismo tradicional. El 14 de diciembre de 1982, en una asamblea llevada a cabo por el comité distrital, se expulsó del partido a todos los miembros del cabildo de Monclova, incluyendo al presidente municipal. A pesar de que efectivamente existía un problema en lo que concernía al pago de la parte del sueldo que cedían como cuota al partido,²⁹ era claro que la expulsión (que nunca fue aceptada por el Comité Ejecutivo Nacional de Acción Nacional) no se debió a estas razones.

El conflicto se debía a la interpretación que se hacía de la doctrina oficial de Acción Nacional. Un sector del partido consideraba que aunque se había logrado el triunfo aglutinando votos en contra del PRI, si se quería llegar a consolidar al electorado en su favor, tendría que cambiar su actitud negativa basada en el antipriismo, por una actitud afirmativa capaz de proponer alternativas que fueran más allá de este rechazo. Iban en este mismo sentido declaraciones de algunos de los miembros del cabildo en el sentido de que "... había que crear un panismo de izquierda, pero con pensamientos más liberales"; pero sobre todo, era motivo de conflicto la postura de este sector del PAN frente a la sección siderúrgica.

En marzo de 1982, el comité municipal de Acción Nacional publicó un desplegado en el periódico local *Vanguardia*, a raíz

²⁹ *El Tiempo*, 15 de marzo de 1982.

de la aplicación de la cláusula de exclusión al secretario general de la sección 147 como represalia a su actitud ante las elecciones municipales. En este desplegado, el PAN asumía una posición que podría haber sido la de un partido de izquierda o de la propia Línea Proletaria:

El control de los sindicatos por parte del gobierno-partido-patrón es una de las bases contra la libertad del pueblo mexicano. Afirmamos que los sindicatos tienen como función esencial la defensa de los intereses de sus agremiados y no deben ser, de ninguna manera, medio de control político y electoral. En consecuencia, repudiamos, al "charro" Napoleón Gómez Sada, a la CTM y a las demás organizaciones del gobierno-patrón, que se han convertido en las cadenas ignominiosas que sojuzgan a la clase obrera. . . . El pueblo sabe que los pretextos utilizados para expulsar a los dirigentes de la sección 147 por los charros del UDO, esbirros del lacayo Gómez Sada, representan una cortina de humo que pretende encubrir la verdadera razón de la agresión. El pueblo sabe que la verdadera razón es la victoriosa marcha de los obreros en la lucha por la independencia sindical y su repudio total a los métodos políticos y electorales del gobierno-partido-patrón.

El sistema pretende debilitar a los trabajadores mediante provocaciones para empujarlos e imponerles condiciones en la inminente revisión salarial y en las elecciones locales. Ante esto, la respuesta de los trabajadores debe ser la organización combativa, aglutinándose en torno a una estrategia consecuente, repudiando a los condolidos gobiernistas que pretenden infiltrarse, y redoblando esfuerzos para acrecentar y cimentar la base social de la sección, apoyando los movimientos que se están dando en el terreno político y electoral.³⁰

Podría pensarse que las razones por las cuales el PAN establecía la alianza con la Línea Proletaria³¹ y postulaba a un obrero de AHMSA eran básicamente oportunistas. Pero también es cierto que el PAN siempre ha estado en contra del control cor-

³⁰ *Vanguardia*, 10 de marzo de 1982.

³¹ Parecía que existía una alianza *expresa* entre el PAN local y la Línea Proletaria; el triunfo panista fue interpretado por la sección sindical como su recuperación del poder municipal. "Con la victoria de un miembro de la sección 147 del sindicato minero, esta organización vuelve a obtener la alcaldía de Monclova después de 20 años, y sin duda traerá bastantes beneficios a los agremiados que constituyen el grueso de la población de la capital del acero." *Vanguardia*, 12 de agosto de 1981.

porativo de las organizaciones populares. No obstante, parecía que se iba más allá de lo que permitían las posiciones tradicionales del panismo.

Por otro lado, pronto salieron a la luz las contradicciones inherentes a tan disímil alianza, causadas por las expectativas de ambos sectores. La Línea Proletaria pensaba que el alcalde era su representante directo y no estaba dispuesta a compartir la presidencia con el panismo; esto llevó al rompimiento con el presidente municipal. Por su parte, el PAN tradicional reaccionó ante el intento de los nuevos panistas por cambiar el discurso y algunos de los planteamientos ideológicos para hacerlos más “atractivos” a los obreros; para ellos, estos cambios desvirtuaban el carácter del partido. Hay que recordar que los años setenta y ochenta constituyen la etapa en la que el PAN estaba inmerso en una pugna entre los que proponían que el partido tenía que seguir apelando a los ciudadanos que estaban conscientes de sus lineamientos doctrinarios y que votaban por él en forma razonada, y los nuevos panistas que percibían un electorado potencial creciente si el PAN aceptaba acentuar el antipriismo, a costa de hacer más vaga y flexible la doctrina partidista.³²

Pero también es cierto que el mismo crecimiento del partido implicaba cambios importantes. Los nuevos panistas creían que esto tendría que significar transformaciones importantes del partido, decían que “un partido del crecimiento del nuestro ha empezado a salir de ser un partido de cuadros a ser un partido de masas; el pueblo lo rebasó”. Por su parte, los tradicionalistas planteaban que “a partir de 1978 tenemos muchos panistas; como hemos crecido mucho, no hemos tenido tiempo de prepararlos, desconocen la doctrina y por ello faltan a la ideología del partido; lo que ha sucedido no es una división sino una consecuencia de la improvisación”.

Existía, además, el hecho de que las nuevas oportunidades de acceder a posiciones políticas empujaban hacia una creciente oligarquización y burocratización del partido. Paralelamente se presenta otra tendencia que conduce a conflictos, ya que el partido considera todo triunfo como suyo e intenta influir en las decisiones de los funcionarios electos; esta situación es especial-

³² Acerca de dicha cuestión en esta etapa, véase el artículo de Leticia Barraza e Ilán Bizberg, “El PAN y el régimen político mexicano”, *Foro Internacional*, núm. 123, El Colegio de México, enero-marzo de 1991.

mente conflictiva cuando el partido se apoya en una personalidad que cuenta con una fuerza independiente.

En el caso de Monclova, el triunfador de las elecciones de 1978, Páez Falcón, no quería aceptar la candidatura del PAN; decía que no quería meterse en problemas, pensaba que no ganaría y que de hacerlo no se le reconocería el triunfo. Pero una vez en la presidencia, formó un grupo con los miembros que lo habían llevado a la cabeza del ayuntamiento e intentó que uno de ellos fuera su sucesor. Así, cuando entró el presidente municipal del trienio 1981-1984 escogió su equipo de gobierno de entre un nuevo grupo, generando un conflicto que condujo a que se relegara a los panistas tradicionales.³³

En esta situación, el panismo tradicional, que tenía en su poder la maquinaria partidista, intentó imponer su línea. Trató de disolver el comité municipal con el argumento de que no tenía sentido su presencia en Monclova si, ahí mismo, existía un comité regional. El que el PAN estatal intentara violentar la autonomía local se constituyó en otro elemento de afinidad entre sindicalismo y panismo, aunque también dividió y debilitó al partido local, en especial ante la perspectiva de las elecciones de 1984. La situación se complicó aún más cuando la Línea Proletaria, que garantizaba la posición formalmente apolítica, fue desplazada de la dirección seccional. Una de las primeras medidas que tomó el nuevo comité ejecutivo local, en manos del oficialismo, fue comprometer a la asamblea de los obreros siderúrgicos a volver a participar dentro del partido oficial.³⁴

Además, el gobierno estatal fue muy hábil en el manejo de sus relaciones con el cabildo monclovense. El ejecutivo estatal bloqueó económica y políticamente a la primera de las administraciones municipales del PAN; se valió para ello de los métodos usuales como no entregar los recursos municipales a tiempo y utilizar a la CTM y a la CROC para entorpecer la vida municipal. Fueron muy frecuentes las suspensiones del suministro de energía eléctrica por falta de pago de cuotas o porque el gobierno estatal se demoraba en mandar las asignaciones correspondien-

³³ En ese momento, el alcalde llegó a considerar a la Línea Proletaria como una fuerza que podía darle autonomía con respecto al PAN, aunque después del rompimiento con la Línea no tuvo más remedio que apoyarse en el partido que lo había llevado a la presidencia.

³⁴ *Vanguardia*, 8 de junio de 1984.

tes, las huelgas de los trabajadores municipales y de la policía demandando aumentos salariales, y los bloqueos de las principales calles de Monclova por los camioneros croquistas o los habitantes de las colonias marginadas de la ciudad para exigir licencias que el gobierno municipal no podía otorgar. Ante la segunda de las administraciones, de cara a los intentos impositivistas del propio PAN, el gobierno estatal se preocupó más por respetar la autonomía local.³⁵

Este panorama parecía comprometer el éxito del PAN en los comicios de 1984. Aunque la votación por el PAN se mantuvo prácticamente al mismo nivel que la del año anterior y se impidió la voluntad gubernamental de recuperar el municipio de Monclova, no se logró evitar que se anulara el triunfo del PAN, que como los anteriores estaba basado en márgenes muy estrechos. A pesar de las movilizaciones (que también se dieron en Piedras Negras con saldos más violentos), Acción Nacional no obtuvo más que una participación paritaria en el ayuntamiento. Tres años después, en 1987, el gobierno ni siquiera reconoció las irregularidades del proceso electoral, el PRI no tuvo siquiera que compartir el ayuntamiento.

Pero más importante aún que determinar si en efecto ganó o no el PAN, es conocer la capacidad de este partido para conservar su electorado. Hasta ese momento el PAN había demostrado incapacidad de atraer al electorado basado en algo más que el antipriismo, apelar positivamente a sus simpatizantes. Por eso, parecía inevitable que Acción Nacional siguiera creciendo con base en militantes y en un electorado que utilizaran al partido como un espacio (hasta 1988, prácticamente el único) para canalizar su descontento, a pesar de que tuvieran poca afinidad con sus lineamientos. De allí que los nuevos panistas reba-

³⁵ El hecho de que el gobierno estatal haya utilizado estas tácticas de manera más selectiva y, en general, que las relaciones entre el gobierno de Coahuila y la segunda administración municipal del PAN hayan sido mucho más cordiales, hicieron surgir suspicacias en el partido acerca de las intenciones de los nuevos panistas. Esto generó un desacuerdo adicional que giraba en torno a la actitud ante el gobierno federal y estatal. "Nosotros apoyamos la nacionalización de la banca, pero siempre y cuando dicha medida se lleve hasta sus últimas consecuencias, pero el comité local del PAN no ha entendido tal postura. Respecto a haber respaldado el primer informe del gobernador José de la Fuente Rodríguez, considero que es de orden, además de que el municipio siempre ha trabajado en forma coordinada con las autoridades estatales." *El Tiempo*, 16 de diciembre de 1982.

saran rápidamente a los viejos panistas e hicieran explotar al partido desde dentro.

El PAN seguiría siendo un partido en eclosión a menos de que lograra transformarse y adaptarse a su expansión. Tendría que dejar de ser un partido *catch-all*, dejar de cubrir un espacio político vacío y ser utilizado por cualquier movimiento que intentara recuperar un poder de decisión autónomo. Tendría, en suma, que definirse a sí mismo y a su electorado de manera más afirmativa. Un ejemplo en este sentido fue el intento del panismo monclovense de adaptar su discurso y su política a una comunidad obrera y establecer una alianza con una corriente sindical.

El análisis de la primera parte de este trabajo nos permite afirmar que el PAN ha logrado estabilizar su votación (aunque siempre se han mantenido elevados niveles de abstencionismo), a pesar del desgaste que ha significado la lucha poselectoral y el auge del neocardenismo. Esto significa que el discurso anticorporativo y anticentralista que ha adoptado el PAN en Monclova ha sido reconocido no sólo como una táctica más para obtener votos, sino que se ha definido como uno de los rasgos distintivos del carácter del partido, por lo menos a nivel de la región. El que este discurso sea ahora mejor aceptado por todos los panistas, incluso por quienes en 1984 se consideraban como tradicionalistas, con ello el partido ha logrado allegarse un electorado permanente. Significa que el PAN ha logrado pasar a otra etapa de su historia en la cual dominan los nuevos panistas; su proyecto e ideología son lo suficientemente flexibles para que puedan enfatizarse algunos de sus puntos en función del público hacia el cual se dirige.

El fenómeno neocardenista en La Laguna

Al final de la primera parte propusimos que el neocardenismo en La Laguna estaba ocupando un espacio electoral anteriormente utilizado por el PAN, lo que nos llevó a proponer que este movimiento podría ser recuperado por el PRI si éste quería y podía resolver los problemas que habían dado lugar al descontento. Pero decir que por esta razón se trata de una oposición inestable es poco exacto; lo es tanto como cualquier nueva oposición, en especial cuando se trata de un partido que, como el

PRD, está en plena construcción. Esto significa que no sólo depende de la permanencia de los ejidatarios de La Laguna como electorado del PRD, sino de la capacidad propia de este partido para llegar a constituirse.

El afianzamiento de la votación por el PAN en Monclova se inició de la misma manera; de hecho, en este caso había un factor adicional de inestabilidad dado que la ideología y el proyecto del PAN cuadran más difícilmente con los intereses obreros. En contraste, en el caso de La Laguna existe un factor de encuentro ya que la ideología y el proyecto del neocardenismo coincide con los intereses y aspiraciones de los ejidatarios; el potencial de estabilización del voto de los ejidatarios por el PRD existe y es, incluso, mayor que el de los otros sectores de la población del estado que votaron por él.

El FDN en La Laguna encontró un movimiento de contestación enraizado en un conflicto similar al que surgió entre el grupo de obreros siderúrgicos y el poder local. Por otra parte, la oposición en el interior del sindicato minero, en contra de la imposición corporativa y en favor de la autonomía de las secciones de cara a la dirección nacional, se imbrica con una postura del PAN que se define como antipriista y —en el norte del país— como anticentralista.

A pesar de las similitudes, el descontento de los ejidatarios de La Laguna tuvo más dificultad para emerger abiertamente como oposición política ya que, en primer lugar, éstos son más dependientes del Estado y, por extensión, del PRI, que los obreros de la planta siderúrgica. En segundo, a pesar de la homogeneidad de su situación como asalariados del Estado, están más divididos entre sí, no están englobados —más que formalmente— en una misma organización. Es por ello por lo que para unirlos con el objeto de expresar su descontento requirieron de un imán más fuerte, derivado de una atracción más carismática y simbólica que racional.

Como lo propone Martínez Saldaña, el poder político en los municipios laguneros, que estuvo en manos de las organizaciones y dirigentes ejidales después del reparto cardenista de 1936, les fue arrebatado en la época de Miguel Alemán y entregado a otros sectores.³⁶ A esto se añade que las otras instituciones con

³⁶ “Las instituciones como la presidencia municipal, el partido oficial, empresas ejidales, los comités regionales campesinos, fueron ocupados en un

las que tienen que ver los ejidatarios se encuentran en manos de una burocracia con la cual se entienden cada vez peor. De hecho, estos organismos determinan prácticamente toda la vida de los ejidatarios, al grado de que éstos se han convertido en asalariados de la banca estatal; esta última no sólo controla los niveles de intereses que les cobra de sus deudas permanentes y el precio de sus cosechas, sino que les adelanta semanalmente parte de sus ganancias, en lo que constituye *de facto* una especie de salario.

Pero antes de describir esta segunda característica de la relación de los ejidatarios con el Estado, que los convierte en proletariado agrario, sigamos con la discusión sobre el reparto del poder político. La contraparte de despojar a las organizaciones ejidales del poder municipal fue su pulverización, que facilitó que no pudieran oponerse a esta situación. En primer lugar, además de los 300 ejidos fundadores, posteriormente se crearon otros 300, de los cuales sólo el 10% sigue conservando formas de organización colectiva. Por otra parte “[. . .] la desorganización se dio a partir de 1940 [cuando] se aprobó la división de sectores y se incrementó cuando se autorizó la formación de grupos solidarios y, así, en 300 ejidos se formaron 3 000 grupos”.³⁷ Este proceso de división se dio, en principio, por razones económicas —para facilitar la obtención de crédito y con el objeto de capitalizar a los ejidos— y se ajustó a las distintas políticas agrarias de los gobiernos que se sucedieron. El resultado fue que:

[. . .] en 50 años, los ejidos se han dividido en grupos solidarios, en clientelas políticas y económicas. Así cualquier ejido cuenta con una sociedad colectiva, iniciada en la época de Cárdenas, en sectores ejidales nacidos desde la época de Ávila Camacho, con grupos solidarios auspiciados por la política de Miguel Alemán y Ruiz Cortines, y con empresas ejidales surgidas de la política colectivis-

principio por campesinos surgidos de la organización colectiva del movimiento de 1936. A partir de esa fecha se constituyen en líderes ejidales. Éstos ocuparon cargos políticos hasta 1946 cuando el presidente Miguel Alemán les arrebató la representatividad campesina y se la dio a [. . .] la Confederación Nacional de Organizaciones Populares y a la CTM. . .”, Tomás Martínez Saldaña, “Municipio y ejido en México”, en Brigitte Boehm de Lameiras (comp.), *El municipio en México*, México, El Colegio de Michoacán, 1987, p. 341.

³⁷ *Ibidem*, p. 342.

ta de Echeverría. A esta división se añadieron las clientelas derivadas del crédito obtenido del Banco Ejidal, Banco Agrario, Banco Agropecuario, que en 1975 se fusionan y conforman el Banco Rural, así como las clientelas subordinadas al crédito refaccionario particular de empresas como la Anderson Clayton, las empresas Longoria, los Hermanos Esteve y muchos capitalistas privados.³⁸

Esto condujo a que se multiplicaran los líderes y, por ende, las clientelas, y a que la organización ejidal, que es mayoritariamente la CNC, se haya debilitado profundamente. Pero al mismo tiempo que se dio el despojo del poder político, la atomización política, el enmarañamiento y la superposición de las distintas clientelas políticas y económicas que han dificultado cualquier acción conjunta, se dio el proceso contrario, netamente económico, mediante el cual se homogeneizó la situación de los ejidatarios. Como lo plantea Hernández Corichi, éstos

[...] ya no ejercen ningún control sobre sus recursos naturales. Todo está previamente determinado en el ciclo productivo, que se controla económica y técnicamente por el plan de operaciones que determinan básicamente el Banrural y la SARH. El ciclo productivo, que comprende la preparación del terreno, siembra y fertilización, labores de cultivo, riego, control de plagas y enfermedades, y pizca, incorpora conjuntamente un paquete tecnológico de insumos y maquinaria. El ejidatario, por lo tanto, no tiene ninguna posibilidad de decisión sobre cuándo sembrar, cuánta semilla utilizar, qué método de siembra elegir, cuándo y con qué producto controlar determinada plaga, cuánto y cuál producto aplicar en la fertilización.³⁹

Pero no sólo se ha establecido una relación paternalista entre el Estado y el ejidatario, que lo ha despojado totalmente de cualquier capacidad de decisión, sino que, además, el proceso es tan complejo y extenso —incluye aproximadamente 40 000 ejidatarios— y tan centralizado por la burocracia, que lleva a déficit graves de eficiencia. El círculo vicioso es connatural a este tipo de situación: existen frecuentes errores y omisiones que hacen poco eficiente la producción, lo que a su vez implica que los

³⁸ *Ibidem*, p. 344.

³⁹ Avelino Hernández Corichi, *Los cambios y procesos en el agro en la Comarca Lagunera (1936-1986)*, México, Universidad Autónoma de Coahuila, s/f, p. 58.

ejidatarios no sean capaces de pagar las deudas que han contraído con el banco, que tengan entonces que endeudarse aún más, y que crezca todavía más su dependencia. Todo esto se traduce en un descontento constante y, en ciertos momentos, en conflictos abiertos en contra del aparato burocrático.

La situación se resume en una relación en la cual el Estado, de hecho el Banrural, les “[...] paga a los ejidatarios en forma semanal, a cuenta de sus ganancias, exactamente como sus salarios [...] al Banrural se le considera como un patrón”.⁴⁰ Esto sucede tanto a los algodoneros (32 568) como a los estableros y a los productores de forrajes (3 432 y 2 098), integrados a la producción de leche, que fue la alternativa para los pequeños propietarios privados y ganaderos cuando se dio la crisis de los precios del algodón durante los años cincuenta.⁴¹ En realidad, la única diferencia entre estos dos tipos de ejidatarios es que los salarios son más elevados en la producción de leche o forrajes.

No es de extrañar que tal estructura burocrática no solamente sea poco eficiente, sino que conduzca a la corrupción. En una interpretación muy simplista, la revista *Proceso* explica la totalidad del auge del neocardenismo en La Laguna con base en ella. En el caso coyuntural de la cosecha de algodón de 1987, menciona que el costo del algodón se había calculado originalmente en cierta cantidad y, con base en ésta, se habían establecido los pagos. Unos meses más tarde, cuando se vendió, el precio había aumentado y los ejidatarios exigían que se les pagara la diferencia.⁴²

⁴⁰ *Ibidem*, p. 57.

⁴¹ No todos los ejidatarios pueden convertirse en estableros o forrajeros, se necesita para ello un pozo, lo que, a su vez, requiere de un crédito que es generalmente otorgado por el Banrural; además de otros créditos que a fin de cuentas dejan al ejidatario en la misma situación de dependencia de cara a la burocracia estatal.

⁴² Un desplegado reproducido por *Proceso* decía sobre el particular lo siguiente: “Se ha dicho que con el sistema de ventas impuesto por el Banrural y su camarilla de líderes se pretendía eliminar coyotes, pues ahora son unos verdaderos lobos a quienes se les venden nuestras cosechas, ya que ni siquiera sabemos que sean textileros, sino simples intermediarios que acaparan el algodón ejidal a precio de miseria y lo van comercializando después de mucho especular. Por ejemplo, están surtiendo al mercado, a textileros y a casas compradoras a 77 000 y a 80 000 y todavía pretenden liquidarnos a 38 500”. Salvador Corro, “Los odios creados por Banrural determinan actitudes políticas en La Laguna”, *Proceso*, México, 22 de febrero de 1988.

El gerente de Banrural, Grosso Montemayor, explicaba que “[...] los compradores obtuvieron una utilidad fuerte, pues luego de adquirir la cosecha de los algodonereros de La Laguna, la vendieron más adelante, debido a que hubo poca distribución de fibra y en esa operación obtuvieron muy buenas utilidades”.⁴³ Aunque en este caso particular pudiera no haber corrupción en la cual estuviera involucrado Banrural, sino un efecto del mercado, nadie lo creería y la responsabilidad de lo sucedido se la achacarían a esta institución. Ya en 1986 se había presentado la misma circunstancia. Además, dada la tradición de corrupción que ha existido en La Laguna, no era de extrañar que se hubiera repetido; los estudiosos de esta región han descrito las diversas maneras de defraudar a los ejidatarios, una de las más frecuentes sucede en las despepitadoras, donde se presenta el robo de pequeñas cantidades de algodón o se lo pesa mal.

Las primeras manifestaciones de la movilización que se dio después de las elecciones no fueron la ocupación de los palacios municipales, sino de las despepitadoras; eran ellas el símbolo más prístino del poder para los ejidatarios algodonereros. Por otra parte, como lo ha descrito Sennett,⁴⁴ la gran inestabilidad del poder paternalista reside en que como todo el poder está concentrado en este último, también recae en él toda la responsabilidad; de lo que va bien así como de lo que sale mal. En la medida en que las instituciones estatales dominan la vida de los ejidatarios, todo lo que suceda es de su incumbencia, esté o no bajo su control.

Pero aunque las causas estructurales y coyunturales del descontento son claras, de igual forma en que la miseria nunca ha podido explicar los movimientos sociales o las revoluciones, éstas no pueden dar nunca cuenta de que los habitantes de la región lagunera se hayan volcado por la oposición de la manera en que lo hicieron en 1988. No es fácil explicar que los ejidatarios se hayan atrevido a poner en juego sus intereses concretos y su dependencia del Estado y del PRI, y hayan decidido entregarse al neocardenismo.

Por otro lado, no hay duda de que algunos dirigentes de los ejidatarios apoyaron esta vía e influyeron en los demás, pero un

⁴³ *Ibidem.*

⁴⁴ Richard Sennett, *Autorité*, París, Fayard, 1982.

voto corporativo, ahora por la oposición, tampoco puede explicarlo todo; hubiera sido difícil orquestarlo en vista de lo que discutimos sobre la atomización del poder ejidal. Existía, además, un voto por la oposición panista y algunos líderes campesinos se acercaron al PAN para denunciar las irregularidades del Banrural.⁴⁵

De esta manera, el hecho de que en 1988, cuando Salinas de Gortari se presentó ante los habitantes de San Pedro éstos lo abuchearan e incluso apedrearán el camión en el que viajaba y, en contraste, aclamaran a Cárdenas y dieran masivamente su voto al FDN, tiene otras raíces. Como lo mencionamos brevemente al principio de esta sección, esta actitud puede ser explicada, en buena parte, por la atracción mítica que significaba la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas para los descendientes de los ejidatarios que habían recibido sus tierras de manos de otro Cárdenas. Sólo una figura carismática, el símbolo del caudillo que les había dado a sus antecesores su medio de sustento y que (según ellos) los gobiernos posteriores habían deformado hasta enajenarlo, podía aglutinar tan rápida, espontánea y totalmente a estos ejidatarios, tan divididos y tan dependientes del poder que ahora repudiaban. No tenemos datos fidedignos que pudieran confirmar esta hipótesis; existen algunas pocas afirmaciones que la sustentan parcialmente, como la del campesino que fue entrevistado en un mitin de Cárdenas, que decía que con él se resolverían todos sus problemas.⁴⁶

No obstante, es evidente que es difícil llegar a estabilizar un partido que surge con base en este tipo de expectativas; sería necesario transformarlas, institucionalizarlas. Pero es probable que en el camino, cualquier solución, por no ser tan “total”, desanime al electorado. Esto puede conducir tanto hacia actitu-

⁴⁵ En 1987, algunos ejidos —en forma aislada— se dirigieron al Partido Acción Nacional para que presentara una denuncia en la Cámara de Diputados. Pero es probable que, para la mayoría, estaba claro que una presión a través de los canales oficiales podía ser más efectivo, como lo había sido siempre.

⁴⁶ “El campesino, quien dijo no tener derechos agrarios y, por ende, carecer de tierras, informó que siempre ha estado tratando de que el PRI por medio de la CNC le auxilie a conseguir tierras para trabajar, pero nunca lo ha conseguido y lo más que ha logrado es que lo traigan de acarreado de un lado para otro y por eso mejor se pasó al PRD, pues se dio cuenta que a los integrantes de este partido sí les están solucionando todos sus problemas”, *El Siglo*, Torreón, 16 de febrero de 1990.

des apolíticas (que pueden ser incluso violentas), contrarias a aceptar cualquier tipo de institucionalización del movimiento, o puede llevar a una desmovilización en la medida en que el gobierno logre resolver algunos de los problemas más urgentes que aquejan a esta población.

APÉNDICE I

Regiones y municipios de Coahuila

Según el trabajo de Mario Valencia Hernández,⁴⁷ el estado de Coahuila se divide en seis regiones: la del Sureste, La Laguna, el Centro, la Carbonífera, la Frontera y la del Desierto. La región del Sureste comprende los municipios en torno a la ciudad de Saltillo, la capital del estado, cuya producción predominante es la manufactura de bienes de consumo duradero: electrodomésticos y automotriz. En esta ciudad destaca el grupo industrial del mismo nombre, que elabora productos de fundición para el transporte y artículos para el hogar. La ciudad de Saltillo es la segunda en importancia del estado, concentra alrededor del 18% del total de la población de la entidad, aunque por otra parte es la que crece más rápidamente: naturalmente a 2.3% —igual que las otras ciudades de la entidad—, pero es la ciudad que registra mayor migración, su crecimiento social es de 3.4%, casi el doble de las demás.

Como parte de esta región están los municipios colindantes a Saltillo: Ramos Arizpe, Arteaga, General Cepeda y Parras. En tres de estos municipios dominan las actividades urbanas.⁴⁸ En Ramos Arizpe (59% de la población vive en áreas consideradas rurales), la industria, el comercio y los servicios ocupan aproximadamente 50% de la PEA. Es precisamente en este municipio donde se han instalado las plantas automotrices de la General Motors y la Chrysler de México. Aunque en el munic-

⁴⁷ Mario Valencia Hernández, "Coahuila: los años de la crisis", *El Cotidiano*, núm. 33, México, Universidad Autónoma Metropolitana, 1990.

⁴⁸ Estos datos acerca de cada uno de los municipios han sido obtenidos del Centro Estatal de Estudios Municipales, *Los municipios de Coahuila*, Secretaría de Gobernación y Gobierno del Estado de Coahuila, 1984 (Enciclopedia de los Municipios de México).

pio de Parras alrededor del 35% de la PEA se ocupa en actividades agrícolas, las industriales ocupan 25%, y en total las actividades urbanas llegan a 40%. También domina la población que habita en zonas consideradas urbanas, cercana al 60 por ciento.

En esta región existen dos municipios que son predominantemente agrarios: Arteaga y General Cepeda. En ambos domina la población rural, que representa 80% en la primera y 100% en la segunda. En cada uno de estos municipios, la PEA que se dedica a la agricultura es de más de 50%, alcanzando 75% en General Cepeda. De esta manera, aunque hemos identificado a esta región como una sola, en realidad debe dividirse en dos: los municipios urbanos, en los que dominan las actividades industriales (Saltillo, Ramos Arizpe y, en cierta medida, Parras), y dos municipios rurales, que tienen más en común con los demás municipios rurales de la entidad que con los otros tres con los que formalmente constituyen una región.

Una segunda región es la constituida por La Laguna, la cual está por un lado dominada por la ciudad de Torreón, cuya población activa lleva a cabo actividades netamente urbanas; la PEA está dividida casi equitativamente entre industria, comercio y servicios. Por el otro, está la producción agrícola de La Laguna, dominada por el cultivo de algodón. De hecho, es interesante destacar que el propio municipio de Torreón está dividido en dos, una parte la constituye la ciudad y la otra está enclavada en La Laguna; las divide el municipio de Viezca. Este último también se dedica en parte a la producción de leche, básicamente en establos. La ciudad de Torreón es la más grande del estado, concentrando 40% de la población de la entidad.

Los cuatro municipios restantes que constituyen esta región son: Francisco I. Madero, San Pedro de las Colonias, Matamoros y Viezca. Estos municipios son netamente agrarios, dedicados primordialmente al cultivo del algodón. El municipio de San Pedro, en el cual la PEA dedicada a la agricultura constituye casi 60%, produce 60% del total de la producción de algodón de la cuenca lagunera. Los otros municipios también son importantes productores de algodón, donde alrededor de 50% de la PEA se dedica a actividades agrícolas.

La tercera de las regiones es la del centro, cuyo municipio eje es Monclova, donde está ubicada la planta Altos Hornos de México, la empresa siderúrgica más grande del país —la que, al momento de escribir estas líneas, todavía era de propiedad esta-

tal—, así como una serie de empresas metalúrgicas que utilizan la materia prima de AHMSA para la producción de manufacturas de acero. El municipio de Monclova es fundamentalmente industrial, más de 50% de su PEA está dedicada a esta actividad. Casi la totalidad de la población se ubica en el centro urbano.

Dos de los municipios que constituyen esta región comparan directamente las características de Monclova; es decir, ser industriales y netamente urbanos. Entre éstos se encuentra en primer lugar Frontera, donde la PEA también está ocupada de manera importante en la industria, con un 30%, mientras que la PEA en la agricultura es de apenas 5%. De hecho, muchas de las empresas metalúrgicas están ubicadas indistintamente en Monclova, Frontera y Castaños, municipio que, a pesar de que tiene una mayor proporción de su PEA dedicada a la agricultura, también cuenta con un 22% de su población dedicada a la actividad industrial y su población es urbana en casi un 80 por ciento.

Aunque el municipio de San Buenaventura no depende de Monclova, no está ligado a su economía como lo está Frontera y en una menor proporción Castaños, y tampoco está ligado a la región carbonífera con la que colinda; comparte con las dos anteriores el hecho de que es importante la industria (28% de la PEA), así como las otras actividades urbanas, y que la PEA dedicada a la agricultura es baja. La población, además, se encuentra ubicada básicamente en centros urbanos en un 83 por ciento.

Los restantes municipios incluidos en esta región se dedican a actividades agrícolas. Nadadores en 35%, a pesar de que su población se clasifica en 60% como urbana. Abasolo, con una PEA de más de 70 en la agricultura, y donde 100% de los habitantes vive en áreas rurales. Escobedo y Candela también tienen a la mayoría de su PEA dedicada la agricultura, más de 70 en el primer caso y 40% en el segundo; 100% de los habitantes de ambos municipios viven en zonas consideradas como rurales. Los casos de Lamadrid y Sacramento son un poco especiales, en la medida en que a pesar de que su PEA también se dedica primordialmente al agro —50% en ambos casos—, su población se concentra en la cabecera municipal y se considera como netamente urbana.

La cuarta región es la carbonífera, la que tiene como su centro a Múzquiz, Sabinas y San Juan de Sabinas, en los cuales se

ubican los yacimientos carboníferos más importantes del país, con 54.3, 14.5 y 6.5% de la producción nacional de carbón, respectivamente. Los tres municipios concentran su población en más de 80% en zonas urbanas. En los dos restantes municipios que están considerados en esta región, Progreso y Juárez, la población se dedica a actividades agrícolas y habita en zonas rurales. Aunque en Progreso también existen yacimientos de carbón, y 33% de sus habitantes se dedica a actividades industriales —suponemos que en la minería—, y 100% habita en el área rural. Juárez sí es netamente agrícola, tanto en lo que se refiere a la ocupación como donde habita su población.

La quinta región está constituida por los municipios de la frontera. Existen tres municipios que están caracterizados por ser netamente fronterizos y donde la actividad es industrial (en parte debido a las maquiladoras) y urbana; éstos son Ciudad Acuña, Piedras Negras y Allende. El resto de la región tiene, de nueva cuenta, poco que ver con estos tres municipios y mucho más en común con los municipios rurales y agrícolas del resto del estado, por una parte y, por la otra, con los municipios mineros de la región considerada anteriormente.

En efecto, en Acuña 40% de la PEA se dedica a las actividades industriales y es en más de 90% urbana; en Piedras Negras 36% de la PEA está ocupada en actividades industriales y la población es en más de 95% urbana. Es en estos dos municipios donde están ubicadas la mayor parte de las maquiladoras del estado. En 1985, de los 10 648 habitantes de Coahuila ocupados en la industria maquiladora, 6 166 (57.9%) vivían en Ciudad Acuña y 4 482 (42.1%) en Piedras Negras.⁴⁹

Por su parte, los municipios de Morelos, Villa Unión, Zaragoza y Nava tienen poco que ver con los otros municipios de esta región y mucho más con la región carbonífera. En Nava, 31% de la PEA se dedica a la actividad industrial; ahí está la Minera Carbonífera Río Escondido, que produce 20.2% del total nacional de carbón. Su población es 67% urbana. Aunque los otros tres municipios que mencionamos cuentan con una PEA dedica-

⁴⁹ Norris C. Clement y Stephen Jenner, “La industria maquiladora de México y la economía de California”, en Bernardo González-Aréchiga y Rocío Barajas Escamilla (comps.), *Las maquiladoras. Ajuste estructural y desarrollo regional*, Tijuana, Baja California, El Colegio de la Frontera Norte, 1989, p. 125.

da a la agricultura que se ubica alrededor de 30%, tienen además 30% de su PEA dedicada a la industria, ya sea a la minería o a la transformación de minerales no metálicos. Además, la población de Villa Unión y de Zaragoza vive en más de 70% en centros considerados como urbanos. Los dos municipios restantes considerados en esta región: Guerrero y Jiménez, son netamente rurales y su población se dedica en más de 50% a la agricultura.

Está por último la región del desierto, cuya característica en común es una densidad de población muy baja: en los tres municipios que la constituyen, Ocampo, Sierra Mojada y Cuatro Ciénegas, la densidad es cercana o menor a un habitante por kilómetro cuadrado. Pero ahí terminan las coincidencias. En el caso de Ocampo, la población se dedica mayoritariamente a la agricultura y vive en centros considerados como rurales. En Sierra Mojada, una parte de la PEA se dedica a la extracción de hierro para AHMSA, en la mina Hércules, mientras que el resto de la población se dedica al campo. El caso de Cuatro Ciénegas es más parecido al de la región centro en lo que a ocupación de su población se refiere y en donde vive, puesto que 40% de su PEA se dedica a actividades industriales, comerciales y a los servicios, y más de dos terceras partes de su población vive en centros urbanos.

De esta manera, a pesar de que hemos intentado describir a la entidad siguiendo la regionalización que considera la mayoría de los autores, hemos visto que, en realidad, éstas no son de ninguna manera regiones homogéneas, con excepción de un núcleo en cada una de ellas. Tendría entonces más sentido restringir las regiones a estos núcleos y clasificar en una categoría no regional a los municipios agrícolas. Habría de esta manera una clasificación un poco diferente: 1) los municipios asociados a las dos grandes ciudades del estado: Torreón y Saltillo; 2) los municipios de La Laguna, primordialmente productores de algodón y, en un segundo lugar, de leche; 3) Monclova y los otros municipios industriales directamente vinculados; 4) los municipios ligados a la producción minera que están ubicados tanto en la región carbonífera, como en la fronteriza; 5) los municipios netamente fronterizos, industriales y urbanos, que reciben a las maquiladoras, y 6) por último, todos los municipios rurales restantes del estado, sin importar en qué región estén ubicados.

APÉNDICE II

CUADRO 1
Las elecciones en Coahuila (totales)
(porcentajes)

<i>Año</i>	<i>PRI</i>	<i>PAN</i>	<i>PST</i>	<i>PARM</i>	<i>PPS</i>	<i>PSUM</i>	<i>Abstenciones</i>
1981 ¹	79.5	16.	1.9	0.4	0.7	1.2	66.6
1981 ²	80.6	16.3	0.9	0.8	0.8	0.5	68.0
1982 ³	81.3	12.6	3.1	1.0	1.0	0.2	75.8
1984 ¹	66.3	23.4	2.3	6.5	0.4	0.7	60.7
1985 ³	68.4	22.3	3.4	2.0	0.5	1.3	68.3
1987 ¹	79.4	15.2	1.7	2.5	0.4	1.0**	63.2
1987 ²	81.9	14.6	2.5	n.d.	0.6	0.4**	60.5
1988 ³	56.9	16.5	14.7*	5.5	4.1	1.7**	64.1
1988 ⁴	52.6	14.9	16.0*	5.5	5.8	1.4**	60.9
1988 ⁵	56.9	15.4	14.5*	5.2	3.9	1.7**	62.6

Nota: no se incluyen los datos del PDM y del PRT

* En las elecciones de 1988 el PST participa como PFCRN.

** En las elecciones de 1981 se trata del PCM, en 1987 y 1988 el PSUM participa como PMS.

¹ Elecciones para presidentes municipales.

² Elecciones para gobernador.

³ Elecciones para diputados locales de mayoría relativa.

⁴ Elección presidencial.

⁵ Elección para diputados federales de mayoría relativa.

Fuentes: Registro Nacional de Electores, Comisión Federal Electoral.

CUADRO 2
Votación por el PRI en las elecciones para diputados locales
(porcentajes)

<i>Distritos electorales</i>	<i>1982</i>	<i>1985</i>	<i>1988</i>
I. Saltillo	73.9	61.3	58.5
II. Parras	94.2	79.9	70.1
III. Torreón	75.6	63.5	44.6
IV. Torreón	81.4	64.1	37.9
V. San Pedro	92.9	76.0	40.0
VI. Matamoros	92.1	72.1	38.7
VII. Sabinas	73.6	69.8	66.6
VIII. Cuatro Ciénegas	78.5	82.4	81.6
IX. Acuña	78.4	70.4	72.7

CUADRO 2 (continuación)

<i>Distritos electorales</i>	<i>1982</i>	<i>1985</i>	<i>1988</i>
X. Múzquiz	73.3	86.6	72.8
XI. Piedras Negras	68.9	56.3	72.8
XII. Saltillo	84.9	86.9	88.9

Fuentes: Registro Nacional de Electores, Comisión Federal Electoral.

CUADRO 3

Votación por el PAN en las elecciones para diputados locales (porcentajes)

<i>Distritos electorales</i>	<i>1982</i>	<i>1985</i>	<i>1988</i>
I. Saltillo	5.7	10.3	21.2
II. Parras	1.7	6.1	11.6
III. Torreón	20.9	33.9	24.1
IV. Torreón	15.9	31.6	25.8
V. San Pedro	4.4	16.3	1.0
VI. Matamoros	5.5	19.5	2.3
VII. Sabinas	26.1	25.8	25.6
VIII. Cuatro Ciénegas	13.1	15.4	9.5
IX. Acuña	21.5	28.2	12.8
X. Múzquiz	9.8	12.9	5.3
XI. Piedras Negras	28.3	32.4	17.4
XII. Saltillo	3.7	1.4	2.6

Fuentes: Registro Nacional de Electores, Comisión Federal Electoral.

CUADRO 4

Votación por los partidos que conforman el FDN en las elecciones para diputados locales de 1988 (porcentajes)

<i>Distritos electorales</i>	<i>1982</i>	<i>1985</i>	<i>1988</i>
I. Saltillo	19.3	25.1	19.0
II. Parras	4.0	13.5	17.9
III. Torreón	1.9	2.1	30.4
IV. Torreón	1.9	3.9	35.5
V. San Pedro	1.7	3.4	58.9
VI. Matamoros	1.8	7.9	58.6
VII. Sabinas	0.2	3.2	7.7

CUADRO 4 (continuación)

<i>Distritos electorales</i>	1982	1985	1988
VIII. Cuatro Ciénegas	8.2	2.1	8.9
IX. Acuña	0.1	1.1	14.4
X. Múzquiz	16.9	0.5	8.8
XI. Piedras Negras	1.4	1.7	9.8
XII. Saltillo	9.8	10.0	8.2

Fuentes: Registro Nacional de Electores, Comisión Federal Electoral.

CUADRO 5

Resultados de las elecciones federales de 1988
(porcentajes)

<i>Distrito</i>	PAN	PRI	PPS	PMS	PFCRN	PARM
Saltillo	21.2 (17.4)	53.2 (62.8)	7.0 (4.2)	1.3 (1.4)	11.3 (8.7)	3.7 (2.7)
Torreón (Cd.)	24.8 (26.8)	38.2 (42.2)	11.7 (8.2)	2.2 (2.8)	15.1 (12.4)	5.2 (4.7)
Monclova	32.3 (34.6)	56.2 (56.9)	4.5 (2.2)	0.9 (1.1)	3.7 (2.4)	1.7 (1.2)
Piedras Negras	11.3 (11.7)	69.2 (79.2)	2.7 (1.5)	0.5 (0.7)	4.2 (3.6)	2.7 (2.7)
Fontera	9.6 (9.9)	72.8 (73.8)	2.8 (2.1)	0.6 (0.7)	6.1 (5.1)	6.1 (5.4)
Torreón Cd. y Z.R.)	9.4 (11.1)	38.9 (41.2)	7.1 (5.3)	2.7 (3.1)	26.7 (25.6)	11.1 (11.3)
San Pedro	3.8 (3.7)	53.9 (55.7)	2.9 (2.2)	0.7 (0.7)	32.2 (30.5)	3.9 (4.0)

Nota: los datos fuera de paréntesis son los correspondientes a la elección para presidente; los que están entre paréntesis son los de diputados federales de mayoría relativa.

Fuentes: Registro Nacional de Electores, Comisión Federal Electoral.

CUADRO 6

Votación por el PRI en las elecciones municipales

<i>Municipios</i>	1981		1984		1987	
	<i>Abs.</i>	<i>%</i>	<i>Abs.</i>	<i>%</i>	<i>Abs.</i>	<i>%</i>
Abasolo	194	100.0	364	62.1	777	100.0
Acuña	5 876	73.2	4 838	54.6	4 729	59.5

CUADRO 6 (continuación)

<i>Municipios</i>	<i>1981</i>		<i>1984</i>		<i>1987</i>	
	<i>Abs.</i>	<i>%</i>	<i>Abs.</i>	<i>%</i>	<i>Abs.</i>	<i>%</i>
Allende	1 926	58.4	2 288	65.6	3 300	78.4
Arteaga	4 834	99.4	4 204	90.6	755	100.0
Candela	1 356	100.0	425	100.0	887	93.1
Castaños	3 326	97.7	2 902	68.5	2 418	55.3
Cuatro Ciénegas	765	56.0	1 085	67.2	1 708	79.7
Escobedo	369	100.0	650	65.9	884	98.0
Fco. I. Madero	7 368	95.9	7 516	66.1	15 992	91.7
Frontera	2 127	46.5	4 160	43.2	5 991	68.6
Gral. Cepeda	3 855	93.7	2 830	91.6	3 085	93.1
Guerrero	430	100.0	717	64.8	972	100.0
Hidalgo	338	100.0	337	100.0	225	100.0
Jiménez	2 994	96.0	2 876	100.0	3 002	100.0
Juárez	439	100.0	518	100.0	937	100.0
Lamadrid	316	59.1	427	59.4	458	59.1
Matamoros	8 939	82.6	6 706	72.8	12 556	89.1
Monclova	10 680	50.7	17 293	51.6	11 785	49.2
Morelos	2 103	100.0	2 204	100.0	2 074	86.6
Múzquiz	3 695	52.8	3 282	76.3	3 585	66.8
Nadadores	206	67.5	813	52.2	696	58.6
Nava	1 525	100.0	1 108	49.5	2 555	89.2
Ocampo	1 243	89.9	1 780	100.0	3 042	100.0
Parras	3 582	87.4	7 162	92.9	5 061	68.0
Piedras Negras	9 711	61.5	10 343	48.6	12 621	63.0
Progreso	994	100.0	512	83.7	1 869	100.0
Ramos Arizpe	4 165	97.3	2 938	47.8	3 283	65.7
Sabinas	12 182	100.0	12 311	99.4	15 249	94.2
Sacramento	202	100.0	380	73.4	887	100.0
Saltillo	28 772	87.5	25 155	55.4	31 418	82.9
San Buena ventura	962	85.1	2 001	81.2	2 038	82.6
San Juan de Sabinas	11 473	100.0	4 419	83.1	9 382	96.7
San Pedro	19 371	91.2	11 056	75.2	20 272	90.5
Sierra Mojada	293	74.9	438	67.9	453	100.0
Torreón	36 054	71.4	51 133	70.0	54 113	79.3
Viesca	6 003	98.7	5 433	96.3	9 298	98.2
Villa Unión	587	72.3	942	58.0	1 048	63.7
Zaragoza	1 575	74.1	1 569	61.1	2 089	83.8

Fuentes: Registro Nacional de Electores, Comisión Federal Electoral.

CUADRO 7

Votación por el PAN en las elecciones municipales

<i>Municipios</i>	<i>1981</i>		<i>1984</i>		<i>1987</i>	
	<i>Abs.</i>	<i>%</i>	<i>Abs.</i>	<i>%</i>	<i>Abs.</i>	<i>%</i>
Abasolo			22	37.9		
Acuña	809	10.1	3 873	43.7	519	6.5
Allende	1 373	41.6	1 200	34.4	909	21.6
Arteaga	29	0.6				
Candela						
Castaños	80	2.3	1 335	31.5	672	15.4
Cuatro Ciénegas	358	26.2	459	28.4	379	17.7
Escobedo			254	25.7	18	2.0
Fco. I. Madero	281	3.7	3 675	32.3	503	2.9
Frontera	1 609	35.2	4 624	48.1	2 491	28.5
Gral. Cepeda						
Guerrero			390	35.2		
Hidalgo						
Jiménez	103	3.3				
Juárez						
Lamadrid	219	40.9	292	40.6	317	40.9
Matamoros			797	8.6	777	5.5
Monclova	10 392	49.3	15 912	47.4	11 554	48.3
Morelos						
Múzquiz	2 618	37.4	182	4.2	555	10.3
Nadadores	44	14.4	649	41.7	441	37.1
Nava			1 130	50.5	306	10.8
Ocampo	139	10.1				
Parras	258	6.3	384	5.0	2 043	27.5
Piedras Negras	5 031	31.9	10 180	47.8	6 479	32.3
Progreso			32	52		
Ramos Arizpe					171	3.3
Sabinas						
Sacramento			13 826.6			
Saltillo	1 573	4.8	1 276	2.8	2 295	6.1
San Buena- ventura	168	14.9	444	18.0	390	15.8
San Juan de Sabinas					317	3.3
San Pedro	973	5.0	3 278	22.3	1 272	5.7
Sierra Mojada	95	24.3	208	32.1		
Torreón	13 643	27.0	19 831	27.2	12 671	18.6
Viesca						
Villa Unión	225	27.7	682	42.0	597	36.3
Zaragoza	550	25.9	955	37.2	401	16.2

Fuentes: Registro Nacional de Electores, Comisión Federal Electoral.

CUADRO 8

Votación por otros partidos* en las elecciones municipales

Municipios	1981			1984			1987		
	Abs.	%	Partido	Abs.	%	Partido	Abs.	%	Partido
Abasolo									
Acuña	1 342	16.7	PCM	71	0.8	PCM	2 618	32.9	PARM
Allende									
Arteaga				436	9.4	PST			
Candela							66	6.9	PARM
Castaños							1 265	28.9	PARM
Cuatro Ciénegas	244	17.8	PPS	64	4.0	PPS	57	2.7	PPS
Escobedo									
Fco. I. Madero	33	04.	PST	178	1.6	PST	820	4.7	PMS
Frontera	658	14.4	PST	578	6.0	PST	82	0.9	PST
Gral. Cepeda	259	6.3	PST	259	8.4	PST	213	6.4	PST
Guerrero									
Hidalgo									
Jiménez	16	05	PCM						
Juárez									
Lamadrid									
Matamoros	1 488	13.7	PST	1 374	14.9	PST	516	3.7	PMS
Monclova				168	0.5	PSUM	140	0.6	PMS
Morelos							218	9.1	PST
Múzquiz	679	9.7	PARM	826	19.2	PARM	1 211	22.6	PARM
Nadadores	55	1.8	PPS	96	6.2	PPS	51	4.3	PPS
Nava									
Ocampo				103	1.3	PST			
Parras	185	4.5	PST				320	4.3	PST
Piedras Negras	504	3.2	PCM	324	1.5	PARM	424	2.1	PST
Progreso				12	2.0	PST			
Ramos Arizpe	116	2.7	PST	3 175	51.6	PARM	1 523	29.5	PARM
Sabinas				69	0.6	PST	864	5.3	PST
Sacramento									
Saltillo	1 720	5.2	PST	14 784	32.5	PARM	2 797	7.4	PST
San Buena- ventura				18	0.7	PST	26	1.1	PST
San Juan de Sabinas				857	16.1	PARM			
San Pedro	560	2.9	PPS	186	11.3	PPS			
Sierra Mojada									
Torreón	263	0.5	PARM	635	0.9	PSUM	616	0.9	PMS
Viesca	82	1.3	PCM	124	2.2	PST	169	1.8	PMS
Villa Unión									
Zaragoza				42	1.6	PST			

Fuentes: Registro Nacional de Electores, Comisión Federal Electoral.

BAJA CALIFORNIA, UNA DÉCADA DE CAMBIO POLÍTICO

TONATIUH GUILLÉN LÓPEZ
El Colegio de la Frontera Norte

I. LA MECÁNICA DE LA POLÍTICA BAJACALIFORNIANA

El final de la década de los ochenta transformó sensiblemente el perfil político e institucional del estado de Baja California. Por vez primera en la historia del sistema político, una gubernatura es ocupada por un partido de oposición, a la vez que el congreso estatal ha dejado de ser controlado por la añeja burocracia política. En cuanto al poder judicial, el final de la década lo deja también con nuevas reglas que apuntan a fortalecer su independencia.

Las dos grandes transformaciones introducidas en la política regional a partir de las elecciones locales de 1989 pueden resumirse en lo siguiente: *a)* una redefinición de la estructura de gobierno, caracterizada ahora por una pluralidad de actores y de instancias institucionales que redefinen sus relaciones, y *b)* la progresiva debilitación y desintegración de la estructura corporativa, sobre todo —y hasta ahora, exclusivamente— de aquellas de sus formas con mayor dependencia regional. En el último caso, considerando a su representante típico en la entidad, el PRI, por el duro camino de la derrota electoral es ahora otra forma de organización, más cercana a un partido político. Vale hacer la aclaración que no se trata de procesos acabados, sino de transiciones en camino que todavía no expresan sus rasgos definitivos: se caracterizan más por aquello que ya no es, que por lo que están construyendo. Por lo menos en la entidad, no sin dificultades se está definiendo una estructura política inédita

en la historia moderna del país. En términos globales, el saldo de los ochenta reporta un considerable avance de la democracia y de la participación ciudadana; el tránsito de las reglas corporativas —el clientelismo, la negociación sectorial, el carácter plebiscitario de las elecciones— hacia las reglas del juego liberal, es un proceso en el que Baja California ha avanzado más que ningún otro estado, si bien no se trata todavía de una práctica consolidada.

Desde una perspectiva inmediata, las actuales condiciones políticas de Baja California fueron producto de las elecciones locales de 1989. En ellas ocurrió un masivo encuentro entre la población y las elecciones y, dentro de éstas, con el Partido Acción Nacional. Ese encuentro, que a estas alturas suena obvio, es sin embargo la última expresión de un complejo proceso de cambio social que por lo menos se remonta a principios de la década, sin excluir que su antecedente más importante fue la elección presidencial de 1988.

Detrás del planteamiento anterior se encuentra la idea de que el encuentro entre la población y las elecciones es una *construcción*, en el sentido estricto del término; más aún si consideramos que una característica central del sistema político ha sido el carácter plebiscitario del proceso electoral. Haciendo un análisis histórico de largo plazo, Lorenzo Meyer ha sistematizado este problema definiéndolo como la ausencia de tradición democrática en el país,¹ lo que implica dos cuestiones fundamentales, cuanto menos. En el terreno de la cultura política, que exista una concepción social de las elecciones en donde el contenido de éstas *no corresponde* a su contenido formal. En el terreno de la práctica política, implica que tanto desde la estructura gubernamental como desde importantes sectores de la población se actúe teniendo por eje a los supuestos de la negociación corporativa. La ausencia de tradición democrática es un concepto clave para comprender la relación entre la población y los partidos de oposición como una construcción, como un producto social de gran complejidad. Desde esta perspectiva, la década de los ochenta en Baja California nos muestra la historia reciente de ese proceso, los pasos más acabados de su encuentro.

Visto el problema con mayor detalle, ese encuentro consiste

¹ Lorenzo Meyer, "La democracia política: esperando a Godot", *Nexos*, 1986, núm. 100, pp. 39-46.

en un tránsito cultural que en su forma concreta puede definirse como una revaloración de las elecciones por la población, lo que entonces abre la pregunta sobre el proceso que motiva el cambio de concepción. Pudiera anticiparse que éste transcurre en dos niveles: en un plano abstracto, entendidas las elecciones y la democracia como valores en sí mismas; en un plano concreto, comprendidas como la *posibilidad inmediata* de “hacerlas reales”. En el plano abstracto, en donde ocurre una revaloración de las elecciones en general, el impulsor más importante del proceso de cambio ha sido la modernización del país —la “transición mexicana”, en los términos de Héctor Aguilar Camín—, que ha generado a los sectores sociales (clases medias, principalmente) a los espacios (las ciudades) y a la cultura portadora del nuevo proyecto democrático. Es de destacarse que la contradicción entre el contenido del proyecto y la práctica cotidiana se convierte en la posibilidad de acción social bajo una forma predeterminada: como oposición. Por las condiciones excluyentes del sistema político, el desarrollo de la tradición democrática equivale en gran medida al desarrollo del electorado de oposición, que entonces busca su vinculación con los partidos que en la coyuntura representen mejor esta tendencia.

Por otra parte, en el plano concreto, referido al horizonte del espacio cotidiano de la población, la revaloración de las elecciones es todavía un proceso más complejo que el transcurrido en la modificación de sus contenidos abstractos. Sobre todo porque implica la acción inmediata o su posibilidad, convertida además en voto opositor; supone además el enfrentamiento con los representantes directos de la burocracia política y la necesidad de la participación colectiva, organizada, por listar algunos elementos. Aún más, la revaloración concreta se dificulta porque conseguirla significa una distancia todavía mayor para aquellos estratos de la población marginados de los efectos de la modernización del país. En contraste, para los sectores partícipes de la modernización la distancia entre la concepción y la acción es menor, pero aun así se requiere el salto de la revaloración concreta.

La revaloración concreta de los procesos electorales puede entonces ser definida como la *construcción de la opción* partidista en la coyuntura, que a su vez, considerando el contexto de la extensa tradición no democrática, equivale al reconocimiento social de una cierta forma de ubicar un hueco, un espacio de fra-

gilidad o de excepción dentro de las reglas excluyentes del sistema político. Para llegar a concretarla no se requiere simplemente la oferta de los partidos de oposición, que las más de las veces ha estado ahí por años, como reiteradamente han experimentado el PAN y los partidos de izquierda. La construcción de la opción pasa por la sustancial modificación (o por una imagen de modificación) del aparato político y, junto con ella (o a causa de ella), de la difusión de la factibilidad del triunfo de la oposición, provocando una clara distinción de ese momento en relación con experiencias anteriores. En cuanto opción construida, la fuerza de oposición resultante posee rasgos destacadamente nuevos —o aparece como nueva—, lo mismo que la circunstancia de relativa debilidad del aparato político regional. En el caso bajacaliforniano —y en esto coincide con ejemplos que se extienden al resto del país— la construcción de la opción las más de las veces ha procedido de una ruptura de élite, ya sea en el interior de la burocracia política, ya sea proveniente de la élite empresarial, como ha ocurrido en los últimos años.

Los años ochenta en Baja California pueden ser comprendidos desde la óptica anterior, es decir, como una década que progresivamente muestra no solamente la consolidación de los elementos estructurales que definen el perfil moderno de su sociedad, sino que también muestra la consolidación del tránsito de la cultura política en los dos niveles antes expuestos. Considerando a los indicadores de urbanización, composición de la estructura social y los niveles de escolaridad de su población, Baja California destaca entre los estados beneficiarios de la modernización del país. Sin hacer una revisión detallada de la estadística social, en los indicadores básicos posiblemente sólo sea superado por el Distrito Federal. Junto con ese perfil social masivamente urbano y con una estructura que tiende a concentrarse en los estratos intermedios, no es difícil inferir la existencia de una estructura cultural que en lo político tienda hacia contenidos liberales. El tránsito de la tradición corporativa hacia la tradición democrática transcurrió junto con esa modernización, particularmente (sin exclusividad) a través del aparato escolar.²

² Una argumentación más detallada al respecto se encuentra en el ensayo del autor "The Social Bases of the PRI", *Mexico's Alternative Political Futures*, Wayne A. Cornelius, Judith Gentleman y Peter H. Smith (eds.), La Jolla, California, Center for U.S.-Mexican Studies, UCSD, 1989.

Considerando las particularidades de su estructura social, el perfil cultural de la entidad tiende a confirmar que ya se encuentra contenida la revaloración social de las elecciones, *pero de una manera abstracta*. Atendiendo a los elementos estructurales puede derivarse que el potencial de crítica política sea enorme, pero no necesariamente se infiere que se encuentre canalizado directamente hacia formas electorales o, por lo menos, no preocupado por ellas. Es más probable que se le encuentre en otros espacios, en la vida cotidiana, en los medios de comunicación (las tribunas públicas en la radio o en la prensa local) que orientado hacia formas partidistas, justamente debido a la desvaloración práctica en que se encuentran la competencia electoral y sus actores. El tránsito hacia la revaloración concreta es justamente el elemento más complejo, que evidentemente se encuentra facilitado si le antecede la revaloración abstracta.

En Baja California, la experiencia de la década —e incluso de años atrás— muestra la importancia de lo que aquí se ha denominado la “construcción de la opción” como el proceso decisivo en la revaloración concreta de la competencia electoral. Cuando ha ocurrido, el proceso transcurre de manera disímil a lo que ordinariamente han hecho los partidos de oposición: justamente, su rasgo dominante es la *ruptura con lo ordinario*. En los ochenta, la primera manifestación de ruptura con lo ordinario en los procesos electorales y su identificación de esta manera por la población (que a su vez implica un gran esfuerzo de comunicación) ocurrió en las elecciones municipales de Ensenada en 1980.

Después de la reforma electoral de 1977, contendieron por vez primera los partidos PCM y PST, promovidos por personalidades reconocidas localmente, quienes lograron una votación equiparable a la que tradicionalmente había obtenido el PAN (superándola, si incluimos los votos del PPS). En esa oportunidad no ocurrió —por lo menos según la estadística oficial— un incremento considerable en los votos de oposición, pero sí un importante reacomodo de estos votos, anticipando una conducta política que cobraría relevancia y generalización en la entidad en 1988 y 1989.

La construcción de la opción, considerando globalmente la experiencia del estado, no es algo que haya dependido directamente de la población como un movimiento de base y espontáneo, sino que ha procedido de sectores muy particulares. En pri-

mer término, han destacado las escisiones de la burocracia política; en segundo término, las escisiones del sector empresarial, si podemos llamar así la ruptura con las reglas previas de su relación con el Estado. En relación con la revaloración concreta del proceso electoral, las rupturas de élite han tenido el efecto de generar una imagen de realidad sobre la competencia partidista —asumiendo que no son “reales” por la distancia que establecen con su contenido nominal. Han logrado estimular un ambiente que invita al ejercicio efectivo de la ciudadanía, y ya no a contemplarla sólo en términos nominales. Un indicador de este proceso ha sido el crecimiento del electorado de oposición articulado a las coyunturas en donde han ocurrido las rupturas de élite. Limitándonos a la década de los ochenta, las encontramos particularmente en Mexicali y en Ensenada en 1983; en Ensenada en 1986 y, espectacularmente, en la entidad en 1988 y 1989.

Ahora bien ¿por qué las rupturas de élite y no otro tipo de eventos que efectivamente ocurren pero que no tienen repercusiones electorales? Tal vez la respuesta sea porque, primero, trastocan en alguna medida la imagen de inamovilidad del “destino priista” y, segundo, porque quienes rompen tienen un poderoso efecto de comunicación, ya sea porque se les conozca de antemano (David Ojeda en Ensenada en 1983, Cuauhtémoc Cárdenas), ya sea porque tienen la capacidad de darse a conocer (Ernesto Ruffo, 1986 y 1989) y de generar el ambiente de realidad para las elecciones.³ En todo caso, en la perspectiva de los electores, y particularmente en su revaloración concreta de las elecciones, las rupturas de élite han sido mecanismos eficientes de avance de la cultura política liberal. Pero no en todo momento y circunstancia, debido a la persistencia de los mecanismos corporativos, que siguen ahí enfrente del elector de oposición motivando un efecto contrario. Justo aquí destaca la *continuidad* en el estímulo de realidad electoral (factibilidad de realidad) como un factor fundamental en la experiencia de la década, particularmente para el actual gobernador del estado. En 1986, Ruffo recoge el efecto de realidad electoral provocado por

³ Que además es un ambiente que se ratifica y fortalece con los dispositivos de vigilancia del voto, que llegaron a ser verdaderamente espectaculares, como en Ensenada en 1986 y en el estado en 1989.

el triunfo de David Ojeda en 1983; y en 1989 retoma la reciente experiencia heredada del neocardenismo. En la perspectiva de las elecciones de 1983 y 1988, debe señalarse además que el ambiente de realidad no fue simplemente la difusión de una imagen de excepción, sino también la evidencia estadística de la derrota del partido oficial.

Por otra parte, la revaloración concreta y, con ella, la consolidación en forma práctica de la cultura liberal, ha sido un proceso desigual en el estado. En el contexto de la década, primero ocurre en Ensenada y Mexicali, y muy tardíamente en Tijuana (1988). A lo largo de estos años, Tijuana experimentó la gran dificultad de la construcción de la opción partidista: no ocurrieron las rupturas de élite, ni empresarial ni entre la burocracia política; y cuando ocurrieron fueron de un nivel menor. La ciudad fue durante la mayor parte de la década el típico caso de una cultura política liberal abstracta, que por largo tiempo no transitó hacia la revaloración concreta de las elecciones. Con este antecedente, puede comprenderse que Tijuana interiorizara experiencias ajenas de rupturas de élite, que no había sido capaz de generar internamente: el neocardenismo en 1988; la “ruffomanía”, en 1989. Por esta razón fue más espectacular que en los otros municipios el efecto del neocardenismo en el crecimiento de su electorado de oposición, lo mismo que su vuelco hacia el PAN al año siguiente.

Después de 1989 y el horizonte de cambios que promete, en Baja California se puede pasar de la revaloración concreta —que era esa elección, ese momento—, a la generalización de la experiencia. De consolidarse este tránsito, que en primera instancia depende de una profunda reforma en la legislación electoral, no sólo se modificaría radicalmente —por lo menos a nivel regional— al sistema político, sino que se generarían los elementos que también transformarían completamente a la cultura política. De la ciudadanía como excepción, a la ciudadanía como práctica asegurada. No sería el fin de las diferencias ni de los conflictos, pero nos permitiría discutir otro tipo de problemas.

A pesar de sus imprecisiones, la estadística electoral señala los periodos clave de tensión política en los cuatro municipios de la entidad, tanto en los ochenta como en la década anterior, mostrando a la vez los ciclos de la revaloración concreta y del surgimiento de opciones partidistas. La persistencia del perfil de oposición —como puede apreciarse en las gráficas anexas—

muestra por lo menos que entre el electorado existe una valoración franca de su papel en la competencia política y que, en consecuencia, los ciclos de movilización han dependido más de las características de la coyuntura (la valoración concreta). Ha destacado particularmente Ensenada, que desde 1983 ya no es gobernada por el PRI, y que además ha anticipado los cambios políticos en la entidad; y Mexicali, que desde mediados de los setenta ha mostrado un fuerte activismo opositor. En ambos casos se encuentran presentes las rupturas de élite como mecanismos decisivos en la participación electoral. En la primera ciudad, la ruptura se produjo originalmente en el interior de la burocracia política, y después se incorporó a ésta la del sector empresarial; en el segundo caso, la ruptura ocurrió en la relación del sector empresarial —parte importante de éste y no exclusivamente de los mayores capitales— con la burocracia regional. Con estos antecedentes del neopanismo bajacaliforniano, que se remontan a la década de los setenta en Mexicali, en sentido estricto puede considerársele un neopanismo “prematuro”, que entre otras cosas le ha permitido evitar los radicalismos de los empresarios que se vincularon al PAN motivados por la nacionalización de la banca. Y de la misma manera que existe un claro ejemplo de neopanismo pionero, también ha ocurrido aquí la consolidación de un neopanismo de “segunda generación”, más conciliador y pragmático, representado por Ernesto Ruffo, quien no hubiera encontrado eco en 1983. Dicho de otra forma, si bien tendencialmente se trata del mismo fenómeno, en la entidad no ha sido dominante el neopanismo clásico que conocimos en otros estados a partir de 1983.

De esta manera, el perfil ciudadano de oposición, la valoración abstracta de la competencia electoral y, por otra parte, la coyuntura de ruptura de élite, creadora de condiciones de excepción, han sido los componentes principales en los momentos más importantes de la lucha electoral en Baja California durante la década de los ochenta. Su encuentro más acabado ocurrió durante las elecciones de 1989, las que analizaremos con mayor detalle.

II. LAS ELECCIONES DE 1989

En Baja California, durante la última contienda electoral local se condensaron diversos aspectos de la vida nacional y regional

que se expresaron en un momento y bajo una forma determinada: las elecciones de 1989. Siguiendo esta perspectiva, la explicación de la política regional no recae exclusivamente en la competencia entre los partidos transcurrida durante el primer semestre de ese año, lo que inevitablemente nos remite, por lo menos, a las elecciones presidenciales pasadas y, adicionalmente, a otros cambios sociales no relacionados directamente con los procesos políticos. Por primera vez, después de haber sido considerado siempre espacio exclusivo de la burocracia política e instrumento fundamental de control regional, un gobierno estatal es conquistado por un partido de oposición. Más interesante resulta el caso tomando en cuenta que se trata de un estado fronterizo con Estados Unidos y, más todavía, de un estado con una economía en gran expansión y de creciente prioridad en el modelo económico de apertura comercial y de modernización industrial del país.⁴

Con el triunfo del panista Ernesto Ruffo Appel se han roto varios supuestos considerados inamovibles dentro de la tradición del sistema político y, a la vez, parece indicar el rumbo de algunas transformaciones de éste. El primer supuesto desechado es que un gobierno estatal —siguiendo con la tradición virreinal— es representante y correa de transmisión del poder central, indispensable a la reproducción de la estructura de dominación. Frente a ese argumento, el reconocimiento del gobierno panista en Baja California desmiente que la reproducción nacional de la estructura política o de la económica sean alteradas al perderse una gubernatura (menos ante el PAN). Por otro lado, con el reconocimiento del triunfo de Ruffo también parece aceptarse una cuestión fundamental: que el sistema político nacional, en su forma más general, ya no guarda necesaria identidad con el partido oficial, por lo menos en el espacio regional. En este caso, el sistema político, sin alterar las relaciones de dominación

⁴ La importancia económica de Baja California no se ha visto alterada por los cambios políticos de la entidad y, especialmente, no se ha modificado la política económica federal para la región, como se especuló después del triunfo electoral del PAN. Para dejarlo claro, el secretario de Programación y Presupuesto afirmó que la política económica para la zona “abre nuevos horizontes al desarrollo estatal, y que llevará a Baja California a la vanguardia del papel que espera a México en la Cuenca del Pacífico”. Palabras del secretario Ernesto Zedillo Ponce de León, con la representación presidencial en el informe de gobierno de Óscar Baylón Chacón. Mexicali, 1 de octubre de 1989.

y manteniendo esencialmente a la misma burocracia política a nivel nacional, puede tolerar la alternancia con los partidos de oposición en los niveles locales de gobierno, incluyendo al ejecutivo estatal.

En este complejo proceso de transformaciones que todavía está en ciernes, inevitablemente surge una tendencia al fortalecimiento del presidencialismo, correspondiente a la pérdida de espacios del partido oficial. Sin embargo, el presidencialismo —junto con el sistema político— no puede prescindir de los partidos: al mismo tiempo, *sin llegar a constituirse en la relación dominante*, que seguirá perteneciendo al partido oficial, es necesaria la elaboración de nuevas relaciones con otros partidos. Tal vez en este marco puedan comprenderse las crecientes afinidades con el PAN, que de oposición leal tiende a convertirse en interlocutor leal, constructor positivo del consenso presidencial.

De esta manera, los cambios que aparentemente anuncia Baja California son fundamentales en la estructura actual del sistema político. El principal de ellos es la relativa pérdida de importancia del partido oficial y, la otra cara de la moneda, la persistencia de un presidencialismo que extiende sus relaciones hacia otros partidos (aquellos compatibles con el nuevo modelo de desarrollo), incluso incorporándolos dentro de un proceso que presione la llamada modernización del PRI. Sin embargo, convendría señalar que el fortalecimiento del presidencialismo que ahora observamos en el fondo puede tratarse de un fortalecimiento del actual presidente, Carlos Salinas, y no necesariamente de la institución presidencial. Sobre todo si consideramos que la apertura de espacios democráticos tiende a disminuir la discrecionalidad del ejecutivo federal. Evidentemente, éstos son temas que deben ser estudiados con mayor profundidad y que, por lo pronto, deben anexarse a la agenda de discusión sobre los rumbos de la modernidad mexicana.

El electorado de oposición

El proceso electoral de Baja California en 1989 puede ser estudiado siguiendo tres niveles de análisis, por lo menos. El primero, inmediato, relativo a las particularidades del proceso electoral mismo, consiste en las características de las campañas y las contradicciones internas de las principales organizaciones con-

tendientes. El segundo, mediato, dirigido al análisis de la herencia electoral de 1988 y, particularmente, dedicado a estudiar los elementos que extendieron y consolidaron al electorado de oposición en el estado. Por su parte, un tercer nivel, estructural, nos remite a las transformaciones sociales (modernización) de la sociedad bajacaliforniana y, paralelamente, guardando con ella una relación antagónica, a la persistencia de una estructura política excluyente, escasamente permeable a los cambios de la estructura social. De los anteriores niveles se hará énfasis en el primero.

En Baja California, la elección presidencial de 1988 y su resultado tuvieron un gran efecto sobre las pasadas elecciones locales, especialmente si asumimos la perspectiva de la *recomposición* del electorado motivada por el auge neocardenista. En 1988, como ocurrió en muchas otras partes del país, surgió un votante de oposición novedoso, desprendido de la votación del partido oficial. En esa ocasión, alrededor de 70% de los votos que obtuvo el cardenismo habrían sido votos priistas. Para el electorado de oposición nuevo, su voto por el cardenismo fue su primera experiencia electoral *ciudadana* en sentido pleno: buscando realmente determinar un gobierno a través del proceso electoral. Ya no se trató del voto tradicional de la indiferencia al resultado, ni del voto de la negociación clientelista.

Asumiendo que en el tránsito hacia la oposición se encuentra presente una ruptura conceptual, que concibe de manera distinta a los procesos electorales y, sobre todo, el lugar del elector en ellos, la experiencia ciudadana de 1988 —aparentemente igual a las precedentes— puede ser comprendida como un verdadero salto cualitativo. El gran mérito del neocardenismo fue precisamente haber motivado la consolidación de un electorado de oposición, que si bien estaba latente en las actitudes políticas de la población, no había encontrado un canal de expresión electoral.⁵ La trascendencia de ese tránsito puede ser evaluada considerando que, hasta 1988, el desarrollo de la oposición electoral estuvo determinada principalmente por el proceso de mo-

⁵ Una discusión más amplia sobre la relación entre la cultura política nacional y la elección presidencial de 1988 se encuentra en los artículos del autor: "La cultura política y la elección presidencial de 1988: hacia un análisis del neocardenismo", *Frontera Norte*, núm. 1, enero-junio, 1989, y en "The Social Bases of the PRI", *op. cit.*

dernización del país y sus repercusiones en la estructura social.⁶ El neocardenismo, en este sentido, tuvo un efecto equivalente sobre la recomposición del electorado, extendiendo considerablemente la frontera de su sector de oposición.⁷ En Baja California, la importancia numérica de los votantes de oposición nuevos puede ser indicada con los resultados de la pasada elección presidencial: los votos obtenidos por los candidatos de oposición (63.3%) prácticamente duplicaron a los del PRI (36.7%). Comparativamente a elecciones locales anteriores, si bien los partidos de oposición tradicionalmente habían tenido una fuerte presencia, sus votos —oficialmente— nunca superaron a los del partido gubernamental.

En el cuadro político de 1988 destaca el fuerte crecimiento del electorado de oposición, tanto en Baja California como en el resto del país. Como ha quedado claro después de las elecciones locales de 1989, el electorado de oposición y sus determinantes se han convertido en el sujeto principal del análisis político regional, por encima de los partidos u otras organizaciones. Así lo argumenta el giro del mayoritario voto cardenista hacia el mayoritario voto panista, ocurrido entre 1988 y 1989. En el sentido más literal, los partidos de oposición han surgido como *portadores* de los intereses de ese electorado y, hasta el momento, incapaces de establecer conexiones de carácter orgánico con sus votantes.

Considerando el panorama anterior, la consolidación del electorado de oposición pasa más por la relación ciudadano-gobierno (PRI), que por la relación ciudadano-partidos.⁸ Al ser prioritaria la primera pareja, la cuestión de los proyectos sociales de los partidos pasa a un segundo término: simplemente no existen como tema para la definición político-electoral. De la misma manera, a la oposición no la construyen los partidos: es un producto muy directo de la relación ciudadana con la esfera

⁶ Héctor Aguilar Camín, "El canto del futuro", *Nexos*, núm. 100, 1986, pp. 15-29.

⁷ Desde esta perspectiva, la "ruffomanía" que en 1989 sintetizaba el perfil de oposición en la entidad, en sentido estricto no se reducía a Ruffo: hacía referencia a él.

⁸ En este sentido, el neocardenismo como movimiento social no puede ser identificado con los partidos que lo representaron: no nace de éstos ni se agota en ellos. Un proceso semejante ocurre ahora al panismo en Baja California: no existe conexión orgánica con su electorado.

gubernamental. A su manera, esta situación también refleja el escaso desarrollo de la democracia y de los procesos electorales en México.

Adicionalmente, en Baja California la experiencia de 1988 y 1989 también demuestra que el electorado de oposición tiene características relativamente estables. Si aceptamos válida la hipótesis sobre el eje ciudadano-gobierno como central en su determinación, su estabilidad depende entonces de la relativa inamovilidad de la acción gubernamental y de su imagen pública, esta última de características mucho más fijas que su acción. Desde esta perspectiva, en Baja California no asistimos en 1989 sólo a una “personalización” de la política,⁹ que en todo caso se encuentra subordinada al perfil de oposición electoral. La tesis de la personalización de la política deja abierta la posibilidad de que, por ejemplo, en Baja California un candidato del PRI “carismático” pudiera recuperar los votantes del partido. De hecho, esa idea se discutió regionalmente y fue experimentada por el PRI en Ensenada, precisamente en el municipio que inauguró la era de las “personalidades”. En 1983, David Ojeda ganó la alcaldía por el PST, después de haberse escindido del PRI; posteriormente, Ernesto Ruffo, por el PAN, la obtuvo en 1986. En ambos casos se argumentó el peso de los personajes y se restó importancia al perfil antigubernamental de los ensenadenses. Con esa expectativa, en 1989 el PRI presentó a un empresario como candidato a la presidencia municipal, el más conocido en la localidad: Carlos Hussong, propietario, entre otras cosas, de la cervecería y la cerveza más popular que lleva por nombre su apellido. Pero volvió a triunfar el PAN. En la coyuntura actual de la política mexicana, y particularmente desde el punto de vista gubernamental, para explicar las derrotas del PRI es más conveniente la hipótesis de la “personalización” que la del perfil de oposición del electorado: la primera alude a una circunstancia, la segunda a una relación estructural.

Con el sentido de oposición como su característica dominante, el perfil político del electorado manifiesta un lineamiento político, *un contenido*, ciertamente expresado en forma simple. Pero esa sencillez se debe al medio (son votos), y no necesariamente a la carencia de riqueza ideológica; no pocos han sido los

⁹ Rafael Segovia, “La personalización de la política”, *Cuaderno de Nexos*, núm. 14, agosto de 1989, pp. 1-3.

comentarios sobre su “escasa politización” debido a los giros partidistas del voto opositor. Para argumentar con el caso más extremo: los votantes tradicionales de los partidos de izquierda en el estado, incluso algunos miembros distinguidos del movimiento neocardenista de 1988, en 1989 propusieron un voto por el candidato panista a la gubernatura, Ernesto Ruffo.¹⁰ Independientemente del juicio político que pudiera tener la propuesta, ese tipo de votantes existió y su voto se mezcló junto a la masa de votos panistas. Como muestra este caso —por lo demás responsable de la desaparición estadística de la izquierda en Baja California—, detrás de los votos del PAN había mucha más complejidad que la dejada ver por las cifras electorales. Sólo desde una perspectiva que asuma *a priori* que existe una relación orgánica entre partidos y ciudadanos, la cuestión sobre la “politización” de los bajacalifornianos significa un problema.

Por otra parte, la consolidación del electorado de oposición dependió de particulares condiciones de la estructura social que deben ser tomadas en cuenta. Si su eje principal es la relación ciudadano-gobierno, la transformación estructural del “ciudadano” constituye la fuerza dinámica que motiva su desencuentro con la esfera gubernamental. De esta manera, si en algún lugar del país puede encontrarse un ejemplo notable del proceso de modernización de la sociedad mexicana es precisamente en Baja California. Haciendo un breve recuento de indicadores, puede comenzarse con su elevado nivel de urbanización. Simplemente en dos ciudades, Tijuana y Mexicali, se concentra poco más del 83% de la población del estado. Añadiendo las ciudades de Ensenada y Tecate, el porcentaje supera el 90%. Adicionalmente, el área rural de la entidad no guarda semejanza con el promedio nacional: la agricultura de riego es dominante, de alta tecnología y principalmente orientada al mercado internacional. Por otra parte, en las ciudades predominan los estratos económicos de ingreso medio y el promedio general de escolaridad es el más alto entre las entidades del país. La economía regional, si bien inicialmente sufrió los estragos de la crisis, ha logrado mantener un ritmo de crecimiento positivo que, entre otros aspectos, se refleja en una tasa de desempleo que tiende a cero.

Una composición social con las anteriores características,

¹⁰ Incluso después de haber intentado presentarlo como candidato común de los partidos de oposición.

dominantemente urbana y de clase media, permite explicar el desarrollo tanto de una cultura política liberal como de una persistente oposición electoral, sistemáticamente contenida. Únicamente la burocracia política regional se había mantenido inmune a los cambios de su entorno social. Incluso hasta la administración de Xicoténcatl Leyva, sustituido en enero de 1989 por Óscar Baylón Chacón, el perfil de los gobernantes se ubicó entre lo más tradicional de la clase política. La corrupción pública, el tráfico de influencias, la ineficiencia administrativa, entre otros, fueron temas cotidianamente asociados al gobierno estatal y a los municipales.¹¹ De esta manera, la relación entre el dinamismo social —liberal y ciudadano— y la inmutable estructura política regional —corporativa y poco permeable— evidentemente adquirió tonos elevados de antagonismo. Las elecciones del final de la década de los ochenta fueron las expresiones más acabadas de un conflicto estructural que tuvo como antecedentes más importantes a 1958, 1968 y 1983.¹²

Los resultados de 1989

En los límites del presente ensayo, en lo que sigue se expone un contexto que nos aproxime a la explicación del proceso electoral de 1989 en Baja California, con énfasis en la elección de gobernador. El argumento central descansa en el análisis de las principales fuerzas políticas involucradas, revisando su trayectoria y principales contradicciones surgidas después de julio de 1988.

Los cambios electorales ocurridos en Baja California pueden ser resumidos en lo siguiente. En cuanto a la gubernatura,

¹¹ Como caso insólito, el presidente Salinas también reconoció expresamente el problema: “En Baja California no perdió Margarita Ortega, sino el Partido Revolucionario Institucional; el voto no fue a favor de la oposición, sino en contra de errores cometidos por priistas en el pasado, como corrupción y desviaciones de los postulados de 1910”, *La Jornada*, 20 de julio de 1989, pp. 1 y 16.

¹² En las elecciones presidenciales de 1958, el candidato oficial, Adolfo López Mateos, perdió las elecciones en Baja California ante el panista Efraín González Luna. En 1968, en las elecciones municipales de Tijuana y Mexicali, el PAN logró derrotar en las urnas al PRI, pero las votaciones fueron anuladas, formándose Concejos Municipales en ambos casos. Por otro lado, en 1983, el PAN reclamó haber ganado la presidencia de Mexicali, mientras que en Ensenada triunfaba el PST.

Ernesto Ruffo Appel, candidato del PAN (204 507 votos), derrotó a la candidata del PRI, Margarita Ortega Villa (163 529 votos), con un margen superior a 40 mil votos, definidos por las ciudades de Ensenada y Tijuana. En Mexicali la votación favoreció a la candidata priista y, en Tecate, la diferencia a favor del PAN no tuvo relevancia en el total estatal. Los otros candidatos participantes, Martha Maldonado por el PRD-PARM (12 128 votos), y Sergio Quiroz por el PPS-PFCRN (9 971 votos), obtuvieron una votación realmente marginal.

Adicionalmente, y constituyendo la otra novedad político-electoral, el PAN también ganó la mayoría de los distritos locales en disputa: nueve de 15, siendo los restantes para el PRI. Sin embargo, esta aparente ventaja no le proporciona al PAN mayoría en el congreso debido a la presencia de los cuatro diputados de representación proporcional, que fueron asignados al PRD, PARM, PPS y PFCRN. Si adicionalmente consideramos la tradición "paraestatal" de los últimos dos partidos, la línea oficial en el congreso puede contar con ocho votos, por lo menos. En cuanto al PARM, en términos reales no tiene una representación propia: su diputado formal es un dirigente de colonias populares de Tijuana, Catalino Zavala, ex miembro del PRT, quien ha mantenido gran independencia del PARM local y nacional. Atendiendo a la composición del congreso, la novedad política es la ausencia de control por alguna de las dos fuerzas dominantes: ni el PAN ni el PRI reúnen por sí mismos mayoría. En la relación entre el PAN y el PRI dentro del congreso, que a pesar de todo conforman los ejes dominantes, el elemento decisivo serán las actitudes que asuman el PRD y el PARM. Vale la pena mencionar quién es el otro diputado clave: por el PRD, Alejandro Moreno Berry, también líder de colonias populares de Tijuana, anteriormente relacionado con el PST y cuestionado por otros miembros del PRD por haber tenido estrechos y dudosos nexos con el ex gobernador Xicoténcatl Leyva Mortera. Es probable, en consecuencia, que el voto del PRD tienda a ser semejante al priista, lo que produciría un virtual empate entre la corriente oficialista y el panismo. En estas circunstancias, el diputado Zavala tendrá un papel realmente privilegiado en la definición de las discusiones del congreso.¹³

¹³ Hasta el momento, octubre de 1990, los bloques de opinión entre los diputados se han comportado siguiendo las expectativas antes señaladas. Entre

En cuanto a la elección de ayuntamientos, de los cuatro municipios de la entidad, dos correspondieron al PRI y dos al PAN. Tijuana y Ensenada fueron ganados por los panistas, mientras que Mexicali y Tecate por los priistas. Un aspecto que vale la pena destacar es el caso de Tecate, en donde la diferencia a favor del PRI fue por 30 votos, que los panistas alegaron fueron obtenidos anulando casillas ilegalmente. Posteriormente, con el Colegio Electoral controlado por el PAN se esperaba que el triunfo del PRI fuera revertido. No ocurrió así, provocando incluso la protesta de importantes panistas locales¹⁴ y suspicacias sobre acuerdos de cúpula entre el PRI y el PAN.

Los resultados de las votaciones locales ratificaron la presencia minoritaria del PRI en Baja California. Las elecciones presidenciales de 1988 habían sido un primer y contundente aviso sobre la debilidad del partido oficial, que no pudo ser corregida en los meses siguientes. En la elección presidencial, el cardenismo había aparecido como la principal fuerza del estado: la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas (37.2%) logró una ventaja sobre la de Carlos Salinas (36.7%) y la de Manuel J. Clouthier (24.5%). De esta manera, en 1988 Baja California presentó una estructura tripartidista que no vislumbraba la fuerza que adquirió el panismo en 1989. Considerando el anterior esquema, el gran cambio ocurrido ese año fue la estrepitosa caída de la votación cardenista y, a la vez, el sostenimiento del electorado de oposición. En ese contexto de definido ambiente de oposición, como revisaremos adelante, la caída “estructural”

sus consecuencias, el diputado Alejandro Moreno ya fue expulsado del PRD debido a su alineación con la posición priista, contrariando las disposiciones del partido, y además a causa de otros conflictos internos. Por su parte, el diputado del PARM hasta el momento ha favorecido las posiciones del PAN, sin que necesariamente haya mostrado que exista un compromiso con los panistas. Entre las novedades se encuentra que propuestas procedentes del gobernador han sido rechazadas y/o fuertemente discutidas.

¹⁴ Destacó la reacción de Salvador Magallón Rosas, sin duda el panista de más larga y trascendente presencia en la entidad: “Como panista, me permito hacer un respetuoso pero enérgico reproche a los diputados del PAN en el Congreso Local, porque: o no quisieron; o no supieron; o no pudieron, defender la diputación ganada por el PAN en Tecate. En el fondo de mi conciencia, no lo disculpo. Menos lo haré, si permiten que nos arrebaten el ayuntamiento de esta ciudad. La mayor injusticia es la de ser injustos contra uno mismo y con los que se tiene el deber de defender.” *Zeta*, 13 al 20 de octubre, 1989, p. 8-B.

del cardenismo, su imposibilidad, fue la que abrió el espacio político al surgimiento de Ernesto Ruffo.

Conviene destacar que la virtual desaparición del voto cardenista en 1989 consistió en un cambio *electoral* y no *político*, en el sentido fuerte del término. Si tomamos en cuenta la perspectiva y características del electorado de oposición bajacaliforniano, tanto en 1988 como en 1989 expresó lo mismo: una elemental demanda democrática. El giro hacia el PAN podría interpretarse como un cambio político en el supuesto de que existiera una relación orgánica e identificación ideológica del electorado con los partidos, lo que evidentemente no ocurre. En el horizonte de 1988, en Baja California aparentemente el enemigo principal del partido oficial era el cardenismo, entonces aglutinado en el Frente Democrático Nacional. Sin embargo, meses antes de las pasadas elecciones locales era claro que las fuerzas neocardenistas carecían de las condiciones para consolidarse. Durante un buen tiempo, en el análisis del potencial cardenista hubo dos actores principales que tuvieron la vista nublada: el PRI y, paradójicamente, la mayoría de los propios cardenistas.

La elección de 1989 y sus contendientes

El PRI

Como principal antecedente, en Baja California la elección presidencial de 1988 fue el indicador más evidente de la pérdida de consenso social del PRI y del gobierno. La primera medida encaminada a preparar el terreno electoral fue el retiro del gobernador Xicoténcatl Leyva, ocurrido en la primera semana de enero de 1989, con lo que se pretendieron varios objetivos.¹⁵ El primero, prioritario, fue intentar reconstruir la imagen pública del gobierno del estado; el segundo, desarticular al grupo político del gobernador y asumir, desde el poder central, el control

¹⁵ La licencia del gobernador Xicoténcatl Leyva Mortera se debió, oficialmente, a la invitación del presidente Salinas para trasladarse a Washington en calidad de director adjunto de Nacional Financiera. La “distinción”, se dijo, tenía el objetivo de hacer participar al ex gobernador en asuntos relativos a la negociación de la deuda externa mexicana.

del partido que se encontraba desorganizado. Si bien en los meses siguientes se avanzó en el mejoramiento de la imagen gubernamental entre la opinión pública, no fue suficiente lo logrado; en cuanto al partido, definitivamente no hubo adelantos.

El gobierno sustituto de Óscar Baylón hizo grandes esfuerzos por presentar a la sociedad bajacaliforniana un estilo sencillo, eficiente y, sobre todo, honesto. Contó con el apoyo directo del gobierno federal, quien anunció una inversión extraordinaria superior a 1.5 billones de pesos dedicados a la infraestructura urbana —agua, drenaje, pavimentación, electricidad, vialidades— y de comunicaciones —carreteras, teléfonos, aeropuertos, puertos. Con este motivo fueron muy publicitadas las visitas de varios secretarios de Estado (especialmente el de SPP), quienes reiteraron el carácter prioritario de Baja California en los planes económicos federales. El gobierno estatal también implementó algunos programas de regularización de la tenencia de la tierra en las ciudades, junto a la introducción de servicios públicos elementales. En cuanto al tema de la corrupción pública, la administración de Baylón hizo un relativo ajuste de cuentas con el gobierno anterior, obligando a varios funcionarios a devolver cantidades millonarias que carecían de comprobación, sin ejercer acción penal en algunos casos. Pero no hizo lo suficiente para aliviar el agravio ciudadano, que esperaba acciones en mayor escala. Durante los pocos meses del gobierno de Baylón, la administración estatal hizo grandes esfuerzos por reproducir localmente el modelo salinista de la administración federal.

Al iniciar 1989, la reconstrucción del PRI bajacaliforniano fue la tarea más complicada y de resultados prácticamente nulos. Un indicador sobre la inestabilidad interna fueron los cambios en el Comité Directivo Estatal. En el periodo de diciembre de 1988 a julio de 1989 transitaron tres presidentes: Milton Castellanos Gout, Humberto Lepe Lepe y Eduardo Martínez Palomera. Durante el mismo lapso, puede también apreciarse una intensificación de viejos y nuevos conflictos entre las organizaciones campesinas, entre las obreras y entre las asociaciones de colonias populares. Ante la inexistencia de una fuerza hegemónica interna, el conflicto que normalmente ocurre durante la disputa por las “posiciones” —particularmente en esa ocasión, estando en juego todas las locales—, adquirió una forma generalizada, burda y en ocasiones violenta. Sobre todo entre las organizaciones de base fueron comunes las amenazas de no votar

por el partido si no se asignaba tal o cual puesto a determinado dirigente, o si lo obtenía algún rival. Si bien las amenazas de las organizaciones priistas, entre sí y contra la dirección del partido, son parte cotidiana del juego político interno, la intensidad y generalidad que adquirieron en la coyuntura electoral de 1989 fue un obstáculo de primer orden para el PRI. Una vez conocidas las candidaturas a los puestos en disputa, nadie quedó conforme, excepto —tal vez— la candidata a gobernadora.¹⁶

Paradójicamente, el discurso modernizador del PRI y de la política nacional anunciado por el presidente Salinas sirvió para justificar las “indisciplinas” que se presentaron en todos los niveles del partido. Contrarios a la conocida recomendación de Fidel Velázquez, en Baja California todos se movieron, incluso aquellos que disputaban —con posibilidades y sin ellas— la nominación al gobierno estatal. El conflicto por las posiciones también fue estimulado por algunas declaraciones de dirigentes del partido, afirmando que las candidaturas serían determinadas por mecanismos distintos a la “auscultación”.¹⁷ Al iniciar la coyuntura electoral, en la perspectiva original del CEN del PRI se pretendieron aplicar en Baja California mecanismos semejantes a los utilizados en 1988 en la nominación del candidato presi-

¹⁶ Por ejemplo, antes de las designaciones, la Alianza de Transportistas de Tijuana había demandado posiciones en la medida del esfuerzo que les exigían durante las campañas, porque de lo contrario no participarían. “Nosotros pagamos sueldos de choferes, rotulistas y gasolineros en las campañas, pero otros son beneficiados” (*La Jornada*, 17 de marzo de 1989, p. 9). Otro caso representativo fue el Comité Regional Campesino de la CNC en Tijuana, quienes “reiteraron que en caso de no llegar a algún acuerdo, la suplencia a regidor que le dieron a una compañera de la CNC será declinada y no participarán en la contienda” (*El Mexicano*, 16 de abril de 1989, p. 4-D). Situaciones similares se repitieron en Ensenada y, particularmente, en Mexicali, en donde miembros del Frente Juvenil Revolucionario y líderes de colonias urbanas llegaron al extremo de patear la puerta del delegado estatal, Luis H. Ducoing (el segundo enviado por el CEN), para exigirle cambios en las planillas de regidores. Una “trifulca”, como la definió la prensa. (*El Mexicano*, 15 de abril de 1989, pp. 1 y 2-A.)

¹⁷ El delegado estatal del CEN, Jesús E. Hernández Chávez, al dar a conocer a los delegados municipales en la entidad, también informó que “dentro de la política moderna del presidente Carlos Salinas de Gortari y de los diez puntos básicos del presidente del PRI, Luis Donald Colosio, se darán cambios importantes en los mecanismos de selección de candidatos del partido, con la participación de las bases (precisando que) los tres sectores deberán estar atentos a la publicación de la convocatoria, para que se ajusten a los nuevos sistemas y mecanismos que entrarán en operación, en el proceso electoral de Baja California”. *El Mexicano*, 2 de febrero de 1989, pp. 1 y 2.

dencial, o los que se realizaban en otras entidades, como en Chihuahua. Sin embargo, las conflictivas condiciones internas que encontraron los enviados del CEN los persuadieron de seguir con la probada “auscultación”.

Para unos pocos, los cambios en los procedimientos de selección significaron una amenaza; para otros, la gran oportunidad. En todo caso, la sola expectativa de modificar las reglas del juego generalizó las movilizaciones internas de “acomodo” y, consecuentemente, los conflictos. En ese contexto podemos ubicar el surgimiento de algunas autopostulaciones al gobierno del estado, como la de Rafael García Vázquez, líder local de la minoritaria COR, quien sin realmente tener posibilidades se propuso como candidato.¹⁸ Por otra parte, dentro del grupo de los priistas con mayores probabilidades ocurrieron también autodesbastes, como el de quien fue después presidente del CDE durante el periodo electoral, Eduardo Martínez Palomera, también estimulado por la idea de que la transparencia había llegado al PRI. Al parecer, en ese ambiente llegó a considerarse que quien no se proponía para algo estaba en el error. Siguiendo un estilo menos abierto, quienes disputaban la candidatura a la gubernatura con mayores posibilidades —aparentemente— fueron el senador Gustavo Almaraz y el diputado local Milton Castellanos. A ambos se les atribuyó estrechos nexos y virtual representación de los principales grupos económicos regionales: el de Tijuana y el de Mexicali, respectivamente.

Con estos antecedentes, la sorpresiva presentación de la candidatura de Margarita Ortega Villa tuvo un doble efecto, por lo menos. El más importante fue el desplazamiento de los grupos económicos locales de su estrecha relación con el gobierno del estado, si bien fueron compensados con las candidaturas a las presidencias municipales más importantes.¹⁹ En segundo

¹⁸ Aunque debe señalarse que el líder de la COR es un profesional de los “autodesbastes”; en este caso, la novedad fueron los argumentos que utilizó: la modernización y democratización del partido. Otro caso de autodesbaste argumentando expresamente la modernización del PRI fue el del ex diputado federal Ricardo Eguía Valderrama (*El Mexicano*, 18 de febrero de 1989, pp. 1 y 2).

¹⁹ Gustavo Almaraz Montaña fue candidato a la presidencia municipal de Tijuana —que perdió—, y Milton Castellanos Gout a la de Mexicali, ganándola. Vale la pena mencionar que quienes disputaron la candidatura a las presidencias municipales se sintieron engañados y manipulados, al hacerlos competir en un juego que ya tenían perdido.

término, la candidata intentó constituir y simbolizar un esfuerzo de renovación de la clase política regional. Para el electorado, sin embargo, la principal novedad de la candidata fue su sexo; su significado político no fue objeto de discusión pública, ni podía serlo.

El primer problema que enfrentó Margarita Ortega fue precisamente en su relación con el sector empresarial. De hecho, fue ante ellos cuando se hizo pública su nominación, lo que no deja de ser sintomático sobre la estrecha relación que los empresarios guardaban con la gubernatura.²⁰ Prácticamente por mandato del presidente de la República, los principales empresarios de Baja California no tuvieron otra alternativa que expresar su apoyo a la candidata. Sin embargo, a lo largo de la campaña rondó en el aire la duda sobre su fidelidad, no obstante la promesa hecha ante el presidente Salinas. Como parte de las estrategias para alejarlos de la tentación panista —estimulada por el desencanto sufrido en la sucesión de gobernador—, en Mexicali se formó la Asociación Política de Empresarios, A.C., afiliada a la CNOP, que después se extendió a nivel estatal.²¹ A pesar de formar parte del comité de finanzas del partido, de declarar su apoyo a Margarita Ortega y de haberse integrado a la Asociación, los empresarios bajacalifornianos jugaron por partida doble, apoyando al mismo tiempo la campaña de Ernesto Ruffo.

Sin el menor disimulo, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana, Héctor Santillán Muñoz, explicó la ubicuidad de su sector: “los empresarios deben mantener las condiciones económicas favorables para sus inversiones, por lo que varios de ellos participan en las contiendas políticas de los aspirantes del PRI y PAN, con aportaciones económicas”.²²

²⁰ Véase al respecto la crónica publicada por un semanario local, sobre el encuentro con el presidente Salinas de los principales grupos económicos del estado, acompañados por los ex gobernadores Milton Castellanos y Roberto de la Madrid (*Zeta*, núm. 783, 31 de marzo de 1989).

²¹ Después de que Silvia Hernández, dirigente nacional de la CNOP, tomara la protesta a la recién formada asociación, el encuentro con los empresarios fue justificado por el delegado de la CNOP en el estado, Ovidio Pereyra, como un “eslabón para ligar esa fuerza impulsora del desarrollo económico con las necesidades de la sociedad”, *El Mexicano*, 16 de marzo de 1989, pp. 1 y 2-A.

²² *El Mexicano*, 7 de abril de 1989, p. 3-A.

Considerando las condiciones previas del PRI y las divisiones exacerbadas por su candidatura, es comprensible que la campaña de Margarita Ortega tuviera un arranque poco vistoso y desorganizado. Aparentemente hubo relativa carencia de recursos económicos, que sólo se hicieron visibles en las últimas seis semanas. Su campaña se basó, principalmente, en medios de comunicación y en actividades de gestoría, que condujeron a varias entrevistas de la candidata con el presidente Salinas. En realidad, la gestoría de Margarita Ortega ante las autoridades federales consistió en mantener los lineamientos que previamente Baylón Chacón había abierto desde el gobierno estatal (previa autorización central). Con esas actividades y con la promoción de algunos eslogans de campaña, particularmente el que la presentaba “con las manos limpias”, Margarita Ortega buscó desligarse del pasado negativo del gobierno y del partido oficial. Efectivamente su candidatura significaba un cambio dentro de la clase política regional, pero la larga historia de su partido no se olvidó en un momento, ni con un discurso de renovación.

En sus aspectos más tradicionales, las labores de gestoría de la campaña priista mostraron una ineficiencia previsible, determinada por las características de la sociedad bajacaliforniana. La introducción de servicios públicos o su promesa, la regularización de la tenencia del suelo urbano, las obras viales, entre otros, demostraron ser inútiles como instrumento de convocatoria electoral. Las actividades de gestoría ante las autoridades ya no fueron comprendidas por la población como concesiones que debieran agradecerse con votos, sino como obligaciones de la administración gubernamental. Por lo demás, no era bien recibido que la inauguración de obras o la entrega de títulos los realizara la candidata, supliendo funciones públicas.

Justo en el desenlace de su campaña, la promesa democrática y de honestidad que Margarita Ortega presentó a los electores se vio empañada por dos incidentes. Aquello que se hubiera avanzado en ganar la confianza de los votantes se puso en duda por el descubrimiento de irregularidades en el padrón electoral y, por otro lado, por la publicación de un cheque enviado a su nombre por 1 000 millones de pesos. Particularmente en Tijuana, en el distrito XIII se detectó un padrón inflado con más de 21 mil electores, la gran mayoría ubicados en una sección controlada por el “Grupo México”, colonia popular del PRI. Aun sin ser responsabilidad directa de la candidata, lo burdo del pro-

cedimiento seguido para alterar el padrón y la respuesta vacilante y contradictoria que se dio al problema, apoyaron la idea de que finalmente se trataba de más de lo mismo. El asunto del cheque, por otro lado, presentado en un contexto en donde se señalaba el uso indebido de los recursos públicos, fue otro factor que contribuyó a demeritar los esfuerzos de la campaña. Si la posición de Margarita Ortega enfrentó grandes obstáculos, la fragilidad de su imagen pública aumentó con los nuevos problemas que surgieron a escasos días de las votaciones.

Después del 2 de julio, para el PRI bajacaliforniano el problema no fue solamente el PAN. El golpe más fuerte —y decisivo— provino de su presidente nacional, Luis Donald Colosio, quien aceptó la derrota de Margarita Ortega al mismo tiempo que localmente el partido difundía su triunfo “limpio e inobjetable”. Para el PRI de la entidad —ajeno a la ideología de modernización del sexenio, en la que tuvieron un papel protagónico involuntario— el fracaso en las urnas no necesariamente significaba una derrota electoral, por lo que interpretaron como una traición la actitud del CEN de su partido. Semanas antes, habían escuchado como retórica tradicional el discurso de Colosio Murrieta durante la toma de protesta de los comités seccionales de Tijuana: “Que quede claro, el fraude electoral ni lo queremos, ni lo necesitamos, ni lo permitiremos en la próxima contienda electoral en Baja California.”²³

No fue sencillo aceptar que las cosas habían cambiado. Y puesto que todo seguía igual, es decir, mantenían el control de los organismos electorales, con la posibilidad de modificar los resultados, las únicas explicaciones posibles fueron la negociación, la entrega, la traición. El PRI estatal intentó “corregir” las declaraciones de su presidente nacional, asegurando que habían sido mal interpretadas. Quisieron revertir el golpe que estaba recibiendo la burocracia regional, intentando presionar una salida que no los marginara de manera tan radical. “La dirigencia en Baja California del Partido Revolucionario Institucional y sus militantes, no reconocen en ningún momento y por ningún motivo el supuesto triunfo del Partido Acción Nacional.”²⁴ Se

²³ *El Mexicano*, 8 de abril de 1989, pp. 1 y 2-A.

²⁴ Eduardo Martínez Palomera, presidente del CDE en Baja California (*Diario de Baja California*, 6 de julio de 1989, p. 1). La crítica más severa que

buscó entonces la nulidad de las elecciones, argumentando que la vigilancia del voto implementada por los panistas había sido un operativo de violencia e intimidación contra los votantes priistas.²⁵ Incluso Margarita Ortega, quien al principio pareció asumir los lineamientos del CEN,²⁶ después de recibir las presiones del priismo local cambió su punto de vista. También amenazó con armar un “trabuco jurídico” a fin de impedir el triunfo panista.

Finalmente, en los dictámenes hechos por los comités distritales y municipales no fueron presentadas las impugnaciones del CDE y de la propia candidata y, las que llegaron, fueron rechazadas por improcedentes. El PAN obtuvo sus constancias y el PRI las pocas que les quedaron. Nuevamente, por esos canales cerrados de comunicación del sistema político, el priismo bajacaliforniano fue sometido al orden y, la gran novedad, a la democracia.

recibió Luis Donaldo Colosio provino del Instituto Político de Administradores Públicos, quienes publicaron una gacetilla con los argumentos que ya circulaban entre los priistas inconformes, haciendo responsable al CEN de la derrota electoral: “Si ya, Senador Colosio Murrieta, nos obligó usted a padecer las omisiones y las torpezas del numeroso ejército con que integró la Delegación General del CEN; si ya, producto de la soberbia y el complejo insultante de genios con que nos trataron sus delegados y enviados especiales, se originó la apatía y el desánimo entre los políticos priistas locales; y si ya, con la aplicación de criterios ajenos a nuestra realidad e idiosincrasia, se creó la atmósfera difícil enmarcadora del proceso electoral en el que participamos, muchas veces remando contra la corriente, no añada usted a esta serie de factores complicadores de la circunstancia, sus desafortunadas declaraciones que en nada contribuyen, sino más bien, obstaculizan la defensa de nuestros abanderados”, *El Mexicano*, 7 de julio de 1989, pp. 1 y 2-A.

²⁵ Según la interpretación de Margarita Ortega sobre la vigilancia panista de las casillas, las agresiones a priistas fueron de este modo: “Ciudadanos que se identificaban que iban a votar por el PRI, les impedían llegar a la casilla, les decían que no estaban en el padrón y les empezaban a hostigar física y verbalmente (. . .) ¿Y a cuál ciudadano de buena fe que se encuentra a un grupo de panistas en este plan, tan agresivo y tan decidido, se le ocurre poner en riesgo su seguridad física?”, *El Mexicano*, 8 de julio de 1989, pp. 1 y 2-A.

²⁶ “Con la misma honestidad con que ayer me dirigí a ustedes, lo hago también ahora para decirles que la tendencia no me es favorable en el esfuerzo por lograr la mayoría de la votación ciudadana”, *Diario de Baja California*, 5 de julio de 1989, p. 1.

El neocardenismo

El neocardenismo, que en 1988 resultó ser la principal fuerza electoral en el estado, en 1989 enfrentó dos obstáculos de carácter estructural, principales determinantes de su drástica caída en las votaciones del último año. El primero fue la inoperancia regional de los rasgos caudillistas del movimiento; el segundo, derivado del anterior, la ausencia de nexos entre el electorado cardenista de 1988 y los partidos que asumieron su representación. A estos factores se añadió otro tipo de dificultades, secundarias en relación con las anteriores, como la desintegración del FDN y la presentación de dos candidaturas disputándose la herencia cardenista, además de los errores en la conducción de la campaña de quien puede ser considerada la representante oficial del movimiento de entonces, Martha Maldonado.

Por lo menos en el contexto de Baja California, aquello que había sido la gran fuerza del movimiento neocardenista se convirtió en su principal debilidad: su excesiva dependencia de la figura de Cuauhtémoc Cárdenas. Si en el plano nacional los rasgos caudillistas del neocardenismo fueron decisivos para obtener la gran convocatoria electoral de 1988, en el plano regional éstos se convirtieron en un obstáculo que frenaron su consolidación. En 1989, después de haber estimulado el surgimiento del nuevo electorado de oposición, en Baja California fue notable la ausencia de un equivalente local de Cuauhtémoc Cárdenas, provocando que el simple cambio de planes se tradujera en una súbita debilidad para el neocardenismo en general.

Asumiendo la perspectiva del electorado cardenista de 1988, un año después no encontró en su entorno regional ni los elementos ni las señales suficientes que le demostraran la presencia, en su espacio conocido, de un paralelo con Cuauhtémoc Cárdenas. No por ello perdió su perfil de oposición, que en el fondo era su rasgo dominante. En este sentido, en las elecciones de 1989 el cardenismo tuvo en la entidad un *vacío* de representación, a pesar de los esfuerzos de partidos y organizaciones locales por mantener la imagen. Siguiendo los términos weberianos, en Baja California la transmisión del carisma simplemente no se produjo. Desde su origen, entre la imagen de Cuauhtémoc Cárdenas y los partidos hubo una gran distancia, que se suponía —erróneamente— estaba cubierta por un contenido ideológico común, compartido con los votantes.

Implicado en el anterior, el segundo obstáculo estructural del neocardenismo fue el virtual desconocimiento de los votantes sobre los partidos que localmente asumieron su representación. Entre los distintos niveles en que se expresó ese desconocimiento, el más claro fue el relacionado con las organizaciones regionales de los partidos del Frente. Para la gran mayoría de los electores cardenistas de 1988, por primera vez habían votado por un partido de oposición y, segundo, precisamente por alguno de los partidos menos conocidos. Contrariamente a lo que pensaron los dirigentes de los partidos del FDN, sobre todo locales, con ese voto sus simpatizantes ni se afiliaron a las organizaciones ni expresaron necesariamente una identidad con su proyecto ideológico. Así, los partidos que en el estado representaron al neocardenismo fueron los grandes beneficiarios de la candidatura de Cárdenas y, en 1989, en algunos casos pretendieron cobrar intereses sobre una inversión inexistente.

Como posiblemente ocurrió en otras regiones del país, los votos que en 1988 obtuvo el FDN fueron producto del movimiento social que atrajo la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas y menos, mucho menos, de la labor proselitista de los partidos integrantes del Frente. Existía así un real desencuentro entre las representaciones locales de los partidos del FDN y el electorado cardenista, que a la fecha se mantiene. Paradójicamente, los resultados de ese año produjeron una falsa imagen de identidad que inicialmente confundió a los dirigentes priistas y cardenistas. Considerando la anterior perspectiva, los serios problemas internos que enfrentaron los partidos agrupados en el FDN durante 1989 fueron secundarios en relación con el obstáculo principal: la ausencia de una conexión real con su electorado de 1988. Pero si bien los conflictos internos no fueron los responsables principales de su debacle electoral, sí influyeron en agravar su crítica situación.

En el nivel de las organizaciones, el movimiento neocardenista, fruto de las más diversas corrientes, inevitablemente debió enfrentar la discusión sobre la hegemonía interna. De manera semejante a lo que ocurre en el PRI cuando se acercan los periodos electorales, entre las organizaciones cardenistas también surgió el problema de las candidaturas y sobre quién y cómo se definirían. La discusión adquirió un primer giro, caracterizado por el uso patrimonialista —en el discurso— del electorado de 1988. Particularmente los partidos PPS y PFCRN mantu-

vieron esa posición, reclamando el liderazgo y las posiciones “merecidas” a raíz de los votos que obtuvieron en la elección presidencial.²⁷ Otras organizaciones, como las representantes de colonias populares, también argumentaron su fuerza en función de su tangible capacidad de movilización, sobresaliendo en este caso dirigentes como Alejandro Moreno Berry.

Inicialmente, pese a las contradicciones internas que habían aflorado, el proyecto original entre los cardenistas²⁸ fue mantener a toda costa la integridad del FDN, lo que infructuosamente prolongó las discusiones al producirse finalmente la ruptura. El tema central del conflicto fue la selección del candidato a gobernador, en un ambiente donde los posibles eran varios y se carecía de una normatividad para la decisión; además, también existía como problema la forma de participación electoral. A principios de 1989, entre las organizaciones del FDN existía la idea de repetir la alianza en las condiciones del año anterior, es decir, participando con candidatos comunes. Semanas después, en la cúpula nacional del FDN, las crecientes sospechas sobre la fidelidad de los partidos PFCRN y PPS se tradujeron en la propuesta de participar como coalición.²⁹

Por otro lado, mientras algunos proponían elecciones abiertas, como las realizadas por el PMS cuando se designó a Heberto Castillo como candidato presidencial en 1988, otros preferían un consenso entre las organizaciones. Mientras unos proponían “medir las fuerzas reales” en función de las elecciones anteriores, otros proponían como criterio las cuotas de movilización

²⁷ Cuando se discutió por última vez entre las organizaciones del FDN la forma de su participación conjunta en las elecciones, la postura del PFCRN y del PPS mantenía la idea de llegar a acuerdos con base en “un método de selección del candidato común (considerando) la fuerza de cada organismo”, haciendo la observación que “tanto el PPS como el PFCRN, fueron los que mayor votación tuvieron entre los partidos del FDN durante los pasados comicios” (Sergio Quiroz Miranda, dirigente estatal del PPS y candidato a la gubernatura en conjunto con el PFCRN). *El Mexicano*, 11 de abril de 1989, pp. 1 y 2-A.

²⁸ Particularmente del propio Cuauhtémoc Cárdenas, que en los mítines llamaba a la responsabilidad histórica de las organizaciones, invitándolas a mantenerse unidas. Una coyuntura como la de 1989 en Baja California no era fácilmente repetible.

²⁹ En términos de Heberto Castillo, “ir en coalición evita confusiones y el riesgo de que se anulen los votos (. . .) no aceptar esta propuesta implica anteponer los intereses de partido a los de la gente que votó el 6 de julio y quererse levantar con la ganancia”. *La Jornada*, 15 de marzo de 1989, p. 13.

aportadas. En este panorama, como en todos los demás, fueron muchas las diferencias y pocos los acuerdos; más aún, porque los acuerdos locales se convertían en divergencias en los comités centrales de los partidos, o viceversa. Pero, más allá de la forma, faltaba aún por definir *quién*. En ese difícil proceso son detectables por lo menos tres momentos, que sin excluirse cronológicamente se caracterizaron por lo siguiente: la búsqueda de un candidato escindido del PRI; la expectativa de una candidatura común con el PAN (Ernesto Ruffo) y, finalmente, la división del Frente y la selección de candidatos emergentes.

En las dos primeras fases, que duraron hasta el cierre de registro de candidatos (15 de abril), se encuentra implícito el reconocimiento de la ausencia de hegemonía interna entre las fuerzas cardenistas. Al mismo tiempo, destacaba la carencia de un liderazgo fuerte, reconocido, no sólo interna sino externamente, que debió buscarse afuera. Entre los partidos del Frente, particularmente grave era la situación del PRD, que durante esos meses existió más como membrete que como organización. Pero, al mismo tiempo, ocupando el lugar central dentro del FDN: su situación era crítica en ambos sentidos. De parte de los otros partidos, con reglas muy establecidas y centralizadas, el problema se reducía a su relación con el PRD; internamente no tuvieron mayores conflictos.³⁰ Para el último, por el contrario, sin normatividad interna y con grandes expectativas sobre su autonomía regional (que en más de una ocasión fue restringida), la dirección nacional se convirtió en otro polo de negociación y de diferencias. La dispersión de actores y la ausencia de un eje hegemónico —o su pretendida multiplicidad, como quiera verse—, tanto en el interior del PRD como en relación con los otros partidos y organizaciones del FDN, explican la simultaneidad de discusiones en donde las dominantes fueron la relación con el PAN y la cuestión del candidato escindido del PRI.

La historia política de Baja California ha generado ciertas personalidades, dentro del universo oficial, que han ganado una respetada imagen pública. No fue sorpresivo que la primera expectativa del cardenismo bajacaliforniano fuera intentar con-

³⁰ Salvo el caso del PFCRN en su convención estatal, cuando el partido confirmó su apoyo a Sergio Quiroz Miranda, formalizando así la ruptura del FDN en Baja California. Esa medida le costó a Aquilar Talamantes que su convención fuera con sólo 40 asistentes. *La Jornada*, 10 de abril de 1989, p. 9.

vertir a una de ellas en su candidato a gobernador; por lo demás, la posibilidad correspondía a la historia misma del FDN y, adicionalmente, a que en el estado no es desconocida esa experiencia. Entre los mencionados figuró particularmente Güilebaldo Silva Cota, quien en 1977 renunció al PRI para formar el Partido Independiente Estatal, en oposición a la candidatura del general Hermenegildo Cuenca Díaz. También fueron invitados (o mencionados) a discutir el tema José Luis Andrade Ibarra, ex dirigente nacional del SNTE; David Ojeda Ochoa, ex presidente municipal de Ensenada, y Celestino Salcedo Monteón, ex dirigente nacional de la CNC y entonces secretario general de la Liga de Comunidades Agrarias de la entidad. Otros priistas de trayectoria más tradicional que también se involucraron en la discusión fueron Eduardo Martínez Palomera, citado previamente, y Milton Castellanos Gout, ahora presidente municipal de Mexicali.³¹ En esa búsqueda del priista ilustre, el FDN invirtió las primeras y decisivas semanas del año y hasta el último momento mantuvo la esperanza.³²

Cabe señalar que el PRI hizo grandes esfuerzos por obstaculizar una escisión de sus filas: mediante el apoyo gubernamental y creando espacios en su interior logró reintegrar en su seno a los posibles disidentes. En esa primera fase del FDN fue decisivo el papel del PRI y de algunas autoridades gubernamentales, incluyendo al presidente Carlos Salinas, para que no lograra su objetivo. Por lo menos hasta mediados de febrero de 1989, en la perspectiva de estas organizaciones el conflicto principal transcurría entre el FDN y el PRI; el PAN todavía no figuraba en el primer plano.³³ En un primer momento, el candidato más viable para el neocardenismo fue Güilebaldo Silva Cota, quien parecía tener asegurado el apoyo de todos los partidos y organizaciones del FDN. En los primeros días de enero, Güilebaldo Silva mantenía firme su precandidatura: “existe la necesidad de

³¹ En estos últimos casos, más que un interés del FDN en ellos, estaba presente una velada amenaza de Eduardo Martínez y de Milton Castellanos hacia el PRI.

³² En los primeros días de abril fue muy fuerte el rumor sobre la candidatura de Celestino Salcedo Monteón, que además fue vista como una opción de unidad entre los partidos del FDN. Al menos así lo plantearon el PPS y el PARM estatales (*La Jornada*, 1 de abril de 1989, p. 11).

³³ Lo cual destaca, entre paréntesis, la importancia de la candidatura de Ernesto Ruffo para el PAN.

demostrar que un gobierno cardenista puede subsistir y coexistir sin enfrentamientos dentro de un régimen priista”.³⁴ Sin embargo, la intervención directa del presidente Salinas lo convenció de renunciar a esa posibilidad. Según la prensa local, “después del diálogo con el Jefe de la Nación que se llevó a cabo en la residencia oficial de los Pinos (Silva Cota), explicó que son insuperables las diferencias entre los miembros de los partidos que conforman el FDN”.³⁵ Dos días después, entre severas críticas, fue nombrado secretario de Información y Evaluación del Comité Directivo Estatal del PRI en Baja California. Experiencias similares ocurrieron con David Ojeda Ochoa, quien fue nombrado administrador de la Aduana Marítima de Ensenada, y con Celestino Salcedo Monteón, a quien encargaron la Delegación Noroeste de Caminos y Puentes Federales de Ingresos.

Sin ser excluyente con la anterior perspectiva, otro sector de los cardenistas —particularmente del PMS y de la Corriente Democrática (después miembros del PRD)—, optaron por discutir la candidatura con quien para entonces ya era el líder natural de la oposición en Baja California: Ernesto Ruffo Appel. Si de lo que se trataba era de encontrar a un candidato fuerte, nominalmente era mejor buscar a alguien sin los antecedentes priistas y que, además, tenía una gran presencia en el estado. Esa posibilidad, *electoralmente* más pertinente, intensificó las diferencias entre los cardenistas. Si por algún momento el conflicto consistía en las variantes sobre la participación conjunta y los métodos de selección de candidatos, el viraje hacia Ruffo resultó intolerable para algunos: se podía consentir la alternativa del priista disidente, pero no un acercamiento al PAN. Argumentando razones ideológicas y la inviolabilidad de principios políticos, particularmente los sectores asociados al PPS y PFCRN amenazaron salir del Frente en caso de formalizarse la relación con el PAN.³⁶

Entre el mantenimiento de la unidad y las dificultades encontradas con las fracciones más radicales de panistas locales, adicionadas con las resistencias de las direcciones nacionales del

³⁴ *La Jornada*, 12 de enero de 1989, pp. 1 y 16.

³⁵ *El Mexicano*, 14 de enero de 1989, pp. 1 y 2-A.

³⁶ Al respecto destaca la declaración del dirigente nacional del PFCRN, Rafael Aguilar Talamantes, afirmando que “si el PRD se alía con el PAN, nosotros apoyaremos a Margarita Ortega del PRI”. *La Jornada*, 9 de abril de 1989, p. 7.

FDN y del PAN,³⁷ finalmente el acercamiento con Ruffo no cristalizó, pese a los avances logrados en la negociación. Las pláticas, primero con Ruffo y, después, con los panistas, se prolongaron hasta prácticamente el cierre del registro de candidaturas. La complejidad del tejido cardenista en Baja California destaca precisamente en el fracasado acercamiento con el PAN, sobresaliendo la multiplicidad de intereses y la imposibilidad de una decisión.

Por una parte, Ernesto Ruffo no se encontraba cerrado a esa opción: incluso antes de aceptar la candidatura por el PAN, su expectativa era figurar como candidato de los partidos de oposición en el estado.³⁸ Después, ya como candidato panista, las pláticas con los cardenistas tuvieron que considerar directamente a los dirigentes locales y nacionales del PAN. En el panorama estatal, del lado del FDN, la oposición a la alianza provino fundamentalmente del PPS y del PFCRN; a favor, del grupo mayoritario del PMS y de la Corriente Democrática (integrados al PRD). En cuanto al contexto nacional, las posiciones fueron menos claras: mientras la dirigencia del FDN, es decir Cuauhtémoc Cárdenas y Muñoz Ledo, expresamente no manifestaban entusiasmo ante esa posibilidad, en el comentario cerrado estimulaban a quienes mantenían negociaciones con el PAN.³⁹ En cuanto a las direcciones nacionales del PPS y PFCRN, de entrada no aceptaron esa posibilidad.

En ese panorama, en donde localmente se avanzaba en negociaciones y se retrocedía en declaraciones, crecían confusión e incertidumbre entre los miembros del FDN. Mientras algunos anunciaban que el acuerdo con el PAN era “inminente”, aun

³⁷ Vale la pena señalar que de parte de Cuauhtémoc Cárdenas y de Luis H. Álvarez, la eventual participación conjunta nunca fue desechada; todo dependía de las condiciones. No era el caso de otros miembros de la dirigencia nacional del FDN y del PAN.

³⁸ A principios de 1989, el proyecto de Ruffo incluía al FDN: “si se consolida la alianza del Frente Democrático Nacional y el Partido Acción Nacional, aceptaría ser candidato a la Gobernatura del Estado, siempre y cuando, el Comité Ejecutivo Nacional de su partido dé su aprobación (*El Mexicano*, 19 de enero de 1989, pp. 1 y 2-A). A finales de febrero, Ruffo mantenía la idea de que sería conveniente, “por motivos estrictamente electorales”, que el conjunto de la oposición presentara candidato común a gobernador (*La Jornada*, 27 de febrero de 1989, p. 3).

³⁹ José Negrete Mata, “La izquierda en Baja California, un año después del 6 de julio”, *Diálogo Nacional. El Nacional*, núm. 1, noviembre, 1989.

aceptando el costo de la división del Frente, otros declaraban contra los “oportunistas” que lo proponían.⁴⁰ Y efectivamente, las negociaciones con el PAN se encontraban muy avanzadas. Según el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Antonio Rivera, “ya sólo faltaba ponerse de acuerdo sobre el manejo de la campaña electoral, porque en la plataforma política estamos de acuerdo”.⁴¹ Aunque también había el obstáculo —el principal— sobre la forma de la alianza: aquí también los miembros del PRD pusieron como condición la coalición en vez de la candidatura común.

Mientras transcurrían las pláticas con Ruffo y tampoco prosperaba la invitación disidente al priista notable, el PPS y PFCRN, con el apoyo inicial del PARM, propusieron como precandidato a gobernador a Sergio Quiroz Miranda, dirigente estatal del PPS y diputado federal. Esta medida tuvo un primer efecto positivo, al obligar la vista hacia los cuadros propios, independientemente de que su objetivo expreso fuera neutralizar los intentos de acercamiento al PAN.⁴² Por otra parte, señalaba los primeros pasos en la ruptura del FDN, que más que obedecer a causas locales se comportó siguiendo lineamientos nacionales. La actitud de acercamiento al PRI de parte de Rafael Aguilar Talamantes, se reflejó localmente en un distanciamiento que agrupó al PPS y PFCRN, por un lado, y al PARM, PMS, Corriente Democrática (PRD), junto con otras organizaciones de colonos. A pesar de que verbalmente se mantuvo por un tiempo la idea de presentar candidatos comunes en las elecciones de Baja California, a partir de la candidatura de Quiroz la estrategia real del PPS-PFCRN se dedicó a acentuar las diferencias.

El PPS-PFCRN mantuvo a toda costa la candidatura de Sergio Quiroz Miranda, que no fue aceptada por el resto de los

⁴⁰ Entre el primer grupo se encontraba el vocero oficial del PRD, José L. Alonso Vargás, a quien sólo le preocupaba acordar con el PAN que Ruffo hiciera una campaña no partidaria ante la “inminencia” de un convenio con los panistas (*El Mexicano*, 25 de marzo de 1989, p. 1-A). En el otro extremo destacaron Sergio Quiroz Miranda, dirigente estatal del PPS, y el entonces diputado local por el PMS, Javier Trejo Martínez, quienes acusaban de traición y oportunismo a los primeros (*El Mexicano*, 6 de marzo de 1989, p. 1-D).

⁴¹ *La Jornada*, 1 de abril de 1989, p. 12.

⁴² En Baja California la candidatura fue anunciada “como una medida de rechazo a la alianza que pretende el Partido de la Revolución Democrática, que encabeza Cuauhtémoc Cárdenas, con el Partido Acción Nacional”. *El Mexicano*, 5 de marzo de 1989, pp. 1 y 2-A.

miembros del FDN. Para la alianza PRD-PARM (en realidad dominada por el primero) una vez asumido que debían reorganizarse a partir de sus propios cuadros, la situación interna seguía siendo complicada. A pesar de la reducción de instancias causada por el retiro del PPS-PFCRN, que nominalmente debió simplificar la negociación, los conflictos internos persistieron. En el último momento y ante la ausencia de otras alternativas, la disputa se centró entre la candidatura de Ramón Manríquez Gullarte —líder estatal de la CIOAC y del PMS— y la de Héctor Cárdenas San Martín —ex funcionario del gobierno estatal. Ante la amenaza de mayores escisiones, después de un acuerdo mutuo se retiraron ambas candidaturas, surgiendo Martha Maldonado como una alternativa que evitara la extinción de la organización perredista en el estado.

Como puede apreciarse de lo expuesto, nunca existió realmente una *organización*, un aparato cardenista en Baja California. La candidatura de Martha Maldonado debe ubicarse en ese esquema ausente de estructura, de normatividad y de liderazgo. La campaña electoral de la candidata, así como la de otros candidatos a ayuntamientos y diputaciones locales, simplemente reprodujeron el cuadro de divisiones previo. Al parecer, sólo hubo coordinación —relativa— durante las visitas de Cuauhtémoc Cárdenas, quien sin éxito trató de recomponer lo posible.

Se comprende que la campaña de Martha Maldonado haya sido inevitablemente gris. A la ausencia de una organización, deben añadirse dos factores que complicaron el panorama: la carencia de recursos económicos y la ausencia de experiencia electoral. En la campaña de Maldonado fue manifiesta su renuncia casi explícita al diseño de una estrategia de comunicación que la acercara a los electores mayoritarios de Baja California: la clase media urbana.⁴³ No hubo un aprovechamiento de los

⁴³ Es muy sugestiva sobre la concepción política electoral de Martha Maldonado —representativa en alguna medida de la izquierda mexicana— su asociación entre *organización-grupo* y fuerza electoral. En uno de sus mítines, en donde argumentaba que la verdadera oposición del estado era el PRD, cuestionaba al PAN su carencia de apoyo *organizado*. Siguiendo su argumentación, la verdadera fuerza política radicaba en organizaciones, como las de colonos marginados, campesinos o sindicatos, reflejando una concepción que recordaba al partido-ejército, a la organización-fuerza. Dentro de esa lógica, efectivamente el PAN dependía sólo de un apoyo difuso y, por consecuencia, la campaña

medios de comunicación, que vale la pena destacar como otra de las novedades de la elección de 1989, estuvieron relativamente abiertos a la discusión política, incluyendo a la televisión. Es cierto que los medios dieron prioridad a los candidatos del PRI y, en segundo lugar, al PAN, pero tampoco se buscaron deliberadamente esos espacios para la candidata del PRD-PARM. Los procesos electorales tienen una fase de *comunicación*, que entre los partidos de oposición parece que sólo ha sido comprendida por el PAN. Si bien el financiamiento es fundamental, el problema para los sectores tradicionales de la izquierda es que ni siquiera lo tiene incorporado como tema en la agenda.

El PAN

En Baja California, el lado opuesto a las experiencias del PRI y del cardenismo fue la organización panista. En gran medida, la relativa ausencia de conflictos internos —en la forma e intensidad como se presentaron entre priistas y cardenistas—, se debe a su estructura de afiliación individual. Evidentemente, también en el PAN existen fracciones e intereses diferenciados, pero la estructura interna del partido facilita su solución: no es lo mismo cuestionar a un individuo que a toda una organización. Por otra parte, la experiencia de Baja California también indica que el panismo tiene una estructura flexible, capaz de modificarse en función de las tareas electorales. Al mismo tiempo, se trata de una organización relativamente pequeña, que sólo crece y se diversifica en los periodos electorales. Comparativamente al PRI y al cardenismo, el PAN es una organización que mira más hacia afuera, los electores, que hacia adentro, sus diferencias. Adicionalmente, las décadas de experiencia del PAN como oposición le han permitido dominar el *know how*, tanto de la convocatoria como del fraude electorales.

También a diferencia del PRI y de los cardenistas, en esta ocasión el PAN no realizó una campaña para dar a conocer a su candidato a gobernador, lo cual constituyó una gran ventaja. Previamente a las elecciones, Ernesto Ruffo Appel ya era un personaje conocido en Baja California y, además, como líder de la oposición política en el estado. Este carácter no se lo había

electoral cardenista debía estar dirigida a las organizaciones existentes y, nominalmente, ampliarlas.

dado ningún movimiento social, ni siquiera su experiencia administrativa como presidente municipal de Ensenada, a donde llegó en 1986. Su imagen opositora a nivel estatal fue producto de las tácticas hostiles que promovió el ex gobernador Xicoténcatl Leyva en contra del ayuntamiento ensenadense y que, además, fueron magnificadas por la prensa local, ocupando un papel destacado el semanario *Zeta*, de amplia influencia en la entidad. La administración de Ruffo resistió desde problemas presupuestales hasta intentos de desconocimiento por parte del congreso estatal. Durante ese enfrentamiento, que fue muy publicitado con la mayoría de los medios del lado del gobernador, la imagen pública de Ruffo comenzó a significar exactamente lo contrario a la imagen del gobierno del estado.

Tomando en cuenta los resultados del conflicto entre el gobierno estatal y el ayuntamiento de Ensenada, con la cercanía de las elecciones locales Ruffo resultó ser el candidato obvio para el PAN. Pero también para otros sectores, como algunos cardenistas, para quienes era claro que el presidente municipal de Ensenada simbolizaba a la oposición regional. Si bien eran abiertos los nexos de Ruffo con el sector empresarial de Ensenada, en su vida pública siempre dominaron otros aspectos de su personalidad que lo hicieron más atractivo al electorado: un estilo conciliador, tranquilo y de rasgos liberales. Sin embargo, a pesar de reunir todas las condiciones para lanzarse a la candidatura por el gobierno estatal, en un principio Ruffo rechazó los ofrecimientos que le hicieron tanto el PAN como una de las fracciones del cardenismo. En realidad, además de la publicidad indirecta que adquiriría con su negativa, detrás de la resistencia inicial se encontraba en juego la forma de su relación con el PAN y, eventualmente, con los partidos del FDN.

De esta manera, el periodo de resistencia a la candidatura se convirtió en la negociación de condiciones con la dirigencia del PAN, que fueron dominadas por Ernesto Ruffo.⁴⁴ Las posi-

⁴⁴ Entre sus declaraciones, hubo un argumento que particularmente muestra las tensiones de la negociación con el PAN. Según Ruffo, el partido (o sus portadores) lo habían visto más como instrumento que como ser humano, obligándolo a expresar un rechazo definitivo —aparentemente— a la candidatura. Su actitud la decidió “cuando empecé a ver cómo algunas gentes me empiezan a presionar, y no les importa mi persona. Cuando me empecé a dar cuenta que me veían como un instrumento. Yo no soy ningún instrumento”. *Zeta*, 10 al 17 de febrero de 1989, p. 28.

bles alianzas, la dirección de la campaña, los recursos, los apoyos nacionales, la relación con el sector empresarial, entre otras cuestiones básicas, fueron los temas discutidos. Precisamente, los resultados de esa negociación le permiten a Ruffo afirmar ahora que los electores votaron por él, y no por el PAN, sin mayores consecuencias. Esta expresa diferencia tuvo un sentido práctico durante la campaña, que le permitió a Ruffo un control real sobre las actividades electorales; pero también un sentido político, que cobra pleno significado una vez ganada la gubernatura. En términos generales, no se establecieron lazos de dependencia de Ruffo frente al PAN y, particularmente, de Ruffo frente a la dirigencia estatal y nacional del partido.

Desde principios de enero de 1989, cada vez con más insistencia rondaba en el ambiente la posible candidatura de Ernesto Ruffo al gobierno del estado. Sin embargo, a pesar de la fuerza electoral que habían mostrado los partidos de oposición, la posibilidad de presentarse divididos disminuía seriamente la expectativa de triunfo y, en caso de ocurrir, limitaba su alcance potencial. Así lo pensaban algunos sectores tanto del PAN como del FDN. Desde un principio, Ernesto Ruffo mostró cierto interés en la candidatura, pero condicionado a la unificación de los partidos de oposición.⁴⁵ Al no aceptar de inmediato las propuestas de su partido, que incluso fueron portadas por Manuel J. Clouthier, además de negociar condiciones indirectamente presionaba también hacia una alianza con los partidos del FDN, especialmente con el PRD, a quien reconoció como interlocutor del cardenismo.

En la perspectiva interna del partido, durante los primeros meses del año el problema más serio para el PAN fue precisamente la posible alianza con los neocardenistas. Los sectores de derecha más radicales la consideraron una alternativa “indigna e incongruente”, como la definió Salvador Rosas Magallón, quien es con toda seguridad el líder panista de mayor tradición en Baja California.⁴⁶ Por el contrario, el dirigente estatal, José

⁴⁵ “Si se consolida la alianza del Frente Democrático Nacional y el Partido Acción Nacional, aceptaría ser candidato a la Gubernatura del Estado, siempre y cuando el Comité Ejecutivo Nacional de su partido dé su aprobación.” *El Mexicano*, 19 de enero de 1989, pp. 1 y 2-A.

⁴⁶ Rosas Magallón incluso se comprometió a “luchar hasta el último momento por evitar esa indigna posibilidad de alianza electoral, porque Acción Nacional caería en el terreno electorero y traicionaría sus principios ideoló-

A. Rivera, consideraba la eventual alianza desde una perspectiva abierta, como un camino que debía explorarse.⁴⁷

Posiblemente las negociaciones con los portavoces del FDN les hayan mostrado al PAN y a Ruffo la fragilidad electoral de la organización cardenista. Simplemente sus negociadores no tenían una representatividad jurídica, ni siquiera por el PRD y, mucho menos, por otros partidos y organizaciones. De esta manera, independientemente de los avances logrados en las pláticas, nunca se tuvo certeza sobre la capacidad de las partes para cumplirlos. Las conversaciones tuvieron así un gran sesgo de informalidad y de aparente localismo, que permitía a las direcciones nacionales de ambas organizaciones negar su existencia. Tanto Luis H. Álvarez como Cuauhtémoc Cárdenas podían declarar no haber recibido “propuesta formal” para la alianza y sus condiciones y, a la vez, estimular su continuidad informal.⁴⁸

De esta manera, si los negociadores cardenistas no podían representar ni a sus propias organizaciones, también cabía la duda sobre su representación del electorado. Hasta mediados de marzo de 1989, cuando Ruffo decide aceptar la candidatura, en las conversaciones del PAN con los cardenistas todavía se reconocía en ellas la existencia de un estrecho vínculo entre el FDN y los votos que obtuvo en la elección presidencial de 1988. Después de esa fecha, sin llegar a rechazar la posible acción conjunta, se trazó una distinción entre electorado de oposición y partidos que, en la perspectiva panista, restó importancia al acuerdo con los representantes —informales— de Cuauhtémoc Cárdenas. En términos de Ruffo, “la población realmente lo que persigue es tener una opción diferente”; no a los partidos ni a las ideologías.⁴⁹

A pesar de ese cambio en la comprensión de la coyuntura, el PAN no interrumpió la continuidad de las pláticas. Se llegó a convenir una plataforma de gobierno común, pero no se avanzó en la discusión sobre la forma de la alianza: los negociadores cardenistas mantuvieron la idea de la coalición y del emblema

gicos”. *El Mexicano*, 2 de marzo de 1989, pp. 1 y 2-A.

⁴⁷ Interrogado sobre la opción de una alianza electoral con los cardenistas, Rivera declaró que “en principio no nos cerramos a esa situación”, *El Mexicano*, 19 de enero de 1989, pp. 1 y 2.

⁴⁸ *ABC*, 3 de marzo de 1989, p. 1-A y *El Mexicano*, 26 de febrero de 1989, p. 1-D, respectivamente.

⁴⁹ *Zeta*, 17 al 24 de marzo de 1989, p. 16.

común, resultando la propuesta inaceptable para los panistas. Sin embargo, más allá de los desacuerdos entre los negociadores, el obstáculo principal radicó en la dispersión del cardenismo en Baja California: nunca hubo un interlocutor firme. Sobre ella se añadieron las fuertes resistencias locales y nacionales, tanto del PAN como del FDN, que provocaron la virtual parálisis de las conversaciones. Se quedó así Ruffo sin los cardenistas, pero con el electorado de oposición prácticamente intacto, quienes realizaron la unidad electoral por su cuenta.

Dentro de un ambiente social preconstruido, la campaña de Ernesto Ruffo fue una consolidación de consensos. Si bien la estrategia de comunicación fue muy eficiente, debe reconocerse que tampoco encontró resistencias. La “ruffomanía”, idea y logotipo principales de la campaña, en su simplicidad demuestra lo blando del terreno pisado. La censura al gobierno, a la corrupción pública, los reclamos por los efectos de la crisis en el ingreso salarial, así como otros mensajes tradicionales de la oposición, fueron dejados a los discursos, en donde se trataron sin agresividad y brevemente. No eran necesarios: todo el simbolismo de la oposición ya estaba personificado en Ruffo y, a su vez, Ruffo en un nombre y en un logotipo bien diseñado. De esta manera, el mensaje de la campaña pudo ser propositivo, alegre, acompañado con música moderna (“agárrense de las manos”, de José Luis Rodríguez), como si fuese dirigido de manera exclusiva a un público juvenil. Precisamente, los jóvenes ocuparon un papel fundamental en las labores de campaña y, después, en el impresionante operativo de vigilancia del voto.

Por experiencia propia, los partidos de oposición en México saben que para ganar no basta convencer al electorado, sino que es imprescindible defender el voto, tanto en las casillas como en los organismos electorales. Se comprende que los preparativos, organización y recursos destinados por el PAN hacia ese propósito hayan sido tanto o más importantes que la campaña de sus candidatos. Según las cifras del PAN, su “ejército blanco” para la vigilancia de las casillas en el estado (más de 1 300) estuvo integrado por cerca de diez mil personas. Por lo que pudo verse el día de la elección, esa cantidad de participantes no parece exagerada. El operativo de vigilancia comprendió, entre otros, los siguientes aspectos: la preparación de los representantes del partido en las casillas, su cobertura total y, especialmente, la presencia de observadores enfrente de cada casilla, quienes a su vez

reportaban cualquier anomalía o su sospecha a un centro de operaciones. La sofisticada organización para supervisar comprendió la clasificación de casillas por sectores y distritos, con responsables en cada nivel, siguiendo una estructura piramidal que descendía hasta los observadores de casilla. Como la comunicación instantánea era vital, cada distrito y sector de casilla contaba con un equipo de radio en automóviles, permitiendo distribuir apoyos en las casillas problema prácticamente de inmediato. Tan sólo en la ciudad de Tijuana se calcula que se utilizaron alrededor de cien vehículos equipados con radio, más un número indeterminado sin ese aparato. De esta manera, cada casilla y respectivas urnas pudieron ser vigiladas desde su apertura hasta su entrega en los comités distritales; lo excepcional fueron los casos contrarios. Adicionalmente, participaron en la coordinación y vigilancia de las casillas 24 diputados federales del PAN, utilizando todas las ventajas de su fuero.

Paralelo al operativo panista surgieron acciones de vigilancia del voto promovidas por otras instancias. Sobresalió por su habilidad y eficiencia la convocatoria del semanario *Zeta* y del diario *El Norte* de Monterrey, quienes invitaron a la población a ser “reporteros por un día”. Decenas de personas se inscribieron al programa, recibieron instrucciones y fueron distribuidas en determinadas casillas el día de las elecciones. Con cámara en mano y con una “guía de reportaje” cumplieron su misión, concluyendo en la mayoría de los casos sin novedad. Cabe destacar que ni el operativo de vigilancia del PAN ni la custodia paralela hubieran podido realizarse sin la participación entusiasta de la población, en particular, jóvenes de clase media. Fue una gran cantidad de personas las que directa e indirectamente se involucraron en la supervisión de las casillas, asegurando condiciones de limpieza al proceso electoral; la “ruffomanía” aquí también tuvo sus efectos.

Una vez difundidos los primeros resultados electorales y después de haber reconocido la tranquilidad y el civismo mostrado en la jornada electoral, la vigilancia panista fue transformada por los representantes del PRI en un “operativo de violencia”. Y en cierto sentido, las reacciones poselectorales del PRI local tenían razón: efectivamente el operativo de vigilancia les había impedido el triunfo, pero por motivos distintos al argumento de violencia. Por otra parte, conviene insistir en que las reacciones del CEN del PRI contribuyeron notablemente a legiti-

mar el triunfo del PAN al gobierno del estado, a la vez que frenaban las intenciones regionales de obstaculizarlo. En un sistema presidencialista, la actitud del CEN del PRI no puede dejar de ser interpretada como la voluntad del presidente Salinas de aceptar la pluralidad y la alternancia en espacios antes considerados irrenunciables por la burocracia política. De hecho, semanas antes de las elecciones la intervención del presidente Salinas ya había favorecido a la limpieza del proceso electoral y, directamente, al PAN. Cuando se descubrieron irregularidades en el padrón electoral (con miles de votantes inexistentes), una petición del CEN panista al presidente provocó que la Secretaría de Gobernación interviniera corrigiendo el problema. En los días previos al 2 de julio, el dirigente estatal del PAN recalca que la Presidencia de la República, “hasta ahora”, había dado indicios de respetar la voluntad popular.⁵⁰

III. LA HERENCIA DE LAS ELECCIONES DE 1989

En las elecciones locales de Baja California hubo dos ganadores directos: regionalmente el PAN y Ernesto Ruffo y, nacionalmente, el presidente Carlos Salinas. Independiente de la derrota del PRI local, el reconocimiento oficial del triunfo panista se tradujo en un fortalecimiento de la imagen presidencial. Los mecanismos reales y atribuidos del poder presidencial hicieron que todo el mérito político recayera sobre Carlos Salinas de Gortari, quien así aumentó puntos en el consenso social que ha obtenido su gobierno y, a la vez, presionó al avance del proyecto de modernización del PRI y de la política nacional. La toma de posesión del gobernador panista tal vez sea el indicador más representativo sobre la preminencia de la figura presidencial y, a la vez, de la participación del PAN en la construcción de su imagen. El primero de noviembre de 1989, en un auditorio abarrotado por panistas, los aplausos mayores fueron para Carlos Salinas y para Ernesto Ruffo.

En la nueva coyuntura, el PAN ha fortalecido su papel de oposición leal, incorporándose como constructor positivo del consenso presidencial y, más aún, precisamente dentro de los sectores sociales de perfil más crítico: las clases medias urbanas.

⁵⁰ *Diario de Baja California*, 28 de junio de 1989, p. 8.

Con este panorama, la modernización de la política nacional puede pasar por el PRI —cambiando cuadros, de política interna y perdiendo algunos espacios— pero mantiene intocada a la institución presidencial. Siguiendo ese camino, el presidencialismo mexicano parece dirigirse hacia una nueva etapa, caracterizada por la redefinición de sus relaciones con los partidos de oposición, perdiendo exclusividad el PRI como constructor del consenso social al sistema político, función que progresivamente había perdido. La actual relación de la Presidencia con el PAN, que no se identifica con la tradicional relación de los partidos “paraestatales” con el gobierno, destaca entre el nuevo perfil de la política mexicana.

Por otra parte, en el espacio regional son de gran relevancia los cambios introducidos por las pasadas elecciones locales. Entre ellos sobresalen los dos siguientes: la tendencia a la desintegración de la estructura corporativa y, segundo, la reestructuración de las instituciones de gobierno. Por principio de cuentas, para el oficialismo la pérdida de la gubernatura en Baja California significa mucho más que la simple derrota electoral. Su principal consecuencia ha sido la descomposición de toda la estructura de relaciones existente entre la burocracia política regional, en todos sus niveles y expresiones: en el gobierno, en el partido, entre las organizaciones, en los grupos formales e informales y entre las “bases”. Simplemente ya no existe esa estructura vertical de relaciones políticas que se originaba en la gubernatura y se extendía hacia el congreso del estado, el partido, los ayuntamientos y multitud de organizaciones menores. Ese juego de conexiones verticales, que finalmente existía a pesar de sus contradicciones, ahora se encuentra fragmentado, inmerso en una situación en donde lo único relativamente estable —hasta donde cabe— son las llamadas organizaciones de base: los sindicatos, algunas organizaciones de colonos, y en general aquellas que tienen existencia debido a intereses más allá de la estructura partidista. A partir de ellas y hacia arriba, en dirección al partido y, sobre todo, al gobierno estatal, la comunicación se encuentra interrumpida.

En las condiciones actuales, el liderazgo *formal* de las organizaciones priistas recae exclusivamente en la presidencia estatal del partido. Pero, como cabe esperar, ese liderazgo tiene ahora rasgos de ilegitimidad —si podemos llamarles así considerando a las reglas no escritas de la estructura corporativa—, pues no

se encuentra sancionado por un nivel superior que antes correspondía al gobierno del estado. Hasta hace poco tiempo, en el interior del PRI ser o no ser dependía precisamente de la posición ocupada en la escala jerárquica, de las relaciones hacia arriba. Al carecer de ellas, al quedar súbitamente en la cúspide (literalmente, al quedarse colgado), el presidente del PRI ha perdido en términos reales su capacidad de dirección, de por sí frágil y bajo permanente amenaza. La actual inmovilidad del partido en Baja California, la especie de anomia en la que se encuentra, demuestra la dureza de su crisis interna.

Lo que está ocurriendo en la estructura corporativa repercute de manera directa en las futuras relaciones del gobierno de Ruffo con la sociedad bajacaliforniana. Particularmente, ya no existen más los canales tradicionales de comunicación con el gobierno del estado. Si bien se trataba de un juego de relaciones minoritario, no hay que olvidar que consistía en el eje dominante que articulaba al gobierno, en todos sus niveles, con el partido, con sus organizaciones y con otro tipo de grupos, como los empresariales. Con la inevitable desintegración de la red tradicional, en la comunicación del nuevo gobierno estatal con la sociedad se abre un abanico de nuevas reglas que tendrán como dificultad inicial precisamente su construcción: nominalmente deben ser mejores y más abiertas, más apegadas a la formalidad. Paralela a la descomposición de la estructura corporativa, existe entonces la posibilidad de una completa redefinición de las relaciones entre el gobierno estatal y la sociedad bajacaliforniana, con toda su variedad de estratos sociales, grupos y organizaciones, incluyendo a los empresariales.

Otro de los importantes resultados que provocaron las elecciones locales de 1989 fue lo que podemos denominar la restructuración de las instituciones de gobierno en Baja California. No se trata simplemente del cambio de partido en la dirección de éstas, como ocurre en la gubernatura o en algunos ayuntamientos que quedaron en manos del PAN. Ante todo, la restructuración consiste en la redefinición de relaciones entre los poderes estatales, entre sí y con los ayuntamientos, que tienden a establecer una nueva red de conexiones caracterizada por la autonomía y equilibrio de poderes y de niveles gubernamentales. No sólo hay cambio de actores, sino también de pesos específicos, que habrá que seguir con detenimiento.

La ruptura de la estructura corporativa, además de frag-

mentar a la burocracia política, también desarticuló los espacios gubernamentales y su interacción, en todos sus niveles y formas: ayuntamientos, congreso estatal, poder judicial y gubernatura. Tradicionalmente el eje vertical y clientelista se imponía al eje formal que norma las relaciones entre las instituciones públicas: de tal manera, con esa imposición, ni el estado era libre y soberano, ni los municipios libres, ni los poderes legislativo y judicial tenían autonomía. La gran novedad de los resultados electorales de 1989 es que se enfilan a revertir esa tendencia.

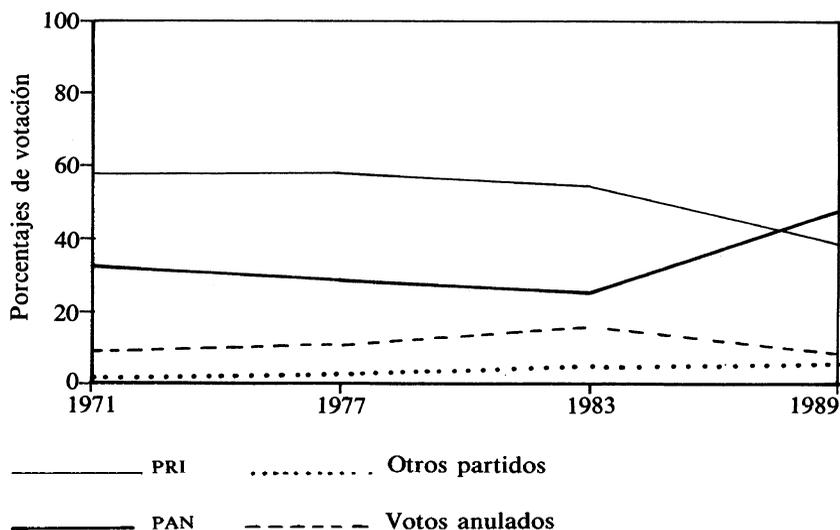
Por una lado, ni el PAN ni el PRI tienen el control mayoritario del congreso, haciendo que los partidos pequeños sean quienes tengan gran capacidad de decisión. Con ese panorama, desaparece la posibilidad de una subordinación lineal del congreso al nuevo gobernador, como era usual que ocurriera. Por lo demás, mal harían los diputados panistas en imitar la docilidad de los diputados priistas al gobernador del estado. El nuevo congreso reúne así las condiciones que le permitan actuar dentro de reglas diferentes a las impuestas por la estructura corporativa. En segundo término, como es de esperarse, la relación del gobierno estatal con los ayuntamientos tampoco puede ser del viejo estilo, por lo menos no con los priistas; la reivindicación del municipio libre será una de las características de su nueva relación y es muy probable, desde la perspectiva del gobierno estatal, que esa actitud se extienda a los ayuntamientos panistas.

De la misma manera que en los casos anteriores, la restructuración de las instituciones de gobierno alcanzó al Poder Judicial del estado, que ya no depende directamente de la decisión del gobernador, quien tenía plena capacidad —más real que formal— de nombrar y remover a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia. Si bien no ocurrieron por el camino electoral, las reformas introducidas a la constitución estatal por el ex gobernador Óscar Baylón, le permiten al poder judicial mantener una autonomía presupuestal y una selección más abierta de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia. Con los anteriores cambios, el gobierno de Ernesto Ruffo se ve obligado a redefinir su relación con el poder judicial; por aquí también se rompió la relación de dependencia vertical y fuertemente jerárquica de la vieja estructura corporativa.

Tomando en cuenta la trascendencia de la restructuración de las instituciones de gobierno en Baja California, la gestión administrativa de Ernesto Ruffo se desenvolverá en condiciones

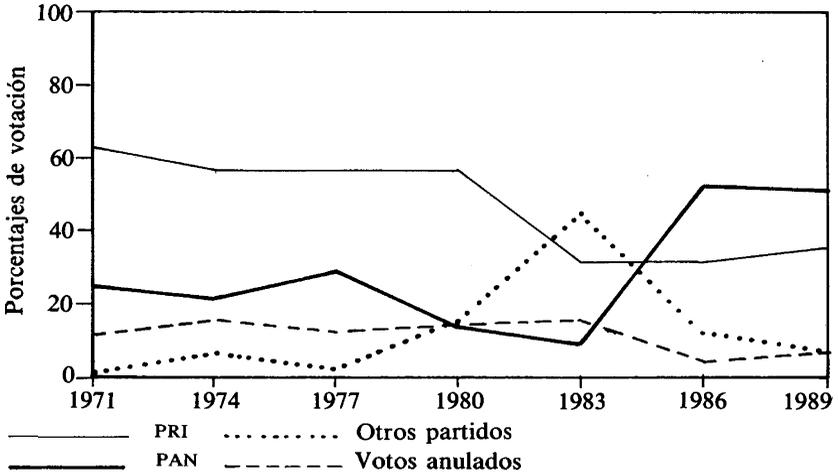
muy diferentes a sus predecesoras. La frase que anuncia que “el rey ha muerto, viva el rey”, ya no es pertinente para el caso bajacaliforniano; aquí, simplemente “el rey ha muerto”. La experiencia gubernamental que inició con la toma de posesión de Ruffo es inédita no sólo en el estado, sino en el país. En relación con el anterior juego político, su gobierno tendrá “menos poder”, lo cual sólo es lamentable desde una posición absolutista. Bajo las nuevas reglas, la administración panista estará obligada a la concertación, a los acuerdos con otras instancias gubernamentales y a la tolerancia con sus diferencias. Adicionalmente, el ejercicio de los cambios institucionales conducirá, con gran probabilidad —más aún si se refuerzan con modificaciones legislativas—, a que adquieran un carácter permanente, impidiendo que el eventual retorno del PRI al gobierno del estado pudiera acompañarse del resurgimiento de las reglas anteriores.

Baja California
Elecciones para gobernador, 1971-1989



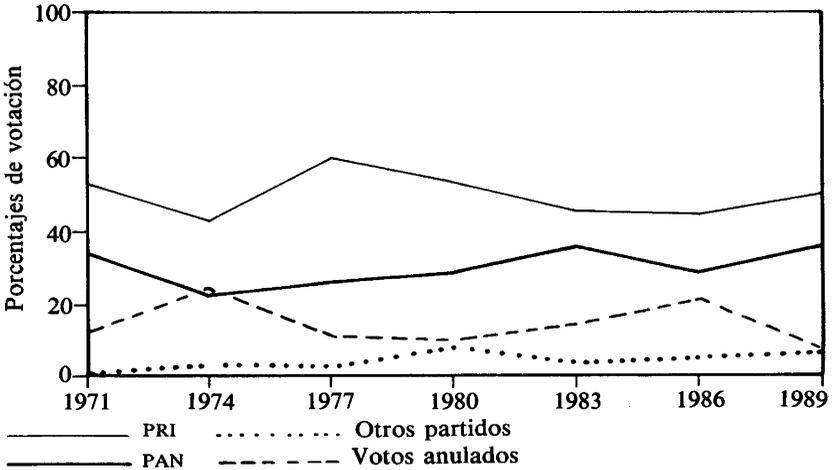
Fuente: Comisión Estatal Electoral.

Ensenada
Elecciones municipales, 1971-1989



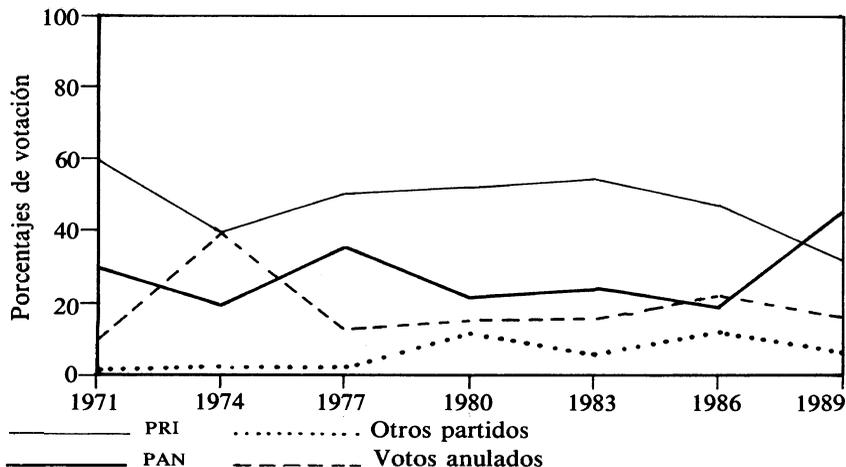
Fuente: Comisión Estatal Electoral.

Mexicali
Elecciones municipales, 1971-1989



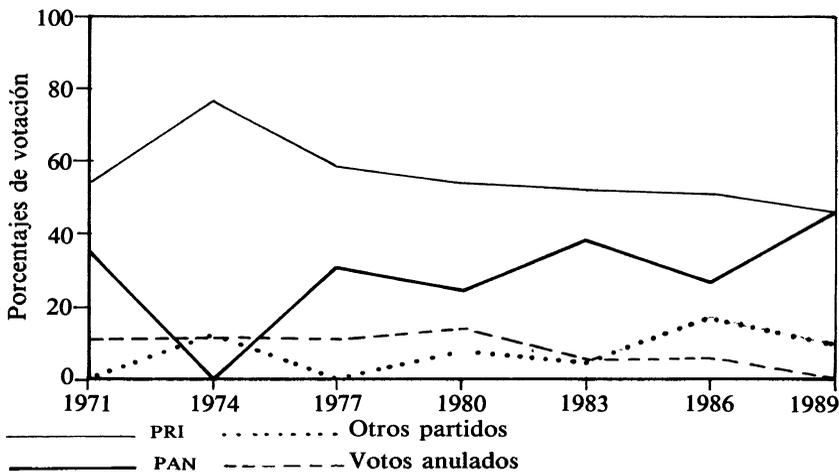
Fuente: Comisión Estatal Electoral.

Tijuana
Elecciones municipales, 1971-1989



Fuente: Comisión Estatal Electoral.

Tecate
Elecciones municipales, 1971-1989



Fuente: Comisión Estatal Electoral.

NUEVO LEÓN: REFORMA POLÍTICA Y PODER DESIGUAL, 1980-1990

ABRAHAM NUNCIO
LUIS LAURO GARZA
*Oficina de Información y Difusión
del Movimiento Obrero*

I. LA CORDILLERA POLÍTICA DE NUEVO LEÓN

Zona de poder bipartito

Dada su formación histórica, en Nuevo León el poder ha sido producto del conflicto y de la negociación entre dos baluartes: el de la clase política surgida de la revolución y el de la clase económica, heredada del porfiriato.¹ Esta relación, con algunos cambios de matiz y según la coyuntura, será la que domine la escena política del estado. En su seno se gestará la tendencia al bipartidismo, evidente sobre todo en los años recientes.

Esa tendencia aparece como fenómeno registrable en la segunda mitad de los años setenta; concretamente en las elecciones municipales de 1976. Como antecedentes de tal fenómeno pueden señalarse añejas luchas por el poder, donde uno de los embriones del panismo, primero (la coalición de fuerzas que derrotó con su candidato, Fortunato Zuazua, al candidato oficial, Plutarco Elías Calles, hijo, en las elecciones gubernamentales de 1935), y el Partido Acción Nacional, después, van acumulando tradiciones y espacios políticos.

El bipartidismo (partido oficial contra partido conservador) adquiere mayor relevancia en la medida en que las fuerzas socia-

¹ Los términos *clase política* y *clase económica* se aplican, en este caso, al ámbito en el que son hegemónicos los dos bloques de fuerzas clasistas de la burguesía dominante.

les de origen popular, aunque con presencia y en ciertos momentos de indudable influencia social, han carecido de una expresión electoral permanente y autónoma. Desde luego, esto debe relativizarse: algunas de tales expresiones —las más visibles— hallaban —y hallan, si bien menguado— un rango de representación a través de la vía corporativa.

En Nuevo León el régimen político tiene su origen, como en el resto del país, en la Revolución mexicana. Existe, sin embargo, una diferencia manifiesta entre la clase económica que ha mantenido su integridad y perfil ideológico a lo largo de un siglo, y la clase política, que ha acusado ajustes en términos de identidad. Aquélla primero se enfrentó a ésta, y más tarde negociación y coexistió con sus diferentes gobiernos.

Los proyectos de ambas, intersectados en diversas zonas de gestión y poder no han logrado una fusión histórica y, actualmente, mantienen un apreciable deslinde. Será, empero, la clase económica la que imponga su predominio, tanto en las esferas de gestión como en la práctica real del poder.

La confrontación entre los empresarios de Monterrey y el gobierno de Luis Echeverría sirve de catalizador a lo que se manifestará en la década de los ochenta como una tendencia más acentuada hacia el bipartidismo. Las más inequívocas expresiones se producirán, tanto dentro del propio partido en el poder (el priismo empanizado) como en la esfera de gestión y, en suma, en la política económica, base de ensanchamiento de los intereses de la clase propietaria.

Del ascenso del voto panista se nutre el bipartidismo. Tras haber abortado el lanzamiento de su candidatura a la Presidencia de la República (1976), Pablo Emilio Madero regresa a Monterrey para convertirse en candidato a la alcaldía de esta ciudad. Su campaña obtiene un éxito indudable, no sólo por la mercadotecnia electoral utilizada en lo que ahora se denomina *manejo de la imagen* —su rasgo más epidérmico—, sino por el sentimiento antiecheverriista y anticentralista que logra prender en amplios sectores de la población.

El clima de descontento popular tuvo un primer momento de afloración con la muerte del industrial Eugenio Garza Sada, quien había mantenido la regla de coexistencia entre el sector público y el sector privado a partir de la no participación de éste en los procesos electorales.

A fines del sexenio de Echeverría la efervescencia empresa-

rial adquiriría caracteres de revuelta contra el régimen y su partido. En Monterrey tal agitación alcanzó su grado máximo con la reunión de Chipinque, cuando los múltiples rumores que, se suponía, los propios empresarios generaban (golpe de Estado, confiscación de cuentas bancarias, vacunas esterilizadoras) y con el llamado expreso de sus ideólogos a involucrarse en política.

Pablo Emilio Madero, alto ejecutivo de la *holding* Fomento Industrial y Comercial (hoy Vitro), logró conjuntar importantes apoyos económicos y condiciones políticas favorables a su candidatura. Los resultados electorales de diciembre de 1976 dejaron la impresión en un gran sector de regiomontanos de que Madero había triunfado en las urnas y perdido en virtud del fraude.

En las elecciones de 1979 (para gobernador, senadores, diputados federales y locales), el PAN se convierte en la fuerza estatal que antes no era. Aumentó su votación global y conquistó dos diputaciones federales por mayoría relativa, a pesar de que el sentimiento anticentralista con sus irradiaciones antipriistas había menguado. Desde la Alianza para la Producción en 1977, las relaciones entre la cúpula empresarial de Monterrey y la Presidencia de la República mejoraron visiblemente. Esto se tradujo en una baja correlativa de los recursos panistas provenientes de los círculos empresariales. Así, las elecciones municipales de 1979 le resultaron al PAN en un menor activismo.

Afianzado en el poder, Martínez Domínguez, el triunfador de los comicios en 1979, había declarado en los escarceos previos a las elecciones de 1982 que no podría gobernar con la oposición. Se hallaba en juego la sucesión presidencial y el PRI contaba, a pesar de los indicios de crisis que se hicieron manifiestos a partir de la devaluación del 17 de febrero de ese año, con el apoyo de los beneficiarios del auge petrolero. Las maniobras de Martínez Domínguez tuvieron esa cobertura y logró contener la participación del electorado en favor del PAN que, en esta ocasión, perdió las diputaciones federales que antes había logrado. Sin embargo, las futuras conquistas del PAN en Nuevo León se vieron apuntaladas en las elecciones presidenciales de 1982 por el hecho insoslayable de haber alcanzado este partido su más alta votación histórica, y por ser su candidato Pablo Emilio Madero identificado con la entidad.

El cambio de escenario a que da lugar la nacionalización bancaria es el "caldo de cultivo" del relance panista. En 1985, con la candidatura de Fernando Canales Clariond, el PAN dis-

puta con fuerza la gubernatura al partido oficial. El vasto fraude electoral, documentado en la prensa local, impidió conocer los verdaderos resultados electorales; pero al igual que en el marco municipal una década atrás, la impresión general fue que el PRI había sido derrotado.

La debilidad del nuevo gobierno encabezado por Jorge Treviño Martínez lo obligaría a aceptar condiciones que ampliarían el perímetro del bipartidismo como tendencia. En las elecciones de 1988, las disposiciones de la nueva ley electoral le permiten conseguir 14 de 40 diputaciones (una, por mayoría) en el Congreso local. Sobrerrepresentado, según las cifras oficiales, Acción Nacional se erigió en el único partido frente al PRI dentro de la legislatura: quedaron excluidos el resto de los partidos.

Cuatro meses después, el PAN reforzaría su posición con la conquista de dos alcaldías importantes del área metropolitana de Monterrey: Santa Catarina, tradicionalmente asignada a la CTM, y San Pedro Garza García, que había permanecido en territorio priista desde 1973. El esquema bipartito oficial-conservador que parecía configurarse como posible alternancia del poder en el norte del país, sin dejar de ser dominante se ve alterado por los efectos de las elecciones de julio de 1988. Ello explica la considerable votación captada por la coalición cardenista en varios municipios del estado, sobre todo en aquellos ubicados en el área rural. La coalición logró conquistar la alcaldía de Bustamante.

El sustrato del bipartidismo en Nuevo León es la tenencia de los recursos en su más amplia acepción. De esta forma se suelen compensar los conflictos entre quienes se identifican ya sea con el PAN, ya sea con el PRI. Las vías son las más diversas: desde préstamos, subsidios y control de la fuerza de trabajo, hasta la incorporación de funcionarios con trayectoria y/o intereses dentro de la iniciativa privada al aparato administrativo. Esto último puede verse con claridad en los nombramientos del actual gobierno del estado para dirigir los grandes proyectos de infraestructura y desarrollo económico.

Los factores reales de poder

El mismo poderío económico concentrado en los propietarios de los oligopolios regiomontanos los convierte en una fuerza políti-

ca determinante en torno a las decisiones fundamentales del estado. De los 500 consorcios más grandes en América Latina, 108 corresponden a México y, dentro de éstos, 11 tienen su matriz en Monterrey, según datos de 1988.²

Para efectos prácticos, el Comité Industrial de Nuevo León, también conocido como el Grupo de los Diez,³ es el que trata las cuestiones de mayor envergadura con las autoridades federales sin requerir apenas de la intermediación del gobierno local. El liderazgo de ese grupo, que se decanta en la primera mitad de los años ochenta, resulta del proceso de pugnas y reacomodos entre los principales capitalistas de la región a lo largo de una década, después de la muerte de Garza Sada en 1973. En cierta medida, los Diez vienen a sustituir, modernizándolo, el liderazgo que este industrial ejerció con una actitud patriarcal durante las tres décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial.

Antecedentes de la rearticulación de los empresarios regionmontanos, cuya hegemonía se vio sacudida por la desaparición de Garza Sada y los desacuerdos internos en el núcleo del grupo Monterrey, son los diversos momentos de crisis que van de la reunión de Chipinque a las acciones de resistencia provocadas por la nacionalización de la banca. En la segunda mitad de los años ochenta, tal hegemonía adquirió estabilidad a pesar del conflicto electoral de 1985 en el que la oposición panista, apoyada en importantes sectores empresariales y de la clase media, disputó con fuerza el poder al partido gobernante. Cabe recordar que los representantes de los organismos empresariales no asistieron al acto de asunción de Jorge A. Treviño en protesta por lo que evaluaron como un magno fraude electoral. Ello ocurrió en el marco de una recuperación económica de los oligopolios y de las inversiones que éstos realizaban en el interior y en el exterior. Su participación regional en la etapa de privatización de la economía es fruto, entre otras cosas, del margen de ilegitimidad con que llega al gobierno del estado Treviño Martínez. Las concesiones y apoyos que reciben de su gobierno se van a

² *El Norte*, 13 de marzo de 1990.

³ Está integrado por los presidentes de los consejos de administración de los principales consorcios locales: Bernardo Garza Sada (Alfa), Adrián Sada Treviño (Vitro), Eugenio Garza Lagüera (Visa), Andrés Marcelo Sada (Cydsa), Lorenzo Zambrano (Cemex), Humberto Lobo (Protexa), Eugenio Clariond Reyes (Imsa), Gregorio Ramírez (Trailers Monterrey), Javier Garza Sepúlveda (Gentor) y Alberto Santos de Hoyos (Gamesa-Coral).

traducir en una actitud de respaldo a su mandato, e incluso a su figura, objeto de verdadero escarnio durante los primeros años.

En ese sentido fue significativa la declaración del presidente del Consejo de las Instituciones, José María Elizondo, organismo cúpula de los empresarios en Nuevo León, en torno al quinto informe del gobernador Treviño. El funcionario privado consideró que su gobierno se había legitimado por el monto de la obra pública realizada.

En una rápida mirada retrospectiva, vemos a los empresarios unificados ante la implantación del libro de texto gratuito por el gobierno de López Mateos; más tarde, ante la expropiación de tierras en Sonora y Sinaloa por el de Echeverría y, posteriormente, frente a la nacionalización de la banca por el de López Portillo. Sin embargo, en cada una de estas coyunturas su comportamiento fue distinto. En los dos primeros casos, su oposición afectó al régimen local; no así en el último. Lo sorprendente de la medida y la red de intereses que se había tejido entre el poder público y los empresarios los inhabilitó para oponerle un frente vigoroso y cohesionado. Esta red tenía por eje al hombre fuerte en que la doble circunstancia de auge y crisis económicas convirtió al gobernador Alfonso Martínez Domínguez. La capacidad de gestión de este político residía, básicamente en:

a) Su natural identificación con el grupo Monterrey en tanto que sacrificado y resentido con el presidente Echeverría, a quien los empresarios de este grupo habían tornado en su *bête noire*.

b) Su perfil diazordacista y la consecuente fama de político de mano dura.

c) Su manifiesta inclinación empresarial, al mismo tiempo como hombre público y como hombre de negocios.

d) Su probada audacia al servicio del sistema político, y un rápido aprendizaje de la situación de las fuerzas en Nuevo León, entidad de la que se había mantenido prácticamente alejado.

Con Martínez Domínguez, salvo a fines de su mandato, se estabilizó la antigua división de funciones: los empresarios dedicados al manejo de sus negocios y los políticos al manejo de los asuntos públicos.

El ex regente del Distrito Federal logró una suerte de acuerdo no explícito con el grupo empresarial de Monterrey: su gobierno buscaría la satisfacción de sus intereses, pero él se en-

cargaría, sin interferencias, de la ejecución de las diligencias políticas. De esta manera pudo minimizar la beligerancia de la oposición. Esto significaba que la presencia del PAN, sin faltar para efectos de legitimización, debía ser apenas significativa. La izquierda, en este caso, no era adversario de tomar en cuenta; sobre todo si se considera que Martínez Domínguez se había encargado, desde su campaña y con mayor fuerza una vez en el poder, de arrinconar al núcleo con más amplias posibilidades electorales que era entonces el Partido Comunista Mexicano. La coartada para mantener la imagen de pluralidad exigida por la reforma política consistió en ampliar el espectro de los partidos satélites.

Así, las elecciones de 1982 fueron verdaderamente holgadas para el PRI. Por más que la estatización de la banca hubiera afectado los intereses de los dueños de aquella que tenía su sede en Monterrey, las elecciones municipales celebradas tres meses después de tomada la medida no produjeron una oposición al partido oficial. La respuesta empresarial, empero, se iba a producir con toda su intensidad en 1985. Aunque ya lo habían hecho en cuatro o cinco ocasiones durante medio siglo, nunca su combate al PRI fue tan virulento ni tan eficaz en una elección como entonces.

Dimensión del poder formal, con todo lo que esto supone de capacidad y limitaciones en un contexto regional dominado económicamente por una oligarquía dinástica, la clase política constituye el otro factor insoslayable de dirección estatal en Nuevo León. En sus altibajos, la clase política se encuentra, a lo largo de un recorrido de siete décadas, en condiciones de desventaja frente a la clase económica. Al adentrarse el régimen priista en la crisis, la pérdida de identidad ideológica, los descalabros sufridos y su fragilidad institucional hacen de aquella un grupo burocrático con una menguada influencia. Por una parte ha registrado derrotas históricas en el terreno electoral, imposiciones internas y defecciones, y por la otra, su propia falta de autonomía, plegada como siempre lo ha estado a la sedicente disciplina partidista (en los hechos a la línea presidencial); estigmatizada, además, por sus métodos de acción política (autoritarismo) y enriquecimiento material (corrupción), la han lastrado en su función pública y le han restado autoridad moral frente a la sociedad.

En la primera mitad de los años ochenta, esa clase fue prác-

ticamente acuartelada por Martínez Domínguez, poniéndola bajo el cobijo de su poder, pero al mismo tiempo restándole toda capacidad de iniciativa, misma que él concentraba. Los efectos resultaron perniciosos al momento de tener que aglutinarse en torno a Jorge A. Treviño, un candidato sin mayores antecedentes políticos y con un discurso raquíutico y, para colmo, ajeno a los esquemas doctrinarios del PRI. Surgido de la esfera administrativa del aparato burocrático, sus defensas curriculares no eran las que requería el momento político; de aquí su dificultad para convocar a esa clase.

Si bien el equipo treviñista se conforma con políticos poco identificados con las tradiciones priistas, en él participa un hombre que los representa no sólo por su trayectoria en el ala izquierda de las mismas, sino por haber sido su padre uno de sus exponentes cumbres en el periodo poscardenista. Lucas de la Garza, secretario general de gobierno en el primer trienio treviñista, atenuó en parte el extrañamiento de la clase política hacia Treviño Martínez.

Con todo, ni la presencia de políticos adscritos al ala conservadora del PRI, cuyo punto de origen fue la administración de Eduardo A. Elizondo, que se caracterizó por su afinidad con los intereses empresariales, ni la de políticos como Lucas de la Garza, fue suficiente para evitar la deslegitimación que experimentó en sus primeros años de gobierno la figura de Treviño Martínez.

Emergencia y desencuentro de la tercera fuerza

En Nuevo León no ha existido una tercera fuerza electoral efectiva, a pesar de los sectores sociales que potencialmente pudieran nutrirla. Esos sectores surgieron con toda nitidez en el curso de la década de los sesenta y los setenta. El rápido crecimiento económico de Monterrey y su área metropolitana atrajo a miles de familias campesinas que abandonaban un agro en crisis para buscar mejores perspectivas en la ciudad.

La demanda de vivienda fue una de las manifestaciones más significativas del flujo migratorio. Pronto se convertiría en un fenómeno político al adquirir autonomía y diferenciación los movimientos de posesionarios. Insatisfechos con la gestión de los líderes priistas adscritos a la CNOP, varios núcleos de colonos se incorporaron al llamado de organizaciones emergentes en

las que veían mejores perspectivas de satisfacción a sus necesidades.

En poco tiempo se conformó un nuevo liderazgo. Con el surgimiento del Frente Popular Tierra y Libertad éste adquirió dimensiones políticas inéditas. La toma de tierras y la construcción de formas comunitarias basadas en una intensa participación de los colonos pusieron en pie de alerta a la burguesía regiomontana; sobre todo a los círculos de propietarios de bienes raíces en el área metropolitana.

El de Tierra y Libertad, como movimiento de posesionarios, cobró una gran fuerza en la fase de toma de tierras. Esta fase se agotó hacia 1975, pero la conquista de nuevas áreas de influencia social y acción política le proporcionaron suficiente vigor hasta finalizar la década. En el proceso de estabilización fue perdiendo cohesión política sujeto como estaba a las presiones del gobierno, que a su vez recibía las de los propietarios locales para reprimirlo. En su interior se desarrollaron contradicciones insuperables que a la postre lo dividirían. La ruptura fue precipitada por el gobierno de Alfonso Martínez Domínguez, en el propósito de responder al interés de los terratenientes con la creación del organismo Tierra Propia y la represión a uno de los dos grupos en pugna.

El movimiento de Tierra y Libertad se hizo de un perímetro ideológico y cotidiano en el que el espectro del gueto lo mantenía a cierta distancia de los partidos políticos. De hecho, su crítica hacia los partidos, que siempre consideraron *electoreros*, y por tanto a los procesos electorales en sí, fue explícita y se constituyó en un componente definitorio de su bagaje político. En esta posición se podía leer un eco del desencanto que produjeron en diversos círculos universitarios tanto la represión como la militancia tradicional en los partidos de izquierda, primero, y luego, la guerrilla que fue su polo opuesto. El volcamiento hacia las masas era, en ese sentido, la opción teñida de maoísmo que los dirigentes del movimiento urbano-popular en Nuevo León, de procedencia universitaria, visualizaron como más válida.

Al perfilarse la reforma política, ese sustrato ideológico condujo al movimiento Tierra y Libertad a un rechazo de todo aquello que significara lucha electoral. Esta concepción irradió a los núcleos en los que directamente tenía influencia: cierto segmento de colonos, inquilinos, trabajadores del volante, campesinos, obreros y universitarios. No era sólo la irradiación ideoló-

gica de Tierra y Libertad la que establecía el deslinde de esos sectores con los procesos electorales, sino un antipartidismo que en ellos fue arraigando.

En 1976, el Partido Comunista Mexicano decidió abandonar la semiclandestinidad a la que había sido orillado desde el régimen de Alemán y lanzó la candidatura de Valentín Campa a las elecciones presidenciales. La participación electoral del PCM, que fue el precedente del retorno a la vida pública de la izquierda que combatió frontalmente al régimen, aunque significativa no logró crear en Nuevo León las bases para la configuración de lo que en el futuro podría haber sido la tercera fuerza. Tradiciones sectarias y la propia controversia que la actividad electoral generó en los núcleos de la izquierda donde había cristalizado el antipartidismo produjeron, por una parte, un vaciamiento al ocurrir las múltiples alianzas y fusiones de esta tendencia y, por la otra, una fuerza electoral mermada.

Escenarios donde emergen nuevos contingentes a la vida política del estado son también la universidad estatal y las secciones de los sindicatos nacionales en la localidad. Los efectos del movimiento de 1968 se harían sentir al año siguiente en el estado, en torno a la lucha por la autonomía y la democratización de la universidad. Las conquistas, que se tradujeron en un clima de participación y en el arribo de políticos identificados con la izquierda, abrieron un breve paréntesis en el control tradicional de la universidad.

El combate abrumador de las fuerzas conservadoras del estado y las propias pugnas de los sectores universitarios emergentes dieron al traste con muchas de las expectativas políticas de éstos. Una de sus consecuencias fue la dispersión. También en este caso las luchas universitarias y las electorales registraron un desencuentro. En Nuevo León no ocurrió como en otros estados donde la expulsión de un espacio (sindical o universitario) se compensó con la apertura de otro en los órganos y puestos de representación popular. Esto anuló la participación de muchos universitarios experimentados tanto en uno como en otro.

A lo largo de la década de los setenta, en Nuevo León —de hecho, los hubo en todo el país— surgieron varios movimientos sindicales que revitalizaron el potencial de la clase obrera. Siderúrgicos, electricistas, ferrocarrileros, maestros, telefonistas, despertaron a la lucha por diversas reivindicaciones. Otros núcleos sindicales adscritos a empresas de la localidad hiciera lo

mismo, pero fueron más fácilmente golpeados. Los casos de las empresas Medalla de Oro, Gamesa y Crisa ilustran claramente el fenómeno. Vistos en conjunto, los movimientos sindicales daban relevancia y tonificaban la idea orientadora de un sujeto histórico actuante, que era a su vez la referencia clásica de la alborada socialista en los otros movimientos.

Entre los sectores obreros que emergieron a la lucha sindical y que trascendieron sus contornos gremiales por más tiempo y con mayor solidez fueron los trabajadores siderúrgicos y, entre éstos, señaladamente los de la sección 67 correspondiente a la Fundidora Monterrey. Fenómeno no suficientemente estudiado fue el margen de autonomía y pluralidad de fuerzas que conquistó la sección 67 a partir del desplazamiento no institucional, en 1972, del comité ejecutivo plegado a las directrices priistas. Combinando una política pragmática y una línea ideológica de izquierda, los siderúrgicos de la Fundidora se convirtieron en eje ineludible de las luchas sindicales y políticas a lo largo de los años setenta.

En el rejuego sindical se producen conflictos y paradojas que hicieron prevalecer la identidad gremial sobre la identidad partidaria. Esta limitante impidió al contingente de Fundidora sumarse de lleno a la lucha electoral que pudiera haber reforzado los alcances de la tercera fuerza. Los siderúrgicos adoptaron, en la nueva coyuntura, una actitud de seguimiento a las tradiciones que dentro del partido oficial asignaban puestos en el ámbito parlamentario al gremio minero, según el esquema corporativo. La lealtad ideológica del sector liderado por quienes habían hegemonizado la dirección del sindicato en la primera mitad de los setenta corría, no obstante, en dirección de la izquierda aglutinada alrededor del Partido Comunista Mexicano. Tal comportamiento no enfrentó mayor dilema mientras el reclamo electoral se mantuvo como un fenómeno marginal.

En 1979, vigente la reforma electoral y decidida la participación del PCM, la dirección del sindicato de Fundidora cambió de manos. Desde 1977 la hegemonizó un grupo de izquierda marcado por el antipartidismo, promoviendo así la automarginación de la lucha electoral. Después vendría la represión del gobierno de Martínez Domínguez a sus integrantes, con la consiguiente recuperación del comité ejecutivo por un grupo que estaba sujeto al partido oficial.

La represión y divisiones internas que sufrieron Tierra y Li-

bertad, los sectores críticos de la UANL y los obreros de Fundidora postraron a cada uno de estos viveros políticos y les impidieron pasar a formar parte, en los procesos electorales de los ochenta, de una fuerza alternativa al bipartidismo imperante.

II. ELECCIONES: 1979-1980

1979: Reforma electoral por goteo

La reforma política, para todo efecto práctico, se inició en Nuevo León con las elecciones de 1979. La reforma instrumentada por el régimen de López Portillo abrió las posibilidades de participación ciudadana, permitiendo que partidos antes proscritos se incorporaran a la vida electoral; permitiendo también las alianzas de corrientes políticas y el reconocimiento de una necesidad de representación en sectores minoritarios que hasta entonces se habían mantenido al margen de las luchas electorales. En este sentido, la figura de las asociaciones políticas refuerza tal propósito.

El requisito del registro para poder participar en los procesos electorales constituía, al mismo tiempo, un privilegio y una limitante. El privilegio era para aquellas organizaciones políticas establecidas y que tenían una reconocida presencia nacional, aunque en algunos casos sólo fuese nominativa, y la limitante operaba para los grupos que aun teniendo una significativa presencia regional carecían de alcances en el ámbito nacional. La pluralidad era otro de los rasgos contenidos en la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales.

En Nuevo León la pluralidad sólo fue observada parcialmente. A los partidos Comunista Mexicano, Socialista de los Trabajadores y Demócrata Mexicano se les negó el registro para participar en las elecciones locales. La apariencia de pluralidad se cubrió con la incorporación periférica de dos partidos cuya fuerza política real en el estado era prácticamente nula: el Popular Socialista y el Auténtico de la Revolución Mexicana.

Recompuestas las relaciones entre los empresarios regionalistas y el poder central encabezado por López Portillo (*El Norte*, la tribuna periodística más localizada de las voces empresariales, solía llamarlo el "Primer Pepe del País"), el PRI lanzó la candidatura de Martínez Domínguez al gobierno del estado y

en torno a ella urdió su estrategia para dar mayor solidez al nuevo arreglo que tuvo por base la Alianza para la Producción.

Aunque algunos sectores como la CTM se empeñaron en hacer aparecer a Martínez Domínguez como un continuador de la política de Pedro G. Zorrilla, el gobernador en vía de abandonar el poder, aquél fue muy claro y estableció desde sus primeros días de campaña un deslinde tajante entre lo que había hecho su antecesor y lo que se proponía hacer él. De esta manera adoptó el tema de "el cambio". Gustavo Carbajal Moreno, secretario del CEN del PRI, al tomar la protesta a Martínez Domínguez como candidato a gobernador por ese partido, definió al "cambio" como un cambio "de mente, de actitud, de conciliación".⁴ Las dificultades internas del PRI, producto de conflictos añejos que adquirieron virulencia en el sexenio de Echeverría, tornaron aún más pobre lo que de suyo había sido el elenco de candidatos del cual usualmente se valió el aspirante a gobernador para el desarrollo de su campaña. Sólo unos cuantos nombres con arraigo y trayectoria aparecieron en las listas del PRI. Esa insuficiencia tuvo que suplirse con recursos materiales y con la propia figura de Martínez Domínguez. La suya fue una campaña que se significó por la enorme disponibilidad de apoyo financiero y un dispendio ostensible.

Por su parte, Acción Nacional hacía coincidir en Nuevo León a los políticos que encabezaban el desplazamiento de la corriente solidarista liderada por Efraín González Morfín: José Ángel Conchello y Pablo Emilio Madero. Conchello sería lanzado como candidato a gobernador y Madero a diputado federal. A ellos vendría a reforzarlos el industrial Fernando Canales Clariond, quien transitó de la presidencia de la Canaco local a la candidatura por el primer distrito federal electoral.

A pesar de que la crisis de Acción Nacional había mermado las listas de este partido con la salida de la corriente solidarista en 1978, el contingente panista en Nuevo León no se vio particularmente afectado por haber sido uno de los bastiones en que se apoyaron los adversarios de esa corriente para eliminarla. Pero el conflicto mismo obligaba, sobre todo a Conchello, a cuidar más el frente interno, frágil aún, que el propio frente electoral.

El hecho mismo de participar por primera vez en muchos años en la arena política dotó al PCM de atractivo para cierto

⁴ *El Norte*, 19 de enero de 1979.

sector de universitarios y de la clase obrera. Estos sectores aún mantenían un considerable grado de influencia en sus respectivos centros de actividad y ello le aportó a la campaña de los comunistas respaldo y votos. Destacaba entre los candidatos comunistas la figura de Valentín Campa, aspirante a diputado federal; no podía decirse lo mismo de Encarnación Pérez, el candidato a gobernador.

Aquí cabe señalar el común denominador de los candidatos a la gubernatura por el PRI, el PAN y el PCM. Originarios de Nuevo León, conocidos en sus respectivos partidos por su desempeño en altos puestos de dirección e identificados por un sector del electorado, sobre todo en los dos primeros casos, como individuos de trayectoria pública, no obstante, los tres eran vistos como políticos desarraigados. Habían realizado su carrera básicamente en la capital y en buena medida reflejaban el centralismo político que ha sido una de las características de la vida política de México.

A diferencia de ocasiones anteriores, el PPS y el PARM no se sumaron al PRI de manera automática. El primero de estos partidos lanzó un candidato propio por considerar —de acuerdo con Jorge Cruicshank García, su dirigente nacional— que la candidatura de Martínez Domínguez era “una concesión a los industriales”.⁵ El PARM, por su parte, sufrió una escisión al postularlo como candidato a la gubernatura. Montado en la cresta de la ola petrolera, el ex regente del Distrito Federal llegaba a Nuevo León con un gran respaldo político y con la decidida voluntad de asumir la conducción del estado desde el momento mismo de aceptar su candidatura. Lo que para el gobernador saliente son críticas y rechazos desde aquellos espacios donde se ha sedimentado la cultura empresarial, para Martínez Domínguez, al contrario, serán elogios y bienvenidas.

El apoyo de los empresarios a la candidatura de AMD fue expreso. En los equipos partidarios y de campaña aparecen connotados hombres de negocios y ejecutivos de los grandes conglomerados locales. Son los casos de Hernán Rocha, uno de los accionistas de la cadena Salinas y Rocha, y que ocupa la tesorería del PRI local, y Everardo Elizondo, directivo de finanzas de Alfa, que será el coordinador financiero de la campaña priista.

Desde los primeros días de actividad electoral Martínez Do-

⁵ *El Norte*, 20 de marzo de 1979.

mínguez dejó claro el papel que jugaría en la política de Nuevo León: inaugura obras, preside actos oficiales, arbitra conflictos y reparte recursos materiales y encomiendas políticas. La manera en que ejercería el poder también queda prefigurada en sus lemas y declaraciones propagandísticos. Aparte del *cambio*, insistió en otro estribillo: “Hechos, no palabras”. En muchos de los muros de la ciudad se leía un juicio audaz: “AMD, el mejor gobernador de Nuevo León”. En una de las principales concentraciones instrumentadas por el PRI, la que tuvo lugar en Apodaca a finales de marzo, Martínez Domínguez declaró: “Tengo los pantalones necesarios para poner orden y trabajar parejo”.⁶ Esta promesa de orden respondía a las exigencias de “paz” en la universidad, en el terreno laboral y en el ejercicio de la propiedad privada. A la fastuosidad y compulsión de la campaña martinezdominguista apenas correspondió un puñado de guiños programáticos.

La campaña del PAN tuvo un sesgo de denuncia y un definido corte publicitario. Importado de Nueva York, Conchello adoptó el lema: “Yo amo a Nuevo León”. Y se entrecruzó con el lema priista utilizando la palabra “cambio” (“El cambio llegó”). El corte publicitario se explicaba por el éxito que había tenido esta estrategia en la campaña de Madero a la alcaldía de Monterrey en 1976. Conchello fue el autor de la pegajosa adaptación de un pasodoble que la radio difundió profusamente.

Entre las denuncias del PAN se destacaba la compra de votos por el candidato priista, la destrucción de propaganda y el manejo arbitrario de los mecanismos electorales. La figura de Conchello adquirió relieve cuando retó a Martínez Domínguez a un debate público y éste se rehusó a participar en él. La campaña panista, aunque consolidó lo cosechado por Acción Nacional en 1976, no logró mover al electorado lo suficiente como para dejar la sensación de una disputa cerrada con el PRI.

En el caso del PCM, el candidato a gobernador no fue el eje en torno al cual se moviera la campaña, como lo fue en el del PRI, y en menor medida en el del PAN. Para efectos de cobertura periodística, e incluso para la militancia partidaria, la figura de Valentín Campa resultaba una referencia más imantada que la de Encarnación Pérez, el candidato a gobernador.

El tono de la campaña comunista fue contestataria y de con-

⁶ *El Porvenir*, 24 de marzo de 1979.

frontación con Martínez Domínguez, a quien el PCM señaló en un despliegado como promotor de la contrarreforma política. Los planteamientos reivindicatorios eran frecuentes, pero sobrevolaban, en igual forma, los problemas concretos del estado. El grado de participación del PCM estaba determinado por la novedad de salir a la intemperie; el de su eficacia, por su inexperiencia en las lides electorales y la hostilidad del régimen.

La ausencia de campañas diseñadas como tales haría que la participación del PPS, el PARM, el PST y el PDM se tradujera sólo en declaraciones y en distribución de alguna propaganda. Tal precariedad no les permitió siquiera, completar la nómina de las candidaturas de los puestos en disputa. Un caso extremo fue el del PPS cuyos candidatos a diputados federales provenían, en su mayoría, de una misma familia de apellido Pérez.

El PRI, sabedor de que la oposición panista había crecido a pesar de sus debilidades internas, no quiso correr riesgos e instrumentó el fraude en apego al patrón que le acarrearía merma y desprestigio a lo largo de los años ochenta. En efecto, frescos estaban ciertos avances de Acción Nacional en el norte del país. La alcaldía de Monclova, por ejemplo, había quedado en su poder apenas un año antes.

La función del fraude cumplía con varios objetivos: *a*) minimizar los alcances del adversario de mayor peso, en este caso el PAN; *b*) garantizar un margen de seguridad por encima del cálculo real previsto, a efecto de no arriesgar los puestos clave y dar la imagen de fortaleza, según la tradición del partido gobernante, y *c*) responder a los compromisos contraídos, tanto con las fuerzas internas como con los aliados externos. El abultamiento del padrón electoral fue el mecanismo básico del fraude: poco más de 900 mil electores, según las autoridades.

En la votación para gobernador, el PRI captó 419 141 votos contra 122 789 del PAN y 7 753 del resto de los partidos.⁷ Nuevo León formaba parte de la segunda circunscripción que comprendía entonces diez estados de la República. El abultamiento de la votación resultó evidente si se compara el número de votos registrados para el puesto de gobernador con los correspondientes a las diputaciones federales y locales. El total de éstos fue menor en casi un 50% respecto a los primeros.

El fenómeno del abultamiento del sufragio (en favor del

⁷ *El Diario de Monterrey*, 9 de julio de 1979.

PRI) también puede observarse en la comparación de los votos del área rural y del área urbana. Con mayor cultura electoral y participación ciudadana, los municipios del área metropolitana de Monterrey, tomando como punto de referencia los resultados de los comicios para diputados federales, arrojaron una menor votación que la que se observó en el resto de los municipios, predominantemente rurales.

Alrededor del 80% de la población de Nuevo León se concentraba en 1979 en el área metropolitana de su capital. Sin embargo, en los distritos rurales de los 11 en que se divide el estado, el PRI captó casi la mitad de su votación total en el rango de las diputaciones federales (véase cuadro 1).

Para crear el efecto de pluralidad llevando al Congreso del estado comparsas, el abultamiento de la votación fue justamente desmesurado. Por ejemplo, en el IX distrito local, al PARM le fueron reconocidos 9 254 votos, y en el IV 8 092, cuando en el resto de los distritos su votación promedio estuvo abajo de los 300 sufragios (véase cuadro 2).

CUADRO 1

Votación del PRI para diputados federales en los distritos rurales y urbanos, 1979

VIII		<i>Distritos urbanos</i>
<i>Distrito</i>	<i>Votación</i>	<i>Porcentaje</i>
I	18 778	6.9
II	13 958	5.1
III	22 596	8.3
IV	7 432	2.7
VII	14 636	5.3
VIII	14 403	5.3
IX	22 392	8.2
X	18 064	6.6
XI	23 029	8.4
Total	155 288	56.8
<i>Distritos rurales</i>		
V	70 134	25.8
VI	45 882	16.9
Total	116 016	42.7

Fuente: Comisión Estatal Electoral.

Más escandaloso aún fue el caso del PPS, al que le fueron computados 13 079 votos en el X distrito, mientras que en el resto de los distritos, con excepción del III y el XIV, apenas superaba la cifra de los 200 (véase cuadro 3).

CUADRO 2

Resultados de la votación del PARM para diputados locales, 1979

<i>Distrito</i>	<i>Votación</i>
I	266
II	375
III	169
IV	8 092*
V	189
VI	1 343
VII	64
VIII	873
IX	9 254**
X	51
XI	61
XII	106
XIII	180
XIV	175
XV	81

* El candidato propietario era Nahum Pérez Castañeda y el distrito tenía su cabecera en Monterrey.

** El candidato propietario era Fortino Alejandro Garza Cárdenas y la suplente Arlina Marroquín Sánchez, el distrito tenía su cabecera en Cadereyta.

Fuente: *Periódico Oficial*, Monterrey, N.L., julio 6 de 1979, tomo CXVI, núm. 81.

CUADRO 3

Resultados de la votación del PPS para diputados locales, 1979

<i>Distrito</i>	<i>Votación</i>
I	191
II	172
III	959
IV	247
V	219
VI	270
VII	128
VIII	10

CUADRO 3 (continuación)

<i>Distrito</i>	<i>Votación</i>
IX	129
X	13 079*
XI	61
XII	222
XIII	126
XIV	355
XV	212

* El candidato propietario era Alfredo Esparza Velázquez y el distrito tenía su cabecera en Linares.

Fuente: *Periódico Oficial*, Monterrey, N.L., julio 6 de 1979, tomo CXVI, núm. 81.

1982: Elecciones rigurosamente controladas

A pesar de la crisis en marcha, las elecciones de 1982 no resultaron, aparentemente, favorables al ascenso de la oposición. El PRI dominó la escena, como lo había hecho en pasadas contiendas electorales. Los efectos de la reforma política se cruzaron con los de la crisis resentida en Nuevo León desde un año antes por el espectacular descalabro de Alfa y las graves dificultades financieras que enfrentaban otros consorcios de Monterrey.

En principio existía un acuerdo básico entre el capital regiomontano y el régimen. Al saberse la designación de Miguel de la Madrid, uno de los dirigentes del grupo Monterrey popularizó la frase aquella de que si “éste (De la Madrid) es igual que el anterior (López Portillo), ya la hicimos”.

En su primera visita de campaña a Nuevo León, De la Madrid les devuelve el cumplido: “hay cierta obligación moral de parte del pueblo y autoridades por prestarle apoyo (a Alfa) en la solución de sus problemas”. Justificaba así el candidato del PRI el préstamo reciente otorgado por Banobras al *holding* capitaneado por Bernardo Garza Sada.⁸

Concentrados como estaban los empresarios regiomontanos en impedir el sofocamiento de sus empresas y teniendo como marco de su relación con el poder central el acuerdo menciona-

⁸ Cfr. Abraham Nuncio, *El Grupo Monterrey*, México, Nueva Imagen, 1982.

do, el grado de involucración en las actividades electorales no fue particularmente enfático. La crisis, sin embargo, había calado y el estatismo, sus figuras y expresiones políticas eran ya motivo de abierto cuestionamiento.

El espectro de los partidos contendientes se había ampliado en los niveles federal y local. El número de candidatos a diputados federales y locales y senadores con sus suplentes ascendía a alrededor de 500 individuos que irradiaban un activismo sin precedente. El electorado tuvo por primera vez la oportunidad de acercarse a la diversidad de puntos de vista que sostenían sobre diferentes temas y problemas los candidatos de los partidos contendientes. En ese sentido la prensa jugó un importante papel de promoción y difusión de las campañas. El periódico *El Porvenir*, por ejemplo, sistematizó una amplia temática sobre la cual opinaron los candidatos participantes.

Frente a lo dinámico de la campaña y las expectativas que ésta alentaba, el gobierno local, que veía en ese clima posibles invasiones a sus territorios reservados, adoptó una actitud de hostilidad hacia la oposición. Esta actitud dio cobertura a actos de verdadera intolerancia como el registrado en la Universidad Autónoma de Nuevo León a cuyo campus le fue impedido por la fuerza el acceso a la candidata presidencial del PRT, Rosario Ibarra de Piedra. El gobernador Martínez Domínguez declaró, en ese sentido, que "apoyar a la oposición es debilitar al país". Más tarde tildaría de irresponsables a los partidos opositores.⁹

La oposición que más mella podía hacerle al PRI era, en este caso, la representada por Acción Nacional. Se entiende que algunos de los ataques más cáusticos los dirigiera el PRI a este oponente. Al iniciarse las campañas, Pedro Ojeda Paullada, presidente del CEN del Institucional declaró que el PAN era un partido fascista y acusó a Pablo Emilio Madero, su candidato a la Presidencia de la República, de soñar con el porfiriato.¹⁰ Este lance tenía una especial incidencia respecto a Nuevo León: Madero estaba identificado con la entidad y tenía aquí una reconocida trayectoria electoral, sobre todo entre los sectores pro panistas. No obstante ciertas fisuras, que ya se advertían en el grupo gobernante, la campaña del PRI en Nuevo León resultó bastante holgada. Era natural que los pronunciamientos, el to-

⁹ *El Norte*, 16 de junio de 1982.

¹⁰ *El Norte*, 15 de febrero de 1982.

no y la parafernalia de las campañas siguieran en general los lineamientos de sus referentes presidenciales.

Fenómeno presente en las dos últimas décadas de la vida política del país serán los topes a la representación del sector obrero dentro del PRI. El croquista Homero Ayala, aspirante a diputado federal, se pronunció por una mayor representación obrera en el cuerpo legislativo. Sin embargo, la mayoría de las candidaturas fue asignada a los representantes vinculados con la CNOP; entre ellos destacan, por su actuación futura, a Jorge Treviño, gobernador del estado, a Alberto Santos, fundador de la Liga de Empresarios Nacionalistas, de filiación cenopista, y a Luis E. Todd, subsecretario de Educación en el sexenio salinista.

En sí, el grupo de candidatos priistas constituía un adversario al que, fraude o no, la oposición no pudo arrebatarle un solo distrito en el plano federal. Localmente, y contra lo afirmado por el gobernador acerca de la oposición, el PRI se hizo acompañar de diputados opositores por la vía de la representación proporcional.

Para contrarrestar la presencia de los panistas en el Congreso local, las autoridades electorales abultaron la votación correspondiente a los distritos V, IX, XII y XVIII, en favor de los partidos Popular Socialista, Auténtico de la Revolución Mexicana, Socialista de los Trabajadores y Demócrata Mexicano, respectivamente (véase cuadro 4). De esa manera, el PSUM fue el único partido que resultó excluido del Congreso local (el PRT no presentó candidatos a las diputaciones locales), circunstancia difícil de explicar cuando este partido se había situado en las votaciones para presidente, senadores y diputados federales en el tercer lugar. Explicable, empero, debido a la postura más autónoma asumida por el contingente pesumista frente al gobierno de Martínez Domínguez.

El padrón electoral contemplaba 1 155 687 electores, que votarían en 1 417 casillas. Para la votación presidencial lo hicieron 880 700 electores. Así, en las cifras oficiales, la evasión electoral habría sido de 23.8%. Si se considera la misma fuente en relación con los comicios presidenciales de 1976, donde el porcentaje de abstencionismo fue de 46.2%, es inferible una mayor participación electoral en 1982.¹¹

¹¹ Pablo González Casanova (comp.), *Las elecciones en México. Evolución y perspectivas*, Siglo XXI Editores, México, 1985, p. 238.

CUADRO 4

Votación asimétrica de los partidos PPS, PARM, PST y PDM para diputados locales, 1982

<i>Distrito V</i>		<i>Distrito IX</i>	
<i>Partido</i>	<i>Votación</i>	<i>Partido</i>	<i>Votación</i>
PRI	28 292	PRI	28 439
PAN	11 261	PARM ³	3 661 ⁴
PPS ¹	3 156 ²	PAN	2 405
PARM	428	PPS	1 299
PST	416	PDM	851
PDM	405	PST	842
PSUM	316	PSUM	58

¹ El candidato fue José L. Martínez Torres.

² Votación promedio de este partido en el resto de los distritos: 997.

³ La candidata fue Arlina Marroquín Sánchez.

⁴ Votación promedio de este partido en el resto de los distritos: 997.

<i>Distrito XII</i>		<i>Distrito XVIII</i>	
<i>Partido</i>	<i>Votación</i>	<i>Partido</i>	<i>Votación</i>
PRI	18 716	PRI	30 179
PAN	4 960	PAN	5 626
PST ⁵	2 530 ⁶	PDM ⁷	3 846 ⁸
PDM	1 110	PST	1 159
PPS	1 046	PPS	928
PARM	1 028	PARM	604
PSUM	180	PSUM	367

⁵ El candidato fue Rafael Piñero L.

⁶ Votación promedio de este partido en el resto de los distritos: 1 005.

⁷ El candidato fue Antonio Jiménez.

⁸ Votación promedio de este partido en el resto de los distritos: 1 109.

Fuente: Periódico Oficial, Monterrey, N.L., julio 9 de 1982, tomo CXIX, núm. 82.

Debido al abultamiento de los votos y a lo arbitrario de las cifras, lo más probable es que el abstencionismo haya sido mayor tanto en una como en otra elección. Pero, sin duda, el grado de participación del electorado fue mayor en 1982 por múltiples razones: *a)* a diferencia de 1976, cuando el PRI no tuvo oposi-

ción (salvo la candidatura independiente y un tanto simbólica de Campa), ahora existían varias opciones; *b*) la apertura a que daba lugar la reforma electoral; *c*) el hecho específico para el radio de votantes por el PAN de que el candidato de este partido fuera asumido como un político forjado en la entidad; *d*) la incorporación al sufragio de sectores que antes permanecieron al margen de los procesos electorales, y *e*) una más amplia conciencia de la utilidad del voto en el propósito de modificar el *statu quo*. Con los hilos de la política del estado bajo su control, el gobierno de Martínez Domínguez pudo manipular las elecciones para efecto de que el PRI regresara, en lo que hace a las diputaciones federales, al patrón del “carro completo” que había abandonado en 1979. Desde el punto de vista del electorado, era lógico que ese patrón se hubiera menguado más aún en 1982. Si esto no fue así se debió a razones extraelectorales que permitieron al PRI recuperar el terreno político sin aparentes costos públicos inmediatos.

No sólo se trataba de arrasar, sino de sentar una posición de prepotencia. En la mayoría de los distritos federales del área urbana el PRI vio aumentar su votación, contra toda lógica, en más del 100%, y en algunos, como en el VII y el IX, el incremento fue de 412 y 258%, respectivamente (véase cuadro 5).

CUADRO 5

Crecimiento de la votación priista de 1982 con respecto a la de 1979 para diputados federales

VIII Distrito	1979	1982	Porcentaje de aumento
I	18 778	48 689	+ 159
II	13 958	36 452	+ 161
III	22 569	52 310	+ 131
IV	7 432	24 916	+ 235
V	70 134	64 533	- 8
VI	45 882	86 241	+ 87
VII	14 636	75 055	+ 412
VIII	14 403	35 437	+ 146
IX	22 392	80 176	+ 258
X	18 064*	69 639	+ 285
XI	27 029		

* Distrito perdido frente al PAN.

Fuente: Comisión Estatal Electoral.

En una recapitulación de lo que fueron las elecciones de 1982, tendríamos: *a*) una mayor participación de corrientes políticas y electorales; *b*) un ascenso real de la oposición, sobre todo la de Acción Nacional; *c*) una inflación desorbitada de la captación de sufragios en favor del PRI; *d*) un refrendo de la tendencia bipartidista, en términos de los votos captados (más del 90% distribuidos entre el PRI y el PAN); *e*) un mayor grado de discusión e irradiación política, y *f*) un relevante papel de los medios de comunicación en la promoción y difusión electorales.

1985: Disputa por el poder

Debido al calendario electoral que rige a Nuevo León, cada tres años hay un motivo que galvaniza la participación ciudadana; o se trata de la elección a gobernador, tradicionalmente propulsora de las fuerzas políticas locales, o de la elección de presidente de la República, que atrae al electorado por el peso de esta figura en el sistema político mexicano. Sincrónicas tienen lugar, a una y otra, las elecciones legislativas federales y locales.

En 1985, a esta circunstancia orgánica —por decirlo así— se suman muchas otras para convertir a las elecciones en las más disputadas en el estado desde 1935. La crisis, que adquiere dimensión política con la estatización de la banca, le ha cobrado ya al régimen cuotas de legitimidad y poder. Chihuahua se había erigido en la prueba de que el PRI dejaba de ser invencible: “Sí se puede”, fue el lema adoptado por el panista Fernando Canales Clariond en su campaña por la gubernatura de Nuevo León.

El gobierno sufría embates cada vez más violentos desde varios frentes: el interno, en el que se situaban los empresarios, el clero, los amplios sectores populares y de clases medias, la oposición política, e incluso dentro del partido oficial, destacados contingentes de trabajadores, y el externo, señaladamente los políticos conservadores y la prensa de Estados Unidos.

Los foros *México en libertad* y otros patrocinados por los empresarios del país en protesta por la estatización bancaria tuvieron en Nuevo León uno de sus principales surtidores. Las críticas a la “obesidad” del Estado, a la discrecionalidad del presidente de la República y al unipartidismo, difundidas por ellos, habían prendido en gran parte de la población.

En la asamblea de marzo de 1984, la Coparmex definía las relaciones gobierno-empresarios en términos críticos: “La actual crisis es, además de económica, de naturaleza política y de liderazgo social”, declaraba José Luis Condreau, empresario regiomentano y ex presidente de ese organismo.¹²

A mediados de 1984, Andrés Marcelo Sada, ideólogo de los industriales regiomentanos, llamaba en Guanajuato a sus pares a involucrarse políticamente con grupos y partidos que reflejaran su “más íntima convicción”, pues de lo contrario otros serían los que decidirían la suerte del país.

El *destape* del fiscalista Jorge A. Treviño Martínez tuvo lugar el 2 de enero de 1985. Las accidentadas negociaciones con los antiguos detentadores de la banca concluyeron un mes después. Para entoces, el industrial Fernando Canales había sido lanzado por el PAN como candidato a la gubernatura de Nuevo León. Desde un principio, el tono de la contienda estuvo dado por el panista. Al conocer la designación de Treviño, Canales declaró que ésta haría más fácil el triunfo para su partido.¹³

Ni el marco ni el bagaje con que llegaba Treviño a la campaña le eran favorables. Demasiado obvio parecía el factor determinante de su postulación: la amistad estrecha que lo ligaba al presidente De la Madrid. También era evidente, por contraste

CUADRO 6
Votación para gobernador, 1985

<i>Partido</i>	<i>Candidato</i>	<i>Votación</i>	<i>%</i>
PRI	Jorge Alonso Treviño M.	508 912	64.6
PAN	Fernando Canales C.	183 374	23.2
PST	Máximo de León Garza	39 088	4.9
PPS	José L. Martínez Torres	26 211	3.3
PDM	Jesús L. Cavazos C.	202 108	2.5
PRT	Daniel Salazar Mendoza	6 641	0.8
PSUM	Lucilda Pérez Salazar	3 447	0.4
Total		787 781	99.7

Fuente: Comisión Estatal Electoral.

¹² *Proceso*, núm. 384, 12 de marzo de 1984.

¹³ *El Norte*, 3 de enero de 1985.

con el hombre al que habría de suceder, su poca experiencia política.

Retador, audaz, populachero y a la vez dotado de una imagen apta para la explotación publicitaria, el panista Canales capitalizó de inmediato el halo triunfalista y ágil que acompañaba a los empresarios debutantes en política (Adalberto Rosas, Alejandro Gurza, Francisco Barrio). Su partido había adoptado un lenguaje insurgente. Coincidiendo con el inicio de las campañas, Pablo Emilio Madero, entonces dirigente de Acción Nacional, haría un llamado a defender con las armas si era preciso el resultado de las próximas elecciones: "El PAN llega hasta donde el pavimento termina", afirmó en una ocasión. En las expresiones panistas se leía la existencia de un partido cohesionado, fortalecido y hasta desbordante en sus expectativas de poder. En el PRI, por el contrario, las cosas marchaban mal y a contrapelo. Aunque lanzado por los tres sectores priistas, Treviño pronto se encontró con el rechazo mal disimulado, cuando no desafiante, de la CTM (punta de lanza de una fracción de la clase política): "Si el candidato confunde la función política con la de empresario, habrá rozamiento", declaró Raúl Caballero Escamilla, líder de la Federación de Trabajadores de Nuevo León. En esa misma ocasión, Eleazar Ruiz Cerda, dirigente estatal de la CROC, plantea a Adolfo Lugo Verduzco, líder nacional del PRI, el desacuerdo de su central con que el partido postule industriales y empresarios como próximos candidatos a diputados federales.¹⁴

Gran parte de la discusión inicial en las campañas gira en torno al tema de la participación de los empresarios en la política. El candidato del PRI a gobernador se siente obligado a desmentir las declaraciones de su oponente panista acerca de que en el PRI hay empresarios oportunistas.¹⁵

La discusión no era gratuita. Ambos, el candidato del PRI y el del PAN tenían un perfil empresarial —más acusado en el segundo que en el primero. Este fenómeno que alcanzaría un año más tarde en Chihuahua características inequívocas, era el resultado de la respuesta conservadora del PRI al origen de donde el PAN obtenía el nuevo tipo de cuadro político que lo haría

¹⁴ *El Norte*, 18 de enero de 1985.

¹⁵ *El Norte*, 21 de enero de 1985.

fuerte en las contiendas electorales: el ámbito y los organismos empresariales.

Un ejemplo. Canales fue invitado por el Consejo de las Instituciones a exponer su plataforma frente a los empresarios regiomontanos; que así lo haya hecho ese organismo cúpula sentaba un precedente: en el pasado ningún candidato panista había sido invitado primero que el candidato oficial a escuchar sus planteamientos; era cierto que Canales, hasta 1979, había sido dirigente de la Canaco. De todas formas el hecho rompía una tradición en la que la primacía la tuvieron siempre los candidatos priistas. En este caso, Treviño declararía que esperaba que a él también le fuera hecha la invitación.¹⁶

Menos con un armazón programático, que con gestos, actitudes y golpes publicitarios, el candidato panista fue ganando popularidad. El hecho de que un día decidiera situarse en la Central de Autobuses y saludar a todo el que pasaba; que otro se pusiera ropa campesina (contaba con un guardarropa especial para cada escenario, según lo destacó la prensa local) para visitar los distritos rurales y en uno de ellos fotografiarse empuñando un arado; que otro hiciera de alpinista e intentar llegar a la cima del Cerro de la Silla; que otro visitara a los trabajadores de Teléfonos de México o a los de la Cooperativa de Cementos Hidalgo; que otro participara en un maratón; que otro visitara el lugar conocido como La Petaca, famoso por sus servicios de magia, adivinación y brujería, daba cuenta de la ausencia de un ejercicio político riguroso pero, por otra parte, revelaba una veta antes no explorada y que para un creciente sector de la población entrañaba un atractivo insólito.

La mercadotecnia electoral que se desprendía de cada una de esas acciones se convirtió, por intermediación de Canales, en la pauta de la contienda. Así, los otros candidatos, incluido el oficial, se vieron obligados a realizar actividades semejantes aunque sin el despliegue ni la originalidad del panista. Lucilda Pérez Salazar, candidata a la gubernatura por el PSUM, dio en un momento mayor relevancia a la contraofensiva que a su propia estrategia. Realizó una visita a IMSA, la empresa del candidato panista en respuesta a sus lances seudobreristas, o bien alcanzaría la cumbre del Cerro de la Silla, cuando aquél no lo consiguió.

¹⁶ *El Norte*, 1 de febrero de 1985.

Con Canales se rompió la visión tradicional del candidato único, acontecimiento que se vio reforzado por la propia participación de una candidata de izquierda, que sin tener la espectacularidad ni contar con la cobertura del panista le imprimió una imagen tridimensional a la contienda. La periferia de ésta estaba constituida por otros candidatos situados a la izquierda y derecha del espectro.

La inusitada votación captada por Acción Nacional hace que se fracturen los mecanismos de control electoral a través del fraude. Su evidencia, sobre todo a través de los medios periodísticos, adquiere dimensiones de escándalo. *El Norte* y *El Porvenir*, por ejemplo, lograron filtrar a sus reporteros a los subterráneos donde se preparó el fraude. La maquinación les permitió exhibir lo burdo de las acciones fraudulentas cometidas por los agentes gubernamentales. El primero de esos medios reportó 1 065 quejas sobre irregularidades cometidas en el curso de la jornada electoral.

Al darse a conocer los resultados, la irritación se agolpó en el electorado. El candidato priista había anunciado su triunfo pocas horas después de concluida la jornada electoral, a través del programa *24 Horas* de la red Televisa. La prensa local destacó como prematuro el anuncio señalado, además de lo inverosímil del margen de votos (tres a uno) con el que, por voz de Treviño Martínez, el PRI afirmaba haber superado a su oponente más cercano.

Ese dato corroboraba mecánicamente la declaración que había hecho el 25 de junio a los corresponsales de la prensa extranjera el mismo Treviño Martínez: “ganaré —según encuesta del PRI— por margen de 3 a 1 en el área metropolitana y de 9 a 1 en el área rural”.¹⁷

Varias encuestas habían sido realizadas antes de las elecciones: entre ellas la del Centro de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la UANL, la del periódico *El Norte* y la del Instituto Gallup. Todas coincidían en señalar la ventaja del candidato priista sobre el del PAN. No era una ventaja significativa, pero parecía consistente. También coincidían en señalar, como tercer partido en las preferencias electorales, al Partido Socialista Unificado de México: muy por debajo del PRI y del PAN, pero claramente por encima

¹⁷ *El Norte*, 26 de junio de 1985.

de los demás partidos de izquierda y derecha. Los resultados de las diputaciones federales —los menos manipulados— confirmaron las tendencias recogidas en las encuestas.¹⁸ El PRI, sin embargo, no quiso que nada contrastara su esquema y violentó comicios, cómputos, lecturas y dictámenes electorales. Mediante tal método respondía a un electorado que había experimentado un cambio en sus límites de tolerancia al fraude oficial.

En los primeros momentos que siguieron a la jornada electoral se notó aturdimiento, aun en la dirección panista. El miércoles 10 de julio, declarándose “triunfador moral de las elecciones”, el candidato Canales reconocería la imposibilidad de luchar contra del veredicto oficial. No obstante, horas después advirtió que continuaría su lucha para reclamar su triunfo.

En su decisión parecía traducirse el ánimo de los panistas enardecidos, y de manera específica la de los empresarios que calificaron las elecciones de “afrenta grave a la democracia”. Ricardo Saldaña Dávalos, director de la Canaco de Monterrey enjuició drásticamente el proceso: “El PRI-Gobierno actúa dictatorialmente al no respetar la voluntad del pueblo y al no atender sus quejas y denuncias por las irregularidades que se registraron en las pasadas elecciones.”¹⁹ El Consejo de las Instituciones, organismo cúpula que agrupa a las organizaciones empresariales de Nuevo León, demandó convocar a nuevas elecciones y propuso la formación de un Consejo de Ciudadanos encargado de supervisar y vigilar los actos del nuevo gobierno.

El conflicto se elevó a un grado de enfrentamiento entre los empresarios y el gobernador Martínez Domínguez, sin precedente en anteriores coyunturas electorales. Martínez Domínguez acusó a los organismos privados de: *a)* “hacer manifestaciones que incitan a la violencia, *b)* estarse transformando en un grupo o partido político y *c)* incitar al desorden y al desacato de los mandatos”. En su reproche había ecos lopezportillistas: “Lo lamento porque soy amigo de ellos (los empresarios), y les he brindado amplia colaboración, porque me han dado su amistad y su confianza, porque he procurado servir leal y entusiastamente, porque he mantenido un régimen de paz social, de armonía y de unidad.”²⁰

¹⁸ *El Norte*, 15 y 16 de julio de 1985.

¹⁹ *El Norte*, 12 de julio de 1985.

²⁰ *El Norte*, 14 de julio de 1985.

En un desplegado a plana entera, los principales organismos empresariales evidenciaron no reconocer tales actitudes del gobernante y respondieron acremente y en bloque:

¿No le parece a usted, Sr. Gobernador, que quienes atropellaron el voto ciudadano y a los ojos de la ciudadanía hicieron burla de todo el principio democrático que desde el más alto nivel político se había ofrecido respetar, son los verdaderos agitadores de la paz social? ¿No le parece a usted que los verdaderos agitadores provocadores de la paciencia y la prudencia de la ciudadanía, fueron quienes se presentaron en las casillas a falsear las actas y a desfigurar los resultados de la elección, introduciendo en las ánforas, como lo señaló la prensa, tacos de votos falsos, incluso sirviéndose a su favor de la vigilancia policiaca? Y por último, ¿no le parece a usted que quienes agitaron y propiciaron desórdenes fueron los funcionarios que se hicieron sordos al clamor de las quejas de los votantes?²¹

En tal clima era explicable ver en las marchas de protesta organizadas por el PAN a manifestantes normalmente ajenos a este tipo de actos masivos: funcionarios de altos y medianos puestos ejecutivos, oficinistas, estudiantes de las universidades privadas, amas de casa de las zonas residenciales: en suma, la clientela que por décadas ha conformado el mundo empresarial sobre moldes corporativos.

El día que el Congreso del estado constituido en Colegio Electoral emitió su dictamen, el PRI propició una movilización, tanto para contrarrestar la primera marcha panista como para apuntalar los resultados que daría a conocer ese órgano. Según su cómputo, el candidato priista había obtenido 508 912 votos, contra 183 374 del candidato del PAN.²²

Dos días después de emitidos los resultados electorales —el 12 de julio— tuvo lugar la segunda de las marchas encabezadas por el candidato de Acción Nacional. Se la dio a conocer con el nombre de Marcha de la Dignidad. En ella se percibió el volcamiento de la ciudadanía en contra del fraude. Un contingente estimado entre 60 y 100 mil personas cimbró las calles de la ciudad. A pesar de estas presiones y otra marcha más, el PAN y la población que hacía causa común con él no fue capaz de impe-

²¹ *El Norte*, 16 de julio de 1985.

²² *El Norte*, 11 de julio de 1985.

dir que Jorge A. Treviño tomara posesión el día 1 de agosto.

La última de las marchas panistas tuvo como respuesta la represión. La impotencia ante la cerrazón frente a todo recurso legal para impugnar las elecciones y la situación límite a que llegaba el movimiento después de tres movilizaciones se tradujo en una tensión creciente. Situado el contingente frente al Palacio de Gobierno, el sector más radical de los manifestantes empezó a presionar en lo que parecía el intento de tomar el edificio. En el momento en que se insinuaba esta posibilidad y tras los primeros proyectiles arrojados por los inconformes al conjunto de policías, los dirigentes panistas encabezados por Canales Clariond y el presidente del comité estatal, Luis J. Prieto, decidieron dar por concluido el acto y llamar a dispersión. Acto seguido, se retiraron del lugar. Al intensificarse el lanzamiento de proyectiles, el desencadenamiento de la violencia fue inmediato. Los policías la emprendieron contra la masa. La magnitud de la represión fue más allá de lo que la ofensiva representaba. El 2 de agosto, por esta razón, quedó marcado como una fecha represiva.

La crítica a través de los medios de comunicación era por partida doble: hacia el gobierno treviñista que recién se inauguraba con una acción violenta y a los dirigentes del PAN, por haber abandonado al contingente en los momentos cruciales. El movimiento, que no tenía evidentemente una voluntad insurreccional, fue fácilmente desarticulado por la respuesta del gobierno.

Fruto relevante de la lucha electoral fue la constitución de una Asamblea Democrática Electoral (ADE), en la que por primera vez participaron aliados —más allá de coyunturas electorales— organizaciones políticas de derecha e izquierda. El propósito era obligar a las nuevas autoridades a cambiar las reglas del juego en materia de elecciones, a partir de una nueva ley electoral.²³

Los efectos producidos por la confrontación fueron diversos; aquí anotamos los que nos parecen más destacados: *a)* la consistencia de la alianza más allá de la coyuntura y su culminación en un proyecto de nueva ley electoral; *b)* el precedente que esta experiencia sentaría, como pudo verse después en Chihuahua, con la conformación del Movimiento Democrático Elec-

²³ La ADE quedó constituida el 31 de julio de 1985. *El Norte*, 1 de agosto de 1985.

toral y, más tarde, con el organismo de carácter nacional denominado Asamblea Democrática por la Defensa del Sufragio Efectivo (ADDSE), en la cual van a participar algunos de los líderes de la ADE; *c*) el desprendimiento formal del partido en el poder de uno de ellos, Javier Livas, hijo de un ex gobernador del estado,²⁴ y *d*) la conquista de un mayor rango de civilidad entre los diversos grupos y partidos de oposición, e incluso entre la administración treviñista y el partido oficial, y el resto de la sociedad.

1988: Hacia el duopolio

En las elecciones presidenciales de 1988, Nuevo León registró la más alta votación porcentual de los estados de la frontera norte en favor del PRI: 72.0%; por el contrario, fue el estado que menos votos emitió, después de Yucatán, en favor del Frente Democrático Nacional (véase el cuadro 7). Dato destacable fue también en esa elección la baja en la captación de votos del PAN. No fue sólo un descenso contable, sino en la moral de la clientela panista, debido al trato nada acogedor por el sector dominante de los empresarios a Manuel J. Clouthier, su colega, e incluso hostil por parte de la prensa más identificada con éstos.

CUADRO 7

Votación en los estados de la frontera norte en favor de Carlos Salinas de Gortari (PRI), 1988

<i>Estado</i>	<i>Votación</i>	<i>%</i>
Baja California	151 739	36.6
Coahuila	178 147	54.2
Chihuahua	284 896	54.5
Nuevo León	507 524	72.0
Sonora	281 464	68.6
Tamaulipas	279 041	59.3

Fuente: Comisión Federal Electoral.

²⁴ Eduardo Livas Villarreal, que gobernó de 1961 a 1967.

Para los efectos propagandísticos, cuyo peso en las elecciones es relativamente mayor que en otros procesos políticos, la oriundez adoptiva de Carlos Salinas de Gortari fue un componente fácilmente explotable si se toman en cuenta varias consideraciones: *a)* el regionalismo propio de un estado cuyo desarrollo ha adquirido en ciertos momentos rasgos de insularidad; *b)* el hecho, desprendido del anterior, de no haber tenido Nuevo León, hasta el momento, un político que llegase a ocupar la Presidencia de la República (hay que recordar los casos fallidos de Bernardo Reyes, Juan Andrew Almazán, Aarón Sáenz y Antonio I. Villarreal; los dos últimos eran neoleonenses y los dos primeros estaban identificados con la entidad); *d)* la notable cobertura que dieron al candidato priista los principales medios de comunicación de la localidad en concordancia con la demanda de los círculos empresariales de que existiera una continuidad política entre Miguel de la Madrid y su sucesor. Esa imagen fue reforzada desde el inicio de la campaña por diversos eventos que afirmaron —superficial, pero efectivamente— a Salinas como “el paisano de Agualeguas”.

Existían, sí, tanto los vínculos de Salinas de Gortari con su familia paterna como una sintonía cultural con su figura y su discurso, ambos despojados de ecos rurales y de nexos con el pasado que eran perceptibles, en mayor o menor grado, en el resto de los candidatos. Aunque conocido por su actividad en los organismos empresariales, Manuel J. Clouthier enfatizó, en sus alusiones a sí mismo, ser un hombre vinculado con el campo. Cabe destacar, en esta lógica, el perfil claramente urbano de la población y el carácter industrial de Nuevo León; de ambos se desprende un pragmatismo más afín a las expectativas inmediatas por venir, que la referencia a realidades y valores cuya presencia no es ya constatable en la vida cotidiana; por ejemplo, el ejido, las cooperativas, ciertas formas de organización gremial o comunal observables en el resto del país y cuya condensación histórica fue la Revolución mexicana y su corolario, el cardenismo.

El propio desarrollo capitalista de la región fue sustituyendo las banderas de esos movimientos con una cultura en la que la acción individual, incluso en el interior de la clase obrera, se imponía sobre las opciones colectivas. El discurso de la modernidad, proyectado por Salinas en su campaña, independientemente de sus bases reales, encontró en esa cultura individualista y

volcada hacia el futuro una respuesta favorable, misma que sería reforzada con los mecanismos y recursos empleados por los empresarios para hacer valer su compromiso frente a un candidato con el que tenían evidentes afinidades en términos de proyecto de nación.

Aquí puede hablarse de una cobertura de opinión pública y de una votación del PRI y su candidato como de dos fenómenos independientes que sólo hallan coincidencia en un pequeño punto de intersección en el que la propaganda, la figura y los apoyos de Salinas se traducen en votos reales a favor de éste. El resto de la votación tendría que enmarcarse en los tradicionales mecanismos del voto corporativo y del abultamiento complementario.

Los prolegómenos de la campaña priista en Nuevo León obedecieron a un calendario previsible. Tres meses más tarde de ser nombrado el candidato oficial, llegó al estado —después de una considerable ausencia— Sócrates Rizzo García, un hombre identificado con aquél, para hacerse cargo de la presidencia del PRI. Sin llegar al desbordamiento que en otros estados produjo la postulación de candidatos dentro del PRI, en Nuevo León se manifestó la inconformidad sectorial a la hora de que la jerarquía, a través de Sócrates Rizzo, hizo la distribución de posiciones. Pero se limitó a cambios de poca trascendencia; en lo fundamental fue observado el reparto de las posiciones entre las centrales en los porcentajes establecidos desde 1979.

Notorio fue el hecho de que la lista de los candidatos federales la encabezara Alfonso Martínez Domínguez, cuya fama de *alquimista* electoral había quedado suficientemente demostrada en las diversas elecciones que tuvieron lugar desde su propia elección en 1979. Ante el señalamiento que de tal hecho hacía la oposición, el ahora aspirante a senador negó ser “garantía” de fraude; por el contrario, se autoproclamó ser garantía de trabajo y unidad.²⁵

El Partido Acción Nacional declaró participar en la campaña bajo protesta. Cuestionaba así la nueva ley electoral del estado que el gobierno treviñista impulsó en respuesta a la exigencia ciudadana, pero sobre todo a las demandas del PAN y sus aliados. Desplante al fin y al cabo, la participación bajo protesta se veía como un intento del PAN por recuperar el terreno perdido después de la muestra de inconsecuencia observada por sus diri-

²⁵ *El Porvenir*, 7 de marzo de 1988.

gentes en los actos de impugnación que desembocaron en la manifestación reprimida del 2 de agosto de 1985. La llegada de Madero Belden al Consejo Ejecutivo Regional generó una pugna interna entre su grupo y aquellos panistas que venían distanciándose de las posiciones que había asumido en los años recientes al frente de la dirección nacional; de manera particular, el excesivo espíritu conciliatorio que le fue observado en torno a procesos electorales como el de Chihuahua en 1986. Fue precisamente Francisco Barrio, candidato a gobernador de esta entidad, quien cuestionó sus tácticas para dirigir al PAN en Nuevo León.²⁶

En la conformación de las candidaturas del PAN habrían de reflejarse esas pugnas; por ejemplo, Pablo Emilio Madero y Fernando Canales Clariond, dos de los principales líderes, permanecieron al margen de la nominación a cualquier puesto. En el ámbito de la opinión pública local se asumen de hecho posiciones frente a la figura de Madero. En lo fundamental le son desfavorables. Una batería de articulistas, la mayoría de ellos adscritos a la plana editorial de *El Norte*, lo sindicaron de “transa”. El episodio dará lugar a la acusación penal de Madero en contra de Federico Arreola, el más virulento de todos ellos, quien lo había calificado de “transero y pusilánime” respecto al gobierno.²⁷

Respondiendo al método de elecciones preliminares para la postulación de candidatos (en el rango presidencial alcanzó su expresión más difundida), el Partido Mexicano Socialista realizó en Nuevo León unos comicios internos con ese objeto. El PMS, que nació de la fusión de dos vertientes importantes de la izquierda —PSUM y PMT—, a las que se sumaron otras organizaciones, aportó con este procedimiento un rasgo novedoso al proceso electoral.²⁸ Que fueran siete las organizaciones que integraban al PMS en Nuevo León daba una idea de la proverbial atomización de la izquierda. No es de extrañar entonces la dificultad y no pocas controversias que enfrentaron los peme-

²⁶ Barrio calificó a Madero de “atrasado” y “equivocado”. *El Norte*, 24 de marzo de 1988.

²⁷ *El Porvenir* y *El Norte*, 14 de enero de 1988.

²⁸ Fueron 40 las casillas instaladas en diversas partes del estado (la mayoría absoluta en el área metropolitana de Monterrey). La votación estuvo abierta a toda la población en edad de sufragar. Los votantes podían elegir entre cinco y diez candidatos de una lista. Se imprimieron 3 mil 200 votos, pero sólo votaron 800 electores. *El Porvenir*, febrero 29 de 1988.

tas al momento de postular candidatos e impulsar la campaña.

Sin ser parte de los organismos fusionantes del PMS, el Frente Popular Tierra y Libertad, hasta entonces al margen de los procesos electorales, se sumó a la campaña de ese partido. Alberto Anaya, su principal dirigente, ocuparía el segundo lugar en la lista de los diputados plurinominales por la tercera circunscripción dada su pertenencia a la Organización de Izquierda Revolucionaria, que había llegado a una alianza con la dirigencia nacional del PMS.

La condición apendicular de organizaciones señaladas como "paleras" del PRI, así como su existencia prácticamente nominal en Nuevo León, hacía que aquellos partidos que postulaban a Cárdenas se les viera como al propio cardenismo se le vio en cierto momento; es decir, como una maniobra del partido gobernante para restarle fuerza a la oposición panista.

Esa óptica era reforzada por las críticas dirigidas a Cárdenas desde diversos sectores, incluido el que más se identificaba dentro del PMS con la postura de Heberto Castillo, candidato a la Presidencia de la República por este partido. A medida que avanzaba el periodo de campaña, tal percepción se fue modificando.

En Nuevo León la integración de la alianza neocardenista dio lugar a fenómenos disparatados. Por ejemplo: la conformación de dos versiones del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana: una, la que apoyaba la candidatura de Cárdenas y otra la que apoyaba la de Salinas. Esta última asumió finalmente el nombre de Partido Liberal Revolucionario. Los parmistas reproducían, ahora con mayor fuerza, una vieja pugna que en 1985 los enfrentó impidiéndoles postular candidatos a presidentes municipales a finales de ese año.

La Alianza Democrática Maderista, grupo que surge al calor de la coyuntura y cuyo liderazgo ostenta Javier Livas Cantú, no encuentra otro espacio de participación electoral y pacta su incorporación con la fracción parmista vinculada al Comité Ejecutivo Nacional presidido por Carlos Cantú Rosas. Antes había recibido el rechazo de la dirección estatal del PAN por participar bajo los colores de este partido. Organismo singular conformado por sólo seis figuras²⁹ puso por condición actuar libremente en cuanto al programa y línea ideológica del PARM.

²⁹ El 29 de febrero fundaron la Alianza, Javier Livas Cantú, Artemio Be-

La intervención directa de Cuauhtémoc Cárdenas selló esa Alianza. Por más que los procesos electorales se fueron sedimentando a lo largo de la década, en 1988 Nuevo León asistió a campañas en las cuales el debate programático fue sustituido por lances, promoción de novedades y gestos pintorescos.³⁰

Espectacular como ningún otro fue el acto de campaña realizado por Javier Livas mediante una señal de satélite. La emisión, hecha desde Estados Unidos, estaba dirigida al público poseedor de antenas parabólicas (el área metropolitana de Monterrey concentra el mayor número de aparatos en el mundo). Livas participaba en el distrito con cabecera en Garza García, cuya densidad de parabólicas es mayor. Fue ésta la primera ocasión que un satélite comercial era empleado para fines de propaganda política.³¹

Los medios de comunicación fueron los espacios más debatidos y disputados durante las campañas políticas de 1988. Mientras que la oposición cuestionaba, entre otras cosas, el

navides, Enrique Canales, José Antonio Mejía, Héctor González y Ricardo Padilla; una semana después los cuatro primeros pasaron a competir como diputados federales por el PARM. *El Porvenir*, 1 y 8 de marzo de 1988.

³⁰ El eventual parmista Enrique Canales visitará el cementerio para pedirles su voto a los muertos (*El Norte*, 10 de abril de 1988); el priista José Cárdenas Cavazos advierte que “de un mordisco nos comeremos al PAN”, y acto seguido hace lo propio con una “concha” dentro de una panadería; Patricia de la Maza (PRI) se ve obligada a responderle a su primo Federico Ferrara de la Maza el reproche que éste le hace por aceptar la postulación del partido oficial, cuestión que él interpretó como una afrenta al apellido familiar que, según su versión, data de 1085, y “que siempre ha luchado en contra de la opresión y la injusticia. El padre del actual conde (De la Maza) estuvo en prisión y él es tuerto debido a una explosión luchando en contra de los comunistas en 1938” (*El Norte*, 20 de mayo de 1988); Benjamín Clariond Reyes (PRI) realiza parte de su campaña en bicicleta (*El Norte*, mayo 30 de 1988); Ismael Garza T. (PRI) lo hace a lomo de caballo (*El Norte*, mayo 30 de 1988); Braulio Martínez (PAN), mostrando en el pecho un lienzo con la frase “Que hable Braulio”, habló durante 24 horas seguidas en el céntrico quiosco de la Plaza Zaragoza (*El Porvenir*, 1 de mayo de 1988); Ma. Jacobo Niembro de Lobo (PAN) “descongeló” el mapa de la República Mexicana labrado en madera, en el que se habían vertido varias bolsas de hielo (*El Porvenir* y *El Norte*, 1 de mayo de 1988); Felipe Zambrano (PRI) usará una escoba como logo de su campaña en alusión a su anterior gestión al frente de los servicios primarios del municipio de Monterrey (*El Norte*, 8 de marzo de 1988).

³¹ El impacto propagandístico, difundido además por la prensa, se derivó no sólo del uso del satélite, sino del contenido de los 10 programas (La televisión y la democracia; Las elecciones del 88: parteaguas de la historia; La econo-

hecho de que en el cerro de la Loma Larga se hubiera colocado un gigantesco anuncio luminoso promoviendo a Carlos Salinas de Gortari, algunos medios de comunicación, especialmente la radio y la televisión, restringían o definitivamente bloqueaban su uso a sus candidatos.³²

A pesar de que el PRI había anunciado inicialmente que su campaña no incluiría actos masivos, su estrategia se apoyó fundamentalmente en ellos. Sobre todo en el caso del candidato a la Presidencia de la República. El acarreo, proverbial en los actos priistas de este tipo, fue sumamente notorio y provocó numerosas críticas provenientes incluso de connotados miembros de ese partido. Luis M. Farías, alcalde de Monterrey y Carlos Salinas Lozano, tío del candidato, censuraron la movilización forzada (fueron empleados 608 vehículos) de los asistentes al mitin de cierre de campaña en la entidad.³³

Las críticas se habían manifestado desde la primera gira en noviembre de 1987. Pesaron, en este sentido, que los acarreados fueran estudiantes y maestros de la Universidad Autónoma de Nuevo León y las propias declaraciones del candidato condenando, desde esta institución, que los partidos políticos actuaran en las universidades.³⁴

Salinas de Gortari inició su campaña en Nuevo León. Habíéndose publicitado como norteno, a los habitantes del estado les llamó "verdaderos paisanos". El hecho causó extrañeza a diversos observadores de la prensa capitalina, quienes vieron en ésa una actitud renegada hacia su origen defeño y riesgosa en cuanto reforzaba el espíritu chovinista en el norte del país

mía mexicana: crisis permanente; El fracaso de la campaña de Renovación Moral; La centralización del poder: aberración que se perpetúa; La vida de los partidos políticos en la ficción democrática; Entrevista con los integrantes de la ADM, ADESE. El rescate de la democracia; Conclusión: México, país con solución, y Presentación de un candidato a diputado federal). *El Porvenir*, 29 de abril de 1988.

³² La leyenda "Carlos Salinas de Gortari, orgullo de Nuevo León", que ostentaba el anuncio, fue fuertemente cuestionada no sólo por la oposición, y se la cambió más tarde por la de "Nuevo León, orgullo de Carlos Salinas de Gortari". El PAN llegó a tomar las radiodifusoras XEFB y XEH de la empresa Emisoras Incorporadas de Monterrey para presionar la apertura de la radio a la difusión de sus mensajes (*El Porvenir*, 15 de mayo de 1988).

³³ *El Norte*, 29 de junio de 1988.

³⁴ *El Porvenir*, 11 de noviembre de 1987.

con respecto a los habitantes de la ciudad de México.³⁵ Para los fines perseguidos, el *norteñismo* del candidato oficial resultó eficaz dada la acogida que tal definición tuvo en los medios empresariales: “Claro que estamos con él; es del norte...”; declaró Javier Garza Calderón, accionista del grupo regiomontano Gentor.

No homogénea al principio de la campaña, la posición empresarial favorable a Salinas ofrecía resquicios por los que se colaban las reminiscencias contestatarias de 1985. Bernardo Elosúa Muguerza, presidente del Centro Patronal, declaró que era necesario que los diputados y senadores “le paren el alto” y “pongan un hasta aquí” al presidente de la República.³⁶ Dos semanas después, la misma institución rechazó participar en los eventos que presidiría Carlos Salinas por considerarlos actos partidistas.³⁷

Las reticencias empresariales fueron disminuyendo y terminaron por evaporarse a raíz del pronunciamiento de Salinas conocido como *El Reto Económico*. Los puntos básicos del *Reto* —abatimiento de la inflación, recuperación económica, profundización en las estrategias del cambio estructural— fueron considerados por Pablo Emilio Madero, dirigente estatal del PAN, como una copia exacta del programa económico de Clouthier.³⁸

Por los resultados de la gira efectuada por Manuel J. Clouthier una semana después de pronunciado el Reto Económico, puede inferirse tanto la actitud favorable que éste le produjo a Salinas, como el menoscabo que sufrió su adversario panista. El Tecnológico de Monterrey, del que egresó Clouthier, habría sido un escenario a su medida; sin embargo, la decisión tomada por las autoridades de esa institución, en el sentido de no permitir la entrada a ningún político en campaña, canceló esa posibilidad. Ya en la unidad del ITESM en Querétaro se había presentado una situación similar.

³⁵ El columnista Miguel Ángel Granados Chapa opinaba: “No se requiere tener la piel muy sensible para suponer que si Salinas quiso ir primero que a ningún otro sitio a Nuevo León porque allí se sabe ser leal y hay franqueza y reciedumbre, tal implica que en otras partes se carece de esas virtudes o existen en grados menores”, *La Jornada*, 15 de noviembre de 1987.

³⁶ *El Norte*, 11 de enero de 1988.

³⁷ *El Norte*, 28 de enero de 1988; véanse también *El Porvenir* y *El Norte* del 29 de enero de 1988.

³⁸ *El Norte*, 21 de mayo de 1988.

Con motivo del acto central de Clouthier en la Explanada de los Héroes (frente al Palacio de Gobierno) se produjo una polémica entre los panistas y el periódico *El Norte* en torno al número de asistentes a la concentración. Mientras que los primeros calculaban alrededor de 100 mil, el segundo contabilizó poco menos de 20 mil. En respuesta a las recriminaciones de los panistas en el sentido de haber manipulado las cifras en contra suya, *El Norte* montó todo un aparato para realizar un conteo mediante la amplificación de las fotografías. El resultado fue aún más adverso para el PAN e inmediatamente repercutió en el ánimo de los seguidores de Manuel Clouthier. Debido a la tradicional identificación de ese periódico con las posiciones del PAN, la sorpresa fue aún mayor. Ésta, sin embargo, atendía al sesgo salinista cada vez más acentuado de este órgano, convertido al cabo en su principal plataforma periodística en la región.

Esa que fue la penúltima gira de Clouthier en Nuevo León coincidió con los resultados electorales de Monclova; favorables al PRI, dieron lugar a los actos más intensos de resistencia civil. De hecho, Pablo Emilio Madero anunció los primeros días de junio que su partido suspendería este tipo de actos, a pesar de que Clouthier había anunciado que los panistas protestarían durante 40 días por el alegado fraude en Monclova.³⁹ Debido a las circunstancias que rodearon la gira de Clouthier, el saldo político de la misma habría sido más desalentador aún para los panistas sin las actividades de resistencia motivadas por el proceso electoral de Monclova. En el mitin de cierre de campaña, Clouthier no logró reunir ni la mitad de los asistentes que concurren a la controvertida concentración de fines de mayo.⁴⁰ En relación con los dos partidos de mayor peso en el estado, las campañas de los demás tuvieron un carácter marginal.

A diferencia de otros estados norteros —Baja California y Coahuila en la región lagunera, los casos más señalados—, en Nuevo León el cardenismo no cobró dimensión en la coyuntura previa a los comicios de julio. A pesar del compromiso contraído por la administración treviñista de instrumentar una nueva ley electoral que diera satisfacción a los reclamos manifestados en la elección de 1985, la verdad es que el marco estatal estuvo

³⁹ *El Norte*, 11 de junio de 1988.

⁴⁰ *El Porvenir*, 2 de julio de 1988.

determinado, como suele suceder en materia electoral, por el Código Federal de 1987. Las modificaciones introducidas, aunque mejoraban formalmente el proceso electoral no contemplaron la demanda de autonomía de los órganos electorales, demanda generalizada que recogió la ADE como expresión emergente de la ciudadanía en su iniciativa de Ley Electoral Democrática.⁴¹

Entre las modificaciones más reseñables de la propuesta de nueva ley electoral se hallaba: establecer un Centro Estatal de Cómputo integrado con la representación de diversos partidos políticos; crear un centro de información y seguimiento de la jornada electoral abierto a los partidos contendientes; utilizar urnas translúcidas dotadas de laminillas con ranuras milimétricas; distribución de espacios periodísticos, visuales y televisivos que garantizara una cuota mínima, pero equilibrada, para todos los partidos.⁴²

Presente estuvo en el lapso previo a las elecciones de julio de 1988, como reverso de la cultura electoral que ha generado en México la ausencia del sufragio efectivo, el fantasma del fraude. Las presunciones de irregularidades en las elecciones que se avecinaban partían, fundamentalmente, de la experiencia histórica y, de manera concreta, de lo viciado del padrón electoral. Acción Nacional, por ejemplo, efectuó un análisis en 14 secciones de distintos distritos electorales federales. De 8 195 ciudadanos encuestados en ocho de esas secciones, 2 917 (el 35.6%) resultaron con datos equivocados.⁴³ Este mismo partido presentó un total de 47 anomalías por la ubicación de casillas tan sólo en el primer distrito federal electoral; en muchas de ellas detectó que su ubicación correspondía a locales del PRI o de alguna de sus centrales.⁴⁴

El PMS, por su parte, denunció la falta de casillas *bis* en aquellos distritos donde presumiblemente la oposición podía captar mayor votación, mientras que Acción Nacional denunciaba el exceso de este tipo de casillas que en 1985 eran 248 y ahora

⁴¹ Véase iniciativa de Ley Electoral Democrática del Estado de Nuevo León, Monterrey, 1985 (mimeo.); y también, *Las elecciones en Nuevo León 1988. Memorias de actividades y reflexiones sobre el proceso electoral*, Monterrey, Ed. Comisión Estatal Electoral, s./f.

⁴² *Las elecciones...* *op. cit.*, pp. 4 y 5.

⁴³ *El Porvenir*, 16 de mayo de 1988.

⁴⁴ *El Norte*, 21 de abril de 1988.

se pretendía elevar su número a 478 (60% de las casillas básicas).⁴⁵

A fin de conjurar el fantasma del fraude —y en el caso contrarrestar su presencia real—, la oposición tomó diversas medidas. El Movimiento Constitucional Mexicano, de filiación panista, realizó un simulacro de elecciones; el PAN anunció el entrenamiento de 1 000 individuos a los que denominó “cuartereros”, cuya función sería impedir el sistema priista de *carrusel* (grupos de votantes itinerantes); el Ejército Democrático, una organización cívica encabezada por el empresario Rogelio Sada Zambrano, llamaba a la población (“vota, vigila y ¡actúa!”) a combatir el fraude recomendando acción básica para ello; el PAN y la coalición de partidos que apoyaban a Cuauhtémoc Cárdenas formaron un frente común —en la práctica sin mayores consecuencias— con el mismo propósito.

De acuerdo con la nueva ley electoral, las elecciones se efectuaron el miércoles 6 de julio. La jornada electoral no se apartó de lo previsible en términos de afluencia, evasión del voto, irregularidades en gran medida y protestas por parte de la oposición. *El Norte* registró 842 denuncias sobre irregularidades en la jornada electoral.⁴⁶

En las cifras oficiales, de un total de 1 509 564 electores empadronados, concurrieron a las urnas 704 140; es decir, que la evasión electoral fue de 53.3%. De los votos computados, 166 915 correspondieron al PAN (23.7%), 507 524 al PRI (72.0%) y 29 701 (4.2%) a los seis partidos restantes.⁴⁷

La adulteración en los saldos oficiales fue evidente. Contra toda lógica, en los distritos rurales el electorado anegó prácticamente las urnas. En los distritos federales V y VI, por ejemplo, la votación a favor del PRI se elevó por encima del 90%.⁴⁸ Un total de 12.9% de las casillas instaladas en Nuevo León tuvieron votaciones insólitas de 90 y 435% del padrón respectivo.⁴⁹

En los dos distritos mencionados (de los 11 que existen en el estado), la votación captada por el PRI a favor de su candidato

⁴⁵ *El Porvenir*, 4 y 5 de marzo de 1988.

⁴⁶ *El Norte*, 7 de julio de 1988.

⁴⁷ *Las elecciones...* op. cit., láminas, s./p.

⁴⁸ *Ibid.*, láminas, s./p.

⁴⁹ Máximo de León Garza, *El bipartidismo en Nuevo León, causas y perspectivas*, Monterrey, Ed. Asociación Política “Antonio Villarreal”, 1988, p. 13.

presidencial se elevó a 37.6% del total. Lo burdo de estos resultados en el estado con mayor densidad urbana del país, sólo pudo sostenerse por la cobertura que recibía el candidato presidencial desde las fuentes clave del poder en la entidad. También respondiendo a esa cobertura, el “carro completo” en las diputaciones federales fue impuesto por el PRI sin mayor oposición. Entre los factores que concurrieron a la debilidad de respuesta de Acción Nacional y sectores periféricos, cabría anotar: a) la desmoralización que entre ellos produjo la votación nacional en favor de Cárdenas, b) lo abrumador de los resultados preliminares que situaban al PRI como el gran triunfador de la jornada y c) la posibilidad de que los panistas se convirtieran en el único interlocutor del gobierno a partir de su condición de opositor casi absoluto en términos electorales.

Debido al abultamiento de la votación priista y de la considerable ventaja del PAN respecto al resto de los partidos de oposición, éste pasa a configurar junto con el PRI, por primera vez desde la reforma política, un congreso bipartito. A dicho fenómeno contribuyó que también por primera vez no se presentara, con excepción del PLR (que recibió una módica cuota de votos), la antigua distribución que de éstos se hacía entre los partidos satélites. Que así haya sido se explica por el apoyo que tales partidos dieron a la candidatura de Cárdenas. Medida sana en apariencia; en el fondo entrañó una clara represalia.

Con el 24.9% de la votación reconocida, el PAN obtuvo 35% de las curules locales. Fueron, de acuerdo con este porcentaje, 13 diputados de representación proporcional y uno de mayoría los conseguidos por el PAN. Habiendo perdido el PRI una diputación de mayoría relativa, gracias a la legislación vigente pudo recuperarla por la vía proporcional.

Durante su campaña, Salinas de Gortari había declarado que haría de Nuevo León un “estado ejemplar”. Si reducir las múltiples voces políticas nacidas de una pluralidad real a un dúo que comparte en lo fundamental el mismo proyecto económico fue el objetivo salinista, éste se cumplió con creces. En todo caso, los beneficiarios de esta política serían, de manera muy señalada, los grandes grupos empresariales definidos por la ideología panista y por el pragmatismo político del PRI que la asimilará en gran medida a su programa.

Excepcional como lo es en otros aspectos de la vida nacional, Nuevo León se sustrajo a la tendencia nacional del voto car-

denista; no así a sus efectos políticos. Destacaremos aquí los más significativos:

1) El alineamiento del grupo empresarial regiomontano con Salinas de Gortari al proclamar éste su triunfo y, en consecuencia, favorable al ataque contra el candidato del Frente Democrático Nacional, Cuauhtémoc Cárdenas. La vehemencia con que antes asumió la defensa del voto y la necesidad de la democracia política desapareció de la agenda empresarial y se tornó ahora en incondicional apoyo al hombre que abanderó el partido gobernante.

2) La defección que genera el liderazgo cardenista en un pequeño pero significativo sector del PRI, cuya figura principal es Lucas de la Garza, ex secretario general de gobierno.⁵⁰

3) El reacomodo de la dirigencia política en el estado que dio lugar, paradójicamente, al reforzamiento del gobernador Jorge A. Treviño y del propio partido oficial, ante el temor de la desbandada.

4) El surgimiento de una tercera fuerza, así fuese en el ámbito reducido de las agrupaciones de izquierda y centro-izquierda, que finalmente desembocará en el triunfo del cardenismo en el municipio de Bustamante, cuatro meses después de las elecciones de julio.

Las elecciones municipales de noviembre de 1988 estuvieron precedidas por violentas impugnaciones en el interior del partido oficial en al menos una tercera parte de los municipios del estado. La lucha interna fue controlada en todos ellos con excepción de Bustamante, donde el desarraigo y la imposición del candidato priista produjeron una escisión. El grupo desprendido, en alianza con el PPS, PMS y PFCRN, integró una planilla que resultó triunfadora en los comicios.

No fue el único caso donde la movilización popular llevó a la oposición al gobierno de otros ayuntamientos: Santa Catarina, municipio del área metropolitana de Monterrey, fue conquistado por el PAN con el respaldo amplio de diversos grupos políticos y sectores sociales. La población de este municipio,

⁵⁰ Renunció al puesto en diciembre de 1987 y al PRI a finales de agosto de 1988.

tradicionalmente considerado posición de la CTM, se organizó en contra del cacicazgo impuesto desde la dirigencia de la Federación de Trabajadores de Nuevo León. San Pedro Garza García, de añeja tradición panista, fue también perdido por el PRI.

En los dos primeros casos gravitaron las consecuencias de un fenómeno extraordinario como lo fue el huracán *Gilberto*. El número de víctimas hizo que el meteoro adquiriera dimensiones más dramáticas en Nuevo León que en otras regiones azotadas a su paso.⁵¹ El descontento social que no se advirtió en las elecciones presidenciales afloró ahora con singular fuerza. Las actitudes y tropelías de numerosos alcaldes en torno a la ayuda a los damnificados se agregaron a ese clima para dar por resultado las conquistas de la oposición antes señaladas y, en términos generales, una importante votación para la misma que si no se tradujo en triunfos fue gracias a la manipulación de las elecciones.

El PARM, que se deslindó de la alianza cardenista, logró capitalizar las escisiones priistas y obtener una votación cercana a la del partido oficial, según las cifras oficiales, en los municipios de García y Linares. El PAN, por su parte, captó votaciones considerables en los municipios de Allende, Cadereyta, Guadalupe, Lampazos, San Nicolás de los Garza y Monterrey. La disputa por el ayuntamiento de la capital del estado fue cerrada y Acción Nacional, ante una derrota que consideró producto del fraude, no asumió una combatividad semejante a la observada en Santa Catarina y Garza García para defender su postura. La propia candidata del PAN, que elevó a clave de su campaña el cuestionamiento de su oponente priista, el ex diputado por el Distrito Federal, Sócrates Rizzo, por incumplimiento con el requisito legal de residencia, se quejó de falta de apoyo de su partido para defender el triunfo que consideraba suyo.

A pesar de la efervescencia que suscitó el proceso para elegir autoridades municipales, el abstencionismo fue mayor que en el de 1985: sólo el 33.3% del electorado acudió a las urnas.⁵²

⁵¹ Véase Abraham Nuncio *et al.*, *Gilberto, la huella del huracán en Nuevo León*, Monterrey, Ed. Castillo, 1989.

⁵² *Las elecciones...*, *op. cit.*, láminas s./p.

III. SALDO PROVISIONAL Y ESCENARIOS FUTUROS

Saldo provisional

La década de los ochenta estuvo marcada por cuatro grandes eventos: la crisis económica, la nacionalización de la banca, los efectos de la reforma política iniciada a finales de los setenta y la emergencia de nuevas fuerzas cívicas que adquirieron su mayor relieve en la arena electoral. En el estado de Nuevo León, ninguno de estos cuatro eventos alteró, salvo en 1985, el equilibrio de las dos fuerzas polares que determinan la política local: aquellas que se articulan en torno a la clase económica y las que lo hacen en torno a la clase política.

El bipartidismo informal que ha sentado sus reales en el estado a partir de esa polaridad se fue institucionalizando hasta desembocar en un esquema cuya expresión última fue la conformación bipartita del Congreso local. El surgimiento de una tercera fuerza política con expresión electoral no logró producirse sino hasta las elecciones municipales de noviembre de 1988 y en un perímetro reducido, al influjo del impacto cardenista.

El movimiento cívico que despunta en 1985 desborda los esquemas y las formas del quehacer político que se habían estratificado en partidos y grupos sindicales y empresariales más o menos corporativizados. Éste, apto para impulsar la lucha cívica, se mostraría incapaz de afianzarse y de apuntalar con su propia fuerza acciones políticas más allá de la coyuntura en que había surgido. Un caso ilustrativo de tal limitante fue la candidatura independiente, aunque enmarcada dentro del PARM, de Javier Livas, uno de los principales promotores de la Asamblea Electoral Democrática. La votación que captó, además de lo manipulado que estuvo el resultado, fue sumamente baja (registró menos de la décima parte de los votos que le fueron reconocidos al candidato del PAN, justo en un sector donde por las características de Livas era de esperar una respuesta favorable a su candidatura). El peso de la institucionalidad conformada en torno a los partidos tradicionales se impuso a las expectativas generadas por el personaje y el clima en que actuó.

El fraude electoral y, al mismo tiempo, una participación más decidida de la ciudadanía en contra de esta práctica, fueron una constante. La aparición de una más amplia autonomía en los diversos órdenes de una sociedad predominantemente cos-

mopolita, como es la neolonesa, traería aparejada la irrupción de nuevos actores los que demandarán por su cuenta y riesgo satisfacciones que entrañen mayor calidad política. El fenómeno promovió también una revaloración de la actividad política y la conquista de un mayor grado de civilidad. Ello no significó que desaparecieran los rasgos caciquiles, corporativos y autoritarios característicos del estado posrevolucionario. Pero la violencia registrada en otras partes del país tuvo en Nuevo León, durante la década de los ochenta —especialmente en la segunda mitad— una expresión mínima y excepcional.

En ese marco pudieron ensancharse los márgenes de discusión, de alianza y trato políticos, aunque, por otro lado, se haya fortalecido la tendencia, por encima de las demás variables, al duopolio del poder. La intersección de los proyectos y discursos del PRI y el PAN adquirió mayor amplitud, sobre todo en materia de política económica. Ambos partidos mantuvieron, en todo caso, sus diferencias tradicionales en cuanto al ejercicio y la alternancia del poder: el PRI siguió aferrado al hegemonismo reforzado por el papel protagónico de la figura presidencial fuertemente vinculada, sobre todo a partir de 1988, a la vida económica y política del estado.

Escenarios futuros

Las elecciones de 1991 estarán determinadas por la correlación entre los dos partidos de mayor peso en Nuevo León: el PRI y el PAN. En las de gobernador se pueden presentar los escenarios siguientes:

1) El PAN se mantiene dividido y no es capaz de lanzar a un candidato de la talla de Fernando Canales o Mauricio Fernández, que aglutine a los bandos en pugna y produzca expectativas en el electorado. Con esta hipótesis, el PRI puede aceptar el riesgo de realizar unas elecciones limpias y legitimar su hegemonía. La premisa de este evento sería una candidatura priista que aglutine a los grupos y sectores de este partido, hasta ahora poco cohesionados

2) El PAN supera su división y lanza a un candidato fuerte. Esta hipótesis parece menos probable que la anterior por la gravitación evidente del poder presidencial, que en este caso obliga-

ría al PAN, vía la negociación como ha venido ocurriendo hasta ahora, para que participe como oposición subalterna. De no ser así, el PRI tendría que lanzar a un candidato cuyas características tendrían que ser semejantes a las del candidato panista, y recurrir necesariamente al fraude para imponerse.

3) El PRI marca la pauta en la carrera hacia la gubernatura y destaca a un hombre identificado con el presidente Salinas, como lo es Sócrates Rizzo García, actual alcalde de Monterrey. La tradicional disciplina priista operará dentro de márgenes más estrechos que en el pasado debido a la reticencia ya manifiesta a aceptar, en el interior del mismo partido oficial, la verticalidad del mandato, o bien en la defensa, con recursos no convencionales, de privilegios particulares so pretexto del regionalismo, el anticentralismo e incluso la democracia. Este riesgo es real, sobre todo cuando una candidatura como la descrita reproduciría el mismo esquema de la anterior sucesión gubernamental. El PAN optaría bien por frontalizar con el PRI apoyándose en una figura de convocatoria vigorosa, o bien por cosechar la inercia de su votación tradicional en torno a un candidato que no ponga en riesgo la unidad interna de este partido, pero que tampoco resulte adversario peligroso para el candidato oficial.

4) El PRI postula a un político de trayectoria desde la perspectiva del electorado local (los casos de Luis E. Todd, actual subsecretario de Educación, y Ricardo Canavati, senador de la República). La diferencia con el escenario anterior sería sólo de matiz. Hacia el interior del PRI conseguiría una mayor cohesión, pero llegado el momento los nexos de quien ostentara la candidatura con el presidente de la República serían más débiles y la consecuencia podría afectar tanto a la campaña priista como al posible mandato del hombre en cuestión. Para la oposición habría, en este caso, mayor posibilidad de movimiento y negociación. El resultado sería un principio de equilibrio en los espacios políticos por efecto de un presidencialismo atenuado.

5) Dada la mayor presencia del contingente cardenista, el PRD obtendrá una votación por encima de la que antes obtuvieron partidos afines si, como parece, su candidato es Lucas de la Garza. La candidatura de éste se verá más favorecida aún si en el PRI se suscitan tendencias centrífugas difíciles de controlar por Salinas de Gortari, quien ya para entonces se hallará a mitad de su periodo, y si en el PAN subsiste la división y, por añadidura, lanza este partido a un candidato de imagen restringida.

En la eventualidad de que el PRD lanzara un candidato distinto, sus posibilidades serían menores y peligraría por tanto su presencia en el Congreso local.

En el marco parlamentario, el PRI buscará la alianza con partidos satélites, cuya votación contrarreste tanto la del PAN como la del PRD. El propósito será buscar un pluripartidismo nominal sobre el cual hacer descansar el bipartidismo con dominio priista, modelo que el régimen de Salinas alienta para darle credibilidad a la alternancia del poder. La otra hipótesis previsible sería la profundización del bipartidismo acreditado como sinónimo de modernidad.

Debido al antecedente de 1988, la clase económica actuará según las líneas de su alianza con Salinas de Gortari, sin dejar de invertir políticamente en el PAN para madurar las condiciones que le permitan estabilizar su dominio sobre la base de dos partidos fuertes que compartan en lo fundamental el proyecto impulsado por ella.

La ciudadanía, a pesar de las múltiples experiencias contrarias a una competencia efectiva, podrá elevar su participación electoral siempre y cuando la contienda involucre a personalidades que aseguren una disputa cerrada por el poder. De otro modo, y ante la ausencia de una legislación electoral que haya eliminado el unipartidismo dominante, su evasión al voto podría ser mayor a la registrada en 1988.

SONORA EN LA TRANSICIÓN POLÍTICA MEXICANA: BALANCE ELECTORAL DE UNA DÉCADA (1979-1988)

VÍCTOR MANUEL REYNOSO
El Colegio de Sonora

INTRODUCCIÓN

El término transición ha adquirido ya cierta legitimidad para designar la etapa más reciente de la vida política nacional. Más que un concepto, es una metáfora para indicar que las características económicas, sociales y políticas que el México poscardenista vivió durante tres décadas se han desdibujado, sin dar lugar aún a formas nuevas. La transición mexicana es el periodo en el que las instituciones del México posrevolucionario, del desarrollo estabilizador, han perdido la funcionalidad que tuvieron, sin dar lugar a otras que las sustituyan.

El esfuerzo más conocido y más completo, aunque no el único, para pensar la realidad mexicana a partir de la idea de transición, es el de Héctor Aguilar Camín.¹ Aguilar presenta

¹ Héctor Aguilar Camín publicó varios artículos sobre la transición mexicana antes de su libro *Después del milagro. Un ensayo sobre la transición política mexicana*, México, Cal y Arena, 1988, en donde los retoma y amplía. También lo hace, junto con Lorenzo Meyer, en *A la sombra de la revolución mexicana*, México, Cal y Arena, 1989, 2a. ed. Otros autores que han tocado el tema de la transición son Soledad Loaeza en "México 1968: los orígenes de la transición", en *Foro Internacional*, jul.-sept., 1989, pp. 66-92. Desde perspectivas distintas también han hablado de transición Cornelius, Gentelman, Smith, en "Owerview: dynamics of Political Changes in Mexico", en Cornelius et al., *Mexico's Alternative Political Futures*, San Diego, University of California, 1989 y Kelvin J. Middlebrook, "La liberación política de un régimen autoritario", en Guillermo O'Donnell et al., *Transiciones desde un gobierno autoritario: 2, América Latina*, Buenos Aires, Paidós, 1988.

una visión amplia de la transición que va desde las relaciones del Estado con la sociedad; pasa por el deterioro de los distintos pactos corporativos del Estado con la burguesía, el movimiento obrero, el campesinado, las clases medias; toca también la erosión experimentada por la institución presidencial y el partido del Estado; reflexiona sobre las nuevas formaciones regionales en el país y su relación con nuestro tradicional centralismo; abarca, en fin, aspectos relacionados con los medios de comunicación, la demografía y la cultura política.

No es nuestro interés analizar este mismo panorama en el estado de Sonora. Nos lo impiden no sólo nuestras propias limitaciones, sino el estado actual del conocimiento sobre la sociedad sonorense. No contamos con estudios suficientes sobre los diversos temas de la transición en la entidad. Nos proponemos simplemente retomar la idea de transición para hacer el balance de la década electoral en Sonora.

Esta opción no es arbitraria. Por un lado, la realidad electoral —a niveles nacional y estatal— bien puede ser considerada como un aspecto central de la transición y como una síntesis de la misma. Pocas cosas cambiaron tanto, respecto al periodo anterior, como las elecciones mexicanas. Del ritual sin contenido que fueron durante varias décadas, han llegado a ocupar, en algunos momentos, el centro de la vida política nacional. Además, en las elecciones se expresan buena parte de las características de la sociedad mexicana en la transición: la urbanización y sus consecuencias para la cultura política y la formación de las “nuevas mayorías”, la nueva actitud de los empresarios y de las clases medias frente al Estado, la importancia creciente de la cuestión regional y el deterioro de los diversos pactos corporativos.

El caso concreto de Sonora también justifica nuestra decisión de pensar la década electoral a partir de la idea de transición. Así como la Sonora posrevolucionaria fue el paradigma de esta etapa de nuestro país, en donde se vivieron décadas de crecimiento económico, paz social y estabilidad política, en los años recientes han encarnado algunas de las características de la transición mexicana. Aquí la acción estatal alcanzó, al mismo tiempo que su máxima autonomía, sus límites; empresarios, clases medias e Iglesia católica se han distinguido por su distancia crítica frente al Estado y por acudir a las elecciones como vía de expresión política; las relaciones de la región con

el centro se han visto tensadas en más de una ocasión; el partido del Estado ha dado muestras claras de desgaste y la realidad demográfica y cultural urbana predomina cada vez más sobre la rural.

En síntesis, los ochenta, la década de la transición mexicana, son para el estado de Sonora un nuevo periodo electoral, con características notablemente distintas a las que las elecciones sonorenses habían tenido en décadas pasadas.

Antes de entrar al periodo que nos ocupa, mencionaremos brevemente los antecedentes del mismo. En primer lugar, haremos referencia a la realidad política sonorenses antes de la transición actual, para mostrar el carácter y la dimensión de los cambios. Señalaremos después un acontecimiento que puede considerarse como el origen de la transición en Sonora: el movimiento cívico de 1967. Luego pasaremos a la década de los ochenta, que coincide con lo que consideramos la transición electoral sonorenses. Dividimos nuestro análisis cronológicamente, estableciendo primero dos periodos, uno de relativa apertura estatal en materia electoral, y otro de regreso a las viejas prácticas comiciales. Cada uno de ellos está dividido en dos, de tal manera que dedicamos un párrafo a cada una de las cuatro elecciones realizadas hasta ahora en la transición sonorenses: 1979, 1982, 1985 y 1988.

Sonora antes de la transición

El estado de Sonora es un buen ejemplo para aplicar el concepto de transición no sólo por las características que presenta en este periodo. Sonora antes de la transición es un caso típico del México posrevolucionario, con estabilidad política y crecimiento económico.

Entre otras muchas cosas, Sonora ejemplifica “la luna de miel” que vivieron el Estado y los empresarios. Los gobernantes sonorenses, entre ellos el más notable es Abelardo Rodríguez, combinaron exitosamente los negocios con la política. Sonora fue uno de los estados más favorecidos por la inversión pública federal, lo que se tradujo en la consolidación de la economía agrícola más moderna y próspera del país. No por casualidad, los descendientes de los caudillos revolucionarios —los Obre-

gón, los Elías Calles, los Rodríguez— se cuentan entre los beneficiarios de esas políticas.

Pero no sólo la burguesía agrícola se vio beneficiada. Sonora es también ejemplo del desarrollo ejidal exitoso. El nivel de productividad de los ejidos de los Valles del Yaqui y del Mayo es similar, y en ocasiones superior, al de los propietarios privados.

El desarrollo económico del estado, que abarcó además la ganadería, la pesca y la minería, se tradujo en tranquilidad política. Los conflictos electorales existieron, y fueron importantes. Pero fueron pocos y no trascendieron. Destacan el de 1949, cuando Jacinto López fue candidato del Partido Popular a la gubernatura del estado, y el de 1958, cuando Rafael Contreras Monteón, "El Buqui", contendió como candidato del Partido Democrático de Cajeme a la alcaldía de ese municipio.² Ambos candidatos tuvieron una amplia base popular, que se movilizó al no reconocérseles lo que consideraban su triunfo en las urnas. Llama la atención que estos dos movimientos electorales, los más importantes en el estado en las tres décadas que anteceden a la de 1967, se hayan encauzado por fuerzas de izquierda y con una base obrera y campesina. Hoy en Sonora sólo queda el recuerdo.

Si el desarrollo económico, la paz social y la estabilidad política caracterizaron al México de la revolución consolidada (1940 a 1968), Sonora es un buen ejemplo de ello. La funcionalidad del sistema político, resultado de todo esto, se expresa en la dinámica electoral. Con las excepciones mencionadas, las urnas fueron el reflejo de la concordia entre las clases y entre éstas y el Estado.

Pero así como la entidad sonorenses encarna las características de la etapa conocida como desarrollo estabilizador, representa también un prototipo en la interrupción de la misma. La transición mexicana tiene en Sonora uno de sus casos ejemplares.

² Cfr. Rocío Guadarrama, *Historia contemporánea de Sonora, 1929-1984*, Hermosillo, Son., El Colegio de Sonora/Repográfica, S.A., 1988, pp. 344-348 y 393-400. Puede verse también para el caso de Contreras Monteón el libro de Carlos Moncada, *Años de violencia en Sonora (1955-1976)*, México, V Siglos, 1976, pp. 25 y ss.

Los orígenes: 1967, el año sonorenses

Así como el origen de la transición mexicana puede situarse en el movimiento estudiantil de 1968,³ el de la transición en Sonora lo podemos ubicar en el movimiento estudiantil de 1967. En este año, y combinado con una conflictiva sucesión gubernamental, surgió en la Universidad de Sonora un importante movimiento estudiantil. Desde un principio estuvo asociado con la pugna por la nominación del candidato priista a la gubernatura —las elecciones serían ese mismo año— pero trascendió con mucho el conflicto intrapartidario. Trascendió asimismo a la universidad. En el mes de abril

el sistema educativo del estado estaba totalmente paralizado: 80 escuelas primarias, secundarias, preparatorias, normales y hasta los educadores de los jardines de niños se lanzaron a una huelga de solidaridad, y más de medio centenar de agrupaciones sindicales, campesinas y populares daban respaldo “moral” a la huelga universitaria.⁴

A pesar de las diferencias con el movimiento que poco más de un año después se iniciaría en el Distrito Federal, el de los universitarios sonorenses comparte con él una característica esencial desde el punto de la transición política: los estudiantes sonorenses no propusieron un nuevo orden legal, sino el cumplimiento del existente por parte del gobierno. De esta manera desafiaban el principio fundamental del autoritarismo mexicano, previo a la transición: la autonomía del Estado, que implicaba que sólo fuera responsable de sus acciones ante sí mismo.⁵ Concretamente, los estudiantes exigían la separación de Luis Encinas de su cargo de gobernador; sus argumentos eran estrictamente jurídicos:

³ Aguilar Camín, *op. cit.*, Loaeza, *op. cit.*

⁴ *Cfr.* Rocío Guadarrama, *op. cit.*, p. 409. Sobre este movimiento también pueden consultarse Carlos Moncada, *op. cit.*, pp. 55-103 y *Los Aguiluchos*, de Armando Moreno Soto, Fernando Ochoa Valenzuela, Miguel Darío Miranda y Álvaro Bracamonte Sierra, Unison, 1985.

⁵ Esta idea la hemos tomado de la obra ya citada de Soledad Loaeza. Para un desarrollo de la misma y sus implicaciones para la transición mexicana recomendamos la lectura de dicho artículo.

Fundaban su demanda en la consideración de que Encinas había permitido que se violaran las garantías individuales de la ciudadanía, lo nombraban responsable de la violación a la autonomía universitaria y lo acusaban de haber vulnerado los principios del derecho internacional al solicitar armas a un gobierno extranjero.⁶

Además de estas demandas universitarias, a las que se unieron amplios sectores de la sociedad civil, existía un gran descontento porque el PRI había nominado, mediante medidas que violentaban la propia institucionalidad de ese partido, a un candidato poco popular, Faustino Félix Serna. Si se toma en cuenta que, dadas las características de nuestro sistema político en esos tiempos, el PRI no era un partido más en el sentido estricto, sino prácticamente el único canal de participación política, tendremos también que en este aspecto el movimiento fue contra la autonomía del Estado, que pretendía imponer un candidato a gobernador.

La sociedad se rebelaba contra el Estado. Le exigía cumplir sus propias leyes. Le exigía además tenerla en cuenta en la selección de los gobernantes. Selección que no debería ser sólo asunto estatal, ni siquiera de su partido, sino que competía a toda la sociedad.

El desenlace del movimiento tuvo un carácter directamente político. El descontento de la ciudadanía sonoreNSE encontró un camino que no había recorrido en mucho tiempo: la oposición electoral. En las elecciones de julio de 1967, terminados los movimientos cívico y estudiantil, una entidad que se había caracterizado por su fidelidad en las urnas al partido del Estado optó por la oposición. El Partido Acción Nacional, que en Sonora tenía una presencia añeja pero casi meramente simbólica, triunfó en siete municipios. Entre ellos el de la capital, con lo que Hermosillo se convirtió en la primera capital estatal gobernada por panistas.

El limbo electoral (1970-1976)

Sin embargo, las victorias panistas no tendrían continuidad. Durante los tres comicios siguientes, dos presidenciales y uno

⁶ Cfr. Guadarrama, *op. cit.*, p. 408.

gubernamental,⁷ las elecciones sonorenses tendrán las mismas características que tuvieron antes de la transición.

No se le reconoció a los partidos de oposición ninguna victoria en las urnas. El PRI obtuvo en las tres elecciones una votación mayor al 90% del total de sufragios, porcentaje superior a lo que obtenía a nivel nacional. Sonora se mantenía no como un estado opositor, sino como un bastión priista. Por supuesto que el panismo siguió participando. En Hermosillo mantuvo una presencia importante. Cada elección presentaba una lista de irregularidades y solicitudes para anular las elecciones, pero nunca prosperaron y pasaron a ser parte de la rutina electoral, que no alteraba la vida política. El PAN representaba perfectamente el papel de oposición leal.

Más allá de las elecciones, la concordia entre los grupos y clases sociales se recuperó. Faustino Félix Serna, el candidato que en 1967 dio lugar con su nominación a una verdadera insurrección cívica, fue despedido como un buen gobernador. Por ningún lado se asomaba el descontento de las clases poseedoras, porque simplemente no existía; económica y políticamente estaban satisfechas.⁸ La Iglesia tampoco tendría la participación política de años después. Las declaraciones del arzobispo sobre cuestiones políticas eran raras, y sólo empezaron a aparecer a fi-

⁷ El calendario electoral sonorenses concentra las elecciones para los distintos puestos en el mismo día. Así, cada tres años en julio, los sonorenses deben acudir a las urnas para sufragar por presidentes municipales, diputados locales y diputados federales. Las elecciones sexenales para puestos de representación —presidente de la República, gobernadores, senadores (hasta 1988)— también tienen lugar el mismo día, pero no cada tres años, sino cada seis, y de manera alternada. Cuando la elección cae en año par se eligen presidente de la República y senadores y cuando cae en año non gobernador. Para distinguir a los tipos de elecciones, a esta última la llamaremos “gubernamental” y a la primera “presidencial”. El único estado que comparte estas características es Querétaro. Nuevo León se aproxima, pero ahí las elecciones para presidentes municipales son en noviembre. Véase *Banamex, Estadísticas sociales*, 1989, pp. 409 y ss.

⁸ Aunque el empresariado no ha formado parte oficial del PRI, sí ha mantenido una relación estrecha con él. El licenciado Enrique Fox Romero, presidente de este partido en buena parte de este periodo (1967-1973), indica que la clave del éxito electoral del PRI es seleccionar buenos candidatos. Para que dicha selección resultara adecuada siempre se consultaba a todos los sectores, pero los más problemáticos eran siempre los autónomos del partido, es decir, los grandes empresarios. Recibían pues una consideración especial en la consulta antes de la nominación de candidatos. Entrevista del 9 de febrero de 1990.

nales de este periodo (fines de 1975 y principios de 1976). Nunca se refirieron a cuestiones electorales.⁹

No deja de llamar la atención esta especie de regreso al pasado electoral. En particular por la profundidad del movimiento de 1967, y porque al final de este periodo (1975-1976) el estado se vio nuevamente sacudido por los problemas políticos. El gobernador Carlos Armando Biebrich, orgullo de los sonorenses, que parecía un caso excepcional de precocidad política, y que incluso fue señalado por la revista *Time* como uno de los jóvenes políticos más brillantes de su país, “integrantes del futuro liderazgo mundial”,¹⁰ se vio obligado a renunciar luego de una masacre de campesinos que habían tomado un predio agrícola en el municipio de Guaymas.

Los sonorenses no sólo perdían a un gobernador que fue un caso excepcional en el estado, pues “a diferencia de sus antecesores, llegaba a la gubernatura sin oposición alguna”,¹¹ sino que lo perdían víctima de las presiones del centro del país, concretamente del presidente de la República y algunos de sus allegados. Pero este agravio político que el gobierno federal infligió al estado, o a ciertos sectores de la clase política sonorense, no llevó a una protesta electoral de ningún tipo. Al menos no en las elecciones de 1976.¹² Sí hubo diversos movimientos de resisten-

⁹ Entre las primeras declaraciones del arzobispo de Hermosillo, Carlos Quintero Arce, se encuentran las relacionadas con las invasiones agrarias de abril de 1976. A lo largo de ese año, y culminando en noviembre, el arzobispo expresará su preocupación por esos acontecimientos, desde una posición que, aunque matizada, optaba abiertamente por los propietarios de tierras afectados. Véase *El Imparcial* de los días 8, 10 y 16 de abril, 30 de mayo, 11 de julio, 26 de septiembre, y en particular el del 20 de noviembre, todo de 1976.

¹⁰ Citado por Jesús Blancornelas en *Biebrich. Crónica de una infamia*, México, Editores Asociados Mexicanos, 1978, p. 65. El otro joven político mexicano, promesa de líder político a nivel mundial según *Time* era Porfirio Muñoz Ledo.

¹¹ Carlos Moncada, *op. cit.*, p. 104. En este libro el autor trata el caso del ascenso y la caída de Biebrich desde una perspectiva más neutral que la de Blancornelas.

¹² Rocío Gudarrama sostiene que “la destitución del gobernador Biebrich [que lo fue en términos reales, pero formalmente fue una renuncia, VMR] tuvo dos efectos electorales: 1) deterioró la imagen del PRI y llevó a una falta de interés por las elecciones en 1979; 2) repercutió en el crecimiento del PAN en el estado”. La autora no desarrolla el argumento, ni menciona tampoco por qué estos efectos se dieron casi cuatro años después de la caída de Biebrich, y no al año siguiente, en las elecciones de 1976. Sin embargo, creemos que su afir-

cia en contra del gobernador sustituto, Alejandro Carrillo Marcor, pero se limitaron a grupos políticos locales. Las urnas de las elecciones de julio de 1976 pasaron inadvertidas para ellos y para los ciudadanos.

Las características de este limbo electoral sonorense, en el que las elecciones transcurren sin pena ni gloria, nos llevan a pensar que 1967 en Sonora fue más que el inicio de la transición una premonición de la misma. Sería hasta 1979, cuando a la situación política se añade la crisis económica, que la transición política llegaría a Sonora, ahora sí, para quedarse.¹³

Sonora en los ochenta: el inicio de la transición electoral y las dificultades de la democracia

Dos grandes factores determinan los resultados de las elecciones mexicanas: las preferencias de los electores y la acción estatal. A diferencia de lo que sucede en una democracia electoral plenamente consolidada, en el régimen mexicano de partido hegemónico el Estado “interviene” en el proceso electoral y es, junto con la voluntad ciudadana, el factor decisivo en el desenlace de dicho proceso. En ambos comportamientos —el de los ciudada-

mación es importante porque señala un punto en el que debe profundizarse: la influencia de la caída de Biebrich en los cambios electorales de Sonora. Por otra parte, no menciona lo que consideramos como causas de la insurrección electoral de 1979 en algunos municipios del estado: las invasiones de tierras en 1976, el deterioro de la figura presidencial, la crisis económica, la beligerancia de la burguesía, etc. Véase Cuaderno de Investigación núm. 1 del CIES/Unison, *Modernización y política en Sonora: la lucha por la hegemonía (1982-1988)*, Hermosillo, Son., 1989, p. 25.

¹³ Viendo de cerca a las elecciones del periodo que hemos llamado el limbo electoral, encontramos que esta aparente indiferencia de los ciudadanos sonorenses hacia las elecciones no fue absoluta. En primer lugar, en algunas zonas urbanas —Hermosillo, San Luis Río Colorado, Empalme— hay una presencia electoral de la oposición relativamente importante. Por otro lado, en cada proceso electoral se dan casos de lo que consideramos micropolítica municipal, en los que existen conflictos electorales, incluso triunfos de candidatos distintos al del partido del Estado, pero que no se explican por la dinámica partidaria, sino por las condiciones concretas de estas pequeñas comunidades urbanas. “El limbo electoral sonorense (1970, 1973 y 1976)”, ponencia presentada en el XV Simposio de Historia y Antropología de Sonora, Hermosillo, febrero de 1990.

nos y el del Estado— se manifiestan las condiciones políticas, sociales y culturales de cada elección.

Tomando en cuenta estos dos factores, es posible periodizar la década electoral en Sonora dividiéndola en dos etapas. La primera abarca las elecciones de 1979 y 1982, y se caracteriza por una relativa liberalización del control estatal sobre las elecciones. En la segunda etapa, que comprende las elecciones de 1985 y 1988, el Estado vuelve a un proteccionismo electoral total desconociendo prácticamente cualquier triunfo de la oposición.

La distinción entre estas dos etapas se hace en función de la acción estatal, pues el otro factor, las opciones ciudadanas manifestadas en las urnas, no varió significativamente en las cuatro elecciones que abarca la década electoral sonorenses (1979, 1982, 1985 y 1988). Más que la política local, es la nacional la que determina esta periodización. En las elecciones de 1979 y de 1982 es posible pensar que el régimen estaba más preocupado por la falta de participación ciudadana que por la oposición política en las urnas. Las amenazas electorales para el partido del Estado a nivel nacional no eran graves. El PAN, la única oposición significativa hasta antes de 1988, parecía un partido desgastado por su reciente crisis interna. En esta primera etapa se estrenó la reforma política de 1977, y algunos triunfos de la oposición no caían mal; por el contrario, constituían una legitimación de los cambios recientes en materia político-electoral.

Para 1985 la situación había cambiado notablemente. La insurgencia electoral a favor del PAN iniciada, entre otros lados, en Sonora en 1979, había llevado a una situación inédita en la historia política del país: a partir de las elecciones municipales chihuahuenses de 1983 la oposición gobernaba a la mayoría de la población de una entidad. La apertura electoral con la que se inició el sexenio delamadridista generó grandes expectativas, pero también temores y resistencias en el interior del régimen. El caso chihuahuense —reconocer amplios triunfos a la oposición— no se repetiría en el sexenio. Las elecciones de Sonora y Nuevo León de 1985 fueron las manifestaciones más claras de la renuncia del Estado a mantener la liberalización de los resultados electorales. Esta situación se reitera en Sonora en 1988. En función del criterio anterior dividimos la década en los dos periodos señalados.

EL INICIO DE UNA ÉPOCA ELECTORAL EN SONORA (1979-1982)

La ruptura de la costumbre electoral sonorense

El inicio de la transición política en Sonora tiene lugar en 1976, aunque no pasó ese año por las urnas. De manera similar a lo que acontecería con la nacionalización de la banca en 1982, en 1976 el Estado mexicano encontró los límites a su intervención en la expropiación de tierras en el Valle del Yaqui. Ambas acciones, al mismo tiempo que muestran una gran capacidad de la intervención estatal, marcan sus límites. Generan una notable oposición en los sectores medios y en los grupos empresariales, que originaría insurrecciones cívicas contra el Estado. En el caso de Sonora, las expropiaciones agrarias de 1976 son el antecedente inmediato de la rebelión electoral de 1979.¹⁴ En este año el panorama electoral del estado se transforma radicalmente. Por primera vez en 12 años, y por segunda en la historia electoral contemporánea del estado, se rompe la tradición del “carro completo”. El panismo, fortalecido por el descontento social ante las expropiaciones en el Yaqui, obtiene siete triunfos de mayoría relativa y siete de representación proporcional.¹⁵

Destaca el caso del municipio de Cajeme, asiento de una de las zonas agrícolas más ricas del país —precisamente en donde tuvo lugar el reparto agrario de 1976— y cuya cabecera, Ciudad Obregón, es la segunda ciudad en el estado. Ahí el panismo no había podido presentar candidato a presidente municipal en 1976. Tres años después logra triunfar en los cuatro puestos de elección a disputados: la presidencia municipal, una diputación federal y dos diputaciones locales.¹⁶

¹⁴ Sobre las expropiaciones de tierras en el sur de Sonora en 1976 puede consultarse Steven E. Sanderson, “La lucha agraria en Sonora, 1970-1976: manipulación, reforma y derrota del populismo”, en *Revista Mexicana de Sociología*, oct.-dic., 1979. Sobre la idea de que el Estado mexicano llega al límite de su intervención con la nacionalización de la banca véase Héctor Aguilar Camín, *op. cit.*

¹⁵ Los triunfos panistas de mayoría relativa en Sonora fueron cuatro municipios, dos diputaciones locales y una federal. Es notable que estos triunfos del panismo sonorense ocurrían cuando Acción Nacional acababa de pasar la peor crisis de su historia.

¹⁶ Los candidatos por el PAN que obtuvieron triunfos fueron Adalberto Rosas López (presidente municipal), Carlos Amaya Rivera (diputado federal), Claudio Dadoub Sicre y José Antonio Gándara (diputados locales).

Dos de estos candidatos triunfantes se habían destacado en años anteriores como líderes empresariales y sociales. Adalberto Rosas López, “el Pelón”, era en 1976, presidente del Patronato del Instituto Tecnológico de Sonora (Itson), la institución pública de educación superior más importante en el estado después de la Universidad de Sonora, y del Centro Patronal del Valle del Yaqui, filial de la Confederación Patronal de la República Mexicana. En ambos puestos se distinguió por su participación activa. Rosas fue una de las principales figuras en la defensa de los propietarios agrícolas afectados por las expropiaciones de 1976. Amaya, por su parte, era vicepresidente de la Coparmex en esta misma época.

No es casual esta participación previa de los nuevos panistas en la Coparmex, sea nacional o local. La dirigencia de organizaciones empresariales ha tenido la función de formar cuadros para la dirigencia panista en el estado. No ha sido el caso, hay que señalarlo, de todas ellas. Las consideradas “instituciones públicas” sólo excepcionalmente han cumplido esta función.¹⁷ Por el contrario, varios de los más destacados dirigentes del panismo en Sonora, para el periodo que nos ocupa, han sido previamente dirigentes de los centros patronales filiales de la Coparmex.¹⁸

Lo anterior ejemplifica una ruptura, de fundamental importancia en la nueva etapa de la vida política nacional: el fin del acuerdo entre el Estado y ciertos sectores empresariales. El caso de Sonora es paradigmático al respecto, tanto porque aquí se

¹⁷ Carlos Arriola divide en dos grupos las organizaciones empresariales en México: las instituciones públicas y las instituciones privadas. Considera que las primeras son las que “se encuentran organizadas conforme a la Ley de Cámaras de Comercio y de Industria. Es decir, su organización y funcionamiento se encuentran reguladas por el Estado”. Pertenecen a este grupo la Concanaco y la Concamin. Las instituciones privadas están al margen de esa regulación estatal y se organizan como asociaciones civiles. Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial y, anteriormente, la Asociación de Banqueros de México, son las más conocidas. Véase Carlos Arriola, *Los empresarios y el Estado*, México, SEP/Fondo de Cultura Económica, 1981, pp. 27 y 35-36. Hay una edición reciente en Miguel Ángel Porrúa.

¹⁸ Además de los casos ya mencionados de Rosas y Amaya, comparten esta característica Norberto Corella Gilsamaniego y Ramón Corral Ávila. Una excepción sería el caso de Fausto Ochoa Medina, presidente municipal panista de San Luis Río Colorado de 1982 a 1985 y dirigente estatal del partido de 1986 a 1988, pues fue dirigente de la Cámara Nacional de Comercio en San Luis antes de ser candidato del PAN a la presidencia municipal.

dio el primer rompimiento entre el Estado mexicano y empresarios, como porque anteriormente la entidad fue ejemplo del acuerdo entre estos dos sectores.

De nuevo es posible plantear una analogía entre las expropiaciones en Sonora en 1976 y la nacionalización de la banca en 1982. Estos dos acontecimientos no sólo marcan el límite en la intervención estatal. Como parte de este límite, uno de sus costos políticos más altos fue el rompimiento del acuerdo que durante décadas prevaleció entre el régimen y los propietarios de capital. Las fricciones no se iniciaron ni en noviembre de 1976 ni en septiembre de 1982. Pero estas fechas señalan rompimientos, puntos de no retorno a la situación anterior. Actualmente el acercamiento entre la élite política y el capital se ha restablecido, pero en términos distintos a los que prevalecieron en las décadas de la posrevolución.¹⁹

Detrás de esta nueva militancia empresarial —no de toda la clase, sólo de algunos de sus miembros— se manifiesta la necesidad por parte de las élites económicas del país de poner límites al poder político, de no arriesgarse a golpes similares a los de 1976 y 1982 por parte de un Estado con un margen de autonomía respecto a los intereses del capital mayor a lo que éste está dispuesto a admitir.

El poder económico empresarial implica poder político. Pero no se traduce directa ni automáticamente en poder electoral, en votos en las urnas. Para que las ideas, propuestas e intereses empresariales se manifiesten en los comicios es necesaria una base social. Un número significativo de electores dispuestos a sufragar por el o los partidos afines a los empresarios. Estos electores han existido en Sonora, y conforman otro actor político de la transición mexicana: las clases medias urbanas.

En la misma lógica de quienes en 1967 protestaron en las calles contra las decisiones autoritarias del gobierno y su partido, llegando a pedir la destitución del ejecutivo estatal, se encuentra la insurrección electoral que se inicia en 1979. Las clases medias

¹⁹ Al analizar el rompimiento de los pactos corporativos entre el Estado y la sociedad, Héctor Aguilar Camín inicia con los empresarios, la ruptura más visible en el viejo tejido corporativo. Este autor señala la nueva relación entre Estado y empresarios como “cortejo caro, recelo activo”: el poder estatal corteja, con altos costos, al capital, pero no por ello se gana su apoyo; los empresarios mantienen su desconfianza a pesar de los generosos frutos que han obtenido del cortejo. *Cfr.* Aguilar Camín, *op. cit.*, pp. 53-62.

acompañaron al ala radical de los empresarios en esta protesta de la sociedad civil contra la intervención del Estado. El antecedente inmediato y los candidatos de 1979 en Cajeme nos muestran cómo esta sociedad civil que se rebela contra el Estado no es un ente abstracto o genérico. Tiene apellidos. Se trata de sectores sociales que se identifican con lo que se ha denominado la lógica liberal-ciudadana.²⁰ Opuesta a la cultura corporativa, popular y nacionalista, la insurrección cívica de la década de los ochenta en Sonora es democrática, proempresarial y antiestatista al mismo tiempo.

Un tipo de organización, cuya existencia ha sido esporádica y reiterada en esta década, apareció en Ciudad Obregón alrededor de las elecciones de 1979. Se organizó el Comité Cívico Femenino, entre cuyas líderes destacaban las esposas de los dos principales panistas del municipio: Bettina Mazón de Rosas y Rebeca de Amaya. El Comité surgió en 1976. Tuvo una participación importante en su intento de “despertar la conciencia cívica” y promover la participación de la mujer. Desconocemos la influencia real de esta organización en las elecciones de 1979, así como el peso y la presencia de organizaciones similares en el resto del estado. Pero podemos suponer que fue significativa en la difusión de un nuevo estado de ánimo político que se manifestaría en las urnas en julio de 1979.

El primer triunfo del panismo en Ciudad Obregón significó también el inicio de un nuevo tipo de liderazgo político en Sonora. Ya desde su campaña para presidente municipal, el Pelón Rosas mostraría una personalidad muy peculiar y vigorosa, capaz de establecer un contacto personal con los ciudadanos, particularmente con aquellos de escasos recursos —lo que le valió alguna vez el calificativo de “populista de derecha” por parte de sus detractores— y de un dinamismo poco común.²¹ Desde entonces y hasta las elecciones para gobernador del año 1985, la figura de Adalberto Rosas dominaría buena parte del escenario político sonoreense.

No se trata de un fenómeno insólito en la política regional

²⁰ Héctor Aguilar Camín ha retomado un planteamiento de Sergio Zermeno. *Ibidem*, p. 36.

²¹ Véase Víctor Manuel Reynoso, “Sonora en la transición política mexicana. El caso de Sonora”, en *Revista de El Colegio de Sonora*, núm. 1, 1989, p. 21.

mexicana. El surgimiento de líderes opositores que siguen los caminos de la oposición electoral a partir de una crítica “cívica y liberal” al Estado mexicano ha sido relativamente frecuente. Por lo menos podemos recordar el caso de Salvador Nava, quien en 1958 logró que por primera vez una fuerza de oposición gobernara una capital estatal, el municipio de San Luis Potosí. Veinticuatro años después, en 1982, volvería a triunfar en las elecciones de ese mismo municipio. Detrás del candidato había una realidad política y cultural, local y nacional, que explica estos dos triunfos, tan lejanos temporalmente. Pero sin el peculiar liderazgo de Nava quizá no se hubieran dado, o al menos hubieran seguido otros cauces.²² Otros ejemplos notables de liderazgo cívico electoral son Manuel Clouthier en Sinaloa, Francisco Barrio en Chihuahua y Ernesto Ruffo en Baja California.²³ El lugar que este último ocupó en el ánimo de los electores originó la acuñación de un término, “ruffomanía”, para describir el ambiente político del estado en la campaña electoral de 1989.

Después de las elecciones de 1985, sin embargo, la realidad sonorenses se encargaría de mostrar una obviedad de la sociología del liderazgo: un líder no lo es sin su contexto o sin las bases sociales que lo hicieron posible. Desde entonces, Adalberto Rosas, actualmente diputado por el Congreso local, no ha sido más que un militante panista.

En las elecciones de Cajeme en 1979 es interesante constatar no sólo las presencias, sino también las ausencias. ¿Dónde quedaron los votos de los campesinos beneficiados por el reparto

²² Sobre el navismo puede verse Tomás Calvillo “El movimiento navista, manuscrito hallado en San Luis Potosí”, en *El Buscón*, núm. 9, México, 1984, pp. 105-161; los ensayos de Carlos Martínez Assad, “Nava: de la rebelión de los coheteros al juicio político”, en *Municipios en conflicto*, México, IIS/UNAM, 1985 y “San Luis Potosí ¿se puede gobernar con el pueblo?”, en *Revista Mexicana de Sociología*, vol. XLIV, núm. 4, oct.-dic., 1987 y de Enrique Márquez, “El movimiento navista y los procesos políticos de San Luis Potosí, 1958-1985”, en Loaeza y Segovia (comps.), *La vida política mexicana en la crisis*, México, El Colegio de México, 1987.

²³ Como se recordará, Barrio fue presidente municipal panista de Ciudad Juárez, de 1983 a 1986, y candidato a la gubernatura de Chihuahua en 1986. Ernesto Ruffo fue alcalde panista de Ensenada de 1986 a 1989 y es actualmente gobernador de Baja California. Un análisis de su liderazgo durante la campaña de 1989 fue presentado por Ernesto Barajas Gutiérrez en “Anatomía de la ruffomanía”, en el Encuentro Anual de la Association of Bordeland Scholar, Tijuana, B.C., 21-24 de febrero de 1990.

agrario de tres años antes? ¿Dónde quedó la estructura corporativa priista, que supuestamente tenía una importante presencia en este municipio?

En el extremo noreste del estado se dio un proceso político que contrasta y complementa lo sucedido en Cajeme. En Agua Prieta fracasó un intento del priismo por designar democráticamente al candidato a la presidencia municipal. Se convocó a las “bases” para que se manifestaran. Éstas lo hicieron, pero su candidato no fue aceptado por los dirigentes estatales. Después de un proceso de presiones y negociaciones infructuosas, los priistas aguapretenses reniegan de su partido, nombran a su propio candidato y contienden bajo el emblema panista. El candidato impuesto por el PRI era tan poco popular que se dice que hasta la CTM votó contra él.²⁴ Luis Córdova Corrales se convierte así en el primer alcalde de oposición en Agua Prieta. Aunque no podría decirse, todavía, que fuera panista.²⁵

Comparar los casos de Ciudad Obregón y de Agua Prieta es interesante. En este último no hubo tanto la reacción de empresarios y ciudadanía en contra de la acción estatal que afectaba intereses económicos y valores políticos. Más bien se dio el descontento en contra de formas de imposición propias de una tradición política que no es admisible para los nuevos sectores urbanos del país. En Agua Prieta se vivió un pequeño pero sugerente capítulo del enfrentamiento entre la lógica autoritario-corporativa y la cívico-liberal. Otra diferencia es que en el municipio fronterizo la oposición no fue liderada por dirigentes empresariales, sino por un conjunto heterogéneo de lo que se conoce como clases medias, en donde había empresarios, pero también pequeños comerciantes, profesionistas, maestros.

Además de Cajeme y Agua Prieta, el PAN triunfó en los municipios de Empalme y Huépac. El primero se caracteriza por su tradición ferrocarrilera. Tenía también cierta tradición de oposición electoral, modesta pero que llamaba la atención dentro del aplastante predominio priista en las elecciones sonorenses hasta 1979. Por su parte, Huépac es uno de los numerosos municipios en el estado con población menor a los 5 mil habi-

²⁴ Cfr. Alejandro Olais Oliva, *Sonora reta al sistema*, s. ed. y s. f. pp. 49-53.

²⁵ Avanzamos un poco más en el análisis del caso de Agua Prieta, en Víctor M. Reynoso, *op. cit.*

tantes. Su dinámica electoral tiene poco que ver con la lógica partidaria, y depende más bien de problemas locales como litigios por tierras, pugnas entre grupos y personas, designación de candidatos impopulares, etc. Cada caso es único, aunque se repiten patrones.

La Iglesia católica no tuvo en 1979 la participación política de años después. La presencia del arzobispo de Hermosillo, Carlos Quintero Arce, en la prensa local, fue importante, pero prácticamente no se refirió a cuestiones electorales. El carácter político de esta presencia incluso disminuyó respecto a la de tres años antes (1976), cuando en varias ocasiones criticó la situación prevaleciente en el agro, culminando con una condena al reparto de noviembre de 1976.

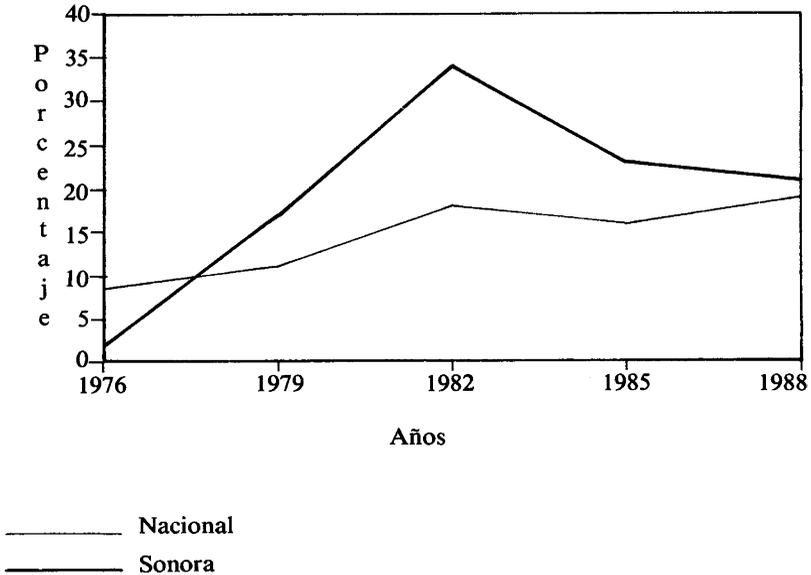
La ruptura que en términos de historia electoral tiene lugar en Sonora en 1979, se percibe en los resultados electorales de ese año. Por una parte, el PRI obtiene por primera ocasión menos de 90% del total de la votación emitida.²⁶ Un indicador más revelador de la ruptura es el cambio en el porcentaje de la votación obtenida por el PAN en relación con la que obtiene a nivel nacional. Los porcentajes del PAN sonorense siempre habían sido inferiores a los del PAN nacional. En 1979 se invierte esta relación. Desde entonces el partido blanquiazul siempre ha obtenido más puntos porcentuales en Sonora que en el total del país (véanse el cuadro 4 y la gráfica 1).

En Sonora se manifiesta una característica esencial de la realidad electoral mexicana: su dualidad.²⁷ Los resultados electorales de las zonas urbanas muestran una dinámica electoral radicalmente distinta a la de las zonas rurales. Es en éstas donde el régimen obtiene todavía los votos indispensables para enfrentar el desafío electoral de las ciudades. Los priistas han encontrado una reserva importante en las zonas rurales, no tanto en los numerosos pero poco poblados municipios serranos sino en las fértiles tierras del sur del estado. Ahí, en los municipios de Etchojoa, Huatabampo, Navojoa, Bácum, Cajeme y Guaymas hay una numerosa población rural que permite al régimen

²⁶ En lo que se refiere a elecciones municipales y de diputados locales véanse cuadros 1 y 3.

²⁷ Véase el artículo de Juan Molinar, "La asfixia electoral", en *Nexos*, núm. 123, marzo de 1988 y el análisis de Aguilar Camín con base en este artículo en su obra ya citada, pp. 138-142.

GRÁFICA 1
Votación del PAN en Sonora y en el país, 1976-1988



maniobrar, ya mediante alianzas con los campesinos o por medio de la alquimia electoral.²⁸

La ruptura se da también en una institución política cuya existencia meramente ritual empezó a cambiar en 1979: el Congreso sonorense. Por primera vez en la historia política contemporánea²⁹ tendría diputados de oposición. No sólo porque se

²⁸ Sobre la distribución del voto municipal según el criterio urbano rural véase el cuadro 2.

²⁹ Mora y González señalan la presencia de dos diputados de oposición en la XXXIX Legislatura local (1949-1952), sin indicar a qué partido pertenecían o si eran candidatos independientes. Recordemos que el proceso electoral de 1949, en el que se eligió gobernador fue bastante competido, al grado que los tres candidatos para este puesto —Ignacio Soto (PRI), Jacinto López (PP) y Armando Valderráin (independiente)— se declararon vencedores (véase Carlos Moncada, *op. cit.*, p. 94). Con esta salvedad, desde 1937 hasta 1976 (de la XXXIV a la XLVII legislaturas) no hubo diputados opositores en el Congreso

CUADRO 1
Sonora. Elecciones municipales, 1976-1988

Años	PRI	PAN	PARM	PPS	PSUM/PMS	PST/PFCRN	PDM	PRT	PRI-PAN	Total de votos
1976	90.78	02.97	2.97	3.57	*	*	*	*	93.45	287 548
1979	81.03	16.06	0.90	2.01	*	*	*	*	97.09	214 729
1982	61.51	34.37	0.50	0.88	1.78	0.29	0.68	*	95.88	384 369
1985	73.00	23.91	1.20	0.82	0.64	0.10	0.28	0.71	96.91	398 208
1988	73.87	20.63	1.19	0.93	1.12	1.61	0.29	0.35	94.50	370 749

* No participó o no aparecen en los resultados.

Fuentes: 1976-1982, Comisión Federal Electoral, 1985, Congreso del Estado de Sonora; 1988, Comité Electoral Estatal.

CUADRO 2
Sonora. Estructura electoral dual. Elecciones municipales, 1982 y 1988. Municipios rurales y mixtos

Tipo de municipio	Número de municipios	Población total		Población rural		1982		1988	
		Absoluto	Porcentaje	Absoluto	Porcentaje	PRI	PAN	PRI	PAN
Rurales	57	313 682	20.72	313 682	100.00	90.13	5.96	94.29	3.29
Mixtos	12	1 200 049	79.28	306 227	25.52	52.56	43.25	65.92	27.38
Total Edo.	69	1 513 731	100.00	619 909	40.95	67.02	28.90	78.38	16.83

Nota: se consideraron municipios rurales a aquellos que no tienen localidades mayores a 15 mil habitantes.

Fuentes: X Censo Nacional de Población y Vivienda; Comisión Federal Electoral y Comisión Estatal Electoral

estrenó la representación proporcional, sino porque el PAN obtuvo dos diputaciones por mayoría relativa. Se trata de una novedad cualitativa en esta cámara, que si bien no cambia radicalmente su papel dentro de la política local, sí significa el inicio de ese cambio, el comienzo de una transición.

La oposición se consolida (1982)

El periodo que va de la irrupción electoral de 1979 a las elecciones siguientes es el de la consolidación de la oposición en Sonora. A diferencia de lo acontecido en 1967, a los triunfos panistas de 1979 no seguiría un limbo electoral.

Lo primero que pensamos al comparar la realidad electoral sonorense de los años setenta —cuando la oposición no cuajó— con la de los años ochenta es que en este periodo ya estaba presente la crisis económica. Parecería que fue ésta la que determinó la consolidación de la oposición.

El periodo interelectoral de 1979 a 1982 se caracterizó por la armonía política y la riqueza económica —la famosa *administración de la abundancia*. Gobierno estatal priista y gobiernos municipales panistas, empresarios, clases medias y sectores populares convivieron sin problemas:

De 1979 a 1982 no se observan conflictos relevantes entre el gobierno del estado y los ayuntamientos panistas. Existe una relativa calma y una conducción sin tropiezos en ambas instancias, entre sí y en las relaciones con sus gobernados. Hay concordia y pactos implícitos de no agresión. Son los años de la abundancia prometida, de la “Alianza para la producción”, de la grandeza y de la reconciliación nacional.

Durante estos tres años (1979-1982), existe un factor predominante en el sostenimiento del consenso y de la estabilidad del bloque de las clases dominantes, aliadas y subordinadas en el estado: la garantía del ascenso del nivel de vida, sobre todo de las clases medias. La libertad cambiaria y el accesible precio del dólar con-

sonorense. *Cfr.* Felipe Mora y Gabriela González, “La representación política de los trabajadores en Sonora (1937-1980)”, en *Memoria* del XIV Simposio de Historia y Antropología de Sonora, tomo III, cuadro III, Hermosillo, Son., 1990, p. 213.

vierte a cualquier sonorense en un potencial consumidor en el otro lado de la frontera...³⁰

Sin embargo, para julio de 1982 —el momento de las elecciones— la administración de la abundancia ya se había ido. El nivel de vida de la mayoría de la población se reduciría drásticamente desde entonces. La crisis económica empieza a constituirse en el escenario, el telón de fondo de la década electoral sonorense. En 1982 el PAN en Sonora obtiene las votaciones más altas en su historia, llegando incluso a vencer al PRI en las zonas urbanas, según los resultados oficiales.³¹

A pesar de esto, el PAN cosechó menos triunfos que tres años antes. Mantuvo el municipio de Agua Prieta y ganó en San Luis Río Colorado y en la capital, pero perdió Cajeme, Empalme y Huépac. En Cajeme el PRI venció sin convencer. Para algunos se trató de un caso más de “alquimia transparente”. Algo similar ocurrió en la ciudad fronteriza de Nogales, donde el candidato panista fue desconocido legalmente por supuestos antecedentes penales.³²

En el nuevo triunfo panista en Agua Prieta hay un cambio singular. Si, como veíamos en el apartado anterior, en 1979 fue un grupo de priistas descontentos los que triunfaron bajo las siglas del PAN, para 1982 tenemos más bien a un conjunto de panistas entusiastas. En tres años se dio un proceso de conversión política en este municipio, uno de los pocos en el país que ha sido gobernado consecutivamente por la oposición. Hay en esto un signo de nuestros tiempos de transición: se rompe un monopolio, llega a su fin el priismo como canal único de participación política.

³⁰ Jorge Luis Ibarra, “Sonora en la crisis. Un enfoque político”, fotocopia, pp. 9-11.

³¹ Véase el cuadro 2. Aunque en la votación de los municipios que hemos considerado “urbanos” el PRI mantiene una ventaja sobre el PAN de unos seis puntos porcentuales, suponemos que si desagregamos la población urbana de la rural en esos 11 municipios —algunos de los cuales, como Cajeme, Navojoa y Caborca, tienen una gran cantidad de electores rurales— los candidatos panistas alcanzarían una votación más alta que los priistas en las zonas urbanas (ahora sí, sin comillas).

³² J. L. Ibarra, *op. cit.*, p. 2. Un testimonio personal sobre el supuesto fraude contra el PAN en Cajeme puede verse en el libro de Miguel Ángel Tapia, *1507-82: el expediente de la vergüenza*, Adalberto Rosas, Samuel Ocaña y... 1985, Ciudad Obregón, Ed. de autor, 1985.

Lo anterior es explicado de una forma particularmente sugerente por un panista de Agua Prieta. Al comentar su anterior participación en el PRI, señalaba: “con la política nos pasaba como con la religión: así como veíamos que la única forma de ser cristiano era ser católico, veíamos que la única forma de ser político era ser priista. Ahora ya tenemos otras opciones, para la religión y para la política”.³³

En Agua Prieta el nuevo panismo no tiene, a diferencia de lo que sucede en Ciudad Obregón, San Luis Río Colorado y lo que sucederá unos años después en Hermosillo, un líder surgido de las filas empresariales. Aquí el movimiento es más plural, el liderazgo no se concentra en una o dos personas, y los dirigentes pertenecen más bien a las clases medias. Clases medias cuyo ideal se realiza “a sólo cien metros” de su propia población. Uno de sus móviles políticos es la búsqueda de una “pequeña utopía”, la utopía cívica que se realiza en Estados Unidos y que los aguapretenses conocen en la vecina ciudad de Douglas, Arizona. No consiste en transformaciones radicales de las estructuras sociales, sino simplemente en un gobierno que respete las leyes, una policía que no extorsione a los ciudadanos, unos funcionarios que no utilicen recursos y funciones para su enriquecimiento personal, autoridades electorales que se limiten a contar los votos ciudadanos y no a inventarlos, destruirlos o negociarlos.³⁴

En las otras dos ciudades de la frontera sonorenses —Nogales y San Luis Río Colorado— también se desbordó el fervor cívico en favor del PAN. En Nogales estuvo a punto de darse un proceso similar al de Agua Prieta tres años antes. Jesús Retes, “el candidato natural a la presidencia municipal” no fue nominado finalmente por el PRI, aunque se le habían creado expectativas. Según el periodista Alejandro Olais,³⁵ Héctor Monroy, “caci-

³³ Entrevista con Óscar Paco Barrera en Agua Prieta, Son., 5 de noviembre de 1987.

³⁴ Entrevista colectiva a dirigentes de Agua Prieta (Leonardo y Viola Corella, Óscar Paco Barrera y Leonardo Yáñez), Agua Prieta, Son., 5 de nov., de 1987. Estos valores cívico-liberales, que podrían resumirse en el cumplimiento del orden legal, fueron expresados por los entrevistados en diferentes formas. Exponemos esta utopía cívica norteamericana como un juicio de hecho: es la ideología motivadora de los panistas aguapretenses y quizá de otros muchos; y no como un juicio de valor.

³⁵ Alejandro Olais, *Sonora reta al sistema*, s.f. y s. ed., pp. 71-77. En este libro, publicado antes de las elecciones de 1985, el autor presenta diversas entrevistas que realizó con protagonistas de elecciones sonorenses recientes,

que local”, impuso a Enrique Moralia como candidato. Muchos priistas se pasaron al PAN, cuyo candidato fue el médico Miguel Ortega Rico. Durante la campaña fue acusado de fraude y se ventiló una orden de aprehensión en su contra. Renunció a la candidatura, y el PAN postuló entonces a Francisco Gustavo Salazar Ruiz, quien también renunció. Según él por presiones “de un grupo oligárquico local”; según el dirigente estatal de su partido, porque fue secuestrado por “guaruras” y obligado a firmar su renuncia y, según Ortega Rico, porque se vendió en tres millones de pesos. Oficialmente sin candidato, el PAN pidió a la ciudadanía que votara por Ortega Rico, señalando su nombre en el espacio en blanco de la papeleta. Según Ortega, él ganó las elecciones con el 85% de los votos emitidos.³⁶

En San Luis Río Colorado la oposición fue más exitosa. El candidato panista fue Fausto Ochoa Medina, quien había sido dirigente de la cámara de comercio local. Ahí consolidó un liderazgo entre algunos comerciantes del municipio, pues se distinguió por su defensa del gremio frente a cuestiones como las leyes fiscales. No se trata de un panista doctrinario. Más que los principios del partido, su cosmovisión parece ser el conjunto de valores que conforman la democracia liberal.³⁷

Este triunfo electoral panista ha querido ser visto como producto de un pleito entre los dos hombres fuertes del municipio. El hermano de uno de ellos, Héctor Leyva Castro, fue el candidato priista que perdió en el año 1982. Es difícil sostener que varios miles de electores puedan ser manipulados por los caciques de una localidad urbana y fronteriza. Más aún, el triunfo panista en San Luis Río Colorado no es un hecho aislado sino que forma parte de un proceso que abarca prácticamente a todas las ciudades sonorenses.

Otro triunfo panista de este año se dio en el centro político,

fundamentalmente municipales. Aunque la imparcialidad no parece ser el valor más importante para el autor, buena parte de la información que presenta es original, por lo que aquí la hemos retomado.

³⁶ Toda esta información la hemos retomado de la obra citada de Alejandro Olais, pp. 71-77.

³⁷ Así se desprende el análisis que hace Rocío Guadarrama a partir de una entrevista de Ochoa con Ana Saint Claire “no soy fanático partidista, ni fanático de Acción Nacional, ni del Partido. . . yo soy un hombre normal, yo quiero a la ciudadanía, yo quiero a México”. *Cfr.* R. Guadarrama, *op. cit.*, p. 12.

económico y cultural del estado: Hermosillo. Entre otras cosas, este triunfo es importante porque con él se inicia uno de los liderazgos panistas más peculiares en Sonora, el de Casimiro Navarro. De origen popular, a diferencia de la mayoría de los dirigentes panistas que provienen de los sectores medios y empresariales, la personalidad política de Casimiro tiene una singular dualidad.

Poseedor de un incuestionable carisma, en algunos sectores de la opinión pública, en grupos populares e incluso en el medio académico, es visto como el representante del ala popular del panismo, con intereses, valores y percepciones de los problemas sociales radicalmente distintos a los de los dirigentes empresariales del PAN. Algo así como un “panista de izquierda”, representante de las clases oprimidas en la dinámica de la lucha de clases que, supuestamente, se da en el interior de la estructura partidaria del panismo sonorense. Por el contrario, dentro del PAN es visto con recelo por algunos militantes y dirigentes. Ha dado lugar a conflictos internos que llevaron a su expulsión temporal del partido.

Nuevos actores participan en las elecciones sonorenses de 1982. Ese año se estrena la legislación electoral, la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales del Estado de Sonora. Gracias a ella, participan en los comicios cuatro partidos más: el Socialista Unificado de México, el Socialista de los Trabajadores, el Demócrata Mexicano y el Revolucionario de los Trabajadores. No alteran, sin embargo, el paisaje político sonorense. De los cuatro nuevos partidos, el PSUM fue el que más votos obtuvo: llegó a 1.78% del total. Entre todos apenas alcanzaron el 2.75% (véase cuadro 1). Al igual que tres años antes, sólo pinta la oposición panista.

De la iglesia llama la atención su poca participación en relación con las elecciones. Al igual que en 1979, el arzobispo de Hermosillo hacía declaraciones, pero ninguna relacionada con lo electoral. En cambio, sí se unió al resto del episcopado mexicano al condenar el llamado del PSUM a los cristianos para votar por este partido.

Los resultados electorales de 1982 confirmaron lo que hacía tres años fue una sorpresa: el inicio de una nueva época electoral en Sonora. Los triunfos panistas de 1979 no fueron algo coyuntural y reactivo. El partido consolidó a su nueva militancia y mantuvo una importante presencia electoral tres años después.

Obtuvo la votación más alta de su historia en el estado, y es razonable suponer que venció al PRI según los resultados oficiales en las zonas urbanas. Este punto culminante del panismo sonoreense coincidió con su recuperación a nivel nacional, después de la crisis de la segunda mitad de los años setenta. Fue la antesala de los triunfos del partido en 1983, en el vecino estado de Chihuahua. Al terminar el sexenio lopezportillista, la transición electoral estaba plenamente instalada en Sonora.

EL REGRESO DEL INTERVENCIONISMO ELECTORAL (1985-1988)

Las expectativas malogradas: 1985

A diferencia del periodo anterior, el trienio que separó las elecciones sonorenses de 1982 y 1985 se caracterizó por una situación política dinámica y conflictiva, a la cual contribuyeron diversos hechos a nivel nacional y estatal.

En primer lugar estaban los triunfos panistas de 1982, que refrendaban una importante presencia de Acción Nacional entre los electores sonorenses. El partido opositor gobernaba tres importantes municipios, entre ellos el de la capital, lo que le daba una base de acción nada despreciable para las elecciones de 1985. No sólo había consolidado la preferencia de amplios grupos de votantes, sino también su aparato partidario se había fortalecido por la incorporación de cuadros que lo enriquecieron cuantitativa y cualitativamente.

En noviembre de 1982, Carlos Amaya es electo dirigente estatal. Desde entonces, todos los panistas sonorenses que ocupan este puesto tendrían una característica común: haber sido dirigentes en organizaciones empresariales.

Aún más importante es la presencia de otro empresario cajemense: Adalberto Rosas. Prácticamente desde principios de 1983 inició su campaña para gobernador, mediante una caminata en la que atravesó el estado de Sonora. Con esto consolida el estilo de su campaña para presidente municipal de Cajeme en 1979 y durante su gestión como alcalde de ese municipio.

A diferencia de 1982, en las elecciones de 1985 se disputaría la gubernatura del estado. Por primera vez en la historia reciente de Sonora se veía la posibilidad de que un candidato opositor llegara a ser gobernador. Se pensó que Rosas tenía serias posi-

blidades de llegar a ser el primer gobernador de oposición en el México contemporáneo.

El contexto económico y político a nivel nacional contribuyó notablemente en el desarrollo de estas expectativas. En primer lugar, por las consecuencias de la nacionalización de la banca. Aunque no recibió un rechazo unánime por parte del empresariado sonorenses,³⁸ sí parece que generó el repudio generalizado de los sectores que han constituido la clientela electoral panista. Sonora se unió a la “revuelta de la conciencia pública”³⁹ en contra de la medida estatal, lo que sería un factor determinante en los ánimos electorales que prevalecieron en 1985 en Sonora.

CUADRO 3

Sonora. Elecciones para gobernador, 1973-1985

Año	PRI	PAN	PRI+PAN	Votación	Porcentaje	Padrón
1973	100.00	*	100.00	488 404	n.d.	n.d.
1979	90.35	8.8	99.15	272 243	38.95	698 949
1985	70.49	27.27	97.76	412 464	47.15	874 800

n.d.: dato no disponible.

* No presentó candidato.

Fuente: Comisión Federal Electoral.

En parte debido a este clima político, en esos años ingresa al escenario político electoral sonorenses un actor que, aunque tenía una notable presencia en la opinión pública del estado, no había incursionado en ese escenario: la Iglesia católica. En agosto de 1982 toma posesión como obispo de Ciudad Obregón, una de las diócesis católicas en Sonora, Luis Reynoso Cervantes. Notable jurista, se distinguió por sus opiniones frecuentes y casi siempre críticas hacia el Estado mexicano. La prensa local des-

³⁸ Gabriela García Figueroa señala que la medida nacionalizadora recibió el rechazo del Centro Empresarial del Norte de Sonora, de la Canaco y la Canacindra locales y de un grupo de 250 empresarios de Cajeme, mientras que la Asociación de Agricultores del Norte de Sonora no emitió juicio sobre ella y la Confederación de Organismos de Agricultores del Estado de Sonora declaró que la nacionalización era benéfica para el sector agrícola. *Cfr.* “El discurso empresarial en los procesos electorales de 1982, 1985 y 1988 en Sonora”, en *Memoria. . . op. cit.*, pp. 249-262.

³⁹ Héctor Aguilar Camín, *op. cit.*, p. 34.

tacó una declaración del obispo del 16 de septiembre de 1982, en la que señalaba que “la corrupción generalizada era la causa de la crisis” y advertía que “no se debe abusar del poder”.⁴⁰ El arzobispo Carlos Quintero mantendría su presencia en la opinión pública local incorporando temas más directamente políticos en sus declaraciones.

Un factor más para el contexto de las elecciones sonorenses de 1985 fue la situación política del vecino estado de Chihuahua. Ahí se estaba viviendo una situación inédita. La mayor parte de la población estatal era gobernada, a nivel municipal, por panistas. Se pensaba que Sonora y Nuevo León —otro estado en el que se realizaron elecciones locales en 1985— continuarían y consolidarían el proceso iniciado en Chihuahua en 1983.

No sólo a nivel nacional estaban extendidas esas expectativas. Los Estados Unidos, que en esos años mantenían en México a un embajador que nunca se distinguió por su discreción, veían con gusto e interés los nuevos procesos electorales en nuestro país, especialmente en algunos estados del norte.

Precisamente dicho interés provocó un pequeño escándalo en la capital sonorenses en 1983. El entonces cónsul norteamericano en Hermosillo, Anthony Arredondo, invitó a una cena a los dirigentes panistas Carlos Amaya y Adalberto Rosas, y al arzobispo de Hermosillo, entre otras personas. Estaba presente, además, un representante personal del embajador norteamericano John Gavin, lo que desató una verdadera guerra de papel en los medios impresos sonorenses; sobre todo la prensa afín al gobierno estatal se destacó por sus críticas a la reunión.

La preocupación llegó a nivel nacional.⁴¹ Por un lado se

⁴⁰ Cfr. *El Imparcial*, 8 y 12 de octubre, pp. 1 y 4d, respectivamente. En el estado de Sonora tienen presencia dos diócesis y una arquidiócesis. Esta última es la de Hermosillo, cuyo titular en todo el periodo que nos ocupa es monseñor Quintero Arce. El sur y el oriente del estado pertenece a la diócesis de Ciudad Obregón. Dos municipios del noroeste sonorenses, San Luis Río Colorado y Puerto Peñasco, son parte de la diócesis de Mexicali.

⁴¹ En su libro *Límites de la amistad*, Jorge G. Castañeda inicia el capítulo titulado “Las intervenciones” mencionando la cena del consulado. Manuel Buendía en un editorial que reprodujo el periódico cajemense *Diario del Yaqui*, el 19 de mayo de 1983, señalaba que el 22 de abril de ese año será una fecha “registrada como un día infame en la historia personal de un pequeño grupo de mexicanos dudosos” refiriéndose a quienes asistieron al consulado. Expresaba además su preocupación por esta posible alianza entre sectores de la derecha nacional y representantes del gobierno norteamericano.

veía como un acto de intromisión de un gobierno extranjero en la política nacional. Por otro, como una peligrosa “cuádruple alianza”, formada por Estados Unidos, la jerarquía católica, el empresariado y el Partido Acción Nacional. El hecho de que unos meses antes, en julio de 1982, el candidato panista a la alcaldía en Hermosillo se hubiera refugiado en el consulado norteamericano acentuaba sospechas y temores.⁴²

Independientemente de que las intenciones de aliarse existieran o no, se mostraba el interés del gobierno norteamericano en la política sonorenses. Mostraba también que el arzobispo tenía, por lo menos, interés en relacionarse con los miembros de la oposición panista, y que era considerado por el cónsul norteamericano como una figura política importante y afín al panismo.

Este clima preocupó al gobierno local y exigió una respuesta con vistas a las elecciones de 1985. Al parecer, el gobernador Ocaña esperó orientaciones del nuevo gobierno federal. Después de un viaje a Sonora de Miguel de la Madrid, en junio de 1983, el gobierno sonorenses desarrolló una estrategia basada en tres líneas: recuperar la confianza de los empresarios locales, dañada por la nacionalización de la banca en 1982; debilitar al panismo, y realizar cambios en el interior del Partido Revolucionario Institucional para fortalecer su presencia electoral.⁴³

Desde el inicio del gobierno de De la Madrid fue más o menos claro que se deslindaba de las veleidades populistas de sus antecesores. En particular en su relación con los empresarios, con quienes el régimen hizo esfuerzos por congraciarse⁴⁴ y “recuperar la confianza”, deteriorada por lo que en medios conservadores se ha llamado “la docena trágica”, en referencia a los gobiernos de Echeverría y López Portillo. El gobierno sonorenses se sumó a esta estrategia federal:

sobre todo a partir de julio de 1983, el gobierno ofreció garantías a la burguesía sonorenses en tres aspectos fundamentales y de su mayor interés: 1) contener las luchas y demandas populares; 2) promover, proteger y asegurar sus inversiones y por tanto la capi-

⁴² Casimiro Navarro admitió que unos pocos días después de las elecciones de ese año (la noche del once al doce de julio), pidió alojamiento al consulado norteamericano ante las amenazas telefónicas que él y su familia habían recibido. *Cfr.* A. Olais, *op. cit.*, pp. 104 y ss.

⁴³ Ibarra, *op. cit.*, pp. 27 y ss.

⁴⁴ *Cfr.* Aguilar Camín, *op. cit.*, pp. 62-65.

talización y desarrollo de sus empresas y, 3) entregarle posiciones directas en los aparatos estatales y tomarlas en cuenta en la colocación de personal directivo en puestos de su interés.⁴⁵

Se aplicó la “vieja política del garrote y la zanahoria”. Mientras se advertía que el rumbo del país lo fijaría el gobierno, se combatía al panismo por diferentes medios, y se señalaba que los empresarios deberían abocarse a sus funciones económicas, se les garantizaba a éstos seguridad y apoyo.

El carácter conciliador del gobernador Ocaña y su acercamiento a sectores populares no implicaron que dejara de dar a su gobierno un cariz proempresarial, presionado tanto por la política que venía desde el gobierno central como por la amenaza que para su partido significaría un apoyo decidido del empresariado local al panismo en las elecciones de 1985. Es precisamente en esta época en la que se empieza a hablar del “priismo empanizado”. “Parecía que el PAN ganaba dentro del PRI”;⁴⁶ tanto en el interior del gobierno como en la selección de candidatos y dirigentes del partido oficial se empiezan a colocar individuos con “perfil panista”, sin militancia previa en el partido del Estado y cercanos a los medios empresariales.

La culminación de esta política tuvo lugar durante la campaña de Félix Valdés. El candidato priista a gobernador, seriamente impugnado por algunos sectores de la opinión pública local por su falta de arraigo en Sonora, logró el apoyo público de importantes empresarios sonorenses. Primero en el sorteo “Únete a ganar”, y después en la primera reunión “Sonora, nuestro gran compromiso”. Ahí, “reconocieron el papel rector del Estado para ‘salvaguardar’ la gran diversidad de intereses ‘que se entrelazan y funcionan en una economía de capital como la nuestra’. Además se deslindaron de los pequeños grupos aislados que ‘de ninguna manera representan el sentir de nuestros hombres de negocios’ y se comprometieron a hacer crecer la economía nacional”.⁴⁷

De esta manera, frente a los empresarios sonorenses que se

⁴⁵ Ibarra, *op. cit.*, p. 33.

⁴⁶ *Idem*, p. 44.

⁴⁷ Cfr. Rocío Guadarrama, *Modernización . . .*, *op. cit.*, p. 20; véase también Gabriela García Figueroa, *op. cit.*, p. 258, y Miguel Ángel Vázquez, “Una década electoral en Sonora (1978-1988)”, en *Memorias . . . op. cit.*, pp. 274-275.

subieron al carro del panismo quedaban los grandes capitales del estado. Refrendaban su alianza con el gobierno y se distinguían de los anteriores “pequeños grupos aislados” que “no representan el sentir de nuestros hombres de negocios”.

La exitosa política gubernamental para atraerse al empresario tuvo su contraparte en la incapacidad del panismo para hacer lo mismo. A los nuevos tiempos delamadridistas, que constituían un desenlace a la “disputa por la nación” favorable a los empresarios, se unía la actitud pragmática de la mayoría de los capitalistas, que subordinan principios a intereses. Se añadían además las fricciones entre el gobierno panista de la capital y diversos sectores empresariales.⁴⁸

La ofensiva contra el panismo abarcó desde ataques en la prensa local contra los gobiernos municipales gobernados por ese partido, hasta reformas legales que en la práctica se tradujeron en un mayor control de los municipios por el gobierno del estado. A principios de 1983 el Congreso local legisló en materia municipal con el objetivo de reglamentar las reformas al artículo 115 constitucional, realizadas en diciembre de 1982. Algunas de las consecuencias de esta nueva legislación fueron la nueva capacidad del Congreso estatal para declarar desaparecidos los gobiernos municipales; el incremento en las facultades del Congreso para intervenir en la calificación de las elecciones municipales, con lo que quedaba por encima de las autoridades electorales locales; por último, los cambios en la legislación permitían al ejecutivo estatal nombrar directamente a los jefes de las policías municipales.⁴⁹ Las nuevas funciones se ejercieron. El caso más notable fue el de San Luis Río Colorado, donde un proceso de continuo enfrentamiento entre la presidencia municipal panista y las fuerzas priistas culminó con la caída del jefe de la policía municipal.⁵⁰

Finalmente, la estrategia gubernamental para las elecciones sonorenses de 1985 trató de adecuar al Partido Revolucionario Institucional a la nueva situación. Piedra angular del sistema político mexicano, el PRI parece ser una especie de nudo gordiano para la democratización nacional exigida en los tiempos de la transición. Las dificultades que implica su puesta al día se

⁴⁸ Ibarra, *op. cit.*, p. 31.

⁴⁹ *Idem.* pp. 28-29.

⁵⁰ *Idem.*

manifestaron en este periodo. El partido fue escenario, como siempre, de las pugnas entre diversos grupos que buscaban colocarse ante la próxima sucesión gubernamental. En este rejuego de intereses era difícil transformar la dinámica partidaria, acercar el partido a la sociedad, complementar la anquilosada estructura sectorial por una más moderna, de representación territorial.

A la necesidad de presentar un partido viable ante una ciudadanía descontenta y afín al panismo, se añadió que el dirigente del PRI estatal, Daniel Acosta, era el precandidato del gobernador del estado para la próxima elección gubernamental. El partido tuvo una gran actividad en 1983 y 1984. "Sin embargo, la oferta no pasaba de una especie de asistencialismo que lo mismo organizaba justas deportivas, homenajes a las madres, sorteos, acciones caritativas, que adjudicaba a gestiones priistas alguna obra ya contemplada en los planes de secretarías y dependencias gubernamentales."⁵¹ Las marchas y mítines realizadas por el priismo, en ocasiones masivas, no dejaron de ser rituales sin contenido.

Quizá el único cambio notable que sufrió el partido del Estado es el ya referido proceso de "empanización". En parte expresa una tendencia de la sociedad mexicana (y mundial), en la que los valores empresariales y liberales han ganado terreno en los años recientes. En parte representa un proceso más general, común acaso a todos los sistemas de partidos: los partidos políticos, en su afán de lograr clientelas electorales, tienden a parecerse cada vez más, haciendo a un lado diferencias ideológicas y programáticas de fondo.

A pesar de la ofensiva gubernamental, el PAN llegaba con fuerza a las elecciones. Tenía un candidato a la gubernatura de indudable presencia en amplios sectores de los votantes. La campaña de Adalberto Rosas, iniciada desde 1983, había contenido desde actos más o menos espectaculares —como la caminata mediante la cual recorrió más de 1 000 kilómetros a lo largo del estado durante más de un mes— hasta sencillos acercamientos a los hogares de las colonias medias y populares, que sin duda habían fortalecido su candidatura.

El panismo aprovechó el hecho de que el candidato priista

⁵¹ *Idem*, p. 43.

fuera visto como un enviado del gobierno central, más que como un representante de las fuerzas políticas locales. En prácticamente todas las sucesiones gubernamentales en el estado, por lo menos desde fines de los años cuarenta, existe una discusión tradicional que opone a los precandidatos “de acá” a los “de allá”; a los “sonorenses de Sonora” frente a los “sonorenses del Distrito Federal”.⁵² En el periodo tratado, la discusión fue particularmente fuerte. Dio lugar a una revitalización del regionalismo local, de viejo aliento pero que ha pasado etapas de tranquilidad.⁵³

El PAN se vio fortalecido, al menos hasta antes de la etapa más intensa de la campaña, por la presencia que su candidato tuvo en el principal medio de comunicación escrito en el estado: el influyente diario *El Imparcial*. El papel de éste como formador de opinión pública, tanto en lo electoral como en otros temas, es fundamental en la entidad. Es un caso parecido al de *El Norte* regiomontano. Sin él y sin la abierta defensa que hace de los valores empresariales, seguramente las elecciones sonorenses serían distintas.

Los resultados electorales muestran un cambio en la tendencia de los dos procesos anteriores, en los que el PAN había tenido notables avances. El PRI recuperó 12.5 puntos porcentuales, mientras el PAN perdía 10.4. Para los ciudadanos y los observadores locales, estas cifras no son verosímiles. A pesar de la ofensiva priista, nunca antes el PAN había contado con tanta fuerza como en 1985. Lo que explica el resultado parece ser no

⁵² Cfr. el libro de Carlos Moncada, *La sucesión política en Sonora, 1917-1985*, Hermosillo, Son., Ed. Latinoamericana, 1988. Aunque el autor no se detiene en el análisis de esta pugna, está presente en casi todos los procesos de selección de candidatos a gobernador que trata en su libro. Quien la hizo célebre —al igual que a otros elementos del regionalismo sonorenses— fue Abelardo Rodríguez en un discurso el 16 de septiembre de 1947, *op. cit.*, p. 86.

⁵³ Un indicador notable de esta revitalización es la publicación del libro *El cazador de guachos*, especie de *opus magnum* del regionalismo sonorenses radical. Su autor es José Teherán, reconocido escritor local que ha obtenido varios premios literarios. El hecho de que el libro llegara a dos ediciones, en una sociedad que no se distingue precisamente por su amor a la lectura, nos muestra de alguna manera que el autor representaba los sentimientos de amplios grupos de sonorenses. En el exitoso libro de Teherán coinciden lo que podríamos llamar el regionalismo social sonorenses, de hondas raíces históricas y culturales, con el regionalismo político, que tiene que ver con el anterior pero se relaciona más con la lucha por la gubernatura de los grupos políticos y económicos locales.

las preferencias de los electores, sino el otro gran factor que determina las elecciones mexicanas: la acción estatal. Más que un reflejo de lo sucedido en las urnas, los resultados sonorenses de 1985 son reflejo de la decisión del Estado mexicano de cerrar los espacios abiertos en el verano chihuahuense de 1983.

Los puestos de elección ganados por el PAN revelan lo anterior. No se le reconoció ningún triunfo a nivel municipal ni en las diputaciones locales. Sólo logró una diputación federal, en el célebre segundo distrito, que abarca el norte de la ciudad de Hermosillo. Los resultados obtenidos por su candidato a gobernador, si bien fueron altos considerando la votación que habían obtenido los candidatos panistas a este puesto, fueron bajos en relación con lo que se esperaba y a lo que se cree fueron los votos realmente emitidos. Se le reconocieron al PAN solamente dos diputados de representación proporcional en el Congreso local, pero renunció a ellos como un rechazo al fraude electoral. Los diputados no aceptaron y ejercieron su función sin pertenecer al partido que los postuló.

En cuanto a los demás partidos, siguieron sin tener una presencia notable. En los resultados globales perdieron un punto porcentual. Parecería poco, pero no lo es tanto si consideramos que significa 20% respecto al porcentaje que obtuvieron en la votación de tres años antes.

Después de las elecciones abundaron las denuncias de fraude. En Hermosillo, a diferencia de lo que ocurrió en Monterrey ese mismo año y en Chihuahua un año después, la ciudadanía no apoyó los llamados panistas para resistir lo que consideraban una imposición. Se formó un "Congreso popular" y se nombró a Rosas "gobernador popular".⁵⁴ Pero no se generó la movilización suficiente para que estas medidas tuvieran trascendencia política.

Distintos fueron los casos de San Luis Río Colorado y Agua Prieta. En ambos municipios fronterizos la población se movilizó. En ambos tuvieron lugar conflictos entre panistas y autoridades policiacas. En Agua Prieta el conflicto llegó incluso al bloqueo de la garita fronteriza, a la quema del palacio municipal y al encarcelamiento y supuesta tortura de un numeroso gru-

⁵⁴ Revista *Así*, núm. 114, 2a. quincena de septiembre de 1985, p. 14.

po de militantes, entre quienes se encontraba el representante del comité nacional, Norberto Corella Gilsamaniego.⁵⁵

Se habían detenido, al menos por ese año, los triunfos panistas. Se había detenido también, deseado por unos y temido por otros, el desarrollo de la democracia electoral en nuestro país.

1988: Continuamos en la transición

En los meses que siguieron a las elecciones federales de 1988 se repitió, hasta llegar a ser un lugar común en el medio académico nacional, que a partir del 6 de julio “el país cambió”. Hay en esto algo de verdad. Por lo mismo conviene contrastarlo con lo sucedido en Sonora y en otras entidades del país.

Aquí, pocas cosas cambiaron. Se reiteró la situación electoral de 1985: la impresión de que en los centros urbanos hubo una abrumadora mayoría panista pero que no se le reconoció prácticamente ningún triunfo al partido blanquiazul. Se reiteró el intervencionismo estatal en las elecciones.

Lo anterior nos habla de la validez y de la necesidad de los análisis regionales. Trataremos en este inciso de presentar lo sucedido en Sonora durante este proceso electoral, de señalar sus especificidades dentro de la línea general ya mencionada: la repetición del “carro completo” priista. Carro completo que hizo aparecer a Sonora como una entidad afín a ese partido, lo que es poco verosímil, aún para los militantes priistas en el estado.

Es posible fechar el inicio del proceso electoral en Sonora el 23 de octubre de 1987. Ese día el precandidato priista a la Presidencia de la República estuvo en Hermosillo, y en la Asamblea Nacional Extraordinaria de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) hizo algunas declaraciones que llegaron a ser ampliamente publicitadas. Como aquella de que “la modernización democrática de México exige hacer política, mucha política y más política moderna”.⁵⁶ La que más trascendió en el ámbito local fue la que se refería a las elecciones en el nor-

⁵⁵ Cfr. Óscar Paco Barrera, *Yo lo vi...*, Hermosillo, Son., 1985 y *La Nación*, núm. 1 694, 1 de noviembre de 1985.

⁵⁶ Estas declaraciones tuvieron una amplia difusión por lo que pueden verse en prácticamente cualquier periódico de la prensa nacional o local del 24 de octubre de 1987. Nosotros las hemos tomado de *Discursos de precampaña*, Ed. PRI, 1987, p. 143.

te: “Debemos reconocerlo y aceptarlo: en algunos estados del norte de México, no en el caso de Sonora, hemos salido raspados del lance electoral. La política moderna exige elecciones limpias y también el rechazo a la vieja tesis del ‘carro completo’ y de que ‘de todas, todas’.”⁵⁷

Estas palabras de Carlos Salinas serían no sólo una referencia a lo acontecido en las pasadas elecciones en “algunos estados del norte” y en Sonora, como lo entendieron todos los interlocutores del discurso, a pesar de la salvedad explícita hecha por el precandidato. Serían también un augurio de lo que sucedería el 6 de julio sonorenses, cuando la “política moderna” no pudo imponerse al “carro completo” y al “de todas, todas”. Quizá el contraste notable entre los propósitos expresados por Salinas y los resultados electorales de 1988 puedan explicar el conflicto entre el priismo central y el local, que estalló con la denuncia de la Operación Manitas.

El contexto político de 1988 era distinto al de 1985 en una cuestión: los gobiernos federal y local habían demostrado fehacientemente que no tenían nada que ver con las veleidades expropiatorias que culminaron el 1 de septiembre de 1982. La actitud de estos gobiernos iba más allá de respetar la propiedad privada. Recurriendo a una terminología usada a principios de la década, podríamos decir que la disputa por la nación⁵⁸ estaba ya resuelta: el proyecto neoliberal se había instaurado en México. La candidatura de Salinas aseguraba la continuidad de este proyecto, que coincidía con los intereses y las propuestas de la mayor parte de los capitalistas nacionales, al menos en términos generales.

Lo anterior se tradujo en Sonora en el apoyo empresarial para los candidatos priistas. No era una novedad, pues lo mismo había sucedido tres años antes. Pero ahora el apoyo fue más explícito, más militante: la fotografía de algunos de los grandes empresarios del estado apareció en la prensa local en desplegados donde se presentaban como “promotores del voto” priista.

⁵⁷ *Idem*, p. 144.

⁵⁸ Nos referimos a la discusión que generó el libro de Rolando Cordera y Carlos Tello, titulado precisamente *La disputa por la nación*, publicado por Siglo XXI en 1981. Los autores afirmaban que dos proyectos de desarrollo nacional se enfrentaban: el neoliberal y el nacional. El primero, más afín a los sectores empresariales, aseguraba los intereses de éstos aunque traería, por lo menos en el corto plazo, un agudizamiento de las desigualdades sociales.

Si los capitales más importantes del estado confirmaban su alianza con el priismo, los empresarios panistas continuaban militando en la oposición. Eran los casos de Adalberto Rosas, candidato a senador y a diputado local por representación proporcional, Carlos Amaya, consejero del partido, Fausto Ochoa Medina, dirigente estatal y candidato a senador.

Es curioso que desde la nacionalización de la banca hasta 1988, ningún empresario sonorenses de importancia ingresó al PAN. En este año, a pesar de que los intereses empresariales tenían asegurado su futuro en la candidatura de Salinas, se incorpora al panismo un grupo de empresarios pertenecientes al Centro Empresarial del Norte de Sonora (CENS), filial local de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). Los encabeza Ramón Corral Ávila. Además de ser presidente del CENS, Corral era vicepresidente de la Coparmex. Quizá de ahí su relación con Manuel Clouthier, quien lo convenció de que ingresara al PAN. Corral lo hace y coordina la campaña del candidato panista a la Presidencia de la República a partir de abril de 1988. Fue también coordinador de Resistencia Civil Activa y Pacífica (Recap), el organismo formado por algunos panistas en 1988 para movilizar a la población en caso de que se diera el fraude electoral.

El ingreso de Corral al PAN es interesante por varias razones. Nos habla de un nuevo tipo de acción política empresarial, que ya no es meramente reactiva o de corto plazo. El móvil de Corral y su grupo no es reaccionar en contra de alguna acción estatal, como era el caso de otras oposiciones empresariales al Estado mexicano —el reparto agrario en el Yaqui en 1976 y la nacionalización de la banca en 1982, por mencionar los ejemplos más recientes y más notables. Se trata por tanto de una militancia que parece ser al menos de mediano plazo. Quizá sea posible hablar de una militancia empresarial de principios de la transición, que tiene el carácter reactivo al que hemos hecho referencia, y una militancia de la transición avanzada, que sería más militante, más de mediano o de largo plazo.

Los empresarios que ingresaron al PAN junto con Corral no pertenecen al gran capital local. Más bien están al frente de empresas medianas. Previamente habían participado en el CENS, cuando Corral fue el presidente del Centro. Más que alguna característica económica, parecen estar identificados por sus

preocupaciones políticas y sociales.⁵⁹ Aunque no hay una total homogeneidad ideológica del grupo, sí coinciden en su visión liberal, democrática, proempresarial, antiburocrática y anticentralista. Las diferencias oscilan desde la simpatía por la doctrina social de la iglesia católica y una condena por igual al capitalismo y al socialismo, hasta la apología del “capitalismo puro” como la respuesta más adecuada a los problemas económicos, sociales y políticos del país.

El CENS representa otro caso, análogo al del Centro Patronal del Valle del Yaqui y a la Canaco de San Luis Río Colorado, en el que las organizaciones empresariales han tenido la función de formar cuadros que posteriormente ingresan al panismo. Un caso similar es el de Conciencia Ciudadana, organización formada en la ciudad de Hermosillo para la defensa de los ciudadanos frente a ciertas arbitrariedades (irregularidades en el suministro y cobro de servicios por parte de empresas privadas o del sector público). En 1988, tres candidatos panistas en Hermosillo habían pertenecido a esa organización: René Pavlovich Camou, ex dirigente de CC y candidato a la presidencia municipal, Francisco Javier Pavlovich Robles, candidato a diputado federal y Óscar Olea, candidato a diputado local.

Entre los candidatos contendientes, la figura central fue sin duda Manuel Clouthier. En sus visitas al estado logró despertar los ánimos y la pasión política de sus simpatizantes en mucho mayor medida que cualquier otro candidato, panista o no panista,⁶⁰ por lo menos en Hermosillo y en los principales cen-

⁵⁹ Enrique Salgado, quien fue vicepresidente del CENS y es actualmente secretario de Educación y Capacitación del PAN, es conocido en Hermosillo por haber organizado varios viajes a caballo que realizaban el mismo recorrido del misionero jesuita Eusebio Kino, el personaje con mayor presencia en la mitología histórica sonorense. Salgado ha publicado las crónicas de estos dos viajes en *El Imparcial*, el más importante diario local. Otros integrantes de este grupo son Dionisio Othón, gerente de una compañía de seguros, consejero del CENS y actual secretario de Finanzas del PAN, y Francisco Pavlovich, el único diputado panista por mayoría relativa en el actual Congreso de la Unión.

⁶⁰ En una encuesta de opinión sobre cuestiones político-electorales realizada por El Colegio de Sonora en junio de 1988, se detectó que las preferencias de los ciudadanos por candidatos del mismo partido estaban sensiblemente diferenciadas. Así, mientras el 26.3% de los encuestados dijo que votaría por Clouthier, sólo el 19.8% señaló que lo haría por René Pavlovich. En el caso del PRI, la diferenciación fue en sentido inverso: su candidato a la presidencia municipal (Robles Loustaunau, 56.9%) obtuvo mayores preferencias que su

tros urbanos. Cuando se presentó en el auditorio Emiliana de Zubueldía de la Universidad de Sonora —como lo hicieron todos los candidatos a la Presidencia de la República, con excepción de Salinas— el recinto se llenó mucho tiempo antes de la hora anunciada. Toda la planta baja del auditorio fue “tomada” por estudiantes de universidades particulares, principalmente mujeres, cuyo entusiasmo recordaba al que un público similar muestra ante cantantes de moda. Hubo un lleno total —mayor aún que cuando se presentaron Heberto Castillo y Cuauhtémoc Cárdenas— pero lo que más llamaba la atención era el ambiente de entusiasmo. Lo mismo puede afirmarse de las recepciones a Clouthier y de los mítines que realizó en Hermosillo. Sólo por razones de peso no fue cargado en hombros.⁶¹

La presencia de Cárdenas en el electorado sonoreño no fue masiva como en otros estados del país, pero fue importante en relación con la tradicional presencia de la izquierda en la entidad. Los problemas para conocer las preferencias de los votantes, ocultas por el maquillaje electoral, quizá sean mayores en el caso de los votos cardenistas que en el de los panistas. La razón es que la presencia del cardenismo no está en los centros urbanos, sino en las zonas rurales donde tuvo lugar el reparto agrario de 1937 y 1938: los valles del Yaqui y del Mayo y, presumiblemente, en la zona agrícola de San Luis Río Colorado. La “opinión pública” generalmente no llega hasta esas zonas. La alquimia es todavía más impune en el campo que en la ciudad.⁶²

candidato a la Presidencia de la República (Salinas, 45.1%). En el caso del Frente Democrático Nacional, Cárdenas (6.1%) superó al candidato a la presidencia municipal, Clemente Ávila Godoy (1.9%). *Cfr.* Víctor Manuel Reynoso y Jorge Santibáñez, “Preferencias electorales y elementos de cultura política en los ciudadanos hermosillenses”, ponencia presentada en el II Encuentro de Investigadores sobre Elecciones, organizado por Comecso en Chapala, Jal., junio de 1989.

⁶¹ La pasión política por Clouthier se manifestó sobre todo en su visita a Hermosillo el 24 de junio, para el cierre de campaña en esta ciudad. Particularmente entusiasta y masiva fue la recepción del candidato en el aeropuerto de Hermosillo, como pudimos constatarlo personalmente, al igual que en otros actos de la campaña clouthierista, como la ya referida plática en el auditorio de la Universidad de Sonora.

⁶² Un indicador de la presencia cardenista en las elecciones de 1988 son las casillas perdidas y problemáticas para el PRI en las elecciones municipales. De las 116 que perdió, 115 fueron para el PAN y sólo una para el Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, en el municipio de Etchojoa. El municipio está en el Valle del Mayo y ha tenido una presencia de la izquierda relativamen-

Del resto de los candidatos, quienes más presencia tuvieron en la opinión pública local fueron los de la presidencia municipal de la capital. Al parecer, Pavlovich era el candidato panista típico en el estado: empresario apicultor, con cierta presencia social ganada cuando estuvo al frente de Conciencia Ciudadana, centró su discurso en la crítica a la corrupción oficial. El símbolo de su campaña fue una escoba, con la que proponía barrer en un doble sentido: barrer con el priismo en las elecciones y barrer con toda la “porquería” que a su juicio había en la política oficial. Expresaba, pues, el estado de ánimo de los sectores medios en la ciudad. Sin embargo, aparentemente su candidatura perdió fuerza al ser nominado el candidato priista, Carlos Robles Loustaunau. El “Calolo”, como se conoció a Robles Loustaunau en su campaña, tenía un perfil similar al panismo, al menos para algunos ciudadanos. Quizá en algo influyó para esta percepción que fuera pariente en primer grado de Francisco Pavlovich Robles, candidato panista a diputado federal.⁶³

La Iglesia católica jugó un papel que ya es casi tradicional en esta región del país. Continuamente hizo llamados, por medio del arzobispo Carlos Quintero Arce, a la participación electoral. Sus referencias al fraude electoral fueron directas y reivindicaba el derecho de los ciudadanos a defender su voto.⁶⁴

Después del 6 de julio se vivió en Sonora lo que es la rutina en este tipo de elecciones: proclamación del “carro completo” por los priistas y denuncias de fraude por la oposición. En parti-

te fuerte. De las 144 casillas problemáticas para el priismo, 135 (el 93.75%) fue del PAN. En las nueve restantes la presencia opositora fue del PFCRN, en casillas de Etchojoa, y una de Huatabampo, Guaymas y Benjamín Hill, respectivamente. Excepto este último municipio, todos los demás se encuentran en la región de los valles mencionados. Consideramos que, como ocurrió en otras zonas del país, lo que atrajo el voto hacia el PFCRN fue más la referencia a Cárdenas en sus siglas y no el partido mismo.

⁶³ En la encuesta citada encontramos que los ciudadanos encuestados mostraron mayores simpatías por Robles que por el candidato priista a la Presidencia de la República (véase nota 60). Sin embargo, en nuestra opinión, la imagen del candidato del PRI no fue suficiente para revertir en forma decisiva las preferencias de los electores hermosillenses en su favor, como lo mostrarían las irregularidades electorales en la capital estatal. En cuanto al parentesco de Robles Loustaunau con Pavlovich Robles tuvo más bien efectos contraproducentes para el primero. El diputado panista fue uno de los principales impugnadores de la llamada Operación Manitas, que más adelante trataremos.

⁶⁴ Como una síntesis de esas posiciones del arzobispo véase el periódico de la arquidiócesis, *En marcha*, vol. 110, 20 de junio de 1988, p. 1.

cular en las ciudades con mayor presencia panista. El 7 de julio, *El Imparcial* señalaba a ocho columnas: "Agitado proceso electoral en Hermosillo." Presentaba varios casos de fraude o de intentos de fraude, desde el robo de casillas en una colonia, utilizando gases lacrimógenos para evitar resistencias, hasta una señora que inocentemente pretendía introducir un "taco" de boletas cruzadas por el PRI en una ánfora. Las denuncias de la prensa confirmaban la impresión generalizada entre los ciudadanos: sólo mediante la alquimia era posible evitar los triunfos panistas. Reclamos similares se presentaron en San Luis Río Colorado, Agua Prieta y Puerto Peñasco, principalmente.⁶⁵

El balance de la jornada electoral dejó, al igual que tres años antes y que en otras zonas del país, un PRI que vence sin convencer y un PAN con presencia pero defraudado y sin capacidad de convocatoria suficiente para la defensa del voto. Las acciones de resistencia pacífica, que se ensayaron varias veces durante la campaña electoral, fueron mínimas después del fraude.⁶⁶ Seguramente influyó en esta falta de beligerancia el hecho de que Acción Nacional fue superado en la votación presidencial por el Frente Democrático Nacional.

Los resultados electorales continuaron la dudosa tendencia que se manifestó en 1985: el PRI gana votos y el PAN los pierde. Mientras a nivel nacional el PRI disminuyó notablemente su votación, en Sonora la incrementó (véase cuadro 4). La novedad fue el FDN: llegó hasta el 10% de los votos en las elecciones presidenciales. La mayor parte de sus votos se ubicaron en las ricas zonas agrícolas del sur del estado, donde tuvo lugar el reparto agrario cardenista de los años treinta. Un análisis por distritos electorales federales muestra lo mismo, el 48.7% de los votos lo-

⁶⁵ Asimismo, son estas ciudades en donde se reconocieron más casillas ganadas por la oposición: 74 en Hermosillo, 24 en San Luis Río Colorado, 8 en Puerto Peñasco y 4 en Agua Prieta. El número de casillas problemáticas también fue de los más altos: 47, 26, 9 y 9 respectivamente.

⁶⁶ El 20 de mayo militantes panistas "estrangularon" la salida de Hermosillo a Nogales sobre la carretera internacional. El "estrangulamiento" fue un éxito, se realizó con orden, sin incidentes, logrando disminuir el ritmo en el paso por la carretera sin interrumpirlo. Los automovilistas afectados, que recibían de los panistas agradecimiento y refrescos por su comprensión, sólo en muy raros casos manifestaron malestar; casi siempre se mostraron solidarios con los "estranguladores". El 16 de junio se realizó otro acto en el palacio municipal. Puede consultarse la prensa local en los días posteriores a las fechas indicadas.

grados por Cárdenas en Sonora estuvieron en los distritos de Navojoa y Cajeme, en la zona mencionada.⁶⁷ En el cuadro 2 puede verse que la presencia de la oposición no panista se da principalmente en los municipios “mixtos”, Etchojoa y Huatabampo, en la misma región.

CUADRO 4

Resultados electorales del PAN y del PRI en Sonora a nivel nacional, 1976-1988. Porcentajes de votación

Partido	Elección	1976	1979	1982	1985	1988
PAN	Sonora	2.67	16.06	34.37	23.91	20.63
	Nacional	8.5	10.8	17.5	15.6	18.35
PRI	Sonora	90.78	81.03	61.51	73.00	73.87
	Nacional	80.1	69.7	69.3	64.8	53.91

Nota: los datos referentes a Sonora son de las elecciones municipales; los de nivel nacional son de las elecciones para diputados federales de mayoría relativa. La incongruencia de presentar comparativamente datos de dos tipos de elecciones se debe a nuestras limitaciones de información, difíciles de subsanar pues todavía las autoridades son recelosas al ofrecer los resultados electorales. De cualquier forma podemos suponer que es mínima la discrepancia entre los resultados de estas dos elecciones.

Fuente: PAN y PRI en Sonora, 1976 a 1985, Comisión Federal Electoral; 1988, Comisión Municipal Electoral. PAN y PRI nacional, 1976-1985, Molinar, Juan, “The 1985 Federal Elections in Mexico: the Product of a System”, en *Electoral Patterns and Perspectives in Mexico*, Universidad de California, San Diego, cuadro 3, p. 22; 1988, Comisión Federal Electoral.

El único puesto que se le reconoció a la oposición en Sonora fue la diputación federal por el segundo distrito, ubicado en el norte de Hermosillo. Ahí, el “diputado por minoría relativa” Francisco Pavlovich Camou, logró que se le reconociera el triunfo después de que se había declarado con mayoría de votos al candidato priista. El dirigente estatal del PRI declaró: “Perdimos en la mesa de las negociaciones, no ante el electorado hermosillense: que quede muy claro.”⁶⁸ Quizá debido a esto el colegio electoral no vio la necesidad de anular las elecciones, o al menos algunas casillas. De tal manera que en las actas Pavlovich quedó con menor proporción de votos que el candidato derrotado, el priista Manuel Robles Linares.

⁶⁷ M.A Vázquez, *op. cit.*, p. 279.

⁶⁸ Citado por Miguel Ángel Vázquez, *ibidem*, p. 277.

En el Congreso local hubo pequeños cambios. La nueva legislación electoral, el Código Electoral para el Estado de Sonora, incrementó a 27 el número de diputados, 18 de mayoría relativa y 9 de representación proporcional. Los primeros fueron ganados por el PRI —como en otros puestos de elección, los priistas no siguieron el consejo de Salinas de hacer política moderna y dejar de lado el método de “carro completo”. Cinco diputaciones de representación proporcional correspondieron al PAN, otra al PRI y una a cada uno de los partidos llamados paraestatales: PPS, PARM y PFCRN.⁶⁹ El cambio no transforma al Congreso: los priistas siguen teniendo en él la mayoría simple y calificada necesarias para tomar cualquier decisión. Si acaso, dinamizará la función que los congresos han tenido en nuestro país desde hace varios años, ser cajas de resonancia sobre ciertas cuestiones, e influir de esta manera en la opinión pública.

Después del desenlace electoral los ciudadanos sonorenses seguimos viviendo en la transición política mexicana. La década electoral terminó confirmando que el pasado no podrá volver, pero que el futuro todavía no llega. Si es que por futuro entendemos la consolidación de la democracia electoral o alguna forma no deseable que ponga fin al sistema de partidos actual.

ELECCIONES Y FRONTERA NORTE

Entre los lugares comunes sobre la realidad política nacional se encuentra la idea de que la insurrección electoral de algunos estados de la frontera norte de México son parte de un proceso más general: la influencia creciente de Estados Unidos en la población del norte mexicano. El hecho de que sea Acción Nacional el partido que más frutos cosechó en los procesos políticos de estas entidades ha reforzado la idea anterior. Se ha llegado

⁶⁹ Según el Código, el porcentaje mínimo para tener derecho a la representación proporcional en el Congreso local es el 1.5%. La votación reconocida por la legislatura fue 370 420, y el número mínimo de votos, en consecuencia, en 5 556. El PRI obtuvo un diputado de representación proporcional, con lo que llegó al límite máximo señalado por el Código, que es de 19. El resto de las curules se distribuyeron en la forma señalada. Documento de la Comisión Especial del Congreso del Estado Libre y Soberano de Sonora, fechado el 5 de agosto de 1988.

a pensar en la existencia de una tendencia hacia un bipartidismo PRI-PAN, similar al sistema estadounidense.

Consideramos que la cercanía física de Estados Unidos ejerce cierta influencia para el comportamiento electoral en Sonora. En particular en lo que se refiere a las ciudades fronterizas, como lo señalamos en el caso de Agua Prieta. Pero creemos que se trata de un factor menor, secundario. La distinción central en la cultura electoral mexicana se da por "regiones", pero no consiste en diferenciar el norte del sur. La diferencia está entre el comportamiento electoral de las zonas rurales y el de las urbanas.

La realidad electoral sonorense es una confirmación de esta hipótesis. En las zonas rurales de la entidad el partido del Estado rara vez obtiene menos del 90% de los votos. Es decir, se realizan ahí elecciones que antes se denominaban "soviéticas". En un alto porcentaje de los municipios del campo sonorense se realizan elecciones sin opción, es decir, elecciones donde hay un solo candidato. En contraste, el PRI se vio, en casi todo el periodo tratado, en serios aprietos en las ciudades de la entidad.

La democracia electoral y la cultura política que la acompaña no es una característica exclusiva de los países anglosajones. Ni de las zonas que, por su cercanía física, han sido supuestas víctimas de una especie de imperialismo cultural. Es más bien un producto de los centros urbanos contemporáneos y de sus características: la presencia de diversos medios de comunicación, los procesos de terciarización, la masificación, la generación de una opinión pública cada vez más plural, entre otras.

Es esta compleja realidad urbana, de múltiples consecuencias ("el más grande cambio civilizatorio vivido por el país desde la conquista", ha escrito Aguilar Camín para referirse al predominio, por primera vez en la historia de México, de la población urbana sobre la rural, en una frase que parece exagerada, pero puede que no lo sea) lo que explica, desde nuestro punto de vista, el inicio y desarrollo de la transición electoral en Sonora. Consideramos que el argumento es aplicable a los demás estados del norte, del centro y del sur. Una multiplicidad de factores se mezclan para dar lugar a las características electorales de cada entidad y región. Pero consideramos que no todos tienen el mismo peso, la realidad urbana o rural es mucho más decisiva que la vecindad con Estados Unidos.

ÍNDICE

Presentación	5
Introducción. <i>Tonatiuh Guillén López</i>	7
<i>Arturo Alvarado Mendoza</i> Una década de política y elecciones en Tamaulipas	19
<i>Alberto Aziz Nassif</i> Chihuahua: de la euforia a la indiferencia	69
<i>Ilán Bizberg</i> Las elecciones en Coahuila en la década de los ochenta	97
<i>Tonatiuh Guillén López</i> Baja California, una década de cambio político	139
<i>Abraham Nuncio y Luis Lauro Garza</i> Nuevo León: reforma política y poder desigual, 1980-1990 ...	187
<i>Víctor Manuel Reynoso</i> Sonora en la transición política mexicana: balance electoral de una década (1979-1988).....	237

**Este libro se terminó de imprimir
en mayo de 1992 en los talleres de
Offset Setenta, S.A. de C.V.,
V́ctor Hugo 99, Col. Portales, 03300 Ḿxico, D.F.
Fotocomposici3n y formaci3n: Literal S. de R.L. Mi.
Se imprimieron 2 000 ejemplares
ḿs sobrantes para reposici3n.
Cuid3 la edici3n el Departamento de
Publicaciones de El Colegio de Ḿxico.**



0091

La década de los ochenta en México puede caracterizarse a partir de dos eventos centrales: una severa crisis económica y el inicio de una tensa, regulada y lenta apertura democrática del sistema político. En la perspectiva del horizonte que se abre al país con el fin de siglo, los años ochenta han sido un periodo de cambios sustanciales prácticamente en todas las esferas de la vida social. Los estados fronterizos del norte de México han sido actores principales del cambio.

Los seis capítulos del libro analizan cada una de las entidades fronterizas con su particular mezcla de regiones, de estructuras y de actores sociales, en un recuento de su movimiento político durante la década de los ochenta. Fueron movimientos que cimbraron un estilo virtualmente estático de reproducción del sistema político. Refiriéndonos exclusivamente a los movimientos de origen regional, primero Chihuahua entre 1983 y 1986, después Baja California en 1989, sin duda han sido decisivos en la orientación hacia la apertura del sistema político.

Considerando su desarrollo regional interno, los estados fronterizos presentan la total complejidad de las estructuras sociales del escenario nacional, que oscilan entre la prácticamente total modernidad de Baja California y Nuevo León, hasta los estados con fuerte perfil de corte tradicional, como Tamaulipas o Coahuila, así como importantes regiones de Sonora y Chihuahua. El panorama resultante no es el de una estructura social homogénea ni el de un mapa político sin desniveles ni fisuras. En este aspecto, lo moderno y lo tradicional en la región fronteriza siguen también el rumbo de las concentraciones urbanas como criterio distintivo. En la perspectiva de la estructura social, la diferencia radica en el peso proporcional de estas últimas donde domina, crecientemente, la aquí llamada sociedad del modelo de desarrollo fronterizo, que de hecho constituye el parámetro aglutinador que ahora nos permite hacer un balance político de los ochenta en los estados de la frontera norte de México.



El Colegio de México
El Colegio de la Frontera Norte





0091

La década de los ochenta en México puede caracterizarse a partir de dos eventos centrales: una severa crisis económica y el inicio de una tensa, regulada y lenta apertura democrática del sistema político. En la perspectiva del horizonte que se abre al país con el fin de siglo, los años ochenta han sido un periodo de cambios sustanciales prácticamente en todas las esferas de la vida social. Los estados fronterizos del norte de México han sido actores principales del cambio.

Los seis capítulos del libro analizan cada una de las entidades fronterizas con su particular mezcla de regiones, de estructuras y de actores sociales, en un recuento de su movimiento político durante la década de los ochenta. Fueron movimientos que cimbraron un estilo virtualmente estático de reproducción del sistema político. Refiriéndonos exclusivamente a los movimientos de origen regional, primero Chihuahua entre 1983 y 1986, después Baja California en 1989, sin duda han sido decisivos en la orientación hacia la apertura del sistema político.

Considerando su desarrollo regional interno, los estados fronterizos presentan la total complejidad de las estructuras sociales del escenario nacional, que oscilan entre la prácticamente total modernidad de Baja California y Nuevo León, hasta los estados con fuerte perfil de corte tradicional, como Tamaulipas o Coahuila, así como importantes regiones de Sonora y Chihuahua. El panorama resultante no es el de una estructura social homogénea ni el de un mapa político sin desniveles ni fisuras. En este aspecto, lo moderno y lo tradicional en la región fronteriza siguen también el rumbo de las concentraciones urbanas como criterio distintivo. En la perspectiva de la estructura social, la diferencia radica en el peso proporcional de estas últimas donde domina, crecientemente, la aquí llamada sociedad del modelo de desarrollo fronterizo, que de hecho constituye el parámetro aglutinador que ahora nos permite hacer un balance político de los ochenta en los estados de la frontera norte de México.



El Colegio de México
El Colegio de la Frontera Norte

